



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

EL DERECHO HUMANO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Un análisis del caso colombiano durante el periodo 2006-
2009

TANIA MARÍA CAMILA LUNA BLANCO

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Derecho
Bogotá, Colombia

2011

EL DERECHO HUMANO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Un análisis del caso colombiano durante el periodo 2006-2009

TANIA MARÍA CAMILA LUNA BLANCO

Tesis presentada como requisito para optar al título de:
Magister en Derecho

Director:
Doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, José Germán Burgos Silva

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Derecho
Bogotá, Colombia

2011

*A mi abuelo,
Narrador de historias sorprendentes, portador de oraciones y bendiciones,
Impulsor del sueño en un momento en que lo creí imposible*

Agradecimientos

Sea este el momento de agradecer a todas las personas que hicieron posible la realización de esta tesis, especialmente a mis padres, mi hermano y mi tía, sin su colaboración constante, su ánimo y comprensión por tantos momentos de ausencia, no podría presentar hoy el fruto de una investigación como la que se presenta. Gracias también, a mi Director de Tesis, Dr. Germán Burgos, quien dedicó gran parte de su tiempo a apoyar el desarrollo de estas páginas, con total constancia, dedicación y entrega.

Resumen

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido pronunciándose en los últimos tiempos sobre el valor de la independencia judicial entendida no sólo como principio o pilar del Estado de Derecho, sino también como un derecho humano dotado de contenido propio, de titularidad de los justiciables y que pone en cabeza de los jueces y de los Estados parte en la Convención Americana, importantes obligaciones ligadas a su respeto y garantía, así como a la prevención de intromisiones que puedan resultar atentatorias de la misma. Desde este precedente se han visto compelidos a reparar en el contexto interamericano los Estados de Venezuela y Perú por transgredir la necesaria independencia de los jueces, al no haber garantizado alguno de los tres componentes del derecho (adecuados procesos de nombramientos de jueces, inamovilidad en sus cargos y garantías contra presiones externas). El presente documento constituye un esfuerzo por analizar la responsabilidad de un Estado parte en la Convención Americana como lo sería el colombiano, al haber comprometido a la independencia judicial entendida como derecho humano, con ocasión de las intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, durante el periodo 2006-2009.

Palabras Clave:

Independencia Judicial, Estado de Derecho, Derecho Humano, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, adecuado proceso de nombramiento, inamovilidad, garantías contra presiones externas, Corte Suprema de Justicia, Gobierno Uribe.

Abstract

The Inter-American Court of Human Rights has been speaking out recently about the value of judicial independence not only understood as a principle or a pillar of state based on the rule of law, but also as a human right with self-contained equipped and possessed by litigants. Also, judicial independence imposes on the judges and the States Parties to the Convention, quite important obligations related to respect and guarantee as well as to prevent interferences that may be violating independence judicial. Based on this precedent, Venezuela and Peru have been compelled to repair for transgressing the necessary independence of the judges; because they do not have secured any of the three components of the law (appropriate appointment processes of judges, tenure in their charges and guarantees against external influence). This document is an effort to analyze the responsibility of a State Party to the American Convention, particularly the Colombian State, which broke to judicial independence as a human right, on the occasion of the interferences of the Executive in the Judiciary, during 2006-2009.

Keywords

Judicial Independence, Rule of Law, Human Rights, Inter-American Court of Human Rights, Inter-American Human Rights System, appropriate appointment processes of judges, tenure in their charges, guarantees against external influence, Supreme Court, Uribe government.

Contenido

Lista de Cuadros.....	1
Abreviaturas.....	2
Introducción.....	3

1. CAPÍTULO I: CONCEPTUALIZANDO SOBRE INDEPENDENCIA JUDICIAL

1.1. IJ: UNA MIRADA NORMATIVA	10
1.1.1. IJ como principio político ligado al	
1.1.2. origen e historia del Estado de Derecho	12
IJ y Estado de Derecho hoy	18
1.2. IJ: UNA MIRADA SOCIOJURÍDICA	21
1.2.1. IJ como proceso que puede ser analizado	21
desde su funcionamiento.	
1.2.2. Dimensiones	24
1.2.3. Supuestos clásicos de IJ	26
1.2.4. ¿Cuándo se vulnera la IJ?	28
1.2.4.1. Modelo de medición de Sebastián Linares	29
1.2.4.2. Propuesta de Indicadores de Germán Burgos	30
1.3. IJ COMO DERECHO HUMANO:	
HACIA UNA NUEVA MIRADA	33
1.3.1. El Código de Ética Judicial, el Estatuto Iberoamericano del Juez y los avances	
del sistema interamericano: el derecho a la IJ	35

2. CAPÍTULO II: INDEPENDENCIA JUDICIAL COMO DERECHO HUMANO EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU DESARROLLO EN EL SISTEMA INTERAMERICANO..... 38

2.1.1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA (FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA)	41
2.1.2. Sistema Universal de Protección	42
2.1.2.1. Grandes declaraciones de 1948	43
2.1.2.2. Grandes tratados universales en materia de derechos humanos ..	44
2.1.2.3. Demás instrumentos sobre derechos	46
humanos dedicados a derechos, principios o titulares determinados	
2.1.2.3.1. Tratados y/o convenciones	46
2.1.2.3.2. Demás instrumentos internacionales	47
de carácter no contractual	
2.1.3. Sistema Regional Interamericano de Protección	51
2.1.3.1. Grandes declaraciones de 1948	52
2.1.3.2. Grandes tratados regionales (interamericanos)	52
en materia de derechos humanos	
2.2. HACIA LA ELABORACIÓN DE UN PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL INTERAMERICANO SOBRE IJ	54
2.2.1. Evolución	56
2.2.1.1. Derecho de Acceso a la Justicia, Debido Proceso e IJ	57
2.2.1.2. IJ como derecho Humano	63
2.2.2. Contenido	68

2.2.3. Titularidad	81
2.2.4. Alcance	91
2.3 FUEZA DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	96
SOBRE IJ EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO	
2.3.1 Parámetros Constitucionales y Jurisprudenciales	97
2.3.2. Bloque de Constitucionalidad y decisiones internacionales	99
3. CAPÍTULO III: INTROMISIONES INDEBIDAS AL PODER JUDICIAL EN COLOMBIA DURANTE EL PERIODO 2006-2009 DESDE LOS AVANCES DEL SISTEMA INTERAMERICANO	102
3.1. PARÁMETROS DE MEDICIÓN DE LA VULNERACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA IJ	104
3.1.1 Elementos de Análisis	104
3.2 INTROMISIONES INDEBIDAS AL PODER	109
JUDICIAL EN COLOMBIA DURANTE EL PERIODO 2006-2009	
3.2.1. 2006: el año que da inicio a todo	109
3.2.2. 2007: Empiezan los enfrentamientos entre Suprema y “supremo” ..	112
3.2.3. 2008: El año de “la manipulación de testigos” y el “coletazo agónico del terrorismo”	121
3.2.4. 2009: ¿el fin de los enfrentamientos?	132
3.3 INTROMISIONES INDEBIDAS EN LA FUNCIÓN DE ADMINISTRAR JUSTICIA PRESENTES EN EL CASO COLOMBIANO DESDE LOS AVANCES DEL SISTEMA INTERAMERICANO	137
3.3.1. Intromisiones indebidas presentes en el caso colombiano	137

3.3.1.1. Análisis de intromisiones año 2006	141
3.3.1.2. Análisis de intromisiones año 2007	142
3.3.1.3. Análisis de intromisiones año 2008	144
3.3.1.4. Análisis de intromisiones año 2009	146
3.3.2. Desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	148
Conclusiones	163
Bibliografía.....	171

Lista de Cuadros

Cuadro No. 1. Derechos de acceso a la justicia, debido proceso e IJ.....	58
Cuadro No. 2. Formas de comprensión de la IJ en el SIDH.....	68
Cuadro No.3. Contenido del Derecho Humano a la IJ.....	79
Cuadro No. 4. Fundamento normativo, titularidad y obligaciones implícitas en el Derecho Humano a la IJ.....	88
Cuadro No. 5. Peticiones y Casos individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medidas Cautelares.....	131
Cuadro No. 6. Tipología de Intromisiones del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.....	139
Cuadro No.7. Análisis por colores del periodo 2006-2009.....	140
Cuadro No. 8. Análisis por colores del año 2006.....	141
Cuadro No. 9. Análisis por colores del año 2007.....	142
Cuadro No. 10. Análisis por colores del año 2008.....	144
Cuadro No.11. Análisis por colores del año 2009.....	147

Abreviaturas

Abreviaturas empleadas	
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CADH	Convención Americana de Derechos Humanos
Corte IDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
IJ	Independencia Judicial
PIDCP	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PIDESC	Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
SIDH	Sistema Interamericano de Derechos Humanos
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Introducción

El Estado de Derecho de raigambre liberal consagró desde sus orígenes dos principios que debían caracterizarlo para evitar la concentración del poder y la arbitrariedad: separación de poderes e independencia del Poder Judicial. Desde este modelo de Estado, permeado hoy por la fuerza del constitucionalismo, la Carta Política -o el texto constitucional- debe ser el mar por el que naveguen en igualdad de condiciones, independencia y autonomía las ramas del poder público, como barcos pertenecientes a una misma flotilla. Eso sí, con una connotación, el barco del Poder Judicial debe ser resguardado de manera especial con atención a las funciones que cumple y a la falta de fuerza ejecutiva de sus decisiones, en este sentido y siguiendo con la metáfora, una serie de barcos escoltas simbolizarían a las garantías que deben rodear necesariamente a la justicia.

Pero, ¿qué pasa cuando en un país presidencialista como el nuestro, el Poder Ejecutivo amenaza con movilizar a su favor el curso de las aguas adquiriendo características de transatlántico, actuando conjuntamente con la Rama Legislativa que como buque, colabora en la tarea de atacar al barco de la Rama Judicial desprovisto de confianza popular¹ y que al parecer se ha quedado sin escolta? En palabras sencillas, pero sin alejarnos de los interrogantes: ¿qué pasa cuando una de las ramas del poder público adquiere más peso que las otras?, ¿qué sucede cuando una de las ramas del poder público cede ante el peso

¹ Al respecto ver: Corporación Excelencia en la Justicia. Estudio de percepción de la Justicia, Proyecto Necesidades Jurídicas Insatisfechas CEJ (2007). Disponible en: <http://www.cej.org.co/corrupcion/922-percepcion-de-la-honestidad-de-la-justicia-en-colombia> Consultado enero de 2011. “Los ciudadanos no acuden a la justicia porque no creen en ella”. Corporación Excelencia en la Justicia. Septiembre de 2011. Disponible en: <http://www.cej.org.co/sala-de-prensa/noticiascej/2614-los-ciudadanos-no-acuden-a-la-justicia-porque-no-creen-en-ella>. Consultado septiembre de 2011.

exorbitante de otra? Y por último ¿qué ocurre cuando una rama del poder público como la Judicial, se resiste a ceder al contrapeso excesivo generado por las otras ramas, perdiendo todo peso en el intento?; la respuesta parece evidente: el sistema de frenos y contrapesos se desestabiliza ante los ataques perpetrados en contra de la Rama Judicial que se resiste a ceder, dejando como resultado un atentado que puede poner en peligro a la justicia misma.

Algo similar ocurrió en Colombia en opinión de muchos durante el periodo 2006-2009, cuatrienio en el que la tensión tradicional entre las ramas del poder público se agudizó a raíz de una serie de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, encabezados por sus algunos de sus representantes: Presidente de la República y ministros de diferentes despachos Vs. Corte Suprema de Justicia. Los motivos, se encuentran relacionados con grandes escándalos de nuestra vida pública, tales como: el fenómeno de la “parapolítica legislativa” y las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia en contra de senadores, representantes, gobernadores, alcaldes y en general, importantes políticos acusados de suscribir una alianza secreta con el paramilitarismo; y la “yidispolítica”, nombre mediático entregado en razón a la representante que denunció haber vendido su voto para apoyar el acto legislativo que permitió la reelección presidencial, y que fue decisivo en la votación del mismo.

A juicio de numerosos periodistas, académicos, líderes de oposición, organizaciones internacionales, entre otros, durante el periodo descrito y con ocasión -en su mayoría- de los motivos señalados, los ataques del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, que van desde insultos públicos hasta denuncias penales, constituyeron un verdadero atentado contra la independencia de la justicia. Derecho consagrado en el artículo 8, dentro de las llamadas “Garantías Judiciales” de la Convención Americana de Derechos Humanos² y desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Principio establecido en la Carta Democrática Interamericana como elemento esencial de una

² Convención Americana de Derechos Humanos. Art.8.1. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

democracia representativa³; garantía ciudadana tal y como la consagra el Código Iberoamericano de Ética Judicial y el Estatuto del Juez iberoamericano⁴; contemplado en nuestra Carta Política de 1991 en el artículo 228 y definido por la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional como aquel, según el cual: “la conducta del juez cuando administra justicia, no puede jamás estar sometida a subordinación alguna, al punto que dentro de esta óptica es posible reconocerlo como un sujeto único, sin superior del cual deba recibir órdenes, ni instrucciones ni ser objeto de presiones, amenazas o interferencias indebidas” haciendo alusión “a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones o a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial”.⁵ En definitiva, pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho y de total protagonismo en el escenario internacional.

Si lo anterior puede sostenerse y responde a un mandato constitucional en nuestro ordenamiento jurídico e incluso en el internacional ¿qué consecuencia podría tener alguien que se atreva a transgredir la Independencia Judicial interfiriendo indebidamente en la labor de administrar justicia? Al parecer, y de probarse las intromisiones indebidas que sufrió el Poder Judicial en Colombia, el Presidente de la República y sus ministros no están siendo investigados en el orden nacional desde ningún ámbito –penal o disciplinario–, por los hechos que conoció ampliamente el país durante el periodo señalado, en síntesis no ha existido responsabilidad por parte de ellos al haber incurrido en conductas transgresoras de la independencia de la justicia.

³ Carta Democrática Interamericana, Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Artículo 3: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

⁴ Estatuto del Juez Iberoamericano, Art. 1. Principio general de independencia: “Como garantía para los justiciables, los Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa”.

⁵ Corte Constitucional, Sentencias: C-037 de 1996 MP: Vladimiro naranjo Mesa; C-1643 de 2000 MP: Jairo Charry Rivas.

Lo anterior descarta la responsabilidad en el escenario nacional, pero siembra dudas en el internacional: ¿se ofrece protección para la independencia judicial en el contexto internacional, desde sistemas como el Interamericano de Derechos Humanos en razón al derecho consagrado en el Artículo 8 de la Convención Americana? ¿Puede un Estado como el colombiano –parte en la Convención Americana- responder ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la vulneración a la Independencia Judicial? ¿Puede entenderse la independencia judicial como derecho humano?

Con tales interrogantes de base, la investigación que se presenta al lector busca indagar en la responsabilidad que podría atribuirse a un Estado como el colombiano –parte en la Convención Americana- ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por la vulneración a la independencia judicial entendida como derecho humano a partir del análisis de un periodo determinado de tiempo (2006-2009). Sin embargo, tal objetivo debe ser visto a la luz de las limitaciones, en la actualidad pocos discutirían que la independencia judicial es un principio legado del Estado liberal, pero, hablar de la independencia judicial como derecho humano y situarnos en su exigibilidad por parte del justiciable, nos invita a un debate mucho más complejo desarrollado en un contexto como el del derecho internacional, caracterizado por su permanente construcción y evolución, en el que la jurisprudencia, aun sin ser vinculante⁶, adquiere total protagonismo.

Siendo así, y teniendo en cuenta que no podemos entregar con estas líneas la última palabra sobre el tema que se propone, la pregunta que guiará las siguientes páginas y que buscará responderse, será: ¿hasta qué punto puede ser el Estado colombiano responsable ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la violación a la independencia judicial entendida como derecho humano, con ocasión de las intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial durante el periodo 2006-2009?

⁶ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Art. 38.

Para poder responderla, se propone partir de un análisis conceptual de la independencia judicial desde tres aproximaciones analíticas: normativa, sociojurídica y como derecho humano, con el ánimo de que el lector asuma un referente conceptual sobre el tema que se pone a consideración y pueda analizarlos desde diferentes miradas (capítulo 1); para luego abordar un estudio desde los sistemas de justicia internacional, enfocándonos principalmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, extrayendo de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia, aspectos comunes que nos permitan determinar cuándo la independencia judicial entendida como derecho humano se entiende vulnerada en un Estado parte en la Convención Americana por intromisiones indebidas en el poder judicial (capítulo 2); estableciendo, finalmente, qué tipo de intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial se presentaron en Colombia durante el periodo 2006-2009, analizando si las mismas pueden encuadrarse dentro de los aspectos comunes extraídos de las decisiones de la Corte Interamericana, y por lo tanto, constituyen una vulneración al derecho humano a la independencia judicial, que amerite el examen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A lo largo de los capítulos que a continuación se presentan, sostendré como tesis central, que la independencia judicial es un derecho humano que pertenece a los justiciables y no a los jueces, desde los avances del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente desde el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que tal derecho se vio comprometido en Colombia durante el periodo 2006-2009 a causa de las intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, entre las que sobresalen cuatro recurrentes: lenguaje virulento, denuncias penales, solicitudes de reuniones para discutir providencias y uso de la reforma a la justicia como elemento intimidatorio; intromisiones que comprometieron uno de los componentes del derecho humano a la independencia judicial en el contexto interamericano: *garantías contra presiones externas*.

Para sostenerlo, el trabajo investigativo como fruto de una investigación sociojurídica, se vale de una metodología cualitativa basada en el análisis de fuentes relacionadas con el objeto de estudio, en las que sobresalen textos tradicionales para exponer la visión clásica con la que suele abordarse el tema de la independencia judicial, y el estudio de estándares internacionales y casos desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fundamentan la propuesta de una nueva visión de análisis. De la misma manera, la investigación cuenta con un componente transversal exploratorio (recolección de datos en un momento histórico determinado o tiempo único⁷: periodo 2006-2009), a partir de un barrido de prensa de los diarios El Tiempo y El Espectador; las revistas Semana y la Silla Vacía; y principalmente los comunicados de la Casa de Nariño y de la Corte Suprema de Justicia, así como varias de sus decisiones en temas relacionados con los hechos descritos.

La temática propuesta no busca abordarse desde un estudio de la normatividad colombiana o estudio formal, sino desde el análisis de la independencia judicial desde su funcionamiento al interior de nuestra sociedad en un periodo determinado, y desde las consecuencias que podrían generarse, a la luz de un sistema como el Interamericano de Derechos Humanos por la transgresión de un principio que ha ido adquiriendo las características de un derecho exigible. De igual forma, se deja de presente que definir la independencia judicial como derecho humano, no excluye el definirla también como principio o garantía instrumental, apelativos todos que recibe por parte del Sistema Interamericano, y que lejos de ser excluyentes dan cuenta de la importancia que tiene la misma en nuestras sociedades.

Habiendo dicho lo anterior, no queda más que invitar al lector a aceptar la invitación que se le propone, expresándole que el esfuerzo realizado, también lo implica desde su rol de justiciable, y que cada letra que se escribió, no responde a otro propósito que acercar a la independencia de los jueces a su real titular, defendiendo el valor de la justicia y alertando a

⁷ Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, Baptista Lucio, Pilar. Fundamentos de Metodología de la Investigación. (Editorial Mc Graw Hill, 2007)p.140.

Estados como el nuestro a acatar sus obligaciones convencionales relacionadas con el tema, so pena de verse sancionados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

CAPÍTULO I

CONCEPTUALIZANDO SOBRE INDEPENDENCIA JUDICIAL

“El deber de independencia de los jueces tiene su correlato en el derecho de los ciudadanos a ser juzgados desde el derecho, no desde relaciones de poder, juegos de intereses o sistemas de valores extraños al derecho”⁸

Cuando nos preguntamos por qué es deseable que los jueces en una sociedad sean independientes y qué puede llegar a significar dicha independencia, tropezamos inmediatamente con respuestas diversas, algunos sostienen que los jueces deben gozar de independencia para limitar al poder y garantizar finalidades sustanciales ligadas al Estado de Derecho; otros, que tal independencia adquiere importancia desde su manifestación en la práctica al librar a la administración de justicia de injerencias indebidas que pudieran llegar a afectar sus decisiones; o que la misma, es también un atributo del ser humano que le pertenece como sujeto receptor de las decisiones judiciales que puedan llegar a tomarse en el curso de un proceso en el que sea parte; lo anterior sin traer a la discusión otras particulares apreciaciones que ponen de presente el cuestionamiento permanente que tal concepto suscita.

Por ello y con el ánimo de conceptualizar a lo largo de este primer capítulo sobre independencia judicial (en adelante IJ), intentaremos ilustrar al lector sobre diversas aproximaciones analíticas a dicho concepto, permitiéndonos destacar las tres que mencionamos y que asumiremos en lo sucesivo como referente conceptual del presente trabajo investigativo: una primera **normativa**, en la que se analizan aspectos históricos y

⁸ Aguiló Regla. *Josep. De nuevo sobre “independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación jurídica”*. En: Burgos Silva, Germán (Editor), “Independencia judicial en América Latina: de quién? para qué? cómo?”, Bogotá D. C.: Ediciones Ántropos Ltda., ILSA, Series Textos de Aquí y Ahora, 2003) p, 68.

políticos inherentes a su definición, que surgen en el contexto del Estado de Derecho (visión tradicional desde la que siempre suele analizarse el tema), y que nos lleva a considerarla en dos momentos: *como principio político ligado al origen e historia del Estado de Derecho*, y en el contexto del *Estado de Derecho Hoy*. Una segunda *sociojurídica*, desde la que se analiza el concepto desde su desarrollo en la práctica y al interior de las sociedades, *como proceso que puede ser analizado desde su funcionamiento*, desde sus *dimensiones, supuestos clásicos de existencia*, y cuándo se produce su *vulneración* de la mano de dos propuestas: *Modelo de Medición de Sebastián Linares*, y la *Propuesta de Indicadores de Germán Burgos*. Finalmente una tercera, entendida como *derecho*, que defiende su comprensión como atributo del ser humano, exigible ante tribunales internacionales, partiendo de importantes documentos suscritos por la comunidad internacional: *El Código de Ética Judicial, El Estatuto Iberoamericano del Juez y los avances del Sistema Interamericano: el Derecho a la Independencia Judicial*.

La asunción de tal referente conceptual, contribuirá a la finalidad de la presente investigación, defender a la independencia judicial como derecho humano desde la visión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyo origen histórico se remonta al surgimiento del Estado de Derecho y cuya efectividad necesariamente se corrobora en la práctica a través del desarrollo que pueda tener en sociedades específicas.

1.3. **IJ: UNA MIRADA NORMATIVA**

Analizar a la IJ desde un sentido normativo, implica internarse en tal noción desde una visión histórica y política, ligada a los orígenes del Estado de Derecho y a las finalidades que persiguió desde sus inicios y que persigue actualmente. De esta manera indagaremos en el *por qué* y *para qué* de su consagración histórica, atendiendo a la *necesidad* a la que respondió al momento de ser contemplada como pilar de dicho modelo de Estado y a las *finalidades* que se buscaban alcanzar en las sociedades con dicha institución, muchas de las

cuales continúan haciendo deseable su existencia, yendo de la mano de otras que han surgido como consecuencia de la evolución del Estado de Derecho.

1.3.1. **IJ como principio político ligado al origen e historia del Estado de Derecho**

Cuando alguien habla de IJ, no puede evitar asociar el concepto, de manera casi paradigmática y quizá únicamente relacionada con la imparcialidad, a la figura del juez que decide en sus casos de la misma forma en que lo haría la diosa Temis de la justicia en la mitología griega, tal y como es representada en la obra del escultor francés del siglo XIX, Nicolas Mayer, “Las balanzas de la justicia”: con una venda en los ojos como muestra de su imparcialidad al resolver, una balanza en su mano izquierda, símbolo de la consideración objetiva de las partes enfrentadas en litigio, y una espada en su mano derecha, en señal de la fuerza con la que deben aplicarse sus decisiones.

Sin embargo, los jueces distan de ser dioses, y mucho menos y aunque lo intenten, de aplicar el derecho de la misma manera en que lo hacía la diosa Temis en el mitológico escenario griego, haciendo gala de total imparcialidad e independencia. Como ser humano, que tiene en sus manos la función de aplicar justicia, el juez puede verse influenciado por diversos factores de índole objetivo y subjetivo que de una u otra manera condicionan su decisión e incluso pueden llegar a determinarla.⁹ Ante la imposibilidad de evitar dicha situación, por lo menos en lo relacionado con la influencia de factores subjetivos en la decisión judicial ligados a la “ideología” personal del juez, se buscó protegerlo a lo largo de la historia de factores objetivos o externos, que como consecuencia del abuso del poder,

⁹ Contrario a lo contemplado por el paradigma liberal según el cual el derecho está dotado de coherencia y en este orden de ideas, el juez goza de total neutralidad frente a su aplicación, los CLS (*Critical legal studies*), a través de un método deconstructivo o de “demolición” que buscaba atacar la tradición jurídica imperante en materia de “adjudicación” o decisión judicial, pusieron en evidencia que la neutralidad es una aspiración social que se mantiene en la medida en que una sociedad quiera mantenerla: “El juez en definitiva es un actor ideológico. Incluso el juez que se empeña en guardar fidelidad a la retórica de la neutralidad es un actor ideológico, en tanto “desarrolla una solución y luego la justifica en un lenguaje jurídico que también es un lenguaje ideológico”. A través de los argumentos no deductivos, se invierte el modelo silogístico de la adjudicación: el juez primero avizora el resultado que desea, y luego busca las normas jurídicas que le sirven para justificarlo (...) la retórica de la neutralidad se mantiene, en fin, porque nosotros queremos creer que ella es cierta”. Duncan, Kennedy. *Libertad y Restricción en la decisión judicial*, Rodríguez, César. Estudio preliminar. (Bogotá D.C.: Siglo del Hombre Editores, Facultad de Derecho Universidad de los Andes, 1999, segunda reimpresión 2005), 77 y Ss.

podieran influenciar en uno u otro sentido su decisión, mientras se le exigía en la mayor medida de lo posible mantener al margen de la decisión sus subjetividades.¹⁰

Esta búsqueda se hizo necesaria, una vez se arrebató en la historia el poder al monarca, dividiendo o separando, las facultades que antes se encontraban exclusivamente en él: hacer las leyes, ejecutarlas y administrar justicia. Pronto, el ideal de independencia e imparcialidad que la figura de la diosa Temis representa, se convirtió en una de las aspiraciones del Estado de Derecho, concibiéndose como uno de los “mecanismos constitucionales que impiden u obstaculizan el ejercicio arbitrario e ilegítimo del poder y dificultan o frenan el abuso, o el ejercicio ilegal”¹¹, en pocas palabras un medio para el logro de ciertas finalidades asociadas a tal modelo de Estado.

Así, la IJ como noción decimonónica, encuentra su origen en brazos del liberalismo, que de la mano de otros importantes postulados, la erige como principio o fundamento de la doctrina política que defiende. De esta manera, la independencia de los jueces desde un referente conceptual normativo puede ser considerada un principio político que se produce como consecuencia de otro principio político del liberalismo: el de separación de poderes. Si resulta deseable separar los poderes del Estado, y que uno de esos poderes sea el de administrar justicia, resulta más deseable aun que dicha facultad goce de total independencia frente a los otros poderes del Estado, ya que sólo de esa manera se puede garantizar sujeción a la ley, o materialización a su vez, del principio de legalidad.

El liberalismo, analizado como aquella concepción política según la cual el Estado tiene poderes limitados, razón por la cual defiende al llamado *Estado de Derecho*, y que busca regular a los poderes públicos por normas fundamentales o constitucionales, guarda en su configuración una serie de postulados destinados a limitar el poder y mantener su división: (a) el control del poder ejecutivo por parte del legislativo; (b) el control del poder legislativo por parte del poder judicial y a través de Cortes que puedan pronunciarse sobre

¹⁰ Para un análisis del juez como “*boca muda*” que debe limitarse a pronunciar las palabras de la Ley: Montesquieu, Charles Louis de Secondat Baron de la Brede. *Del Espíritu de las Leyes*. (Barcelona: Editorial Altaya, 1993) p, 19.

¹¹ Bobbio, Norberto. *Liberalismo y Democracia*. (México D.F.: FCE, Trad. José F. Fernández Santillán, 1989), 19.

la constitucionalidad de las leyes; (c) el grado de autonomía otorgado al gobierno local frente al gobierno central; y finalmente, (d) “*un poder judicial independiente del poder político*”.¹² (Resaltado fuera de texto)

De esta manera, una de las forma de materializar estos postulados que propenden por la limitación, es sin lugar a duda separar al poder. Razón por la cual, cuando empieza hablarse en la historia de separación de poderes cómo, herramienta fundamental para “controlar, frenar y dividir el poder”¹³, se empieza a hablar con la misma fuerza, de la independencia de los jueces.¹⁴ Como muestra de tal punto, pueden analizarse las tesis de los teóricos liberales como *Locke o Montesquieu*, quienes advirtieron desde sus textos la importancia de separar al poder y evitar su concentración con el objetivo de defender a la ciudadanía de los posibles abusos que pudieran perpetrarse en su contra, poniendo especial énfasis en proteger a la ley como “expresión de la voluntad popular”, y garantizando su correcta aplicación, por parte de quienes estaban llamados a aplicarla: los jueces.

John Locke desde 1690 puso de manifiesto las diversas finalidades que debía cumplir el Estado al desarrollar su papel, buscando siempre: “una ley establecida, fija y conocida (...) un juez público e imparcial (...) un poder que respalde y de fuerza a la sentencia cuando esta sea justa”¹⁵, entre otras. Así, y pese a haber omitido al poder judicial de su división¹⁶, proporciona los pilares fundamentales del principio de separación de poderes, siendo complementado por *Montesquieu*, quien motivado por revelar “El Espíritu de las Leyes” da origen a la teorización del sistema de frenos y contrapesos, explicando cómo debían idearse una serie de mecanismos que evitaran el deseo más íntimo de la raza humana, ya que: “todo hombre que tiene poder siente la inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra

¹² Bobbio, Norberto. *Liberalismo y Democracia*. Op. Cit., p. 20.

¹³ Blanco Valdés, Robert. *El valor de la Constitución – separación de poderes, supremacía de la ley y control de constitucionalidad en los orígenes del Estado liberal*. (Madrid: Editorial Alianza, 1998) p, 23.

¹⁴ “La noción de independencia judicial surge en el Viejo Continente en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX (...) se recoge en los sucesivos documentos constitucionales de la época con los objetivos, por un lado, de alcanzar el postulado ilustrado de la separación de poderes, y por otro, de consagrar la imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional a través de la aplicación del Derecho” (Martínez Alarcón, Op. Cit., p. 66.)

¹⁵ Locke, John. *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil*. Citado por: *Ibíd*em, p, 42.

¹⁶ Bobbio, Norberto. *Locke e il diritto naturale*. Citado por: *Ibíd*em, p, 48.

límites [razón por la cual] para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder”¹⁷.

Sin embargo, tal aspiración de los teóricos liberales de la época no iba dirigida a proteger a los jueces, por el contrario, se llegó a creer que ningún juez “humano” podía ser tan bueno, como para interpretar la “ley perfecta”, considerada en estricta lógica roussoniana: “expresión de la voluntad popular”. Es más, en la Francia post-revolucionaria, el principio de soberanía parlamentaria daba a entender que las leyes regularmente expedidas por el parlamento, eran necesariamente constitucionales.¹⁸ ¿Cómo no podían serlo?, si eran creadas por el pueblo quien a través de sus representantes se manifestaba en ellas buscando el “bien común”, o desde la perspectiva del pensador inglés **Jeremy Bentham**: la felicidad para el mayor número de personas. Así, era imposible hablar de su falibilidad, razón por la cual llegó incluso a prohibirse la revisión judicial de los actos del parlamento.¹⁹

El temor de los personajes de la época, fue claramente expresado en materia penal por el Marqués **Cesare Beccaria**, años antes de la revolución francesa en su obra cumbre “De los delitos y de las penas”:

“En todo delito debe hacer el juez un silogismo perfecto, la premisa mayor debe ser la ley general, la menor, la acción conforme o no a la ley, y la consecuencia, la libertad o la pena. Cuando el juez se vea constreñido, o quiera hacer, aunque no sea más que dos silogismos, se abre la puerta a la incertidumbre. No hay nada más peligroso que el axioma común de que es necesario consultar el espíritu de la ley. Esto es un dique roto ante el torrente de las opiniones (...) el resultado del espíritu de la ley sería pues el resultado de una buena o mala lógica de un juez, de una buena o mala digestión, dependería de la violencia de sus pasiones, de la debilidad de quien sufre de sus relaciones con el ofendido, y de todas aquellas minúsculas fuerzas que transforman las apariencias de cada objeto en el ánimo fluctuante del hombre”²⁰.

¹⁷ Montesquieu, Charles Louis de Secondat Baron de la Brede. **Del Espíritu de las Leyes**. (Barcelona: Editorial Altaya, 1993) p, 19.

¹⁸ Santofimio, Jaime Orlando. **Tratado de Derecho Administrativo**. Tomo I. (Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia) 1996, p.238.

¹⁹ Tal como lo menciona Diego López Medina, tal afirmación se desprende de la supremacía de la ley derivada del artículo 6 de la Declaración de los Derechos de Hombre y del Ciudadano y del texto de las primeras constituciones post-revolucionarias en Francia. Al respecto ver: López Medina, Diego Eduardo. **El Derecho de los Jueces**. (Bogotá: Ediciones Uniandes, Legis) 2001.

²⁰ Beccaria, Cesare. **De los delitos y las penas**. (México: Ed. Porrúa), 2002.

Resultaba claro entonces que el aplicar la ley como fenómeno lógico o racional, no daba pie de ninguna manera a su interpretación, o por lo menos tal y como lo ha señalado Diego López Medina, tal visión postulaba un método de interpretación “hiper-literalista como única solución al problema de evitar la usurpación de la voluntad general en manos de los aplicadores del derecho”²¹ o de que las sentencias se convirtieran en opiniones particulares de los jueces, mezclando en sus fallos subjetividades que atentaran contra los ideales de la democracia. Aun en este sentido, se buscó que el juez fallara por sobretodo en derecho, lejos de los intereses personales del gobernante y/o del legislador, razón que volvía deseable el hecho de defender su independencia.

En otros contextos como el norteamericano, durante su proceso independentista y aun mucho antes de la Revolución Francesa, autores como **Alexander Hamilton, James Madison y John Jay** expresaron a través de sus artículos, consignados en “*El Federalista*”²²: “medidas prácticas para que cada uno [de los poderes] pu[diera] defenderse contra las extralimitaciones del otro”²³, teniendo en cuenta que en la dinámica de la separación de poderes existen elementos como “[la] lucha entre los poderes públicos y la personalización del poder”²⁴ que dificultan su práctica. En tal lucha, el poder más débil sin duda alguna era el poder judicial²⁵, que “nunca po[dría] atacar con éxito a ninguno de los otros dos, y [para el] que son precisas toda suerte de precauciones para capacitarlo a fin de que pueda defenderse de los ataques de aquéllos”.²⁶

²¹ López Medina, Diego Eduardo. Op. Cit

²² Hamilton, Madison y Jay. *El Federalista*. (México: Editorial Fondo de Cultura Económica, 1943)

²³ *Ibidem*, p. 210.

²⁴ Buriticá Caicedo, Paula. *Choque de trenes entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia – la ruptura entre la construcción teórica del principio de la división de poderes y el comportamiento real de los representantes del Estado*. (Bogotá D. C.: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, artículo académico para optar el título de Abogada, 2009) p, 16.

²⁵ “El ejecutivo no solo dispensa de los honores, sino que posee la fuerza militar de la comunidad. El legislativo no solo dispone de la bolsa, sino que dicta las reglas que han de regular los derechos y los deberes de todos los ciudadanos. El judicial en cambio, no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad, y no puede tomar ninguna resolución activa. Puede decirse con verdad que no posee FUERZA ni VOLUNTAD, sino únicamente discernimiento, y que ha de apoyarse en definitiva en el brazo ejecutivo hasta para que tengan eficacia sus fallos”. En: Hamilton, Madison y Jay, Op. Cit., p. 331.

²⁶ *Ibidem*, p. 331.

A juicio de los autores norteamericanos²⁷, la única manera de materializar la independencia de los jueces radicaba en tomar medidas que reforzaran sus garantías y los protegieran de las exorbitantes facultades de los otros poderes del Estado. Entre ellas, resaltaban como las más importantes: el modo de nombramiento, el tiempo de duración en sus cargos y las causales de remoción, así como también, la remuneración estable.²⁸

Empieza hablarse desde entonces, de la IJ como presupuesto necesario en un Estado de Derecho que ubique en su cúspide una constitución limitada²⁹, y que consagre en reemplazo del principio de supremacía parlamentaria, el principio de supremacía constitucional. En este orden de ideas, los jueces deben ser protegidos con el firme propósito de salvaguardar la Constitución o la “ley fundamental”, ya que “siempre que determinada ley contravenga la Constitución, los tribunales tendrán el deber de apegarse a la segunda y hacer caso omiso de la primera”.³⁰ Por esta razón, desde la visión norteamericana, los jueces ocupan un rol fundamental en la sociedad, ligado no solo a salvaguardar la constitución, sino también a proteger a los ciudadanos de la volatilidad de las leyes, que en ocasiones pueden ser también injustas, lo que constituye un verdadero freno a la tarea del legislativo e implica también una tarea interpretativa³¹, que no puede entenderse como arbitrariedad.³²

Sin embargo Hamilton, James y Madison, sabían de lo difícil que resultaría llevar a la práctica, la empresa de separar los poderes del Estado y de garantizar independencia a los jueces. Ya que en el fondo la tensión que esto encierra, se encontraba íntimamente ligada al poder político, y lejos de pertenecer al terreno de la lógica jurídica, constituía una dificultad política práctica “consistente en dividir entre sujetos políticos concretos y preexistentes –fueren los que fueren en cada coyuntura- las diversas funciones del Estado

²⁷ *Ibidem*, p. 330.

²⁸ “Un poder sobre la subsistencia de un hombre equivale a un poder sobre su voluntad”, *Ibidem*, p. 336.

²⁹ “Por constitución limitada entiendo la que contiene ciertas prohibiciones expresas aplicables a la autoridad legislativa, como, por ejemplo, la de no dictar decretos que impongan penas e incapacidades sin juicio justo, leyes *ex post facto* y otras semejantes”. *Ibidem*, p. 330.

³⁰ *Ibidem*, p. 330.

³¹ “El poder de interpretar las leyes de acuerdo con el *espíritu* de la Constitución permitirá a ese tribunal darles la forma que estime más conveniente, sobre todo en vista de que sus decisiones no estarán sujetas de manera alguna a la revisión o rectificación del cuerpo legislativo. Esto resulta tan inaudito como peligroso”. *Ibidem*, p. 344.

³² “Para evitar una discrecionalidad arbitraria por parte de los tribunales es indispensable que estén sometidos a reglas y precedentes estrictos que sirvan para señalar y definir sus obligaciones”. *Ibidem*, p. 335.

con la finalidad de lograr un equilibrio en la construcción general de la dominación política estatal”.³³

Es así cómo, de la mano de la separación de poderes y en este contexto, la IJ se convierte en uno de los principios fundamentales del constitucionalismo liberal, surgiendo “como valor de oposición, frente a la Justicia del Antiguo Régimen instituida en función de gobierno”³⁴ y siendo tomada desde un punto de vista objetivo, que desatiende la faceta individual del juez y atiende por el contrario, al poder judicial como institución, como poder estatal cuya función –que no puede ser usurpada por otros poderes del Estado- es atribuida con exclusividad a los jueces.³⁵

A su vez, los jueces a lo largo de la historia, encuentran en la IJ un indicador de su evolución.³⁶ De esta manera, una forma de analizar el devenir evolutivo del papel de juez en el tiempo es a través del binomio dependencia/independencia en relación a los otros poderes del Estado.

En un primer momento, dentro del Antiguo Régimen, el juez dependía en su totalidad del Rey, quien era “el titular de la jurisdicción, del poder de administrar justicia, de juzgar y de ejecutar lo juzgado”³⁷, por lo que el poder que desplegaba no era propio, sino por el contrario, tan sólo un reflejo más del poder real.³⁸ En un segundo momento, y fruto de las revoluciones que izaron la bandera de la “sacralización de la ley”³⁹, los jueces, como institución, hicieron gala de total independencia frente a los otros poderes políticos y sociales, siempre y cuando fueran completamente dependientes de la ley.⁴⁰ Un tercer

³³ Blanco Valdés, Op. Cit., p. 81.

³⁴ González Granda, Op. Cit., p. 18.

³⁵ *Ibidem*, p. 19.

³⁶ Serra Cristóbal, Rosario. *La libertad ideológica del juez*. (Valencia: Editorial Tirant lo Blanch y Universitat de València, 2004) p.18.

³⁷ Martínez Alarcón, Op. Cit., p.75.

³⁸ Vale la pena resaltar que la situación no fue homogénea en Europa, para algunos autores el panorama fue distinto en la Inglaterra medieval en la que se estableció el concepto de *jueces profesionales o de élite*, que teniendo como base la Carta Magna de 1215, tomaron en ocasiones decisiones que atentaban incluso contra de los intereses del monarca, llegando a adquirir el papel de “mediadores” entre los sectores sociales y el Rey, llevando a un punto tal su legitimidad que cada vez se hizo más necesario dotar a la judicatura de jueces con sólidos conocimientos, independientes y altamente remunerados. Al respecto ver: Serra Cristóbal, Rosario. Op. Cit., p. 18.

³⁹ Santofimio, Jaime Orlando. Op. Cit., p. 238.

⁴⁰ “La independencia no supone discrecionalidad, ni que el juez o magistrado quede sujeto sólo a su conciencia a la hora de ejercitar su potestad en el caso concreto. Se es independiente para poder quedar sometido sólo a la ley (...) Esta

momento, guarda esta misma relación dependencia de la ley-independencia de los otros poderes políticos y sociales pero con una variación en el papel del juez, ligada a su empoderamiento, a la pérdida de credibilidad en la ley⁴¹, y al surgimiento de los nuevos textos constitucionales. En este punto los jueces pasaron de ser “bocas mudas que pronuncia [ban] las palabras de la Ley”, o “seres inanimados que no [podían] moderar ni su fuerza ni su rigor”⁴² a convertirse en los verdaderos protagonistas del siglo XX.⁴³

De igual forma la independencia, que hasta ahora se había predicado del poder judicial en su conjunto, en relación a su función y a su separación de los otros poderes del Estado, empieza a ubicarse en el ámbito individual del juez, ocasionando desde el siglo XIX que surgieran otras garantías necesarias que debían exigirse para posibilitar su existencia, tales como la inamovilidad en el cargo⁴⁴, expresada tiempo atrás por los teóricos norteamericanos durante el siglo XVIII⁴⁵, que se mantiene a lo largo del siglo XX y continúa presente como indicador de independencia en los ordenamientos jurídicos del mundo.

Cabe señalar, que la IJ como postulado antimonárquico del “liberalismo europeo del siglo XIX”⁴⁶, se garantiza en la medida en que se entienda como uno de los principios rectores de

sumisión a la ley no supone que la independencia tenga un límite en la ley, ni que la sumisión a la ley sea una excepción a la independencia. Por el contrario, si la función jurisdiccional consiste en la función del derecho objetivo, al juez se le concede independencia para que pueda cumplir exactamente en los términos en que se le confía, sin que existan otros condicionamientos”. (MONTERO AROCA, Juan. *Sobre la imparcialidad del juez y la incompatibilidad de funciones procesales*. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 1998, p. 101).

⁴¹ “La concentración del poder político ha hecho decaer la idea de que la ley expresa la voluntad del pueblo y que por ello es racional y justa. La ley pierde la confianza que se había depositado en ella, y llega a hablarse incluso del “crimen en forma de ley” (RADBRUCH en: Hernández Martínez, Valeriano. *Independencia del Juez y Desorganización Judicial*. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia. Monografías Civitas S.A., 1991, p. 69).

⁴² Retomando palabras de Montesquieu: Hernández Becerra, Augusto. *Las Ideas Políticas en la Historia*. (Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia. Departamento de Publicaciones, 2001) p. 255.

⁴³ “Si el siglo XX fue el siglo del legislativo y la primera parte del XX del ejecutivo, en la segunda parte del XX nos hemos situado en el poder judicial”. Cámara, Gregorio citado por: Serra Cristóbal, Op. Cit., p. 24.

⁴⁴ “Una vez proclamada la separación de poderes, la inamovilidad pasa a convertirse en la pieza esencial de la independencia del poder judicial, prevaleciendo durante todo el s. XIX esta concepción de la independencia de la justicia cifrada en la inamovilidad de los jueces” (González Granda, Op. Cit. p.19).

⁴⁵ “Conforme al plan de la Convención, todos los jueces de los Estados Unidos conservaran sus puestos mientras observen buena conducta (...) la regla que hace de la buena conducta la condición para que la magistratura judicial continúe en sus puestos, representa con seguridad uno de los más valiosos progresos modernos en la práctica gubernamental. En una monarquía crea una excelente barrera contra el despotismo del príncipe; en una república no es menos eficaz contra las usurpaciones y opresiones de la entidad representativa. Y es el mejor instrumento que puede discurrir ningún gobierno para asegurarse la administración serena, recta e imparcial de las leyes”. En: Hamilton, Madison y Jay, Op. Cit., p. 330.

⁴⁶ Martínez Alarcón, Op. Cit. 76.

un Estado y esté consagrada formalmente en el cuerpo normativo de una sociedad, llámese texto constitucional, ley, jurisprudencia⁴⁷ o haga parte de su costumbre.

1.3.2. IJ y Estado de Derecho hoy

La IJ constituye en pocas palabras, un medio para garantizar una multiplicidad de fines en un Estado de derecho, razón que motivó su consagración como pilar fundamental de dicho modelo de Estado en sus orígenes y que sigue haciendo deseable su contemplación en la actualidad.

En este sentido, la IJ adquiere una característica de medio ligado a fines superiores o de “instrumento del cual dependen objetos sustantivos [...] del Estado de Derecho”⁴⁸, de ahí que su importancia radique en la necesidad de materializar las diversas finalidades de dicho Estado, evitando que el juez en su intento por ser independiente, se aísle de la realidad social y olvide los controles legítimos que se han impuesto a su labor de administrar justicia.⁴⁹

En consecuencia, la IJ considerada como instrumento al servicio de múltiples fines en el Estado de Derecho de hoy, puede colaborar a objetivos tales como:

-“Permitir el imperio de la ley y su aplicación de manera imparcial a los casos concretos”: ya que la misma, busca la materialización del principio de sujeción a la ley e insubordinación a todas las entidades meta jurídicas.⁵⁰

⁴⁷ En algunos países de *common law* y durante el siglo XVIII, la jurisprudencia adquirió un importante valor al dotar de contenido las distintas directrices constitucionales a través de los jueces, quienes gozaban de un mayor margen de maniobra interpretativa. (Serra Cristóbal, Op. Cit., p.18.)

⁴⁸ Burgos Silva, Germán. *¿Qué se entiende hoy por Independencia Judicial? Algunos Elementos Conceptuales*. En: Burgos Silva, Germán (Editor), “Independencia judicial en América Latina: de quién? para qué? cómo?”, Bogotá D. C.: Ediciones Ántropos Ltda, ILSA, Series Textos de Aquí y Ahora, 2003) p.15.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 15.

⁵⁰ Otros autores como **Requejo Pagés**, analizan la IJ como “instituto” que permite la sujeción de las decisiones proferidas por el poder judicial a la ley, y que materializa o logra la realización del “principio de legalidad” como fin principal, en este sentido, la independencia de los jueces como categoría instrumental sirve principalmente a mantener el binomio dependencia de la ley/independencia. (Requejo Pagés, Op. Cit., p.116).

-“La defensa de la Constitución”: buscando la materialización del principio de la Constitución como *norma normarum*, y la inaplicación por inconstitucionales, de las demás normas que puedan llegar a entrar en contradicción con ésta. Siendo indispensable para esta tarea: contemplar, defender y no restringir, los poderes de revisión judicial, ya que los mismos constituyen una de las expresiones de la IJ.⁵¹

-“Una mejor garantía de los derechos humanos”: Buscando que el juez, al saberse independiente de los otros poderes del Estado y de otros actores sociales, aplique la ley garantizando la defensa de los derechos humanos⁵², al fallar sin temor o esperanza.⁵³

Estos objetivos continúan haciendo deseable, que la IJ perviva en el actual Estado de Derecho, entendido éste desde la visión de Bobbio, como Estado que limita al poder para evitar el abuso, y cuyos orígenes históricos dan cuenta de la IJ desde una visión histórica y política, ligada a las finalidades que desde sus inicios persigue y que en la actualidad perviven (vg. permitir el imperio de la ley), o comparten escenario con otras surgidas del actual Estado de Derecho (vg. la defensa de la Constitución, una mejor garantía de los derechos humanos, etc.).

La anterior mirada, constituye una primera visión de análisis de la IJ que no necesariamente excluye otras formas de entenderla, y que responde necesariamente a su origen. Sin embargo y para cumplir con el objetivo asumido desde el inicio del capítulo, se mostrarán

⁵¹ Burgos Silva, Germán, *¿Qué se entiende hoy por Independencia Judicial? Algunos Elementos Conceptuales*. Op. Cit., p. 13.

⁵² *Elin Skaar* propone como principal argumento de su texto *Independencia Judicial y Política de Derechos Humanos en Argentina y Chile*, que “los juzgamientos de derechos humanos son más probables donde hay independencia judicial”⁵², asegurando que “los triunfos en derechos humanos ocurren cuando la autoridad que genera políticas está concentrada en unas pocas manos, y cuando el presidente puede utilizar canales institucionales cerrados adecuadamente a la influencia militar”⁵², hablando desde la experiencia suramericana de las dictaduras y las violaciones a derechos humanos propiciadas por las mismas y haciendo extensiva su experiencia principalmente a países africanos. Skaar Elin, Op. Cit. p. 286.

⁵³ “Nuestro estándar Sin Temor ni Esperanza es un patrón valorativo que indica un deber ser, consistente en un estado de ánimo que debe embargar al juez(a) al momento de resolver y que fluye de una serie de condiciones institucionales que en su conjunto poseen la capacidad de garantizar que su resolución no sea motivada -en grado alguno- por el temor al castigo ni por la esperanza de un premio, propiciando la expedición de una decisión jurídica imparcial”, Zapata García, María Francisca. *Inamovilidad: ¿Garantía o Derecho?* Disponible en: <http://www.cej.org.py/files/INAMOVILIDAD%20garantia%20o%20derecho%20JORNADA%20DERECHO%20JUDICIAL%20PARAGUAY-Dra%20Zapata.pdf>

al lector dos formas más de entenderla, empezando por una visión sociojurídica que, a continuación, tratará de exponerse.

1.2. IJ: UNA MIRADA SOCIOJURÍDICA

Analizar a la IJ desde un punto de vista sociojurídico, implica cambiar de escenario. De esta manera pasaremos de analizar a la IJ como piedra angular del Estado de derecho e intentaremos adentrarnos en su definición como *concepto de derecho* (referente abstracto) *que se materializa en la práctica*, deteniéndonos en sus *dimensiones, supuestos clásicos y vulneración* desde dos modelos de medición complementarios (*Sebastián Linares y Germán Burgos*), con el firme propósito de llenarnos de herramientas que nos permitan entender su manifestación y funcionamiento en la realidad y al interior de las sociedades.

1.2.1. IJ como proceso que puede ser analizado desde su funcionamiento

Asumiendo un referente abstracto, la IJ puede ser definida como administración de justicia libre de intromisiones e injerencias ilegítimas. Por lo que algunos autores coinciden en definirla marcando en ésta una “connotación fundamentalmente negativa, relativa a la ausencia de indebidas injerencias en la labor de administrar justicia por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, las partes de un proceso, los actores sociales u otros organismos vinculados a la administración de justicia”.⁵⁴ De esta manera la independencia, definida desde el campo del deber ser, implica la ausencia de vínculo o relación, entre un sujeto

⁵⁴ Burgos Silva, Germán. *Independencia Judicial Conceptualización y Medición*. (Bogotá D.C.: Editorial ILSA, 2007) p. 7.

(poder judicial o juez) y un objeto.⁵⁵ El objeto que puede llegar a comprometerla es múltiple: los otros poderes del Estado, los grupos de poder existentes, los medios de comunicación, entre otros, factores todos que pueden llegar a coexistir en un momento determinado sin necesidad de excluirse. Si llegara a suceder, que algunos de estos factores hicieran presencia en la acción judicial, estaríamos enfrentando el terreno de las llamadas “intromisiones”.

Una intromisión entonces, se presenta cuando se presenta un vínculo entre sujeto y objeto, es decir, cuando el objeto empieza a irrumpir en la actividad del sujeto. Dichas intromisiones pueden ser *legítimas*, si derivan su sustento de la Constitución o la ley, y constituyen una forma de equilibrar el escenario de poder en una sociedad determinada⁵⁶; o *ilegítimas*, si por el contrario escapan al marco normativo impuesto en dicha sociedad y afectan al poder judicial en su conjunto o al juez desde su faceta individual al momento concreto de aplicar justicia.

Autores como **Javier Revelo Rebolledo** explican retomando a **Germán Burgos**, cómo también pueden existir injerencias indebidas completamente legales, es decir aquellas que sin estar prohibidas o siendo legalmente permitidas afectan la labor de administrar justicia, como las reformas constitucionales o legislativas que se desarrollan con el firme propósito de disminuir atributos del poder judicial mermando su independencia. Con relación al tema el autor ejemplifica:

“Una posición legalista y formal afirma que dado que en Colombia no existen cláusulas constitucionales inmodificables, el Gobierno y el Congreso en ejercicio de sus potestades constitucionales podrían legalmente por ejemplo reducir las competencias del poder judicial, crear tribunales que suplanten competencias, ampliar el número de integrantes de las cortes, etc. Desde esta perspectiva no existiría una vulneración de la IJ, sino un ejercicio de las potestades constitucionales por parte de los otros poderes. Sin embargo, el ejercicio de estas facultades constitucionales tiene por objeto reducir las posibilidades de control político, las conclusiones necesariamente deben ser las opuestas”⁵⁷.

⁵⁵ Linares, Sebastián. *La independencia Judicial: conceptualización y medición*. En: Burgos Silva, Germán (Editor), “Independencia judicial en América Latina: de quién? para qué? cómo?”, Bogotá D. C.: Ediciones Ántropos Ltda, ILSA, Series Textos de Aquí y Ahora, 2003) p.109.

⁵⁶ “No obstante, de cierta forma, el poder judicial está sometido a intromisiones legítimas fundadas en la voluntad popular expresada en el legislativo y el ejecutivo aunque sea en el marco de los límites fijados en la Constitución” (Burgos Silva, Germán, Op. Cit., p. 9).

⁵⁷ Cf. Revelo Rebolledo, Javier. *La independencia judicial en tiempos de Uribe*. (Bogotá D.C.: Pap. Polít.Vol. 13, No. 1, 53-94, enero-junio 2008)p.64.

Sin embargo tales intromisiones que pueden ser analizadas exclusivamente en la práctica, refuerzan la idea, más operativa, de que la IJ debe ser analizada como un “proceso fáctico”⁵⁸, en el que la independencia surge como resultado de un conjunto de factores que influyen de manera determinante en su existencia, posibilitándola, aunque no necesariamente la materializan en la práctica.⁵⁹ Así, son entendidos como factores, por un lado los *elementos “institucionales”* que buscan establecer garantías tanto para los jueces como para el poder judicial; por el otro, las *“dinámicas de los actores externos e internos”* que se presentan en la cotidianeidad de nuestros jueces y del poder judicial como institución, y que se relacionan con el debido respeto que debe dársele en la práctica a la IJ.

Se consideran *factores institucionales*, aquellos que integran un conjunto de arreglos formales dirigidos a posibilitar la independencia de los jueces y del poder judicial, mediante el establecimiento constitucional y legal de diversas garantías tales como: “periodos fijos de ejercicio, salarios estables y dignos, una carrera judicial que establezca el sistema de ingreso y ascensos con límites claros sobre la posibilidad de trasladar o cerrar juzgados. La existencia de un régimen de incompatibilidades e inhabilidades, y un marco legal claro en materia disciplinaria y de evaluación que eviten al máximo el ejercicio discrecional y arbitrario del control de los superiores”.⁶⁰

De su parte la *dinámica de los actores*, implica tratar de entender los intereses que influyen en la decisión que adoptan determinados actores de defender o respetar la independencia de los jueces, así y a manera de ejemplo, diversos análisis como los económicos o politológicos, han deducido, que se puede llegar a buscar un judicial independiente para mantener en el tiempo los acuerdos derivados de la conciencia colectiva⁶¹ y reflejados en

⁵⁸ Burgos Silva, Germán, Op. Cit., p.9.

⁵⁹ Autores como Germán Burgos Silva retomando a Linares y Scribner, explican tal situación tomando como ejemplo a Inglaterra y Estados Unidos, al señalar: “Así, si bien muchos países han adoptado muchas de las fórmulas arriba descritas, esto no necesariamente ha significado mejoras cualitativas en materia de independencia. Por otra parte la experiencia comparada ha mostrado que a pesar de que varios países no cuentan con arreglos institucionales como los indicados en la práctica la independencia es más respetada y funciona de manera adecuada”. *Ibidem*, p. 13.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 11.

⁶¹ Por conciencia colectiva, entendemos como Emile Durkheim, aquellos valores centrales compartidos por una sociedad determinada. Cf: Uprimny Rodrigo. *Administración de Justicia, Sistema Político y Democracia: algunas reflexiones*

las leyes, fijando una interpretación determinada que resulta de interés para un grupo específico (análisis económico); o, para posibilitar el poder de la oposición, garantizando el control del gobierno de turno y limitando su margen de maniobra, a través de la intervención del poder judicial como “árbitro entre los actores políticos y no como la herramienta de uno de ellos” (análisis politológico).⁶²

La IJ como proceso fáctico, pone de presente, que dicha independencia sólo puede darse en la práctica por niveles, ya que la misma no puede “predicarse plenamente de un poder judicial en su conjunto ni de todos sus miembros”.⁶³ La independencia se presenta entonces, de manera “gradual, según se consideren instancias, jurisdicciones o actores de intromisión”⁶⁴, en este orden de ideas un juez puede gozar de independencia frente a sus superiores, más no frente a cierto tipo de grupos de poder, medios de comunicación o incluso los sujetos conflictuales, inmersos en el proceso judicial. En idéntico sentido un poder judicial que goce de independencia frente a sus superiores, a los otros poderes, órganos u organismos, puede estar constituido por jueces que carecen de independencia. De ahí que tal fenómeno, entendido como proceso, se explique en la práctica a través de los distintos niveles que puede llegar a adquirir⁶⁵, lo que implica entender, que la IJ puede desglosarse en diversas dimensiones que recogen los niveles descritos y nos permiten entenderla de maneras distintas.

1.2.2. Dimensiones

Si partimos de la base de la importancia de que un juez sea independiente a la hora de tomar decisiones en derecho, y de los niveles de independencia que puede llegar a adquirir, vale la pena cuestionarse sobre las dimensiones en las que puede llegarse a desglosar su independencia.

sobre el caso colombiano. En: *Justicia y Sistema Político*. (Santa Fe de Bogotá: Editorial CEREC, IEPRI Universidad Nacional de Colombia, 1997) p, 72.

⁶² Burgos Silva, Germán, Op. Cit., p.15.

⁶³ *Ibidem*, p. 17.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 18.

⁶⁵ “La independencia es el producto de procesos institucionales, políticos y sociales que la hacen posible en la práctica. Por tanto la independencia judicial se construye y sus resultados nunca logran ser del todo plenos”, *Ibidem*, p. 18.

La mayoría de autores coinciden en señalar como dimensiones de la IJ, la personal o subjetiva y la institucional⁶⁶. La primera (*personal o subjetiva*), es aquella independencia de la que debe gozar el fallador al momento de administrar justicia, para que su tarea se encuentre exclusivamente orientada por el derecho y permanezca ajena a intromisiones que no provengan del cuerpo normativo que limita su tarea; la segunda (*institucional*), se predica del poder judicial en su conjunto, como institución, como poder del Estado. Muchos aseguran, que este segundo tipo de independencia, responde más a la llamada “autonomía del poder judicial” y se relaciona con el poder que le otorga un ordenamiento jurídico al poder judicial para autogobernarse, siendo autónomo a la hora de fijar su presupuesto, de escoger o nombrar a sus funcionarios y en general, de fijar las directrices que determinan su labor de administrar justicia.⁶⁷

De igual forma son señaladas como dimensiones de la IJ, la interna y la externa. La IJ *interna* es aquella que se ubica en el plano horizontal evitando que los jueces puedan ver su labor de administrar justicia interferida por otros jueces, sin importar su jerarquía. La *externa*, por el contrario, busca que el juez no se vea influenciado por “intereses privados” de los extremos procesales en litigio o cualquier tipo de interesado (entre los que cobran vital importancia los medios de comunicación), y los intereses de las otras ramas del poder público o poderes estatales.⁶⁸

De forma más analítica, se ha llegado a distinguir entre independencia interna, societal y funcional o estructural⁶⁹. La primera (*interna*) se da en la relación del juez con otros jueces o funcionarios; la segunda (*societal*), se mueve en el binomio: juez-medios de comunicación, ONG y grupos de poder en general; la tercera (*funcional o estructural*), engloba al poder judicial y lo ubica frente a los otros poderes públicos, ramas, órganos u organismos.⁷⁰ Así, el primero, ubicado en el terreno individual de los jueces, trata de proteger a estos últimos de las posibles influencias que pueden recibir de otros jueces o compañeros de rol; el segundo, abarca la independencia del judicial frente a diversos

⁶⁶ *Ibidem*, p. 7.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 7.

⁶⁸ Cf. Martínez Alarcón, Op. Cit., p. 124.

⁶⁹ Cf. Linares, Sebastián, Op. Cit. Pág. 123.

⁷⁰ Cf. *Ibidem*, p, 123.

grupos de presión (como podrían serlo los partidos políticos); el tercero, relacionado con la independencia estructural, busca librar al judicial de las influencias del ejecutivo, legislativo u otros poderes u organismos estatales.⁷¹ Ésta última división, será de vital importancia para el presente estudio, que intentará analizar a la independencia judicial en Colombia durante el periodo 2006-2009, desde su dimensión funcional o estructural, a lo largo del tercer capítulo de esta investigación.

1.2.3. Supuestos clásicos de IJ

Habiendo definido a la IJ y coincidiendo en la importancia de entenderla de manera más operativa, resulta importante entonces plantearse el siguiente interrogante: ¿cómo puede medirse en la práctica dicha independencia?

Al respecto, la comunidad académica ha sido enfática al señalar que el estado de IJ, no puede ser medido en un sistema de justicia determinado en forma directa, siendo imposible establecer un número total de intromisiones indebidas en el actuar de los operadores de la justicia⁷² a fin de determinar qué tan independiente es un sistema judicial, sin embargo, muchos coinciden en señalar, que si bien es cierto que resulta imposible medir la presencia de un fenómeno que como se dijo se caracteriza por la “ausencia de indebidas injerencias”, también es cierto que existen una serie de supuestos que de presentarse en cualquier ordenamiento jurídico, pueden llegar a constituir, en principio, una garantía que posibilita la existencia de independencia judicial en un contexto determinado.

Así, pueden considerarse como supuestos clásicos de IJ, una serie de arreglos institucionales, que operan como indicadores objetivos de su presencia⁷³ y que pueden

⁷¹ Cf. Skaar, Elin. *Independencia Judicial y la política de derechos humanos en Argentina y Chile*, En: Burgos Silva, Germán (Editor), “Independencia judicial en América Latina: de quién? para qué? cómo?”, Bogotá D. C.: Ediciones Ántropos Ltda, ILSA, Series Textos de Aquí y Ahora, 2003) p.109.

⁷² “Por lo general, un juez o fiscal, difícilmente reconoce presiones internas y externas. Las partes en un proceso pueden esgrimir la existencia de presiones como parte de sus estrategias litigiosas aun cuando no existan en cuanto tal. Dado lo anterior, los estudios posibles son ante todo de casos considerados de intromisión o de tipo estrictamente formal, como los antes indicados”, Burgos Silva, Germán, Op. Cit., p.8.

⁷³ Germán Burgos define como indicador objetivo, aquella característica observable y verificable al margen de las percepciones de los sujetos. *Ibidem*, p. 15.

encontrarse formalmente en los ordenamientos jurídicos como parte integral del marco institucional, bajo el supuesto de que su contemplación, influye en el aumento de los diferentes niveles de independencia de los que debe gozar el poder judicial y los jueces que lo integran.

Sobre el tema, se han señalado una serie de variables con las que se puede entrar a verificar el estado de independencia de un sistema de justicia, mediante el empleo de una serie de indicadores, que nos permiten determinar su presencia por lo menos formal en dicho sistema. De esta manera, por ejemplo, constituyen variables en materia de independencia personal de la mano de sus respectivos indicadores, entre otras: ***la forma de selección del juez***, determinable mediante la existencia de concursos de méritos, periodos de práctica después de periodos de prueba y un estatuto del juez dirigido a garantizar condiciones de inamovilidad; ***el actor de selección del juez***, siempre que exista un cuerpo específico e independiente, dirigido a evaluar los méritos de quien participa en los procesos de selección de jueces; ***la duración de mandato del juez***, si existe un reconocimiento constitucional o legal de la estabilidad en el cargo y el plazo de su mandato; ***la provisión de destinos y promoción profesional***, si se respetan los resultados en la selección inicial de los jueces y existe un marco legal claro en materia de transferencias de jueces; ***salario y prestaciones por el ejercicio judicial***, estableciendo la cuantía de prestaciones percibidas por los jueces, comparándola con otras funciones públicas y empleos, así como la existencia de mecanismos de irreductibilidad de los salarios; ***garantías del juez***, mientras estén constitucional y/o legalmente reconocidas y existan mecanismos de respuesta frente a intromisiones indebidas; ***responsabilidad disciplinaria***, si los procesos disciplinarios en contra de funcionarios judiciales se caracterizan por su transparencia y se llevan a cabo dentro de un marco legal claro; ***forma de asignación de casos***, mediante procesos objetivos y transparentes de asignación; ***ética jurídica***, impartiendo a los jueces en su formación la asignatura de ética judicial y mediante la expedición de un código de ética judicial; ***grado de cumplimiento de las decisiones judiciales***, siempre que las decisiones judiciales no sean revocadas por el poder ejecutivo y/o legislativo; ***evaluación de desempeño***, si existe un órgano independiente encargado de evaluar las condiciones de desempeño de los operadores jurídicos y un marco objetivo y claro en materia de dicho control, etc.

A su vez, pueden considerarse variables en materia de independencia institucional: *las dotaciones económicas y la autonomía del presupuesto del poder judicial*, si existe un porcentaje del presupuesto nacional específicamente designado al poder judicial; *la existencia de un órgano de autogobierno judicial*, que tenga a su cargo la administración de recursos, la carrera judicial y el control disciplinario; *reformas normativas contra la independencia*, en la medida en que las competencias judiciales se encuentren establecidas en la constitución o mediante ley de trámite especial, a fin de que su reforma sea más compleja que la contemplada para leyes ordinarias, etc.⁷⁴

Algunos autores, han señalado en sentido contrario, algunos *supuestos clásicos de falta de independencia*. Dando a entender por estos, unos indicadores de ausencia de IJ, o unas señales de que la independencia en un ordenamiento jurídico determinado no se encuentra garantizada en la mayor medida de lo posible, o puede llegar a estar comprometida. Dentro de estos podemos encontrar: la creación por parte del poder ejecutivo de organismos y comisiones interventoras de la labor de administrar justicia; la permisividad de una alta tasa de provisionalidad en la justicia; reorganizaciones institucionales permanentes, y cambios constantes de jueces y magistrados que dejan de lado a la Constitución y a la Ley, obedeciendo a intereses políticos; uso de la justicia como medio de control de la oposición; modificación de las competencias del poder judicial en sus diversas manifestaciones buscando obtener beneficios políticos, entre otros.⁷⁵

Dada la complejidad de medir en forma directa algún tipo de presencia o ausencia de IJ, dichos supuestos pueden colaborar en la tarea de medición o de contrastación en la práctica, de los distintos niveles de independencia que pueden presentarse en un momento determinado al interior de una sociedad específica, y pueden dar una idea de lo garantista que es un sistema en materia de IJ.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 20.

⁷⁵ Mendoza Cánepa, Op. Cit., p 19.

1.2.4. ¿Cuándo se vulnera la IJ?

Se ha sostenido que la IJ, es importante por cuanto contribuye al logro de diversas finalidades en un Estado de Derecho, y también que la misma puede verse comprometida por una serie de intromisiones indebidas, que no encuentran su sustento en la Constitución y la ley, o que encontrándolo, buscan finalidades diversas dirigidas a comprometer la labor de administrar justicia de los jueces. Sin embargo, además de entregar unos supuestos que dan cuenta de su ausencia o presencia en un momento determinado, poco se ha dicho hasta ahora sobre la identificación de dichas intromisiones indebidas. A manera de interrogante: ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos en presencia de intromisiones indebidas? ¿Cuándo se vulnera la IJ?

Para dar respuesta a estas inquietudes, abordaremos dos propuestas complementarias: (i) el modelo de medición de Sebastián Linares; y (ii) la propuesta de indicadores de Germán Burgos Silva.

1.2.4.1. Modelo de medición de Sebastián Linares

Linares, siendo consciente de la dificultad que existe a la hora de delimitar los factores que producen la falta de independencia, centra su estudio en la elaboración de una distinción analítica que le permita definir qué es una indebida injerencia o intromisión. Así, y buscando establecer “una proposición puramente lógica sin referente objetivo”⁷⁶, el autor parte de la compleja noción de poder propuesta por **Dahl** en 1963, según la cual, el poder es esa “relación causal entre preferencias y resultados, [destacando que:] un sujeto A tiene poder sobre un sujeto B, cuando logra que B se conduzca de tal modo que satisfaga sus preferencias”.⁷⁷ Lo anterior implica, según dos dimensiones, una positiva y otra negativa, que como consecuencia de la primera (*positiva*) las fuentes del derecho, las reglas de decisión y los hechos, deben conducir al juez o ejercer poder sobre él; por el contrario, y como resultado de la segunda dimensión (*negativa*), el juez debe tener una relación negativa de poder con diversos factores tales como: las partes, el ejecutivo, la legislatura,

⁷⁶ *Ibidem*, p, 111.

⁷⁷ *Ibidem*, p, 113.

los medios de comunicación, las ONG, grupos de poder, entre otros. Lo que muestra la presente ecuación:

$$A \longleftrightarrow B$$

(-V)

Para el autor, la II hace referencia a la inexistencia de vínculo entre el *sujeto A* o Juez considerado individualmente, y, un *objeto B*, que puede ser tomado en un ordenamiento jurídico específico como:

1. Gobierno;
2. Legislatura;
3. Medios de Comunicación;
4. Grupos de Poder Económico;
5. Organizaciones No Gubernamentales;
6. Otros jueces;
7. Partes del Juicio;
8. Público general;
9. Otros organismos del sistema de justicia.⁷⁸

De esta manera, cuando hay existencia de vínculo entre el sujeto A y el objeto B, la independencia se compromete y surgen las llamadas “intromisiones”.

El autor es consistente al afirmar que el poder que despliega el juez o del que es titular es condición necesaria pero no suficiente para garantizar la II, teniendo que estar acompañado de condiciones cómo: “(1) una adecuada formación, que le permita fundamentar su decisión consistentemente en el derecho (ley, jurisprudencia, doctrina, principios generales), las reglas de la lógica y la experiencia, y (2) en la ausencia de injerencias

⁷⁸ Cf. *Ibidem*, p, 110.

indebidas que, como se mencionó, constituyen la dimensión negativa. Sin estas dos cualidades no podemos hablar de un juez poderoso y parejamente independiente”.⁷⁹

1.2.4.2. Propuesta de Indicadores de Germán Burgos

En la misma línea, **Burgos** pone de presente cómo en una democracia sustentada en la separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, se hace necesario el control “legítimo” o debido al judicial por parte de los otros poderes públicos. Lo que se mueva por fuera de los límites fijados por la carta política y se dirija a comprometer la independencia de los jueces constituirá una intromisión o injerencia indebida, como por ejemplo: coaccionar a la rama judicial por medio del presupuesto o del marco legal que sustenta su estructura, el deseo de neutralizar su poder de control, entre otros.

Para identificar dichas intromisiones indebidas, **Burgos** realiza una propuesta de indicadores buscando formas de medición indirectas, teniendo en cuenta que la IJ, como se dijo, es un concepto que no es observable en la realidad de forma directa.⁸⁰ De esta manera señala algunos tipos de “comportamientos o acciones [que] pueden ser atentatorios de la independencia y cuya realización, puede, hipotéticamente poner en riesgo su debida realización”.⁸¹

De esta manera y bajo el nombre de “amenazas internas y externas”, Burgos pone de presente una serie de indicadores que dan cuenta de situaciones en las que diversos actores pueden llegar a comprometer la IJ. Así, pueden presentarse desde esta visión: *intromisiones desde el ejecutivo*: si se presentan declaraciones que buscan el desacato de decisiones judiciales; denuncias por prevaricato o mala conducta por parte del ejecutivo a los integrantes del judicial; declaraciones públicas sobre la idoneidad profesional o personal de los jueces; designaciones o destituciones de miembros del poder judicial por fuera del marco normativo. *Intromisiones desde el legislativo*: si se han presentado intentos de reformas legales o constitucionales para afectar de una u otra manera la IJ; si de igual forma

⁷⁹ *Ibíd.*, p. 114.

⁸⁰ Burgos Silva, Germán, *Independencia Judicial: Conceptualización y medición*, Op. Cit., p. 19.

⁸¹ *Ibíd.*, p. 19.

existen declaraciones públicas para que se desacaten decisiones judiciales o en contra de las calidades personales y/o profesionales de los jueces; si se han designado magistrados de la Corte Suprema y la Corte Constitucional, obviando el procedimiento señalado para tal fin; el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional que estén vinculados a algún partido político. ***Intromisiones desde las fuerzas armadas:*** si en el mismo sentido han existido declaraciones a favor del desacato de decisiones judiciales o contra la idoneidad personal y/o profesional de los jueces; si se han presentado amenazas por parte de autoridades militares al poder judicial; si existen programas de entrenamiento o formación militar de los miembros del poder judicial. ***Intromisiones de actores armados ilegales:*** siendo las mismas reflejo del conflicto armado interno que vivimos, y encontrándose entre estas, el número de homicidios cometidos en contra de los integrantes del poder judicial; el número de denuncias por amenazas contra integrantes; número de atentados contra instalaciones judiciales o miembros del poder judicial; percepción de seguridad física por parte de los jueces, etc. ***Intromisiones desde las empresas:*** si se permite, en virtud de la ley o la costumbre realizar reconocimientos en dinero o en especie a los jueces; por el número de denuncias e investigaciones por enriquecimiento ilícito de los jueces; por el número de denuncias y sentencias penales por casos de corrupción donde intervengan empresas, etc. ***Intromisiones de los medios de comunicación:*** con ocasión al número de declaraciones públicas a favor del desacato de decisiones judiciales, en contra de la idoneidad personal de jueces y fiscales, o, a favor o en contra de determinados investigados inmersos en procesos judiciales. ***Intromisiones de los superiores jerárquicos:*** si se presentan denuncias por intromisiones de superiores que buscan orientar las decisiones de los jueces de menor jerarquía; posibilidad de retomar el caso por parte del superior jerárquico; si existe posibilidad de destitución de funcionarios de inferior jerarquía por parte de superiores jerárquicos, etc. ***Intromisiones de los abogados:*** si existen denuncias de jueces por amenazas de abogados; sobornos o denuncias temerarias contra operadores judiciales.⁸²

Así y mencionando algunos otros, Burgos propone también una serie de fuentes de información que puedan dar cuenta de los indicadores descritos y de su presencia o

⁸² *Ibidem*, p. 41.

ausencia en un sistema de justicia determinado: estadísticas judiciales, denuncias judiciales, documentación legal, anales del Congreso o Parlamento, datos de prensa, etc.

Los dos modelos descritos (Burgos y Linares) nos permiten adentrarnos en el universo de las intromisiones, ayudándonos a determinar cuándo las mismas pueden considerarse como “indebidas” o “ilegítimas” en un Estado de Derecho, llegando mucho más lejos la segunda propuesta, al señalarnos las diversas fuentes de información consultables a la hora de medir en forma indirecta las diversas amenazas de orden interno y externo que pueden llegar a comprometer a la IJ, y al juez como sujeto, que no debe estar vinculado bajo ninguna circunstancia a un objeto, que no sea el derecho.

Tales propuestas contribuirán de forma decisiva en la presente investigación, a determinar la presencia o ausencia de intromisiones indebidas a la labor de administrar justicia del poder judicial en Colombia, durante el periodo 2006-2009, y en caso de verificarse, también la clase de intromisiones que se presentaron, a fin de establecer como objetivo central del presente trabajo investigativo, si las mismas pueden constituir o no la violación a un derecho humano desde la visión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Para contribuir a tal objetivo, es necesario mostrarle al lector una nueva visión de la IJ - además de las dos que se han mostrado (normativa y sociojurídica)- que defiende su entendimiento como derecho, y que se abre paso en la comunidad internacional tomando cada vez más fuerza, como se mostrará a continuación.

2.3. IJ COMO DERECHO HUMANO: HACIA UNA NUEVA MIRADA

Teniendo en cuenta lo que se ha dicho sobre la IJ, su relación con las finalidades del Estado de Derecho, y su papel como medio para el logro de dichas finalidades, se hace necesario también analizar perspectivas paralelas, propias de las aspiraciones de diferentes Estados y de los avances de los sistemas de justicia internacional.

A partir de ellas puede sostenerse, que la IJ no es tan sólo un instrumento empleado para la consecución de fines superiores del Estado de derecho, sino por el contrario: un derecho, que lejos de pertenecerle al juez o al poder judicial, se ubica en cabeza de cada uno de los ciudadanos y se relaciona con la prerrogativa que nos asiste como seres humanos a ser juzgados por tribunales con suficientes garantías de independencia. Independencia ésta, de la que el juez es principalmente emisor, al asistirle el deber de dar muestras a la sociedad de dicha independencia. En este terreno, el juez no sólo debe ser independiente sino también parecerlo.⁸³

Desde esta nueva visión, la IJ, puede ser vista como derecho ciudadano, tal y como es la aspiración del Código Iberoamericano de Ética Judicial o del Estatuto Iberoamericano del Juez, entre otros documentos; o como derecho humano ligado al debido proceso, como pretenderá demostrarse desde los avances del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el siguiente capítulo.

1.3.1. El Código de Ética Judicial, el Estatuto Iberoamericano del Juez y los avances del sistema interamericano: el derecho a la IJ

Se desprende del Código Iberoamericano de Ética Judicial y del Estatuto Iberoamericano del Juez, una aspiración: entender a la IJ como derecho en cabeza de los justiciables, de los ciudadanos.⁸⁴ De esta manera, logra extraerse de sus articulados, en los que coincide su primer acápite: “independencia”, un firme propósito de analizar tal fenómeno, no como una garantía del juez o como un privilegio, sino como el derecho que tenemos todos los ciudadanos de que nuestros jueces fallen conforme a la Constitución y a la ley, viéndose

⁸³ Betancourth Rojas, Danilo. *El derecho a la independencia judicial*. (Bogotá D.C.: Revista Semana, Octubre 1 de 2009, disponible en: http://dejusticia.org/interna.php?id_tipo_publicacion=1&id_publicacion=665)

⁸⁴ **Art. 1º.-** Las instituciones que, en el marco del Estado constitucional, garantizan la independencia judicial no están dirigidas a situar al juez en una posición de privilegio. Su razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales. *Estatuto del Juez Iberoamericano*, 2001.

obligados a rechazar cualquier tipo de influencia real o aparente que pretenda incidir en su decisión.⁸⁵

El *Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial*, adoptado en la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana de Santo Domingo, durante el 2006, contempla a la IJ como garantía ciudadana cuya razón de ser es la de aplicar el derecho, evitar la arbitrariedad y salvaguardar los derechos fundamentales⁸⁶, reiterando lo establecido en la *Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano* adoptada en Cancún durante el 2002, en la que se reconoció el “derecho fundamental de la población a tener acceso a una justicia independiente, imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y equitativa”. También debe resaltarse la *Declaración de Principios Mínimos sobre la Independencia de los Poderes Judiciales y de los Jueces en América Latina*, que recibe el nombre de “Declaración de Campeche”, aprobada el 10 de abril de 2008 en México por la Asamblea General Ordinaria de la Federación Latinoamericana de Magistrados.

En el mismo sentido encontramos las diferentes *Reglas de Brasilia*, expedidas por los Consejos de la Judicatura de Iberoamérica, así como por las principales Cortes y Tribunales: *Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad (2008)* y las *Reglas de Brasilia sobre Seguridad Jurídica e Independencia Institucional del Poder Judicial (2008)*. La importancia de estas reglas reside en que tienen como destinatarios a todos los actores del sistema de justicia y a

⁸⁵ **Art. 2°.-** El juez independiente es aquel que determina desde el Derecho vigente la decisión justa, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al Derecho mismo. **ART. 3°.-** El juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias -directas o indirectas- de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial. *Estatuto del Juez Iberoamericano*, 2001.

⁸⁶ **Art. 1°.-** Las instituciones que, en el marco del Estado constitucional, garantizan la independencia judicial no están dirigidas a situar al juez en una posición de privilegio. Su razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales. *Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial*, 2006.

quienes intervienen de una u otra forma en éste. Así, el propio sistema puede contribuir sustancialmente a la reducción de las desigualdades, favoreciendo la cohesión social.⁸⁷

Desde estos importantes documentos, que operan como aspiración de ese colectivo denominado “Iberoamérica” en el que confluyen una multiplicidad de particularidades nacionales, la IJ debe ser respetada por todos los sujetos que integran una sociedad como presupuesto necesario para que se respete a su vez la justicia.

De esta manera, este trabajo pone de presente que dichas declaraciones, conforman una nueva visión de análisis de la independencia judicial, que constituye hoy, una de las aspiraciones más persistentes de la comunidad internacional. Quizá su importancia estribé en ubicar el tema de la IJ, que siempre suele abordarse (tal y como se planteó) desde una visión normativa que da cuenta de su origen en brazos del liberalismo, o sociojurídica, como proceso que se analiza en la práctica y desde su funcionamiento, en el escenario actual como atributo del ser humano perteneciente como ciudadano a una sociedad determinada al desempeñar el rol de justiciable, cada que acude al sistema de justicia del que dispone.

En este orden de ideas, la independencia de los jueces no es exclusivamente una pieza del constitucionalismo histórico, o un concepto jurídico que puede ser entendido únicamente desde su referente abstracto, por el contrario cobra vital importancia al revestir todas las características de un derecho, en el escenario del derecho internacional y obedeciendo al mandato de diversos instrumentos internacionales, como se mostrará específicamente en el segundo capítulo.

Desde esta nueva visión, la IJ es entendida como un derecho, que encuentra sus antecedentes en los orígenes del Estado de Derecho como principio político del constitucionalismo liberal, y cuya efectividad en términos no sólo de reconocimiento sino

⁸⁷ Despouy, Leandro. *Independencia de la Justicia: Estándares Internacionales*. (Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, Federación Argentina de Colegio de Abogados, 2da Edición, 2010), p.33.

también de respeto y garantía, debe analizarse desde su desarrollo y funcionamiento al interior de las sociedades.

Por esta razón se ha pretendido a lo largo de este capítulo, entregarle al lector diferentes aproximaciones analíticas al concepto de IJ que asumiremos en lo sucesivo como referente conceptual, ilustrándolo sobre su evolución histórica (origen e importancia en el Estado de Derecho); la forma de entenderla como proceso fáctico, desde una perspectiva sociojurídica en la que se desglosa por dimensiones que se visibilizan en la práctica, los supuestos clásicos de presencia o ausencia en un marco legal determinado, la forma en la que puede verse vulnerada desde dos propuestas distintas (Linares y Burgos); para finalmente introducirlo en una discusión actual que empieza a gestarse a partir de importantes documentos suscritos por los miembros de la comunidad internacional y que dan cuenta del protagonismo del que actualmente goza la independencia de la justicia.

Lo anterior, abre paso a la discusión central del presente trabajo investigativo, ya que teniendo en cuenta la importancia de defender a la IJ no sólo como elemento rector del Estado de Derecho, y obedeciendo los mandatos de la normatividad internacional y las aspiraciones de la comunidad internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -tribunal de justicia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos- ha desarrollado a través de sus distintas decisiones judiciales, una importante línea jurisprudencial de la que se desprende la necesidad de analizar a la IJ como derecho humano ligado al acceso a la justicia y al debido proceso.

Sabemos que tal propuesta más que aclarar el panorama conceptual propuesto puede generar importantes cuestionamientos: ¿Por qué puede llegar a analizarse a la IJ como Derecho Humano? ¿Cuándo puede entenderse vulnerada la IJ desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Quién puede hacer exigible dicho derecho? ¿Qué consecuencias podría traer para los Estados parte en la Convención Interamericana, su vulneración? Si los mismos se generaron en cumplimiento del propósito que se perseguía desde el inicio de estas líneas, intentarán ser resueltos en el capítulo que a continuación se desarrollará, de la mano de los principales pronunciamientos de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, en torno a las llamadas “Garantías Judiciales” que integran el Debido Proceso.

CAPÍTULO II

INDEPENDENCIA JUDICIAL COMO DERECHO HUMANO EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU DESARROLLO EN EL SISTEMA INTERAMERICANO

*“Es un derecho humano el obtener todas las garantías
que permitan alcanzar decisiones justas”⁸⁸*

El escenario del derecho internacional guarda tras de sí una importante conquista: la posibilidad de que los individuos puedan invocarlo a fin de defender sus derechos inherentes e inalienables ante Tribunales Internacionales creados para tal fin, en un contexto en el que por tradición solía creerse que los únicos llamados a invocar sus derechos eran los Estados, como principales sujetos de derecho internacional.⁸⁹ En este orden de ideas, los particulares pueden ser titulares de derechos con la capacidad jurídica suficiente como para exigir ante instancias internacionales, el respeto que sus derechos humanos demanda.

Así, y a partir de la suscripción de diversos instrumentos internacionales: tratados, protocolos, convenciones, etc., la comunidad internacional abre la puerta a reconocerle al individuo el derecho que le asiste a acudir, desde una perspectiva regional a organismos

⁸⁸ Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, párr.127.

⁸⁹ Acosta Alvarado, Paola Andrea. *Tribunal de Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: ¿Escenarios idóneos para la garantía del derecho de Acceso a la Justicia Internacional?* (Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia. Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta. Temas de Derecho Público No. 78, 2008), p. 11.

como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)⁹⁰ o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH)⁹¹, a fin de hacer valer sus derechos esenciales que encuentran fundamento en los atributos de la persona humana.

Las mencionadas instancias internacionales se han encargado de administrar justicia en casos trascendentales de vulneración a derechos humanos en los que los aparatos de justicia de los Estados parte en la convención respectiva no brindaron a los presuntos lesionados la posibilidad de acceder a los recursos judiciales internos, o habiéndoles dado la posibilidad de acceder, los mismos fueron ineficaces para proteger su vida, integridad personal, libertad, etc.⁹², es decir no gozaron de las suficientes garantías judiciales. Dichas garantías abren paso al tema que nos convoca, ya que las mismas hacen parte integral de los derechos humanos de acceso a la justicia, debido proceso e independencia judicial. No vistas tan solo como herramientas, sino como derechos de titularidad de los justiciables y que pueden ser exigibles ante tribunales internacionales.

⁹⁰ “LOS GOBIERNOS SIGNATARIOS, miembros del Consejo de Europa, Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; Considerando que esta Declaración tiende a asegurar el reconocimiento y la aplicación universales y efectivos de los derechos en ella enunciados; Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos por ellos invocados; Resueltos, en cuanto Gobiernos de Estados europeos animados por un mismo espíritu y en posesión de un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y a la preeminencia del Derecho, a tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal...” *Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales*. Consejo de Europa, 1950. Preámbulo.

⁹¹ “Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, reafirmando su propósito de consolidar en éste continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; reconociendo que los derechos del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”. *Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos*. San José, Costa Rica. 7 al 22 de Noviembre de 1969. Preámbulo.

⁹² “**Artículo 46** 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos; b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición. 2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando: a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos”. *Ibidem*.

Buscando defender tal afirmación y como se anunció en el capítulo que antecede, a lo largo del presente capítulo se intentará ilustrar al lector con más detalle, sobre la existencia de una nueva visión de la IJ que propugna por concebirla como un derecho humano cuyo fundamento normativo, evolución, contenido y alcance puede analizarse a partir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente desde la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Para ello, en un primer apartado se analizarán los instrumentos internacionales de protección a la independencia judicial en los sistemas universales y regionales que dan cuenta de su ***fundamentación normativa*** desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (I). Sin embargo y con el ánimo de evitar al máximo apartarnos del objeto de estudio que nos hemos fijado, ahondaremos posteriormente en las características e implicaciones que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le ha dado al mismo, buscando desarrollar un precedente jurisprudencial interamericano sobre la materia (II), teniendo presente, desde la jurisprudencia de la Corte IDH la ***evolución*** que ha presentado, al pasar de considerarse una garantía judicial de carácter meramente instrumental a un derecho humano de carácter fundamental o norma imperativa de *ius cogens* (ii.i); su ***contenido***, buscando resolver el interrogante: ¿qué implica tener derecho a un juez o autoridad independiente e imparcial? (ii.ii); su ***titularidad***, a fin de entender quién puede hacer exigible tal derecho (ii.iii); y finalmente su ***alcance***, en un intento por ahondar en las implicaciones que puede generar la violación de un derecho de éste tipo en el escenario internacional (ii.iv). A renglón seguido, intentaremos indagar en la fuerza que pueden tener en nuestro ordenamiento jurídico los estándares internacionales de protección a la IJ (III), desde un análisis del bloque de constitucionalidad (iii.i), y principalmente las decisiones de la Corte IDH (iii.ii), analizando para ello los parámetros que ha fijado en Colombia la Constitución Política, y su intérprete, la Corte Constitucional.

De ésta manera y como lo ha advertido el lector desde los inicios de la presente investigación, los elementos que se entregarán a continuación, le permitirán analizar durante el capítulo final, si el derecho humano a la IJ tal y como ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte IDH, pudo haber sido vulnerado por el Estado colombiano durante el periodo 2006-2009.

2.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA (FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA)

Desde que se suscribieron en la historia la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 y un gran número de textos constitucionales a los que se les ha dado el nombre de “constituciones de posguerra”, se firmó también un acuerdo tácito: aunar esfuerzos con el único objetivo de no volver a vivir los desastres que habían ocasionado las hostilidades mundiales. Sólo de ésta manera, se podría evitar un holocausto como el que el mundo había vivido, ya que tras los ahora consagrados y defendidos por sobre todo “derechos humanos”, como lo menciona Habermas “resuena el eco de una injusticia padecida que, por así decir, es negada palabra por palabra”.⁹³

Suena innovador hablar de IJ como derecho, sobre todo si se piensa que la misma era considerada tan sólo una garantía institucional identificada desde los orígenes del Estado de Derecho (como lo vimos en el primer capítulo), sin embargo, el apelativo “innovador” no tiene lugar si la misma se examina a la luz de los instrumentos internacionales sobre la materia, tanto de carácter universal como regional.

Desde estos textos, la IJ (por paradójico que parezca) se predica de los jueces pero para los justiciables, ya que sin duda alguna, la razón más fuerte que nos motiva a defender dicha independencia rodeando al juez de condiciones que le permitan administrar justicia sin intromisiones indebidas, es garantizar en la mayor medida de lo posible el derecho de todos

⁹³ Lopera Mesa, Gloria Patricia. *La aplicación del derecho en los sistemas jurídicos constitucionalizados*. (Medellín: Universidad EAFIT, Área de Teorías del derecho. Escuela de Derecho. 2004) p.11.

a obtener decisiones justas, consagrado para evitar atropellos por parte de las autoridades judiciales o de quienes se atribuían, sin hacer parte del poder judicial, la función de administrar justicia. Al parecer y tal y como lo afirma Habermas -de eso da cuenta la historia-, detrás del derecho humano a la IJ aún resuena el eco de una injusticia padecida, negada palabra por palabra y que tristemente continúa padeciéndose.⁹⁴

Defender la independencia de los jueces, resulta entonces deseable, si se busca evitar a toda costa que los individuos inmersos en un proceso (no sólo de carácter penal) vuelvan a vivir las injusticias que traía consigo la justicia: jueces sin rostro, justicia impartida a civiles por tribunales militares, ausencia de recursos judiciales efectivos, torturas para obtener confesiones, delitos sin leyes preexistentes, suspensión de garantías en estados de emergencia, entre otras.

Obedeciendo a este interés: defender la IJ como derecho humano de titularidad de los justiciables desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a lo largo del apartado que pretende desarrollarse se analizará: (2.1.1) la consagración de la IJ en el Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos; (2.1.2) y en el Sistema Regional Interamericano de Protección; (2.1.3) así como la existencia de otros documentos internacionales de vital importancia, que pese a carecer de fuerza vinculante, gozan de total importancia en el escenario internacional y constituyen su más persistente aspiración: defender a la Justicia como valor central de las sociedades democráticas.

⁹⁴ A juicio del Ex Relator Especial sobre la independencia de los Magistrados y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: “En algunos países, el nivel de agresiones es muy elevado. Por ejemplo, en Guatemala, la Relatoría Especial ha registrado el asesinato de 16 funcionarios judiciales y amenazas a 63 de ellos, con 2 secuestros y 2 exilios entre enero de 2005 y agosto de 2006; y en Filipinas, no menos de 15 abogados y 10 jueces fueron asesinados impunemente entre 2001 y mediados de 2006. Las autoridades no siempre ofrecen una adecuada protección ni condenan de manera clara tales hechos delictivos, que frecuentemente quedan impunes. Como se ve las razones que dieron origen a la Relatoría siguen siendo las mismas que justifican su permanencia. Esto se debe a que aún hoy, cuando existe un sólido consenso sobre la importancia decisiva de la Justicia como piedra angular de la convivencia humana, la función judicial y el ejercicio de la profesión de abogado continúan siendo actividades de riesgo”. Despouy, Leandro. Op. Cit. p.20.

2.1.1. Sistema Universal de Protección

Antes de adentrarnos en el tema planteado, es necesario precisar que por instrumento internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos entendemos aquel tratado, convenio, resolución y/o declaración, que integra el “*corpus juris de los derechos humanos*”⁹⁵, emanado de la Organización de Naciones Unidas, y que a juicio de éste órgano, puede clasificarse en uno de tres grandes grupos:

(i) Grandes declaraciones de 1948; (ii) Grandes tratados universales en materia de derechos humanos; (iii) Demás instrumentos sobre derechos humanos dedicados a derechos, principios o titulares determinados (v. g. niños, indígenas, mujeres, trabajadores, etc.), esta última categoría encierra a su vez una subdivisión: (iii.i) tratados y/o convenciones (iii.ii) demás instrumentos que carecen de carácter contractual (v. g. declaraciones, reglas mínimas, principios, directrices, etc.).⁹⁶

En este orden de ideas, se pretenderá a partir de la clasificación presentada y que hace parte integral del *corpus juris de los derechos humanos*, analizar los instrumentos internacionales del Sistema Universal que de una u otra forma guardan relación con la IJ y que, la consagran como derecho humano de la mano de otras garantías, prerrogativas o facultades asociadas, que integran la expresión “juicio justo”.

⁹⁵ Cabe resaltar que cuando hacemos alusión al “*corpus juris de los derechos humanos*”, estamos apelando a un concepto desarrollado por la Corte IDH, que en su jurisprudencia ha afirmado: “el *corpus juris* del derecho internacional de los derechos humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones)”. *Ibidem.*, p.57.

⁹⁶ O'Donnell, Daniel. *Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano*. (Bogotá D.C.: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2007), p. 55.

2.1.1.1. Grandes declaraciones de 1948:

La gran declaración del Sistema Universal de 1948, es la “***Declaración Universal de Derechos Humanos***” proclamada por la Organización de Naciones Unidas en Asamblea General, mediante Resolución 217 A de 10 de diciembre de 1948, considerada como el primer reconocimiento normativo de derechos humanos en el ámbito internacional.⁹⁷ En ella se reconoce en el artículo 10° el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente:

Artículo 10°: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. (Resaltado fuera de texto)

Tal artículo no puede ser leído sin tener en cuenta, los artículos 8° y 9° de la misma declaración⁹⁸, que aunque no es un tratado internacional y que al momento de su elaboración carecía de fuerza vinculante, hoy en día es reconocida por los diferentes órganos internacionales como una manifestación del derecho internacional consuetudinario, vinculante para los Estados parte en la Organización de Naciones Unidas (ONU) e incluso para la Organización de Estados Americanos (OEA).⁹⁹

⁹⁷ “Hasta mediados del siglo XX, la protección del individuo era considerada una competencia exclusiva del Estado. No existía el derecho internacional de los derechos humanos. La internacionalización se desarrolla como consecuencia de las atrocidades cometidas contra la dignidad humana y los derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial, que actuó como un revulsivo que condujo a que la comunidad internacional insertase en el nuevo orden de posguerra un principio nuevo de protección de los derechos humanos en el orden internacional. En el derecho internacional clásico no existían los derechos humanos en el orden internacional, pues no habían sido objeto de un reconocimiento normativo internacional”. Quispe Remón, Floralba. *El debido proceso en el derecho internacional y en el sistema interamericano*. (Valencia: Tirant lo Blanch, Universidad Carlos III de Madrid, 2010), p. 106.

⁹⁸ **Artículo 8°.** Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9°. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Resolución 217 A de 10 de diciembre de 1948

⁹⁹ O’ Donnell, Daniel. Op. Cit., p. 56.

2.1.1.2 Grandes tratados universales en materia de derechos humanos

Tratándose de grandes tratados universales en materia de derechos humanos, podemos encontrar las llamadas Cartas Internacionales de Derechos Humanos elaboradas con el firme propósito de ser vinculantes y de definir con más precisión, el contenido, alcance y límites de los derechos enunciados en la gran declaración de derechos de 1948. En ellas figuran principalmente: el *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)* y el *Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC)*.

En el primero de estos pactos (PIDCP), la independencia de la justicia se delimita y adquiere fundamental relevancia:

Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

De igual forma, el artículo 14.1 debe ser leído en concordancia con los artículos 2 y 9 del mismo pacto, que prohíben el juicio arbitrario y señalan la obligación que le asiste a los Estados de respetar y acatar los derechos y deberes fijados en este.¹⁰⁰

¹⁰⁰ **Artículo 2:** 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; 2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter; 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

2.1.1.3 Demás instrumentos sobre derechos humanos dedicados a derechos, principios o titulares determinados

Son abundantes los instrumentos que integran esta subdivisión que a su vez se divide en tratados y/o convenciones y demás instrumentos de carácter no contractual. La diferencia esencial entre los primeros y los segundos, radica en la fuerza vinculante que unos y otros tienen. Los primeros (tratados y/o convenciones), son fruto de la consensualidad y su obligatoriedad ha sido reconocida por los Estados que los suscriben; los segundos, pese a que su obligatoriedad no es reconocida con la misma fuerza que la de los tratados y/o convenciones, desarrollan con mayor precisión los derechos contenidos en las declaraciones universales y en los pactos de derechos, constituyéndose en importantes pautas de interpretación, que como se dijo, integran también el *corpus juris de los derechos humanos*.

2.1.1.3.1. Tratados y/o convenciones

Dentro de los tratados y/o convenciones que de forma específica desarrollan un derecho (v. g. vida, trabajo, libertad, etc.) o dan cuenta de la especial protección que merece un grupo poblacional (v. g. mujeres, indígenas, niños, etc.), encontramos principalmente tres, que hacen especial referencia a la independencia de la justicia:

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. **Artículo 9:** 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.** Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 (XXI) de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976.

- **Convención sobre los Derechos del Niño (Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989 -entró en vigor el 2 de septiembre de 1990-)**

Artículo 37. d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

- **Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25 de 18 de diciembre de 1990)**

Artículo 18. 1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos que los nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de justicia. Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ellos o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.

- **Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Adoptada por la Asamblea general mediante Resolución 61/177 de 20 de diciembre de 2010)**

Artículo 11. 3. Toda persona investigada en relación con un delito de desaparición forzada recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento. Toda persona sometida a juicio por un delito de desaparición forzada gozará de las garantías judiciales ante una corte o un tribunal de justicia competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.

2.1.1.3.2. Demás instrumentos internacionales de carácter no contractual

Inspirados en las grandes declaraciones y con el ánimo de materializar el derecho a un juicio justo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) se reúne en Venezuela durante su Sexto Congreso en Agosto y Septiembre de 1980, con el propósito de expedir la **“Declaración de Caracas”**. Del texto de la misma se desprende, especialmente en sus artículos 5º y 6º, la preocupación principal por defender la independencia de los jueces y del poder judicial en su conjunto:

Quinta: “Los Estados Miembros deben garantizar que los responsables del funcionamiento del sistema de administración de Justicia Penal en todos los niveles estén debidamente calificados para el

desempeño de sus labores y que la lleven a cabo con independencia, sin tener en cuenta intereses personales o de grupo”.

Sexta: “La política criminal y el sistema de administración de justicia debe basarse en los principios que garanticen la igualdad de todos ante la ley, sin discriminación alguna, la efectividad del derecho de defensa y la existencia de órganos judiciales adecuados para administrar una justicia rápida y equitativa, así como procurar a todos mayor seguridad y la protección de sus derechos y libertades”

Durante el desarrollo del citado Congreso, se vio la necesidad de solicitarle al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que agendara como prioridad la elaboración de una serie de principios y directrices en materia de IJ. Tal iniciativa cobró vida cuatro años después (25 de mayo de 1984), cuando el Consejo Económico y Social de la ONU invitó a los Estados Parte a discutir en el marco del Séptimo Congreso, los ***Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura***, cuya primera versión había sido elaborada por el Comité de Prevención del Delito.

Finalmente, durante el desarrollo del Séptimo Congreso que tuvo lugar en Milán (Italia) en 1985 (del 26 de agosto al 6 de septiembre), los principios discutidos fueron aprobados bajo la directriz de ser aplicados a nivel interregional, regional y nacional, con el ánimo de garantizar cada vez en mayor medida, la IJ. Del texto de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, se destaca:

“1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura.

2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas.

4. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley”.

Siguiendo la misma línea, cuatro años después (24 de mayo de 1989) el Consejo Económico y Social de la ONU, se reunió durante su Décimo Quinta Sesión Plenaria, buscando adoptar una serie de procedimientos que aseguraran la aplicación efectiva de los Principios aprobados en el cuatrienio anterior. Como procedimiento a destacar podemos

señalar, aquel que apunta al deber que le asiste a los Estados parte de aplicar y difundir los Principios de la Judicatura:

Procedimiento 1: Todos los Estados adoptarán y aplicarán en sus sistemas judiciales los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura con arreglo a lo previsto en sus, procedimientos constitucionales y en la práctica jurídica interna.

De igual forma, como otros instrumentos internacionales de carácter no contractual y alcance universal, podemos encontrar las observaciones generales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizadas a través del Comité de Derechos Humanos encargado de la supervisión y cumplimiento del PIDCP, destacando frente al tema de la II, principalmente la No. 32, que en sus principales apartes, busca ampliar el derecho consagrado en el PIDCP y toma como base, precedentes establecidos por el TEDH, el Comité afirma:

- “El artículo 14 es de naturaleza particularmente compleja y en él se combinan diversas garantías con diferentes ámbitos de aplicación. La primera oración del párrafo 1 establece una garantía general de igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, que rige con independencia de la naturaleza de las actuaciones ante estas instancias. **La segunda oración de este mismo párrafo consagra el derecho de las personas a ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,** establecido por la ley, si se enfrentan a una acusación de carácter penal o si se trata de determinar sus derechos y obligaciones de carácter civil. En estas actuaciones la prensa y el público sólo pueden ser excluidos de las vistas públicas en los casos especificados en la tercera oración del párrafo 1. Los párrafos 2 a 5 del artículo prevén las garantías procesales de que disponen las personas acusadas de un delito. El párrafo 6 establece un derecho sustantivo a la indemnización cuando se haya producido un error judicial.

Si bien el artículo 14 no está incluido en la lista de derechos que no pueden suspenderse, que figuran en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto, los Estados que en circunstancias de emergencia pública decidan dejar en suspenso los procedimientos normales previstos en el artículo 14 deben asegurarse de que tal suspensión no vaya más allá de lo que exija estrictamente la situación. **Las garantías procesales nunca podrán ser objeto de medidas derogatorias que soslayen la protección de derechos que no son susceptibles de suspensión.** Así, por ejemplo, al ser imposible suspender la totalidad de las disposiciones del artículo 6 del Pacto, cualquier juicio que se concluya con la imposición de la pena de muerte durante un estado de excepción deberá guardar conformidad con las disposiciones del Pacto, incluidos todos los requisitos del artículo 142. De manera análoga, como tampoco puede suspenderse ninguna de las disposiciones del artículo 7, ninguna declaración o confesión o, en principio, ninguna prueba que se obtenga en violación de esta disposición podrá admitirse en los procesos previstos por el artículo 14, incluso durante un estado de excepción, salvo si una declaración o confesión obtenida en violación del artículo 7 se utiliza como prueba de tortura u otro trato prohibido por esta disposición. **En ningún caso cabe desviarse de los principios fundamentales del juicio imparcial, incluida la presunción de inocencia.** (Observación general Nº 29, art. 4: Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, párr. 11.). (...)

18. La noción de "tribunal", en la segunda oración del párrafo 1 del artículo 14, se refiere a un órgano, cualquiera sea su denominación, creado por ley, *independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, o que goza en casos específicos de independencia judicial al decidir cuestiones jurídicas en actuaciones de carácter judicial.*

19. El requisito de la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna. Comunicación N° 263/1987, *González del Río c. el Perú*, párr. 5.2.

El requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y las cualificaciones para el nombramiento de los jueces, y las garantías en relación con su seguridad en el cargo hasta la edad de jubilación obligatoria o la expiración de su mandato, en los casos en que exista, las condiciones que rigen los ascensos, traslados, la suspensión y la cesación en sus funciones y la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo. Los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial, y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, la remuneración, el mandato, la promoción, la suspensión y la destitución, y las sanciones disciplinarias en relación con los miembros de la judicatura. ***Toda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda controlar o dirigir al primero es incompatible con el concepto de un tribunal independiente.*** Es necesario proteger a los jueces contra los conflictos de intereses y la intimidación. Para salvaguardar su independencia, la ley deberá garantizar la condición jurídica de los jueces, incluida su permanencia en el cargo por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, condiciones de servicio, pensiones y una edad de jubilación adecuadas.

20. Los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad establecidas en la Constitución o en la ley. La destitución de jueces por el poder ejecutivo, por ejemplo antes de la expiración del mandato para el que fueron nombrados, sin que se les dé ninguna razón concreta y sin que dispongan de una protección judicial efectiva para impugnar la destitución, es incompatible con la independencia del poder judicial. Esto también se aplica, por ejemplo, a la destitución por el poder ejecutivo de jueces presuntamente corruptos sin que se siga ninguno de los procedimientos establecidos en la ley.

21. El *requisito de imparcialidad tiene dos aspectos. En primer lugar, los jueces no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra. En segundo lugar, el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable.* Por ejemplo, normalmente no puede ser considerado imparcial un juicio afectado por la participación de un juez que, conforme a los estatutos internos, debería haber sido recusado.

22. Las disposiciones del artículo 14 se aplican a todos los tribunales y cortes de justicia comprendidos en el ámbito de ese artículo, sean ordinarios o especializados, civiles o militares".¹⁰¹

Esta declaración es de vital importancia, y puede ir de la mano de otras importantes declaraciones y/o resoluciones como la *Declaración sobre el Derecho y el Deber de los*

¹⁰¹ Comité de Derechos Humanos, *Observación General No. 32.* (Organización de Naciones Unidas, adoptada en Ginebra en el 90º periodo de sesiones del 9 al 27 de julio, 2006).

Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas (Resolución 53/144 de la AG. 1999); la *Declaración y Programa de Acción de Viena* de 1993; los *Principios para la Eficaz Prevención e Investigación de Ejecuciones Extrajudiciales*; la *Resolución 2002/37* según la cual “No habrán de crearse tribunales que no apliquen esos procedimientos y se arroguen la jurisdicción propia de los tribunales judiciales o de los juzgados ordinarios”; la *Resolución 2003/8*, que consagra “importantes principios inherentes al concepto de buena administración de justicia. Ellos se refieren a las reglas de competencia y las garantías procesales que se imponen a la justicia militar en nombre del concepto fundamental de *unidad de la justicia*” y la *Resolución 2003/39*, que “reitera además que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”; de igual forma las *Resoluciones 2004/32* y *2004/33*, que manifiestan la “preocupación principal por la integridad del sistema judicial, como consecuencia del resquebrajamiento del poder judicial como unidad. Cuando trabajan en forma aislada tribunales militares, administrativos o de otro tipo. Los Estados parte constituyen Tribunales militares, estos deben actuar de conformidad por lo establecido por el derecho penal internacional, teniendo en cuenta que forman parte integrante del sistema judicial general y apliquen el debido procedimiento legal internacionalmente reconocido en garantía de un juicio imparcial”; y finalmente, la *Resolución 2008/6* que *prorroga el mandato del relator especial para la IJ por tres años*, teniendo en cuenta que “Los atentados a la independencia de los jueces, los abogados y los funcionarios judiciales son cada vez más frecuentes”.

Habiendo visto los estándares internacionales de carácter universal que dan cuenta del derecho a gozar de un juicio justo, para el que resulta de vital importancia un juez independiente, es necesario ubicarnos ahora en el escenario regional, específicamente y como lo anunciamos, en el escenario del Sistema Regional Interamericano de Protección.

2.1.2 Sistema Regional Interamericano de Protección

Tal y como lo hicimos al iniciar el presente apartado, nos valdremos de la misma clasificación usada para categorizar los distintos instrumentos internacionales, esta vez desde la perspectiva regional del Sistema Interamericano. En idéntico sentido, entendemos por instrumento internacional del Sistema Regional Interamericano de protección a los Derechos Humanos: aquel tratado, convenio, resolución y/o declaración, que integra el “*corpus juris de los derechos humanos*”, emanado de la Organización de Estados Americanos (OEA), y que puede clasificarse en uno de tres grandes grupos: Grandes declaraciones de 1948; Grandes tratados regionales en materia de derechos humanos; demás instrumentos sobre derechos humanos dedicados a derechos, principios o titulares determinados.¹⁰²

2.1.2.1 Grandes declaraciones de 1948:

Desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la gran declaración de 1948 es la “***Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre***”. De su articulado se desprende el afán de dotar al individuo de garantías que le permitan gozar de un juicio justo:

“Artículo XVIII. Toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. (...)”

Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.

Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene ***derecho a ser oída en forma imparcial*** y pública, a ser juzgada

¹⁰² O'Donnell, Daniel. Op. Cit., p. 55.

por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas”.

Pese a que la Declaración hace referencia exclusiva a la *imparcialidad*, que es tan solo un componente de la independencia de los jueces, los instrumentos internacionales de carácter regional que a continuación se citan hacen referencia precisa a la figura estudiada.

2.1.2.2 Grandes tratados regionales (interamericanos) en materia de derechos humanos:

Se consideran como grandes tratados regionales (interamericanos) en materia de derechos humanos: *“La Convención Americana de Derechos Humanos”* de 1969 (CADH), y el *“Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales –Protocolo de San Salvador–”*. Del texto de la Convención Americana, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, durante la llamada Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, sobresale el artículo 8º:

Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Tal artículo no puede desligarse a su vez, de los artículos 1 y 25 de la citada Convención¹⁰³, que a su vez cobra especificidad a través de la *Carta Democrática Interamericana*,

¹⁰³ **Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos:** Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. **Artículo 25. Protección Judicial:** 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente

adoptada en Lima, Perú el 11 de Septiembre de 2001, en sesión especial de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. En sus artículos 3° y 4°, la IJ cobra total relevancia y adquiere la categoría de elemento esencial de la democracia representativa que debe ser respetado y defendido por todos los sectores de la sociedad:

Artículo 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Artículo 4. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

Como podrá observar el lector, la referencia “estándares internacionales sobre IJ” es numerosa y a juicio de esta autora, responde a la importancia que en nuestras sociedades se le ha dado al valor de la justicia, valor este, que no puede existir sin separación de poderes y total independencia del poder judicial. Sin embargo, vale la pena resaltar que aun cuando la IJ se referenciaba como derecho en los distintos instrumentos internacionales, su desarrollo como derecho vendría dado por el desarrollo jurisprudencial de las distintas Cortes y Tribunales internacionales, tal afirmación intentará demostrarse desde el SIDH y específicamente desde la jurisprudencia de la Corte IDH, que a pesar de no haber consagrado un sistema de decisión basado en precedentes, por el valor mismo de la jurisprudencia internacional¹⁰⁴, ha desarrollado verdaderas líneas jurisprudenciales en torno a ciertas temáticas que constituyen parámetros necesarios para cualquier individuo que

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. *Convención Americana de Derechos Humanos*, 1969.

¹⁰⁴ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Art. 38.

desea transitar por el SIDH buscando una decisión determinada. En este sentido la Corte IDH, como máxima intérprete de la Convención Americana, marca los parámetros de su interpretación.

2.2 HACIA LA ELABORACIÓN DE UN PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL INTERAMERICANO SOBRE IJ

Si sostenemos que la IJ es un derecho humano que se considera parte fundamental del derecho humano al debido proceso, tal afirmación debe como mínimo tener sustento, dando cuenta de su fundamentación normativa desde la normatividad internacional (tal y como se hizo en el apartado anterior); de su evolución, haciendo énfasis en cómo pasó de ser una garantía o un instrumento, a considerarse un derecho en todo el sentido de la palabra (como lo ha manifestado la Corte IDH en sus últimos pronunciamientos) (2.1); su contenido, buscando indagar en lo que implica tener derecho a un juez independiente (2.2); su titularidad, dejando atrás la creencia según la cual, este derecho se ubica en cabeza de jueces y magistrados, para intentar ubicarlo en cabeza de los justiciables (2.3); y finalmente su alcance, si se parte de considerar a la IJ (como lo ha hecho la Corte IDH al hacerla parte integral del debido proceso) como norma imperativa de *ius cogens*, que puede llegar a generar como consecuencia: nulidad de tratados, responsabilidad agravada, mutación de la legitimación e incluso activar la llamada “*actio popularis*”, como se explicará más adelante.

Este recorrido nos permitirá elaborar un precedente jurisprudencial de la Corte IDH que dé cuenta del derecho humano a la IJ a lo largo de sus fallos en diferentes momentos y situaciones, para finalmente, estudiar la fuerza de dichas decisiones en el ordenamiento jurídico colombiano, a lo largo del tercer apartado. Para ello, buscaremos identificar las diferentes sub - reglas de la doctrina interamericana en torno a las llamadas garantías judiciales y el debido proceso, a través de su línea de precedentes, buscando saber, cómo

fallaría la Corte IDH en casos análogos en hechos y circunstancias.¹⁰⁵ Propósito que será de total utilidad, a la empresa emprendida con la presente investigación en el escenario colombiano durante el periodo 2006-2009.

Para tal propósito vale la pena resaltar, que si bien es cierto que la jurisprudencia es un criterio auxiliar en el derecho internacional y que no existe la obligatoriedad del precedente jurisprudencial o *stare decisis* en el escenario internacional, la Corte Interamericana al igual que el Tribunal Europeo y la Corte Internacional de Justicia, han elaborado verdaderas doctrinas jurisprudenciales en diferentes materias (víctimas, reparaciones, garantías judiciales, etc.), una de estas es la IJ, tal y como se muestra a continuación. De la misma manera, si bien la jurisprudencia es un criterio auxiliar según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (Art.38), también el mismo Estatuto señala en su artículo 38.1 lit. d. que tiene un valor como medio para la constitución de reglas de derecho, y su empleo permite encontrar normas derivadas de los usos y costumbres internacionales. Así es claro para un litigante interamericano, que debe basar sus alegaciones en la violación de uno de los artículos de la Convención Americana e interpretarlo tal y como la Corte IDH (máxima intérprete de la Convención lo ha hecho). Claro está, la Corte en cualquier momento puede variar los criterios que se plantean, pero dicha variación debe ser motivada, no arbitraria, y respetar el principio *pro homine*, razón por la cual cobra importancia el esfuerzo que se propone.

¹⁰⁵ López Medina, Diego Eduardo. *El derecho de los Jueces: Obligatoriedad del precedente constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del derecho judicial*. (Bogotá D.C.: Legis, Universidad de los Andes, Segunda Reimpresión, 2006), p.13.

2.2.1. Evolución

Como se ha dicho, la IJ pese a ser descrita como derecho en los distintos instrumentos internacionales, siempre había sido interpretada mayoritariamente como uno de los componentes esenciales del derecho de acceso a la justicia y del debido proceso, sin que se le diera la connotación de derecho humano autónomo, dándole el apelativo: garantía institucional. Sin embargo y como pretende demostrarse, la IJ, al igual que el Dios Jano de la mitología romana (dios de las puertas, los comienzos y los finales), tiene dos perfiles. Uno de ellos -conocido por todos- muestra a la IJ como garantía institucional para mantener una democracia representativa, de la mano de la separación de poderes. La otra -menos conocida- se encarga de distinguirla como un derecho humano, que no pertenece a los jueces, sino en definitiva a los justiciables, y ha sido el fruto del desarrollo de la jurisprudencia de la Corte IDH, y de otros tribunales, como el Europeo de Derechos Humanos, que no serán analizados, sino en la medida en que sean empleados como referencia por el SIDH.

Derecho que debe ser defendido por las sociedades, con el objetivo de defender la democracia y exigido por quien inmerso en una causa de cualquier índole, observe que su fallador no es independiente o no de muestras de independencia. O por los jueces, que intentando, tal y como lo ordenan los estándares internacionales, dar muestras de independencia para satisfacer el derecho de los justiciables, no pueden evitar ser objeto de ataques de cualquier orden (políticos, presupuestarios, difamatorios¹⁰⁶), que comprometen su labor de administrar justicia y el valor de la justicia en las sociedades.

La evolución descrita, puede verse a lo largo de los fallos de la Corte IDH e implica, ubicar el derecho a la IJ dentro de las llamadas “garantías judiciales”, como lo menciona el Artículo 8.1 Convención Americana de Derechos Humanos, principalmente como parte del

¹⁰⁶ Despouy, Leandro. Op. Cit., p. 17.

derecho de acceso a la justicia y específicamente, del debido proceso, para finalmente estudiarla como derecho humano de contenido autónomo.

2.2.1.1. Derecho de Acceso a la Justicia, Debido Proceso e IJ

Con el ánimo de iniciar un análisis que dé cuenta de la forma en que ha sido entendida la IJ en la jurisprudencia de la Corte IDH, sostendremos que la misma, constituye parte integral del derecho de acceso a la justicia. Aunque muchos lo asocien casi de manera exclusiva al debido proceso, diremos que el debido proceso hace parte también del derecho de acceso a la justicia y que cada vez que un individuo pretenda hacer uso de su derecho a obtener justicia, en cualquier orden (penal, civil, laboral, administrativo, etc.)¹⁰⁷, deberá contar con las garantías propias de un proceso debido, entre ellas, que su causa sea ventilada ante un juez independiente. En este sentido, la relación entre el derecho de acceso a la justicia, debido proceso e independencia judicial, es una relación de género a especie. Diremos también que el derecho de acceso a la justicia integra: el derecho de acción en cualquier escenario en el pretendan definirse situaciones jurídicas; el respeto por las llamadas garantías judiciales propias del debido proceso (entre las que figura la IJ); una decisión de fondo y ejecutable, favorable o desfavorable de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en un contexto determinado; así como un plazo razonable para obtenerla.¹⁰⁸ Lo dicho puede expresarse gráficamente, de la siguiente manera:

¹⁰⁷ Al respecto consultar: Corte IDH. Caso Baena Ricardo y Otros vs. Panamá; Caso Palamara Iribarne vs. Chile; Caso Masacre Mapiripán vs. Colombia. De igual forma TEDH. Campbell and Fell c. Gran Bretaña; Deweer c. Belgium y Engel and others c. Holanda.

¹⁰⁸ Acosta Alvarado, Paola Andrea. *El Derecho de Acceso a la Justicia en la Jurisprudencia Interamericana*. (Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia. Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta. Temas de Derecho Público No. 77, 2007), p. 19.

Derechos de acceso a la justicia, debido proceso e IJ. Cuadro No. 1.

Derecho de Acceso a la Justicia	Derecho de acción en cualquier escenario en el que pretendan definirse situaciones jurídicas.	Debido Proceso	Derecho a ser oído.	IJ	Adecuado proceso de nombramiento.
	<i>El respeto por el debido proceso integrado por las garantías judiciales del Art. 8.1 de la Convención Americana.</i>		Con las debidas garantías en un plazo razonable.		
			<i>Por un tribunal competente, independiente e imparcial.</i>		Inamovilidad en el cargo.
	Una decisión de fondo y ejecutable.		Establecido con anterioridad por la ley.		
	Un plazo razonable para obtenerla		En la determinación de cualquier causa, penal, o de determinación de derechos y obligaciones.		Garantías contra presiones externas.

Fuente: Elaboración propia

Debe señalarse que de conformidad con la Convención Americana en sus artículos 1.1 y 2, a los Estados parte les asiste el deber de respetar y garantizar los derechos humanos protegidos por el SIDH y consagrados en la Convención, aun cuando la misma no sea un catálogo taxativo de derechos.¹⁰⁹ Desde esta perspectiva la obligación estatal señalada es de doble vía: por un lado, el **respeto** implica reconocimiento de derechos y no obstrucción o intromisión en su ejercicio; por otro, la **garantía** exige del Estado una conducta activa dirigida a asegurarle al individuo el conjunto de condiciones necesarias para que efectivamente pueda ejercitarlos. Lo anterior implica, en el caso específico del derecho de acceso a la justicia, que el Estado debe, no solo reconocer o respetar dicho derecho, sino

¹⁰⁹ Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 29, Lit. c): “Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno”.

también “estructurar un sistema de administración de justicia independiente e imparcial con las competencias suficientes para conocer de todos los asuntos de interés de los individuos”.¹¹⁰

Dicha obligación, desde la cual podemos aseverar que el acceso a la justicia es un derecho al igual que cada una de las llamadas garantías judiciales que integran el debido proceso, nos lleva a reconocer que los Estados pueden ser responsables internacionalmente por no respetar o garantizar alguno de estos derechos, inclusive la IJ, sin que sea necesario que se comprometan o vulneren otros derechos, para que se exija su respeto o garantía.

Frente a este aspecto, nos apartamos de la posición que considera a las garantías judiciales exclusivamente como instrumentos dirigidos a garantizar otros derechos, por el contrario, defendemos el considerarlas también como derechos autónomos, aun cuando a su vez garanticen otros derechos, ya que “negarles su carácter autónomo contraría tanto la jurisprudencia de la Corte como los principios que rigen el sistema y todo el ordenamiento internacional de los derechos humanos, y principalmente van en contra de la protección de los individuos. Al respecto concordamos con el juez Cançado Trintade: no podemos retroceder hacia la interpretación que consideraba a estos derechos como meros instrumentos, pues en este escenario sería absolutamente necesaria la violación de algún otro derecho de la Convención para considerar violados los artículos 8 y 25 de la misma. Esto en la moderna concepción de los derechos humanos no tiene ningún sentido”.¹¹¹

Así, el debido proceso legal o derecho de defensa procesal¹¹², que como se explicó contempla a su vez otros derechos autónomos¹¹³, encuentra fundamento normativo en el

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 50.

¹¹¹ *Ibidem*, p. 84.

¹¹² Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. Opinión Consultiva del 6 de octubre de 1987, OC-9/87, pár. 28.

¹¹³ “Los derechos y garantías que integran el debido proceso --jamás una realidad agotada, sino un sistema dinámico, en constante formación-- son piezas necesarias de éste; si desaparecen o menguan, no hay debido proceso. Por ende, se trata de partes indispensables de un conjunto; cada una es indispensable para que éste exista y subsista. **No es posible sostener que hay debido proceso cuando el juicio no se desarrolla ante un tribunal competente, independiente e imparcial**, o el inculpaado desconoce los cargos que se le hacen, o no existe la posibilidad de presentar pruebas y formular alegatos, o está excluido el control por parte de un órgano superior”. Corte IDH, OC-16/99, Voto concurrente razonado del Juez Sergio Ramírez, p. 2. (Resaltado fuera de texto)

artículo 8 de la Convención y “abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Esta conclusión se confirma con el sentido que el artículo 46.2 .a) da a esa misma expresión, al establecer que el deber de interponer y agotar los recursos de jurisdicción interna, no es aplicable cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados”,¹¹⁴ tal derecho y el conjunto de garantías que contempla, no pueden ser suspendidos ni aun en estados de excepción.¹¹⁵

Con ocasión del debido proceso, específicamente en lo relacionado con la garantías judiciales que deben observarse para garantizarlo (Artículo 8 Convención Americana), la Corte IDH ha fallado a 2008 en más de 75 oportunidades.¹¹⁶ Han sido considerados internacionalmente responsables por su vulneración, los Estados de: Perú, en diecinueve (19) ocasiones¹¹⁷; Guatemala en diez (10)¹¹⁸; Ecuador¹¹⁹ y Colombia¹²⁰ en siete (7); Paraguay en seis (6)¹²¹; Venezuela¹²² y Argentina¹²³ en cuatro (4); Chile¹²⁴ y Honduras¹²⁵

¹¹⁴ *Ibidem*, p. 28.

¹¹⁵ “Relacionado el artículo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convención, se concluye que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente respecto del hábeas corpus y del amparo, a los que la Corte se referirá en seguida y que tienen el carácter de

indispensables para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión”. *Ibidem*, p. 30.

¹¹⁶ Quispe Remón, Florabel. *El Debido Proceso en el Derecho Internacional y en el Sistema Interamericano*. (Valencia: Tirant lo Blanch, 2010), Anexos, Cuadro 2.

¹¹⁷ Casos: Loayza Tamayo (1997); Castillo Petruzzi (1999); Cesti Hurtado (1999); Durand y Ugarte (2000); Cantoral Benavides (2000); Tribunal Constitucional (2001); Ivcher Bronstein (2001); Barrios Altos (2001); Gómez Paquiyauri (2004); De la Cruz Flórez (2004); Lori Berenson Mejía (2004); Huilca Tecse (2005); Gómez Palomino (2005); García Asto y Ramírez Rojas (2005); Baldeón García (2006); Trabajadores Cesados del Congreso (2006); Penal Miguel Castro Castro (2006); La Cantuta (2006); Cantoral Huamaní y García Santa Cruz (2007).

¹¹⁸ Casos: Blake (1998); Paniagua Morales (1998); Villagrán Morales (1999); Bámaca Velasquez (2000); Myrna Mack Chang (2003); Maritza Urrutia (2003); Masacre Plan de Sánchez (2004); Molina Theissen (2004); Carpio Nicolle y otros (2004); Fermín Ramírez (2005).

¹¹⁹ Casos: Suarez Rosero (1997); Benavides Cevallos (1998); Tibi (2004); Acosta Calderón (2005); Zambrano Vélez y otros (2007); Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez (2007); Albán Cornejo y Otros (2007).

¹²⁰ Casos: Las Palmeras (2001); 19 Comerciantes (2004); Gutiérrez Soler (2005); Masacre de Mapiripán (2005), Masacre de Pueblo Bello (2006); Masacre de la Rochela (2007); Escué Zapata (2007).

¹²¹ Casos: Ricardo Canese (2004); Inst. Reeducción del Menor (2004); Comunidad Indígena Yakye Axa (2005); Comunidad Indígena Sawhoyamaya (2006); Goiburú y otros (2006); Vargas Areco (2006).

¹²² Casos: El Caracazo (1999); Blanco Romero y otros (2005); Montero Aranguren (2006); Apitz Barbera y Otros (2008).

¹²³ Casos: Cantos (2002); Bulacio (2003); Bueno Alves (2007); Rimel (2008).

¹²⁴ Casos: Palamara Iribarne (2005); Claude Reyes y Otros (2006); Almonacid Arellanos y otros (2006).

¹²⁵ Casos: Juan Sánchez (2003); López Álvarez (2006); Servellón García y otros (2006).

en tres (3); El Salvador¹²⁶, Nicaragua¹²⁷ y Panamá¹²⁸ en dos (2); Bolivia¹²⁹, Brasil¹³⁰, Costa Rica¹³¹, Haití¹³², Suriname¹³³ y Trinidad y Tobago¹³⁴, una (1).¹³⁵

Las declaratorias de responsabilidad han dado lugar a importantes sub reglas de la doctrina interamericana, que pueden extraerse de los casos citados, siendo reiteradas y sostenidas a la fecha en sus diferentes pronunciamientos. Algunas de ellas, complementan y definen el alcance de los derechos irrenunciables que integran los derechos de acceso a la justicia y debido proceso, relacionándose específicamente con la justicia:

- ***A un recurso judicial efectivo.***

- o Sencillo y rápido.¹³⁶
- o Incluso para las víctimas de violaciones a derechos humanos a las que se les vulneran sus garantías judiciales.¹³⁷
- o No se agota con la posibilidad de tener recursos de derecho interno, se debe asegurar a las víctimas el saber la verdad y ver sancionados a los responsables.¹³⁸
- o El Estado debe contribuir a eliminar barreras que impidan a los individuos acceder a la justicia.¹³⁹

- ***A ser juzgado por un juez natural y preexistente:***

- o Debe entenderse por juez: cualquier autoridad pública (ejecutiva, legislativa o judicial), que a través de sus decisiones defina situaciones jurídicas de las personas.¹⁴⁰
- o En condiciones de igualdad.¹⁴¹

¹²⁶ Casos: Hermanas Serrano Cruz (2002); García Prieto y otros (2007).

¹²⁷ Casos: Genie Lacayo (1997); Yatama (2005).

¹²⁸ Casos: Baena (2001); Eliodoro Portugal (2008).

¹²⁹ Caso: Trujillo Oroza (2001).

¹³⁰ Caso: Ximenes López (2006).

¹³¹ Caso: Herrera Ulloa (2004).

¹³² Caso: Yvon Neptune (2008).

¹³³ Caso: Comunidad Moiwana (2005).

¹³⁴ Caso: Hilaré Constantine y otro (2005).

¹³⁵ Cfr. *Ibidem*, Anexo, Cuadro 2.

¹³⁶ Cfr. Corte IDH, Casos: *Mayagna Sumo Awás Tigni Vs. Nicaragua*, Sentencia de Agosto 31 de 2001, párr.112. *Caso Ivcher Bronstein*. Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 134; y *Caso del Tribunal Constitucional*, Sentencia de 31 de enero de 2001, párr.90; En igual sentido, TEDH: *Keenan v. the United Kingdom*, Judgment of 3 April 2001, párr. 122, 131.

¹³⁷ Cfr. Caso Corte IDH: 19 Comerciantes Vs. Colombia, Sentencia de 5 de Julio de 2004, p.187.

¹³⁸ Cfr. Caso Corte IDH: *Mapiripán Vs. Colombia*, Sentencia de 15 de Septiembre de 2005, p.216.

¹³⁹ Cfr. Casos Corte IDH, Caso: Cantos Vs. Argentina, Sentencia de 28 de noviembre de 2002, párr.50.

¹⁴⁰ Cfr. Casos Corte IDH: *Ivcher Bronstein*. Sentencia de 6 de febrero de 2001; Claude Reyes y otros Vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, párr.117 y Ss.

- A no ser juzgado por tribunales especiales o de excepción, creados con ocasión de los hechos, esto evita el juzgamiento por parte de jueces con intereses creados.¹⁴²
 - Se prohíbe a la justicia penal militar atribuirse funciones de la justicia ordinaria.¹⁴³
 - La justicia penal militar debe tener un alcance excepcional y restrictivo.¹⁴⁴
- ***A no ser juzgado por un juez sin rostro.***
 - Jueces sin rostro anulan el derecho que tiene el acusado de recusar al juez y le impiden determinar su competencia.¹⁴⁵
- ***A obtener una decisión de fondo***
 - Debidamente motivada en derecho y con la “exteriorización de una justificación razonada que permit[an] llegar a una conclusión”.¹⁴⁶
- ***A tener garantías en la estructura de la judicatura.***
 - El Estado es autónomo a la hora de organizar la estructura del poder público, sin embargo no puede contravenir los parámetros fijados por la Convención Americana.¹⁴⁷
- ***A que el juez que juzgue mi causa sea independiente y tenga límites definidos.***
 - A que mi juez sea imparcial y se rija por el procedimiento legal.¹⁴⁸
 - A que sus decisiones se tomen con independencia de los otros poderes del Estado.¹⁴⁹
 - A que esté sujeto a controles que eviten abusos.¹⁵⁰

¹⁴¹ Cfr. Casos Corte IDH: *Tristán Donoso Vs. Panamá*, Sentencia de 27 de enero de 2009, párr.184 y Ss.; *Caso De la Cruz Flores*, Sentencia de 18 de noviembre de 2004, párr. 122; *Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay*, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párr. 125; y *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*, Sentencia de 8 de julio de 2004, párr. 179.

¹⁴² Cfr. Casos Corte IDH: *Castillo Petrucci y otros Vs. Perú*, Sentencia de 30 de mayo de 1999 y *Cantoral Benavides Vs. Perú*, Sentencia de 3 de septiembre de 1998.

¹⁴³ Cfr. Casos Corte IDH: *Cantoral Benavides Vs. Perú*, Sentencia de 3 de Septiembre de 1998; *Castillo Petrucci y otros Vs. Perú*, Sentencia de 30 de mayo de 1999; *Durand y Ugarte Vs. Perú*, Sentencia de 16 de agosto de 2000.

¹⁴⁴ Cfr. Casos Corte IDH: *Cantoral Benavides Vs. Perú*, Sentencia de 3 de Septiembre de 1998; *Castillo Petrucci y otros Vs. Perú*, Sentencia de 30 de mayo de 1999; *Durand y Ugarte Vs. Perú*, Sentencia de 16 de agosto de 2000.

¹⁴⁵ Cfr. Casos Corte IDH: *Castillo Petrucci y otros Vs. Perú*, Sentencia de 30 de mayo de 1999; *Lori Berenson Mejía Vs. Perú*, Sentencia de 25 de noviembre de 2004.

¹⁴⁶ Cfr. Casos Corte IDH: *Chaparro Álvarez y Lapo Ñíñez Vs. Ecuador*, Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr. 107; y *Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela*, Sentencia de 5 de agosto de 2008, párr. 77.

¹⁴⁷ Cfr. Corte IDH, *Caso Tristán Donoso Vs. Panamá*, Sentencia de 27 de enero de 2009, párr. 174.

¹⁴⁸ Corte IDH, *Caso Tristán Donoso Vs. Panamá*, Sentencia de 27 de enero de 2009, párr. 16 y 17.

¹⁴⁹ Corte IDH, *Caso del Tribunal Constitucional*, Sentencia de 31 de enero de 2001.

¹⁵⁰ Corte IDH, *Caso Yatama Vs. Nicaragua*, (2005), párr.174.

2.2.1.2. IJ como derecho Humano

A juicio de la Corte IDH, “es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas”¹⁵¹, una de esas garantías es precisamente la IJ. En la jurisprudencia de la citada corporación, la IJ ha ocupado un importante lugar, aun cuando su verdadero desarrollo se ha dado con ocasión de los acontecimientos que tuvieron lugar en el Estado venezolano durante los últimos años, y que sin lugar a duda le dieron la tarea de identificar qué significa tener derecho a un juez independiente.¹⁵² Tal y como se dijo, para la Corte IDH, cuya competencia es complementaria a la que ofrecen cada uno de los Estados parte¹⁵³, la IJ es un derecho humano dotado de contenido propio¹⁵⁴ (como se explicará más adelante) que debe ser garantizado por cada uno de los Estados en relación con sus obligaciones convencionales.¹⁵⁵

Así, la Corte IDH, ha acudido en numerosas ocasiones cuando de IJ se trata, a la jurisprudencia del TEDH; a algunos estándares internacionales sobre IJ entre los que sobresalen los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura (1985) y a los informes rendidos en materia de violaciones a derechos humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A partir de tales documentos ha podido concluir en su jurisprudencia (integrada por las opiniones consultivas y sentencias emitidas) que la IJ al hacer parte del debido proceso constituye una de las llamadas normas de *ius cogens* o de naturaleza imperativa, con las implicaciones que tal reconocimiento conlleva, debiendo ser respetada en todo trámite no sólo penal, sino también civil, laboral,

¹⁵¹ Corte IDH, Caso *Baena Ricardo y otros Vs. Panamá*, párr.127.

¹⁵² Al respecto consultar: Casos Corte IDH: *Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela*, Sentencia de 5 de agosto de 2008 y *Reverón Trujillo Vs. Venezuela*, Sentencia de 24 de septiembre de 2009.

¹⁵³ Convención Americana de Derechos Humanos, preámbulo.

¹⁵⁴ Corte IDH, Caso *Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela*, Sentencia de 5 de agosto de 2008, párr.55.

¹⁵⁵ Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 1; PIDCP, Artículo 2.

administrativo o de cualquier naturaleza, en el que se definan situaciones jurídicas de las personas.¹⁵⁶

También ha dejado claro que la IJ busca rodear de garantías al poder judicial en su conjunto, y al juez, considerado como fallador imparcial, capaz de definir causas en derecho sin alicientes o presiones de ningún tipo con el fin de garantizar el derecho del administrado a ser juzgado por un juez independiente¹⁵⁷, y que reviste de total importancia al garantizar otros derechos y principios, como por ejemplo el de igualdad. En este sentido, la misma es un derecho que les asiste a los justiciables para que puedan defender sus intereses en plano de igualdad, ya que la falta de independencia de un juez que resuelve una controversia, llámese en este caso “parcialidad” puede significar para un sujeto procesal la ruptura del principio de igualdad en relación con el otro.¹⁵⁸ O el derecho a un recurso judicial efectivo, ya que la ausencia de un juez independiente puede lograr en contextos determinados, que los recursos judiciales contemplados en los ordenamientos internos sean tan solo ilusorios¹⁵⁹, tal y como fue señalado en las sentencias motivadas por los casos “Niños de la Calle” o “Tribunal Constitucional”¹⁶⁰.

En materia de estados de excepción, lugar común en la historia de América Latina¹⁶¹, la Corte IDH ha señalado a través de sus opiniones consultivas que las garantías judiciales

¹⁵⁶ Abreu Burelli, Alirio. *Independencia Judicial (Jurisprudencia Corte Interamericana de Derechos Humanos)*. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, p.640. Disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20072/pr/pr10.pdf>

¹⁵⁷ *Ibidem*, p. 643.

¹⁵⁸ *Ibidem*, p. 641; Ver también Corte IDH, Casos: *Comunidad Indígena Yakie Axa Vs Paraguay*, Sentencia de 17 de junio de 1995 y *Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*, sentencia de 2 de julio de 2004.

¹⁵⁹ Corte IDH, Casos: *Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, párr. 209; *del Tribunal Constitucional*, Sentencia de 31 de enero de 2001, párr.93. Ver también: OC. 9/87.

¹⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶¹ Al respecto consultar: De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. *El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia. Constitucionalismo Perverso. Normalidad y Anormalidad Constitucional en Colombia: 1957-1997*. (Bogotá D.C.: Siglo del Hombre Editores, 2004), p. 317. Mejía Quintana, Oscar. “*Estado autoritario y democracia radical en América Latina. Elementos para un marco de interpretación teórica*” en Jairo Estrada (comp.), *Izquierda y Socialismo en América Latina*, Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia (Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales), 2008, p.5. Cardona Chávez, Juan Pablo y Luna Blanco, Tania. “*Estados de Excepción en Colombia: 1948-1990*”, Marquardt, Bernd (Ed.), *Constitucionalismo Comparado, Acercamientos metodológicos, históricos y teóricos*, tomo 22 de la *Colección Gerardo Molina*. (Bogotá: Ed. Universidad Nacional de Colombia, Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, 2009), p.49.

indispensables que no pueden ser suspendidas ni aun en estados de excepción (habeas corpus y amparo, entre otros)¹⁶², no pueden dejar de ser “judiciales”, lo que implica, que la legalidad de los actos desarrollados durante dicho estado, así como los medios judiciales que existan, deben ser ventilados ante un juez competente, independiente e imparcial, dentro de los parámetros fijados por el artículo 8 de la Convención.¹⁶³

En numerosos pronunciamientos la Corte IDH, se ha referido a la IJ específicamente desde la imparcialidad, aseverando que un poder judicial dependiente de otros poderes del Estado o sectores, deja serias dudas sobre la imparcialidad que debe caracterizar a sus funcionarios.¹⁶⁴ Así, ha dejado claro que al juez le asiste el deber de apartarse del conocimiento de un caso en el que pueda llegar a tener algún tipo de interés o en el que su decisión pueda verse influenciada por factores ajenos al derecho, señalando que en ocasiones tal influencia puede venir de su falta de independencia y afectar su imparcialidad, razones suficientes para que el Estado aplique las medidas necesarias que garanticen que sus administradores de justicia puedan fallar sin prejuicio o temor alguno.¹⁶⁵ De esta manera, la imparcialidad del funcionario implica dos facetas, de un lado la subjetiva (tradicionalmente conocida), desde la cual el fallador debe abstenerse de fallar si tiene prejuicio personal frente a la causa o a las partes en litigio; de otro, la objetiva (desarrollada principalmente por la jurisprudencia del TEDH), según la cual el fallador no solo debe considerarse imparcial al momento de conocer la causa, también debe dar muestras de dicha imparcialidad, siendo relevantes los hechos corroborables que puedan suscitar dudas al respecto, razón por la cual se ha hecho popular la frase: “en este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia”.¹⁶⁶

¹⁶² Por indispensables entiende la Corte los recursos de amparo y habeas corpus (Convención Americana, Artículos 7,6 y 25,1), OC-8/87 de 30 de Enero de 1987. El Habeas Corpus bajo Suspensión de Garantías; Aunque ha extendido el tema a “cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que garantice el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no esté autorizada por la misma Convención”. OC-9/87 del 6 de Octubre de 1987.

¹⁶³ OC-8/87 de 30 de Enero de 1987. El Habeas Corpus bajo Suspensión de Garantías. Párr. 30 y 40.

¹⁶⁴ Abreu, Alirio. Op. Cit., p.645.

¹⁶⁵ *Ibidem*, p. 645. Ver también: Corte IDH, Caso *Palamara Iribarne Vs. Chile*, sentencia de 22 de noviembre de 2005.

¹⁶⁶ *Ibidem*, p. 645. Ver también: Casos TEDH, *Pabla Ky Vs, Finlandia*, sentencia de 26 de junio de 2004; y, *Morris Vs. Reino Unido*, sentencia de 26 de febrero de 2002.

En la misma línea, pero refiriéndose a la competencia del juzgador, la Corte IDH ha manifestado que no puede hablarse de un juez independiente que falle una causa siendo incompetente para fallarla. Es así, como a partir de los hechos que motivaron los casos *Cantoral Benavides Vs. Perú* en 1998, y posteriormente *Castillo Petruzzi* en 1999 y *Durand y Ugarte* en el 2000, también *Vs. Perú*, que la Corte IDH concluye que cuando la justicia penal militar usurpa la competencia del juez ordinario para fallar asuntos en los que sus agentes se ven involucrados en violaciones a derechos humanos, los jueces penales de instrucción militar que por lo general fallan estos casos, y que se vuelven jueces y partes al haber investigado y combatido a los “insurrectos” para después juzgarlos¹⁶⁷, no pueden escapar a las influencias ejercidas por el poder militar o a sus propios prejuicios, violando el derecho de los justiciables a un juez *competente, independiente e imparcial*.¹⁶⁸

Desde la misma perspectiva, la competencia del juez puede verse en entredicho cuando al justiciable se le impide conocer la identidad de su juzgador. Es así como los “jueces sin rostro” no tienen asidero dentro de los parámetros fijados por la Convención Americana de Derechos Humanos, pues impiden al sujeto cuya causa se ventila, determinar la competencia de su juzgador, valorar su idoneidad y ejercer su legítimo derecho a recusarlo.¹⁶⁹ En igual forma puede verse en sus sentencias, el afán por reforzar la independencia del juez constitucional, como máximo guardián de la Constitución y especialmente, en “atención a los asuntos sometidos a su consideración”¹⁷⁰

Ha dicho la Corte entonces desde sus primeros pronunciamientos, que la IJ es garantía fundamental en un régimen democrático que va de la mano del principio de separación de poderes¹⁷¹, además y como lo hemos visto es requisito necesario para la imparcialidad y la competencia del juzgador, a fin de que el natural de un Estado cuya causa se ventila, no vea

¹⁶⁷ *Ibidem*, p. 646. Ver también: Corte IDH, Caso *Lori Berenson Mejía Vs. Perú*, sentencia de 25 de noviembre de 2004.

¹⁶⁸ *Ibidem*, p. 646. Ver también: Corte IDH, Casos *Cantoral Benavides Vs. Perú*, Sentencia de 3 de septiembre de 1998; *Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú*, Sentencia de 30 de mayo de 1999 ; y, *Durand y Ugarte*, sentencia del 16 de agosto del 2000.

¹⁶⁹ *Ibidem*, p. 647. Ver también: Corte IDH, casos *Lori Berenson Mejía Vs. Perú*, sentencia de 25 de noviembre de 2004.

¹⁷⁰ *Ibidem*, p. 647. Ver también: Corte IDH, caso *Tribunal Constitucional*, Sentencia de 31 de enero de 2001.

¹⁷¹ *Ibidem*, p. 648. Ver también: Corte IDH, caso *Tribunal Constitucional*, Sentencia de 31 de enero de 2001.

vulnerado su derecho de acceso a la justicia y específicamente su derecho al debido proceso.

Sin embargo hablar del derecho a un juez independiente, implica ir más allá, así como lo ha hecho la Corte IDH, ya que en el devenir evolutivo del derecho humano a la IJ sobresalen dos momentos, uno primero, en el que la independencia judicial muestra su faceta más conocida: la de garantía institucional que surge como consecuencia necesaria del principio de separación de poderes y que posibilita otros derechos –como pudo observar el lector en relación con la igualdad y el derecho a un recurso judicial efectivo- y uno segundo, en el que de manera intermitente (aunque en los últimos años con más contundencia), ha hecho referencia a ella como derecho humano dotado de contenido propio.

Al respecto, son de obligatoria consulta, los pronunciamientos de la Corte IDH durante los años 2008 y 2009, relacionados con las causas *Apitz Barbera Corte Primera de lo Contencioso* y *Reverón Trujillo* contra el Estado de Venezuela, a través de los cuales se concluye que la independencia judicial no es exclusivamente una garantía compuesta a su vez de otras garantías¹⁷², sino también un derecho que le asiste a los justiciables, reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana¹⁷³, y que puede verse vulnerado en relación con los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno).

De esta manera, el lector debe apreciar que la visión de IJ que se propone, puede dar lugar a diversas formas de entendimiento de la misma, desde la óptica del SIDH, tal y como se ha dicho, y que para claridad se expresan en el siguiente cuadro:

¹⁷² Corte IDH, caso *Tribunal Constitucional*, Sentencia de 31 de enero de 2001, párr. 64.

¹⁷³ Corte IDH, Caso: *Reverón Trujillo Vs. Venezuela*, Sentencia de 24 de septiembre de 2009, párr. 146.

Formas de comprensión de la IJ en el SIDH. Cuadro No. 2.

Independencia Judicial	
Entendida cómo:	Garantía Judicial. Art. 8. Convención Americana de Derechos Humanos. Garantías contempladas para obtener juicios justos.
	Garantía instrumental. En la medida en que constituye un parámetro interpretativo que debe orientar la interpretación de la Convención Americana y que garantiza la preservación de las instituciones y la existencia del Estado de Derecho. Su consagración y protección se da, para asegurar la protección de otros derechos.
	Derecho humano ligado al acceso a la justicia y al debido proceso. Empieza a ser entendida como derecho, siendo necesario para su protección, que se compruebe la vulneración del derecho de acceso a la justicia o del debido proceso.
	Derecho Humano autónomo. Su contenido está determinado a su vez por otras garantías: adecuados procesos de nombramientos, inamovilidad en el cargo y garantías contra presiones externas; y puede ser exigido por el justiciable de forma independiente, sin necesidad de comprobar la vulneración de otro derecho.

Fuente: Elaboración propia

2.2.2. Contenido

¿Qué implica tener derecho a un juez independiente?, la respuesta a este interrogante parece tener origen en las decisiones proferidas por el TEDH¹⁷⁴ y retomada por la CIDH y la Corte IDH desde sus primeras decisiones, en las cuales la IJ, evolucionó de ser vista exclusivamente como garantía, a ser tratada como un “derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Consultar entre otros: TEDH, Caso Langborger Vs. Suecia, sentencia de 22 de junio de 1989.

¹⁷⁵ “El requisito de competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”, Comité de Derechos Humanos, Comunicación No. 263/1987, González del Río C. Perú, párr.52. Ver también: Casos Corte IDH: *Ivcher Bronstein Vs. Perú*, Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr.112.

De esta manera, la Corte Interamericana da un primer vistazo al contenido del derecho a la IJ, al señalar que la independencia de los jueces supone a su vez otras garantías que deben envolver a los jueces: (i) un adecuado proceso de nombramiento; (ii) inamovilidad en su cargo; y, (iii) garantías que los resguarden contra presiones externas.

La primera referencia a dichas garantías, puede encontrarse en los informes rendidos por la CIDH, entre ellos el motivado por el caso *Alan García C. Perú* en 1994, en el que se fijan los parámetros descritos, y que años más tarde serían retomados por la Corte IDH al fallar el conocido caso *Tribunal Constitucional* (TC), en el que tres Magistrados que integraban dicha corporación en el Perú (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano) fueron destituidos en un juicio político practicado por el Congreso de la República, al haber dado “inaplicabilidad” a la Ley de “interpretación auténtica de la Constitución” No. 26.657 sancionada por el Ejecutivo y que permitía al entonces Presidente de la República (Alberto Fujimori) postularse a una segunda reelección presidencial.¹⁷⁶ Los hechos que sucedieron a esa declaración de inaplicabilidad constituyeron a juicio de la Comisión y la Corte, graves atentados a la IJ. Por parte del Ejecutivo, se efectuaron numerosas declaraciones sobre la honorabilidad de los Magistrados y sus familias, se ordenaron multas, se reactivaron procesos penales y civiles archivados¹⁷⁷; siendo necesario que la Corte adoptara medidas provisionales para asegurar la integridad física, psíquica y moral de las víctimas. Por parte del poder judicial, se iniciaron campañas de desprestigio a cargo de los mismos compañeros de magistratura que no aceptaron la decisión tomada desde el inicio, e incluso de algunos que habiendo apoyado la decisión, sucumbieron a su obligación de independencia solicitando una nueva votación para modificar su voto. Por parte del poder legislativo, a partir de una carta firmada por más de cuarenta congresistas en la que solicitaban al TC modificar su decisión¹⁷⁸, aunque la misma fue rechazada tajantemente por la Corporación al considerar que constituía un “gravísimo atentado contra la autonomía jurisdiccional de que está premunido [el] Tribunal y un acto de presión”¹⁷⁹, igualmente por la ejecución del

¹⁷⁶ Cfr. Corte IDH, *Caso del Tribunal Constitucional*, Sentencia de 31 de enero de 2001.

¹⁷⁷ *Ibidem*, Medidas Provisionales.

¹⁷⁸ *Ibidem*, párr. 56, 11.

¹⁷⁹ *Ibidem*, párr. 56, 11.

precitado juicio político, sin garantías de ningún tipo y que terminó como se dijo, con la destitución irregular de los Magistrados que mantuvieron su decisión de inaplicar la ley hasta el final.¹⁸⁰

Motivada por estos hechos, la Corte IDH concluye que el Estado peruano violó los derechos de los magistrados del TC a las garantías judiciales (8.1) y a la protección judicial (25), consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos; haciendo especial énfasis en la protección reforzada que deben tener en un Estado los jueces constitucionales en materia de independencia judicial¹⁸¹, y señalando a su vez el contenido del derecho:

*“Esta Corte considera necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento. Como lo señalara la Corte Europea, la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas”.*¹⁸²

Así como lo hizo en este caso, la Corte IDH alude al Tribunal Europeo en distintos momentos para explicar los componentes de este derecho. Así, los casos *Le Compte Van Leuven and De Meyere Judgment Vs. Belgium* (23 de Junio de 1981); *Piersack Judgment Vs. Belgium* (1 de Octubre de 1982); *Campbell and Fell Vs. United Kingdom* (28 de junio de 1984) y *Langborger Vs. Suecia* (22 de Junio de 1989), son citados de manera recurrente en materia de adecuados procesos de nombramiento, duraciones establecidas en el cargo y garantías contra presiones externas.

La apelación a dichos componentes que dan cuenta del derecho a un juez independiente, nos permiten hablar de IJ no exclusivamente definida desde la competencia o desde la imparcialidad; o como garantía institucional que surge a consecuencia de la separación de poderes y cuyo desconocimiento genera a su vez desconocimiento de otras garantías y

¹⁸⁰ *Ibidem*, párr. 56, 11.

¹⁸¹ “Los Magistrados de las Cortes Constitucionales en los países latinoamericanos deben contar con las garantías de independencia, autonomía e imparcialidad”, *Ibidem*, párr.64.

¹⁸² *Ibidem*, párr.75.

derechos, sino también como derecho autónomo. No queremos decir con lo anterior que la IJ deba ser entendida únicamente como derecho, sino por el contrario y como se dijo desde el primer capítulo de la presente investigación, que su importancia radica en que al hacer parte del debido proceso, no sólo es un derecho en sí, sino que tiene también un carácter instrumental al permitir desde su consagración elementos propios del Estado de Derecho, razón por la cual “su violación es más grave, pues el proceso es una garantía para el respeto de los derechos sustantivos y para el control de la arbitrariedad en el ejercicio del poder”.¹⁸³

Aunque la Corte Interamericana empieza a dotar de contenido autónomo a la IJ desde el trascendental fallo TC, sólo sería hasta los conocidos casos *Apitz Barbera* (AB) y *Reverón Trujillo* (RT) v. *Venezuela*, que se reconocería de manera expresa su carácter como derecho, entregando elementos definitorios que dan cuenta a profundidad de su contenido. Es así como en el caso AB, la Corte empieza a analizar una situación de atentados a la IJ que se produjeron en el Estado venezolano durante el año 2002, cuando la Corte Primera de lo Contencioso dicta una sentencia “resolviendo una solicitud de amparo cautelar y un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuestos contra un acto administrativo emitido por el Registrador Subalterno del Primer Circuito de Registro Público del municipio Baruta del Estado Miranda”¹⁸⁴ que se negaba a protocolizar una propiedad, siendo luego destituida por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial (CFRSJ), al haber incurrido con su decisión en un “grave error jurídico de carácter inexcusable” y dejándola “acéfala”¹⁸⁵ por más de ocho meses.¹⁸⁶

A juicio de la Comisión, la destitución tenía poco que ver con la decisión que los Magistrados habían tomado de conceder el amparo contra el Registrador Subalterno, por el contrario “obedecía a una desviación de poder que se explicaría en la relación de causalidad

¹⁸³ *Ibidem*, párr.64, lit. 1.

¹⁸⁴ Corte IDH, caso *Apitz Barbera y otros* (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. *Venezuela*, Sentencia de 5 de agosto de 2008, párr. 32.

¹⁸⁵ Para analizar la situación, la Corte IDH recurre a los diferentes titulares de prensa que rodearon los hechos: “La Corte Primera quedó acéfala”; “La Corte Primera quedó sin Magistrados: ¿a quién se la entregamos? Cfr. *Ibidem*, párr. 40, nota 54.

¹⁸⁶ *Ibidem*, párrs. 33 y 34.

que existiría entre las declaraciones del Presidente de la República y altos funcionarios del Estado por los fallos contrarios a los intereses del gobierno”.¹⁸⁷ Desde esta perspectiva más de once sentencias serían la verdadera razón que motivó la destitución¹⁸⁸; entre ellas y quizá la más controversial fue la generada por el caso “Plan Barrio Adentro” a través de la cual, la Corte Primera exigió el requisito de revalidación del título a los médicos extranjeros que hicieran parte de la misión médica Plan Barrio Adentro, sin distinción alguna y en consonancia con la ley de Ejercicio de la Medicina. A la decisión, siguieron una serie de atentados a la IJ, entre los que sobresalen: por parte del Ejecutivo, el llamado a no acatar las órdenes y declaraciones temerarias, así como también intimidaciones; por parte del Poder Judicial y en cabeza del órgano CFRSJ, investigaciones disciplinarias y la posterior destitución de los Magistrados; por parte de otros sectores aun en ejercicio de funciones públicas, la negativa de los notarios a recibir y certificar las declaraciones de los jueces de la Corte Primera.¹⁸⁹

De los atentados recibidos del Ejecutivo, sobresalen las declaraciones del Presidente de la República, ministros y alcaldes en medios de comunicación, tales como el programa de televisión “Aló presidente” y los diarios “El Universal” y “El Nacional”. Sobre la decisión que habían tomado los Magistrados, el Presidente de la República Hugo Chávez señaló:

“Ustedes creen que el pueblo venezolano les va a hacer caso, a una decisión inconstitucional. Pues no les va a hacer caso. Qué tribunal puede decidir la muerte de los pobres, [...] el tribunal de la injusticia, [...] y todavía, repito, en el poder judicial hay mucha tela que cortar, desde el Tribunal Supremo de Justicia hacia abajo, hasta los tribunales de

¹⁸⁷ *Ibídem*, párr. 2.

¹⁸⁸ “Son once las sentencias de la Corte Primera que, según la Comisión y el representante, constituirían la verdadera razón por la que fueron destituidos sus integrantes. Diez de estas sentencias fueron emitidas entre agosto de 2002 y agosto de 2003. En ellas la Corte Primera, admitió un amparo en contra de una base aérea militar que impedía el despegue de un helicóptero en el marco de amplias marchas y concentraciones en la ciudad de Caracas¹²⁰; suspendió el sometimiento de generales del Ejército a consejos de investigación¹²¹; declaró inconstitucional el desalojo de una vivienda de un General ordenado por un Comandante General del Ejército¹²²; admitió a tramitación un amparo por el que se buscaba la desmilitarización de un Estado en el que se desplegaban efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional¹²³; obligó a que se autorizara la entrada del Alcalde de Caracas a las dependencias de la Policía Metropolitana, cuyo control había sido tomado por efectivos militares¹²⁴; ordenó suspender las requisiciones de productos de propiedad de empresas privadas llevadas a cabo por la Guardia Nacional y otros organismos administrativos¹²⁵; dispuso que se transfirieran los recursos del situado constitucional que se adeudaban al Estado Carabobo¹²⁶; y declaró sin efecto los actos administrativos que establecían el fin de la inamovilidad de los trabajadores pertenecientes a un sindicato en formación de trabajadores del petróleo”. *Ibídem*, párr. 112.

¹⁸⁹ “Al respecto, la Corte lamenta la actitud de aquellos notarios que se negaron a recibir las declaraciones señaladas, particularmente porque ellos ejercen una función pública que están obligados a realizar sin discriminación, teniendo en cuenta que, además, su actuación incide en el procedimiento ante este Tribunal”. *Ibídem*, párr. 14.

parroquia, de municipio, ahí no se ha hecho mucho en cuanto a la transformación del Estado, porque estamos esperando la aprobación de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia [...] Y todavía los Adecos mandan en esa Corte Primera. [...] Porque esta Corte lo que ha decidido es una cosa aberrante, no, claro es la oposición, los Adecos sobretudo y los copeianos y la oligarquía esta jinetera, metida ahí, manipulando a los jueces para tratar de frenar, pero no van a frenar esto, ¡olvídense! [...] Supónganse ustedes que haya una tragedia como la de Vargas [...] habría que aplicar todo eso de la loca corte esta. No, de que todo médico que venga a ayudar a la tragedia debe tener reválida [...] Mira yo no les digo lo que me provoca a la Corte esta, a los tres, porque hay dos votos salvados, a los tres magistrados que no deben ser magistrados, no les digo lo que me provoca porque estamos ante a un país. [...] Pero se los está diciendo el pueblo: váyanse con su decisión no se *pa'* donde. [...] La cumplirán ustedes en su casa pues si quieren. [...] Ayer llegaron 140 médicos más, esos van para allá para Sucre [...]”.¹⁹⁰

A su vez, la Ministra de Salud manifestó que “desconocía esta decisión arbitraria, excedida y no ajustada a ninguna norma jurídica”; el Alcalde de Libertador que “ni en sueños se [iba] a suspender el plan, [invitando] a la población a ponerse en pie de movilización para defender el programa Barrio Adentro”, y el de Sucre que “aunque [lo metieran] preso no [iba] a acatar la sentencia del tribunal”.¹⁹¹ Sin embargo y más preocupante aun resulta el hecho de que las dos Magistradas que salvaron el voto en la sentencia “Plan barrio Adentro” y que participaron también en la decisión que motivó la sanción disciplinaria, no fueron destituidas sino jubiladas y posteriormente designadas como Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia.¹⁹²

A manera de intimidación, resalta la investigación penal que se adelantó en contra de la Corte Primera por la supuesta salida de un expediente, que sería entregado por el chofer del Magistrado Rocha a un relator externo que colaboraría en el desarrollo de una causa y que posteriormente -camino a la residencia del relator- fue detenido por varios días, imputándosele el delito de “ocultamiento de documento público”.¹⁹³ Con el objetivo de determinar los hechos que rodeaban la investigación, la Corte Primera fue allanada durante varias horas “por efectivos de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y

¹⁹⁰ *Ibídem*, párr. 116 y Ss.

¹⁹¹ *Ibídem*, párr. 115.

¹⁹² *Ibídem*, párr. 119.

¹⁹³ “Mientras el señor Alfredo Romero se encontraba detenido (*supra* párr. 123), su abogado declaró ante la prensa que “Romero no puede ser otra cosa que un preso político, porque resulta más que obvio que ya cumplió doce días detenido sin causa justificada y que se está ejerciendo una presión política sobre aquellos magistrados de la Corte Primera que se atrevieron a emitir decisiones poco agradables para el Gobierno”. *Ibídem*, párr. 126.

Prevención (DISIP) dotados de armas largas, con presencia del Ministerio Público”, mientras los principales diarios del país titulaban: “Cierre de Corte Primera bloqueó sentencia a favor de Globovisión”.¹⁹⁴

Días después, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declaró sin fundamento la privación de la libertad del chofer del Magistrado Rocha “toda vez que la salida del expediente no revestía los caracteres de delito y constituía una “práctica común” de los tribunales venezolanos, respecto de la cual no existía “prohibición expresa”, [e] “invalidó cualquier investigación que se llev[ara] a cabo por los mismos hechos”, más sin embargo y tiempo después de la sentencia, las declaraciones del Presidente de la República continuaron:

“La Cortecita [...] Una Sala, un tribunal pues, donde la mayoría de los magistrados estaban vendidos a los intereses de la oposición golpista, y una noche resulta que se consiguió y se capturó, un cuerpo policial capturó al chofer de uno de esos magistrados llevaba un expediente, es decir, sustrajeron del archivo de allí, un expediente de corrupción, el chofer del Magistrado llevaba el expediente para entregárselo a los defensores del acusado, que es un dirigente de uno de estos partiditos de oposición que en el fondo no son sino Acción Democrática y COPEI”.¹⁹⁵

Cuando la Corte entra a analizar los hechos descritos, toca de frente el contenido de la IJ señalando -como lo había hecho en el caso TC- lo que la misma implica, pero yendo un poco más lejos. En principio establece, que siendo la IJ uno de los objetivos principales de la separación de poderes¹⁹⁶, su ejercicio debe ser garantizado desde dos facetas: institucional e individual; desde la primera el Estado debe proteger al Poder Judicial como sistema, ya que lo que está en juego es su independencia externa; desde la segunda, debe brindar protección a la persona del juez en específico, protegiendo su independencia interna¹⁹⁷; el objetivo de tal protección estriba, desde la independencia externa “en evitar

¹⁹⁴ *Ibidem*, párr. 122 y Ss.

¹⁹⁵ *Ibidem*, párr. 128.

¹⁹⁶ *Ibidem*, párr. 55.

¹⁹⁷ *Ibidem*.

que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial”¹⁹⁸; desde la independencia interna “de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación”¹⁹⁹, siendo enfática en señalar que los jueces no pueden verse obligados a interpretar la ley como lo haría su superior por temor a la revisión que este puede hacer de su decisión, por el contrario el Estado debe dotarlos de independencia para que sean libres de entregar una interpretación jurídica razonable expuesta en la motivación de su fallo, y que constituye en últimas la única forma de distinguir si el juez incurrió o no en un “error judicial inexcusable” faltando a la idoneidad que debe tener su cargo²⁰⁰, elementos que nos permiten diferenciarla de la imparcialidad y entregarle un contenido jurídico propio.²⁰¹

Así, a la hora de contestar la pregunta: ¿fue la destitución de los jueces de la Corte Primera producto de una persecución política?, la Corte IDH responde que existió una “clara presión”²⁰² en su contra, al haberse removido a los magistrados de su cargo después de haber sido calificados por altos funcionarios del gobierno venezolano como “vendidos a los intereses de la oposición golpista”²⁰³, y que el organismo encargado de su destitución (CFRSJ) al estar compuesto más de una década por jueces de libre nombramiento y remoción²⁰⁴, no contó con las garantías mínimas “para asegurar que las presiones que se realizaban sobre la Corte Primera no influenciaran [sus propias] decisiones”²⁰⁵ como órgano disciplinario. En este sentido y a juicio de la Corte IDH, Venezuela no cumplió con las garantías que integran la IJ: adecuado proceso de nombramiento, inamovilidad en el cargo y garantía contra presiones externas, haciendo énfasis en esta última garantía, al considerar que la desproporcionalidad del allanamiento que sufrió la Corte Primera

¹⁹⁸ *Ibídem.*

¹⁹⁹ *Ibídem.*

²⁰⁰ “La Corte considera que la motivación debía operar como una garantía que permitiera distinguir entre una “diferencia razonable de interpretaciones jurídicas” y un “error judicial inexcusable” que compromete la idoneidad del juez para ejercer su función, de forma tal que no se sancione a los jueces por adoptar posiciones jurídicas fundamentadas aunque divergentes frente a aquellas sustentadas por instancias de revisión”. *Ibídem*, párr. 90.

²⁰¹ *Ibídem*, párr. 55.

²⁰² *Ibídem*, párr. 137.

²⁰³ *Ibídem*, párr. 137.

²⁰⁴ *Ibídem*.

²⁰⁵ *Ibídem*, párr. 147.

“permite advertir la existencia de una conducta amedrentadora”²⁰⁶ en su contra; y que, el lenguaje “virulento” utilizado por el Ejecutivo para descalificar a los jueces constituyó una injerencia indebida a su IJ, en contravía del argumento planteado por el Estado en defensa de la libertad de expresión de sus funcionarios públicos, ya que para la Corte, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino por el contrario limitado en relación con la afectación que pueda causar a otros derechos que también garantice la Convención Americana, siendo necesario que los funcionarios públicos de un Estado cuiden su lenguaje atendiendo al “alto grado de credibilidad del gozan y en aras de evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”²⁰⁷, lo que los obliga a “constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones”²⁰⁸, con el fin de evitar que quienes actúan en un Estado como garantes de los derechos fundamentales de las personas, no lleguen a desconocerlos. Sobre el punto, señala la Corte retomando el caso *Kimel* del TEDH que:

“Los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades del Gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador”.²⁰⁹

Resaltando las importantes palabras del ex relator de la Organización de Naciones Unidas para la IJ entre 1994 y 2003: *Param Curawasmay*, perito propuesto por la CIDH para la controversia descrita:

“Si bien la crítica pública constructiva de fallos o decisiones de los jueces en un lenguaje moderado sería permisible incluso cuando proviene de las fuerzas políticas, cuando dicha crítica se expresa en un lenguaje virulento, inmoderado, amenazante e intimidador y en mala fe, se considerará como una amenaza o una interferencia a la independencia judicial”.²¹⁰

²⁰⁶ *Ibidem*, párr. 132.

²⁰⁷ *Ibidem*, párr. 131.

²⁰⁸ *Ibidem*.

²⁰⁹ *Ibidem*.

²¹⁰ *Ibidem*, párr. 131, nota 157.

De esta manera la Corte ordena reintegrar al Poder Judicial a los magistrados destituidos, adoptar todas las medidas necesarias para acabar con el régimen de transición que se ha perpetuado en Venezuela dando lugar a que gran parte de sus jueces sean de libre nombramiento y remoción, y adoptar tal y como lo señala su Constitución Nacional, el “Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolanos” en el término de un año.

Aunque uno de los argumentos propuestos por la CIDH, no prospera en la decisión de la Corte, deja ver el papel protagonista que la IJ iría cobrando en la jurisprudencia de dicho Tribunal, en esa ocasión de la mano de lo que el representante de la Comisión denominó “*el derecho a la democracia*” sustentado en los artículos 29 de la Convención Americana y 3 de la Carta Democrática Interamericana, según los cuales los ciudadanos tienen derecho a que el poder sea ejercido “de conformidad con el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia del poder judicial”.²¹¹ Sin embargo, según la Corte, la democracia constituye un parámetro interpretativo, que debe “orientar la interpretación de la Convención y, en particular, de aquellas disposiciones que están críticamente relacionadas con la preservación y el funcionamiento de las instituciones democráticas”²¹², desde este sentido la IJ retoma su papel de garantía instrumental que como faro, debe iluminar todas las lecturas de la Convención en aras de defender la democracia, pero que vista en sí misma, constituye un derecho autónomo de titularidad de los justiciables.

A esta conclusión llega la Corte un año después de su pronunciamiento, durante 2009 en el caso *RV* también contra el Estado Venezolano, esta vez por hechos menos complejos pero que a la larga demostraban que la IJ en Venezuela aun no estaba garantizada. Una juez de apellido Reverón Trujillo, fue destituida también por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial (CFRSJ), por considerar “que habría incurrido en ilícitos disciplinarios según la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la Ley de Carrera Judicial, que incluían el “abuso o exceso de autoridad” y el incumplimiento de su obligación “de guardar la debida atención y diligencia” en la tramitación de la causa”²¹³,

²¹¹ *Ibidem*, párr. 216.

²¹² *Ibidem*, párr. 222.

²¹³ Corte IDH, Caso *Reverón Trujillo Vs. Venezuela*, Sentencia de 24 de septiembre de 2009, párr. 50.

decisión que fue revocada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, al considerar que la CFRSJ “invadió competencias correspondientes al ámbito jurisdiccional y en tal sentido, le violó la garantía constitucional a la autonomía e independencia de que era titular la jueza sancionada”²¹⁴, pero que no ordenó ni la restitución de la jueza ni el pago de salarios dejados de percibir.

De esta manera la Corte al analizar el caso de la jueza Reverón que permaneció en el poder judicial en condiciones de “provisionalidad” desde 1982 en diferentes cargos, y desde 1999 como Jueza de la República con “carácter provisorio” hasta su destitución en el año 2002²¹⁵, reitera los argumentos descritos en el caso *AB* del año anterior, en relación con el contenido del derecho (adecuado proceso de nombramiento, estabilidad en el cargo y garantía contra presiones externas)²¹⁶, ampliándolo un poco más al señalar lo que a su vez implican las garantías descritas, como se muestra en el siguiente cuadro:

²¹⁴ *Ibidem*, párr.54.

²¹⁵ *Ibidem*, párr. 49.

²¹⁶ *Ibidem*, párr. 70.

Contenido del Derecho Humano a la IJ. Cuadro No.3.

Independencia Judicial (Corte IDH)	Adecuado proceso de nombramiento	<p>En razón de los méritos y calidades profesionales.</p> <p>En condiciones de igualdad.</p> <p>A través de mecanismos objetivos y razonables de selección que tengan en cuenta las especificidades de las funciones a realizar.</p>
	Inamovilidad en el cargo	<p>Permanencia en el cargo.</p> <p>Ascenso adecuado.</p> <p>No despido injustificado o libre remoción.</p>
	Garantías contra presiones externas	<p>Sin restricciones, influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas.</p> <p>Directas o indirectas.</p> <p>De cualquier sector.</p> <p>Por cualquier motivo.</p>

Fuente: Elaboración propia

Es así como, un *adecuado proceso de nombramiento* implica que los jueces sean escogidos por criterios objetivos y razonables, que den cuenta de la especificidad de las funciones a realizar y que examinen del funcionario, su “integridad, idoneidad y formación o calificaciones jurídicas apropiadas”²¹⁷ de conformidad con los *Principios Básicos de la Organización de Naciones Unidas Relativos a la Independencia de los Jueces*; el “mérito personal del juez”²¹⁸, según las Recomendaciones del Consejo de Europa; y basado en la igualdad de oportunidades, sin “privilegios o ventajas irrazonables”²¹⁹, como también lo ha estipulado el Comité de Derechos Humanos.

²¹⁷ *Ibidem*, párr. 71.

²¹⁸ *Ibidem*.

²¹⁹ *Ibidem*, párr. 72.

La *inamovilidad*²²⁰ a su vez, implica “la permanencia en el cargo por periodos establecidos”²²¹; con un sistema de ascensos basados en “factores objetivos [como] la capacidad profesional, la integridad y la experiencia”²²²; y la separación de su cargo sólo por “incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones”²²³, en el caso de falta disciplinaria, la misma debe ser determinada por un organismo independiente e imparcial que garantice el derecho de defensa.²²⁴

Las *garantías contra presiones externas* no son referenciadas *in extenso*, ante la imposibilidad de hacer un catálogo taxativo de las mismas que sólo pueden identificarse en casos concretos²²⁵, en este sentido las presiones externas que se mencionan pueden ser múltiples: restricciones, influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas; directas o indirectas; provenientes de cualquier sector y originadas por cualquier motivo, siendo deber del Estado garantizar la no injerencia de las mismas en la labor de administrar justicia, encomendada a sus jueces.

En este importante fallo, la Corte resalta la importancia de dotar de garantías reforzadas a los jueces²²⁶ “con miras a garantizar la independencia de ellos mismos y del sistema, así como también la apariencia de independencia frente al justiciable y la sociedad”²²⁷, por lo que es deber del Estado “garantizar una apariencia de independencia de la magistratura que

²²⁰ “De todo esto se puede concluir que la inamovilidad es una garantía de la independencia judicial que a su vez está compuesta por las siguientes garantías: permanencia en el cargo, un proceso de ascensos adecuado y no despido injustificado o libre remoción. Quiere decir esto que si el Estado incumple una de estas garantías, afecta la inamovilidad y, por tanto, no está cumpliendo con la obligación de garantizar la independencia judicial” *Ibidem*, párr. 79.

²²¹ *Ibidem*, párr. 75.

²²² *Ibidem*, párr. 76.

²²³ *Ibidem*, párr. 77.

²²⁴ *Ibidem*, párr. 77 y 78.

²²⁵ Sobre el tema vale recordar la decisión AB, donde la Corte IDH consideró intromisión indebida o presión externa, el lenguaje “virulento” utilizado por el Gobierno venezolano para descalificar a los jueces. Corte IDH, Caso *Apitz Barbera y otros* (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008.

²²⁶ Cfr. Corte IDH, Casos: *Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*, sentencia de 2 de julio de 2004, párr.171; y, *Palamara Iribarne Vs. Chile*, sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr.145.

²²⁷ Corte IDH, Caso *Reverón Trujillo Vs. Venezuela*, Sentencia de 24 de septiembre de 2009, párr. 81.

inspire legitimidad y confianza suficiente no sólo al justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática”²²⁸, y aun en estados de excepción.²²⁹

Por esta razón, al fallar el caso, la Corte considera que la Jueza Reverón debe ser reintegrada en su cargo, recibiendo desde luego una indemnización y el pago de los salarios dejados de percibir sin importar su carácter provisorio, por cuanto “los jueces provisorios en Venezuela ejercen exactamente las mismas funciones que los jueces titulares, esto es, administrar justicia”, hecho que se traduce en un derecho de los justiciables “derivado de la propia constitución venezolana y de la Convención Americana, a que los jueces que resuelven sus controversias sean y aparenten ser independientes. Para ello, el Estado debe ofrecer las garantías que emanan del principio de independencia judicial, tanto a los jueces titulares como a los provisorios”.²³⁰ Afirmación que pone en evidencia el doble carácter de la IJ, por un lado principio o garantía instrumental, por otro, un derecho de los justiciables, dos formas de comprenderla que fueron expresadas en el cuadro sobre las diferentes formas de comprensión de la IJ en el SIDH.

2.2.3. Titularidad

En consonancia con lo dicho, afirmaremos de la mano de la jurisprudencia de la Corte IDH específicamente desde el caso *RT* que el derecho humano a la IJ, es un derecho de los justiciables y no una prerrogativa de los jueces, como tradicionalmente se ha creído. Por ello cuando un juez pide que se proteja su IJ no está invocando un derecho, sino el respeto de la garantía de la IJ en una sociedad democrática con el fin de cumplir con su deber de dar muestras de independencia y de defender la independencia para su titular: el justiciable;

²²⁸ *Ibidem*, párr. 67.

²²⁹ “El principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en que se decide sobre los derechos de la persona. La Corte ha considerado que el principio de independencia judicial resulta indispensable para la protección de los derechos fundamentales, por lo que su alcance debe garantizarse inclusive, en situaciones especiales, como lo es el estado de excepción”. *Ibidem*, párr. 68.

²³⁰ *Ibidem*, párr. 114.

sin embargo, cuando un individuo perteneciente a un Estado parte en la Convención Americana e inmerso en una causa de cualquier índole exige del Estado y de su juez, la independencia necesaria que debe caracterizar a su fallador teniendo en cuenta la forma objetiva y razonable en la que fue seleccionado, la estabilidad que ha tenido en su cargo y la ausencia de debidas injerencias en su labor de administrar justicia, por fuentes ajenas al derecho y que pueden constituir presiones externas, está invocando la protección de su derecho humano a la IJ.

Es por esta razón que cuando la Jueza Reverón invoca su derecho a la IJ consagrado en el artículo 8.1 de la Convención, la Corte niega la posibilidad de ubicar la titularidad del derecho en la persona del juez:

“El artículo 8.1 reconoce que “[t]oda persona tiene derecho a ser oída[...] por un juez o tribunal [...] independiente”. Los términos en que está redactado este artículo indican que ***el sujeto del derecho es el justiciable, la persona situada frente al juez que resolverá la causa que se le ha sometido. De ese derecho surgen dos obligaciones. La primera del juez y la segunda del Estado.*** El juez tiene el deber de ser independiente, deber que cumple cuando juzga únicamente conforme a –y movido por– el Derecho. Por su parte, el Estado tiene el deber de respetar y garantizar, conforme al artículo 1.1 de la Convención, el derecho a ser juzgado por un juez independiente. El deber de respeto consiste en la obligación negativa de las autoridades públicas de abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Poder Judicial o en sus integrantes, es decir, con relación a la persona del juez específico. El deber de garantía consiste en prevenir dichas injerencias e investigar y sancionar a quienes las cometan. Además, el deber de prevención consiste en la adopción, conforme al artículo 2 de la Convención, de un apropiado marco normativo que asegure un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad de los jueces y las demás condiciones ya analizadas en el Capítulo VI de la presente Sentencia”.²³¹
Resaltado fuera de texto

Aunque el fallo *RT*, habla con total precisión sobre la titularidad del derecho, vale la pena resaltar que el derecho humano a la IJ, como lo ha dicho la Corte IDH desde su jurisprudencia, se predica del sujeto inmerso en una causa y que, cuando un juez ha invocado su derecho a la independencia judicial y este le ha sido protegido o reparado en el contexto del sistema interamericano, esto no se ha debido a su papel de “juez” sino de “justiciable”. Para sustentar tal afirmación, basta recordar el polémico fallo –ya citado– “TC”, que a lo largo de sus páginas determina, cómo los falladores no habían gozado de

²³¹ *Ibídem*, párr. 143.

suficientes garantías de independencia. ¿Cuáles falladores? ¿A caso los que integraban el Tribunal Constitucional y habían sido víctimas de presiones e injerencias por parte de los otros poderes del Estado? La respuesta de la Corte IDH, resalta que el órgano que no gozó de garantías de independencia fue el Congreso de la República Peruana de la Rama Legislativa del poder público, al actuar como juzgador de los Magistrados del Tribunal Constitucional, en el marco de un juicio político, dictaminando su destitución.

En este sentido, a los Magistrados del Tribunal Constitucional, se les violentó su derecho a ser juzgados por un tribunal independiente. Es a propósito de dicha determinación, que la Corte entrega una de las más importantes sub reglas de su jurisprudencia: “cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”²³², señalamiento que obligaba al Congreso peruano, así como a cualquier órgano que se encargue de administrar justicia en un momento determinado, a ajustarse a los mandatos del articulado convencional en materia de IJ.

La forma de proteger tal mandato, a través de cada uno de los órganos o funcionarios que apliquen justicia en momentos determinados, implica la protección del poder judicial en su conjunto y de su necesaria IJ. Es por este motivo que la Corte IDH, señala que al protegerle este derecho a los Magistrados del Tribunal Constitucional en el caso Peruano, está protegiendo también la independencia de los jueces constitucionales, que debe salvaguardarse de manera especial “en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su consideración”.²³³

En idéntico sentido, sucede en el caso *AB* –también citado- en el que los Magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso –como se dijo- fueron destituidos al haber incurrido en un “error judicial inexcusable”. Cuando el representante de la Comisión Interamericana eleva sus cargos en la demanda ante la Corte IDH contra el Estado venezolano, los fundamenta principalmente en dos aspectos: por un lado, un contexto generalizado de falta de

²³² Corte IDH, *Caso del Tribunal Constitucional*, Sentencia de 31 de enero de 2001, párr.72.

²³³ *Ibidem.*, párr.75.

independencia del poder judicial venezolano, por otro, una falta de independencia del órgano que falló la destitución de los Magistrados de la Corte Primera, la CFRSJ, un órgano disciplinario de carácter transitorio, que debía ser reemplazado por un tribunal especializado a quien se le encargaría la función disciplinaria por mandato constitucional, una vez se dictara en Venezuela el Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolanos, que a la fecha no se ha dictado.

En el desarrollo de su *petitum*, se observa como los Magistrados -representados por la Comisión IDH-, actúan como “justiciables” y no como falladores o jueces, cuando denuncian el no haber contado con un juez independiente e imparcial a la hora de que se examinara el error judicial inexcusable en el que presuntamente habían incurrido para ser destituidos, y el hacer parte de un sistema judicial que de conformidad con la normatividad internacional y nacional debe ser independiente, pero que en la práctica ha sido captado en su mayoría por el poder ejecutivo, haciendo que los jueces que lo integran, sigan la influencia y el proyecto político del actual presidente: Hugo Chávez Frías.²³⁴

Al resolver sobre tal atribución de responsabilidad, la Corte IDH se encuentra frente a una dificultad probatoria cuando intenta analizar el contexto generalizado de falta de IJ del poder judicial venezolano, bajo el cargo de la Comisión de que “la destitución de los jueces de la Corte Primera [...] se inserta en un contexto político más amplio” en el que el Gobierno habría realizado una “limpieza ideológica” de los tribunales venezolanos, a fin de deshacerse de todos aquellos jueces que [...] no compartieran el proyecto político diseñado por el Presidente de la República” y que con esto se “interfirió” con la independencia [...] del poder Judicial en general”²³⁵, la Corte IDH determina que el material probatorio que sustenta el cargo no es suficiente para llevar a una conclusión de tal envergadura. Quizá, dicha dificultad probatoria devengue, como se dijo a lo largo del primer capítulo, de que la IJ es un fenómeno que no puede medirse en forma directa.

²³⁴ A esto se refiere la Corte IDH, cuando señala: “La controversia sobre independencia judicial en el presente caso tiene dos componentes relacionados entre sí. En primer lugar, la inserción del caso en un alegado contexto de falta de independencia del Poder Judicial venezolano. En segundo lugar la falta de independencia de la CFRSJ”. Corte IDH, caso *Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela*, Sentencia de 5 de agosto de 2008, párr. 95.

²³⁵ *Ibidem.*, párr.96.

Imposibilidad de medición, que lleva a la Corte a desestimar el cargo bajo el entendido de que los informes rendidos por los peritos, los testimonios y las declaraciones de jueces y magistrados que no se aportaron en copia “auténtica”, constituyen tan sólo indicios (o quizá debamos decir “indicadores”) de falta de independencia, más no una prueba fehaciente de que el poder judicial venezolano desarrollara su labor de aplicar justicia en un ambiente generalizado de falta de IJ.

Sin embargo, es de vital importancia el hecho de que la Corte examine el cargo bajo el entendido de que “no es posible ignorar la gravedad que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de violaciones a los derechos humanos”²³⁶, en otras palabras el hecho de que un Estado genere un ambiente de falta de independencia, atentando contra esta por acción u omisión, y haciendo que sus juzgadores tomen sus decisiones en un ambiente de injerencias indebidas, puede constituir una violación a los derechos humanos. De esta manera un individuo perteneciente a un Estado Parte puede alegar una violación de este tipo en el escenario interamericano, pero la posibilidad de que prospere estará ligada necesariamente al material probatorio que lleve a la Corte.

En este sentido, la Corte IDH ha señalado que pueden servir como medios de prueba para tal fin, los documentos de prensa “cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso”²³⁷, documentos, informes periciales, testimonios y en general cualquier medio de prueba legalmente practicado y sometido a contradicción, siempre y cuando se dirija a señalar cómo efectivamente se comprometió en un Estado determinado la IJ, por ejemplo, a través de la influencia definitiva de una de las ramas del poder público en la labor de administrar justicia.²³⁸ Desde esta perspectiva, no sólo basta con afirmar que con una declaración, una destitución o un nombramiento, se ha vulnerado la IJ, sino que se debe demostrar cómo dicha declaración, destitución o nombramiento la afectó de forma real.

²³⁶ *Ibidem.*, párr.97.

²³⁷ *Ibidem.*, párr.18.

²³⁸ “Pero no existen otros elementos de prueba aportados al expediente que respalden las opiniones de estas personas, las cuales, por sí solas, no pueden considerarse como suficientes para declarar que el máximo tribunal de un país está controlado por el Ejecutivo”. *Ibidem.*, párr.101.

En otras palabras, el derecho humano a la IJ puede ser exigido ante tribunales como la Corte IDH en dos ocasiones: a) cuando el fallador que juzga una causa no está siendo independiente o existan elementos que pongan en duda su independencia (inadecuado proceso de nombramiento, movilidad en su cargo y/o presiones externas); o, b) cuando en un Estado parte en la Convención Americana se logre demostrar un contexto generalizado de falta de independencia, corroborable, nuevamente, a través de la comprobación de la vulneración de alguna o algunas de las garantías que integran el derecho humano a la IJ: inadecuados procesos de nombramientos, movilidad en los cargos y garantías contra presiones externas. En cualquiera de los dos casos, es necesario sustentar el cargo ante la Corte IDH con el suficiente material probatorio que demuestre no sólo que la IJ se encuentra amenazada o que ha sufrido diversos atentados, sino que en efecto, teniendo en cuenta la transgresión al contenido del derecho, el juez o el poder judicial en su mayoría, dejó de ser independiente. Siendo necesaria, por lo menos la existencia de una decisión judicial que dé cuenta de ello, muestra de lo anterior son los casos TC, AB y RT, en donde se demostró que las decisiones tomadas respondían a motivos políticos (como en el caso del Congreso Peruano y el TC), o se habían dado por parte de organismos cuya inamovilidad no se encontraba garantizada y que daban lugar a pensar en la posibilidad de que sus decisiones fueran políticas (como en los casos venezolanos a través de las destituciones de la CFRSJ). Desde esta perspectiva, los atentados a la IJ, no habilitan la protección del SIDH en sede Corte IDH, pero pueden habilitarla ante la CIDH, a través de medidas cautelares de protección.

De la mano de lo ya dicho, vale la pena resaltar que el titular del derecho humano a la IJ, así como de cualquier otra de las garantías judiciales, ha sido siempre el justiciable y no el juez, esto puede ser corroborado a partir de un sinnúmero de pronunciamientos de la Corte IDH desde su entrada en funcionamiento.²³⁹ El objeto de defender la independencia de los jueces

²³⁹ Ver entre otros: Casos Corte IDH: *Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú*, Sentencia de 30 de mayo de 1999; *Cantoral Benavides Vs. Perú*, Sentencia de 3 de septiembre de 1998; *Lori Berenson Mejía Vs. Perú*, Sentencia de 25 de noviembre

en nuestras democracias, protegiendo a nuestros jueces de cualquier injerencia ajena al derecho que pudiera influenciar sus decisiones, es defender el derecho que tenemos todos a recibir justicia. Por esta razón, la IJ no es una garantía dirigida a transformar al juez en un sujeto todo poderoso alejado de controles legítimos, por el contrario lo controla de forma tal, que aun creyéndose independiente, podría generar la sanción del Estado al que pertenece, al haber faltado a su deber de independencia violentando así el derecho humano a la IJ. Es así como, la IJ -que no puede ser bajo ningún punto de vista sinónimo de irresponsabilidad- se protege para el justiciable con o sin el beneplácito del fallador o del poder judicial.

El segundo cargo de la violación a la IJ, y quizá en atención a su especificidad, queda corroborado (como se explicó a lo largo del acápite referido al contenido del derecho), y lleva a Venezuela a ser sancionada por vulnerar en el caso de los Magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso, su derecho a ser juzgados por un juez independiente.

A manera de corolario, el siguiente cuadro busca contribuir a la claridad del fundamento normativo convencional del derecho a la IJ, su titularidad y las obligaciones correlativas que implica tanto para el juez como para el Estado:

de 2004; *Ivcher Bronstein*. Sentencia de 6 de febrero de 2001; Claude Reyes y otros Vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006.

**Fundamento normativo, titularidad y obligaciones implícitas en el
Derecho Humano a la IJ. Cuadro No. 4.**

<i>Fundamento normativo - convencional</i>	<i>Titularidad</i>	<i>Obligaciones correlativas</i>		
Convención Americana de Derechos Humanos	"El sujeto del derecho es el justiciable, la persona situada frente al juez que resolverá la causa que se le ha sometido"	<i>Juez</i>	<i>Estado</i>	
		"Deber de ser independiente, deber que cumple cuando juzga únicamente conforme a -y movido por- el Derecho"	"Deber de respetar y garantizar, conforme al artículo 1.1. de la Convención, el derecho a ser juzgado por un juez independiente"	<i>Deber de Respeto:</i> "Obligación negativa de las autoridades públicas de abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Poder Judicial o en sus integrantes, es decir, con relación a la persona del juez específico"
				<i>Deber de Garantía y Prevención:</i> "Consiste en prevenir dichas injerencias e investigar y sancionar a quienes las cometan"; "Adopción conforme al artículo 2 de la Convención, de un apropiado marco normativo que asegure un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad de los jueces y [garantías contra presiones externas]".
Artículo 8.1				
"[T]oda persona tiene derecho a ser oída [...] por un juez o tribunal [...] independiente"				

Fuente: Elaboración propia

Para ubicarnos aun más, en cómo desde nuestra condición de titulares del derecho humano a la IJ podemos hacerlo exigible, podríamos decir que, de conformidad con el cuadro anterior, como justiciables tenemos derecho a que nuestros jueces sean independientes, pudiendo exigir de ellos que fallen motivados única y exclusivamente por el derecho; y del Estado al que pertenecemos, respeto frente a la IJ, para que sus representantes o autoridades se abstengan de interferir de manera ilegítima en la labor de administrar justicia, y de garantía y prevención, para que se investigue y sancione a quienes las cometan, dentro de un marco normativo que contemple para los jueces, como mínimo, un adecuado proceso de nombramiento, inamovilidad en sus cargos y garantías contra presiones externas.

Si la ausencia de uno de estos deberes en cabeza de los jueces y los Estados, afecta de manera definitiva el derecho de los justiciables a la IJ, generando un daño que exija reparación, previo agotamiento de los recursos internos o ausencia de los mismos en un ordenamiento determinado, se habilita la puerta para acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En caso de que el peligro de vulneración sea latente pero aun no se produzca daño, se puede acudir de manera especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando protección a través de medidas cautelares.²⁴⁰

Planteemos la exigibilidad del derecho humano a la IJ en un escenario hipotético para mayor claridad. Imaginemos, que el juez que está juzgando una causa en la que estamos involucrados, toma una decisión que no puede considerarse “en derecho” inclinándose a beneficiar al Poder Ejecutivo (puede inclinarse en cualquier otro sentido siempre y cuando se aleje del derecho), y que, aunado a lo anterior y acrecentando el margen de sospecha, tal decisión tuvo origen necesariamente en la influencia del mismo Ejecutivo, quizá porque el mencionado juez fue nombrado atendiendo a una medida del Ejecutivo para contribuir a la descongestión y se encuentra desarrollando su labor en “provisionalidad”, motivo suficiente para pensar que el juez no tuvo otra alternativa, y que su decisión obedeció a móviles políticos y no jurídicos (recuérdese que en este tema hasta las sospechas tienen importancia).

Supongamos también, que un juez a quien se somete un asunto de total trascendencia nacional a su consideración, y que tiene el expediente en su despacho pendiente de fallo, empieza a ser objeto de diversas presiones por parte de diferentes sectores del Estado que le exigen tomar la decisión en un sentido determinado, aun cuando el marco normativo del Estado al que pertenece le dicta fallar de forma diversa. Así, cada vez que enciende el televisor se encuentra con alocuciones presidenciales que le exigen tomar su decisión a favor de los intereses políticos del Estado so pena de que la ciudadanía se levante en su contra y de que se someta a sanciones penales. Cada que lee la prensa, tropieza de frente con declaraciones de los representantes del Poder Legislativo que de forma unánime

²⁴⁰ Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, artículo 25.

exigen que su decisión se conduzca en el sentido de los intereses de la mayoría que representan. Y finalmente, el día en que llega a su despacho a tomar la decisión, una serie de organizaciones sociales compuestas de personas que han dormido ahí desde la noche anterior, lo esperan con carteles y arengas a favor de la decisión que –desde su perspectiva de organización- consideran que el juez debe tomar. Finalmente el juez sucumbe a la presión generalizada y emite la decisión siguiendo a las mayorías y generando perjuicios a la comunidad minoritaria que en estricto derecho debía ser beneficiada.

De igual forma, consideremos que un Estado determinado deje de respetar en su territorio la IJ, creando un ambiente generalizado de falta de la misma (jueces nombrados a conveniencia, destituciones irregulares, lenguaje virulento por parte de altos funcionarios del Estado en contra de la condición personal del juez o de sus decisiones, amenazas a funcionarios judiciales, interceptaciones a sus comunicaciones, entre otras), motivando así la vulneración no sólo del derecho humano a la IJ, sino también de otros derechos que puedan verse comprometidos con su transgresión, como por ejemplo, el de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación, a obtener una decisión de fondo, etc., en definitiva todos los que se relacionan con las decisiones que puede tomar un juez.

En estos casos que sirven tan solo de muestra, y desde los criterios entregados, si el juez toma su decisión motivado por estas presiones y no por el derecho, generando con su actuar un daño a un ciudadano o grupo de ciudadanos, se habilita la protección ofrecida por el Sistema Interamericano de Derechos, con una ventaja procesal: la posibilidad de obviar el requisito de agotamiento de recursos internos, pues como se dijo, la ausencia de garantías ligadas al debido proceso en un ordenamiento interno, hace que los recursos de los que se disponga sean tan solo ilusorios²⁴¹, y de nada valdría agotarlos antes de acudir a la Corte IDH.

²⁴¹ Corte IDH, OC-16/99, Voto concurrente razonado del Juez Sergio Ramírez, p. 28.

En este sentido, y como se ha explicado, la IJ es de tal importancia que su vulneración en un Estado parte en la Convención, compromete a la justicia misma, no importa la naturaleza de la causa que pretenda ser juzgada: civil, penal, laboral, administrativa; si es un recurso ordinario o extraordinario; si se trata de un derecho fundamental o colectivo; si se toma en situación de normalidad o de excepcionalidad... si no se ventila ante un juez independiente, las posibilidades de recibir justicia se vuelven inexistentes, abriendo paso a la tutela del Sistema Interamericano. Una vez se abre esta puerta, la dificultad que presenta el litigante interamericano para que su pretensión prospere, estará ligada a los medios de prueba oportunamente aportados, tal y como se sostuvo.

2.2.4. Alcance

Desde el principio del presente capítulo se sostuvo que la Corte IDH al ubicar a la IJ dentro del derecho humano fundamental al debido proceso, ha dado a la misma el trato de garantía de *ius cogens*. Tal reconocimiento, surge en diferentes pronunciamientos en donde como se dijo, la Corte IDH reconoció la importancia de las llamadas garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 de la Convención Americana como el conjunto de requisitos que deben surtirse en las diferentes instancias procesales y que no pueden ser suspendidos ni aun en estados de excepción, dentro de esos requisitos como se señaló, figura la independencia de los jueces.

Al hacerlo, la Corte reconoce que si bien todas las normas de derechos humanos que contempla la Convención Americana, buscan al igual que las normas de *ius cogens*, “la salvaguarda de un bien jurídico cuya protección incumbe a la comunidad internacional en general, debido a la relevancia que éste significa para su mantenimiento y funcionamiento”²⁴², no cuentan con uno de los requisitos definitorios de tal característica: su inderogabilidad. En este sentido, una norma pertenece al dominio del *ius cogens* y puede

²⁴² Acosta Alvarado, Paola Andrea. *El Derecho de Acceso a la Justicia en la Jurisprudencia Interamericana*. Op. Cit., p. 102.

ser tratada como de *derecho internacional imperativo* generador de obligaciones *erga omnes*, desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana, si en razón de los intereses que tutela (exigencias de orden moral, político o económico que pertenecen a toda la comunidad internacional), debe reconocérseles un carácter absoluto, “pues acaban por imponerse o desaparece la sociedad internacional; [ya que] representan el mínimo jurídico que la comunidad internacional, en un momento dado, considera esencial para su existencia”.²⁴³

Sin el ánimo de adentrarnos en el polémico debate de si una norma de derecho internacional puede o no ser de *ius cogens*, o una discusión doctrinal sobre lo que es una norma de derecho internacional imperativo -intentando no desviarnos de nuestro objeto de estudio- retomaremos simplemente los principales elementos que se han esgrimido en torno a su definición y alcance, sosteniendo entonces que, una norma de derecho internacional es imperativa cuando: (i) es reconocida como tal por la comunidad internacional²⁴⁴; (ii) es aceptada como norma que no admite “acuerdo” en contrario; y (iii) solo puede ser modificada por otra norma también de carácter *ius cogens*²⁴⁵, en consonancia con la Convención de Viena de 1969, artículo 53:

Artículo 53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general ("jus cogens"). Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración esté en oposición con una **norma imperativa de derecho internacional** general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. (Resaltado fuera de texto)

Del citado artículo, la doctrina y jurisprudencia internacionales, pueden desprenderse como consecuencias de la vulneración a una norma de derecho internacional imperativo varias

²⁴³ *Ibidem*, p. 92.

²⁴⁴ Sobre el importante tema del reconocimiento que los Estados deben hacer de tales normas, se han levantado dos tesis: por un lado, la subjetiva, desde la cual el reconocimiento de los Estados se hace necesario para que una norma pueda ser catalogada como de *ius cogens*; de otro, la objetiva, que permite el reconocimiento de una norma de *ius cogens* por encima de la voluntad de los Estados debido a la trascendental importancia de los intereses que tutelan. *Ibidem*, p. 92.

²⁴⁵ *Ibidem*, p. 92.

consecuencias: (i) nulidad de tratados absolutos que puedan llegar a ser contrarios; (ii) surgimiento de obligaciones *erga omnes*; (iii) activación de la llamada *actio popularis*; y, (iv) mutación de la teoría de la responsabilidad internacional.

Desde estas consecuencias, un tratado suscrito entre Estados que contravenga una norma imperativa de *ius cogens* adolecerá de nulidad absoluta (i); a su vez, las normas de derecho internacional imperativo generan obligaciones *erga omnes* que obligan a toda la comunidad internacional (ii); de ahí que su violación, pueda activar la *actio popularis*, es decir la legitimación en la causa para que cualquier Estado (no sólo el que participa en la suscripción de un tratado) o individuo pueda buscar su protección en el escenario internacional (iii); y en sentido inverso, también una *mutación de la responsabilidad*, por cuanto en el mundo actual no sólo los Estados son responsables por la violación de este tipo de normas, sino también los individuos, aunque tal situación aun no se ha presentado en el escenario internacional, específicamente en el SIDH (iv).²⁴⁶

Desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana, diremos que la consecuencia más importante que puede generarse está dada en términos de responsabilidad agravada de los Estados, responsabilidad que no nace con la adhesión a la Convención, ya que en palabras de la Corte el articulado convencional es tan sólo un reconocimiento de dichas normas, pero su origen es claramente consuetudinario, razón por la cual, el hecho de que el Estado sea parte o no en la Convención, no lo exime de responsabilidad.²⁴⁷ Por esta razón y como

²⁴⁶ “En cuanto a la mutación de la teoría de la responsabilidad internacional bien puede decirse que, con ocasión de la existencia de las normas de *ius cogens*, éste ha sufrido cambios no sólo respecto a la naturaleza de la responsabilidad sino de los sujetos activos de la misma, ya que en razón de la envergadura de los intereses protegidos, en la actualidad incluso los individuos pueden ser responsables en el escenario internacional”. *Ibíd.*, p. 100.

²⁴⁷ “Basándose en los párrafos anteriores, la Corte encuentra que hay amplia evidencia para concluir que en 1973, año de la muerte del señor Almonacid Arellano, la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluido el asesinato ejecutado en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra sectores de la población civil, **era violatoria de una norma imperativa del derecho internacional**. Dicha prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad es una norma de *ius cogens*, y la penalización de estos crímenes es obligatoria conforme al derecho internacional general. [...] 152. En efecto, por constituir un crimen de lesa humanidad, el delito cometido en contra del señor Almonacid Arellano, además de ser inamnistiable, es imprescriptible. Como se señaló en los párrafos 105 y 106 de esta Sentencia, los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda. El daño que tales crímenes ocasionan permanece vigente para la sociedad nacional y para la comunidad internacional, las que exigen la investigación y el castigo de los responsables. En este sentido, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes

se dijo, cuando la Corte ha abordado los temas de prohibición de la tortura²⁴⁸, igualdad²⁴⁹ y debido proceso²⁵⁰, ha desarrollado el importante tema de la normatividad *ius cogens* resaltando su reflejo como “valor[] básico[] de las sociedades democráticas”²⁵¹ o “conciencia jurídica universal”²⁵², que cobra relevancia en términos de jerarquía por su inderogabilidad aun en estados de excepción.

En este sentido la IJ, al hacer parte del derecho de acceso a la justicia y el debido proceso adquiriría este alcance y su vulneración en el escenario internacional, daría lugar a responsabilidad agravada del Estado perpetrador de la violación, sin que pueda oponer como excepción su no adhesión a la Convención en los términos señalados, tal y como lo ha señalado Alirio Abreu:

“En su jurisprudencia constante, la Corte ha considerado que las normas constitucionales, legales o convencionales sobre Independencia Judicial son de naturaleza imperativa (*ius cogens*), y deben ser observadas y respetadas en todo procedimiento o trámite penal, civil, laboral, administrativo o de cualquier índole que decida sobre derechos de la persona, por ser la independencia del juez uno de los fundamentos esenciales del debido proceso”²⁵³.

Es así como, la Corte IDH ha dado importantes pasos en materia de reconocimiento de normatividad *ius cogens*. El primero que se conoce, va ligado al caso *Aloeboetoe y otros Vs. Suriname*, en donde la Corte –aunque de manera hipotética– señala que si Suriname hubiese adoptado un tratado bilateral sobre esclavitud, éste adolecería de nulidad por contrariar las normas del *ius cogens*.²⁵⁴ En idéntico sentido, se han referido sus decisiones a

de guerra y de los crímenes de lesa humanidad claramente afirmó que tales ilícitos internacionales “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”. Corte IDH, caso *Almonacid Arellano y otros vs. Chile*, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párr.99.

²⁴⁸ *Ibidem*.

²⁴⁹ Cfr. *La Condición Jurídica y los Derechos de los Migrantes Indocumentados*, OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003.

²⁵⁰ Cfr. *El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal*, OC-16/99 de 1 de octubre de 1999.

²⁵¹ Corte IDH, Caso *Cantoral Benavides Vs. Perú*, sentencia del 18 de agosto del 2000. Párr.99 y 103.

²⁵² Cfr. Votos concurrentes y Razonados, del Juez A.A. Cançado Trindade en los casos de la Corte IDH, *Blake Vs. Guatemala*; *Barrios Altos Vs. Perú*; *Hilaire Vs. Trinidad y Tobago*; *Maritza Urrutia Vs. Guatemala*; *Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*; y, *Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*.

²⁵³ Abreu Burelli, Alirio, *Independencia Judicial (jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)*, op. cit.

²⁵⁴ Cfr. Corte IDH, caso *Aloeboetoe y otros Vs. Suriname*, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, párr.57.

la protección que debe recibir el derecho a la vida como norma de esta categoría²⁵⁵, al igual que la prohibición de la desaparición forzada de personas y la tortura.²⁵⁶

Sobre el tema que aquí se debate, la Corte IDH da un paso trascendental con la decisión *Goiburú y Otros Vs. Paraguay*, en donde se señala de manera precisa que el derecho de acceso a la justicia (con todo lo que el mismo implica desde el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte) pertenece al dominio de norma imperativa o de *ius cogens*:

“El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno y el derecho internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, o colaborando con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo”.²⁵⁷ (Resaltado fuera de texto)

Dicho reconocimiento es reafirmado en decisiones posteriores, como la relacionada con el caso *La Cantuta Vs. Perú*:

“El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno y el Derecho Internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de hechos de esa índole, o colaborando con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo. La Corte recuerda que, bajo el mecanismo de garantía colectiva establecido en la Convención Americana, en conjunto con las obligaciones internacionales regionales¹³³ y universales¹³⁴ en la materia, los Estados Parte en la Convención deben colaborar entre sí en ese sentido.”²⁵⁸ (Resaltado fuera de texto)

Desde esta perspectiva, se debe recordar lo afirmado al iniciar el presente apartado, la IJ hace parte del derecho de acceso a la justicia entendida como garantía inderogable del debido proceso, de forma tal que ningún ciudadano que pretende acceder a justicia puede obtenerla, si el juez que ventila su causa no goza de suficientes garantías de independencia, tal y como han sido descritas a lo largo de este segundo capítulo.

²⁵⁵ Cfr. Corte IDH, caso: *Niños de la Calle (Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala*, Sentencia de 19 de Noviembre de 1999, párr.139 y Ss.

²⁵⁶ Cfr. Corte IDH, caso: *Goiburú y Otros Vs. Paraguay*, Sentencia de 22 de Septiembre de 2006, párr. 93; *La Cantuta Vs. Perú*, Sentencia de 29 de Noviembre de 2006, párr.84.

²⁵⁷ Corte IDH, caso: *Goiburú y Otros Vs. Paraguay*, Sentencia de 22 de Septiembre de 2006, párr.131.

²⁵⁸ Corte IDH, caso: *La Cantuta Vs. Perú*, Sentencia de 29 de Noviembre de 2006, párr.160.

Lo anterior, intenta reforzar la protección que el SIDH le ha dado a los derechos de acceso a la justicia, debido proceso e independencia judicial por su importancia y trascendencia, no obstante, somos conscientes de que el amparo derivado de la normatividad *ius cogens* es un tema en construcción al interior de la Corte IDH que muy seguramente verá su desarrollo en sus próximas decisiones. Sin embargo, es necesario resaltar –como se ha hecho– que el derecho humano a la IJ no es un derecho común, ya que, por un lado puede considerarse norma de *ius cogens* al hacer parte esencial del derecho de acceso a la justicia y al debido proceso; pero por otro, es también una garantía instrumental que posibilita la existencia del Estado de Derecho y el desarrollo de los derechos contemplados en la Convención Interamericana o en los diversos instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y, uno de los faros –junto a la separación de poderes– que debe iluminar todas las lecturas de la Carta Interamericana. Razones que hacen deseable, una protección reforzada para la independencia de los jueces, con miras a proteger al justiciable y a la justicia misma en nuestras sociedades.

2.3 FUERZA DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE IJ EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO

Sin lugar a duda, al lector le causará intriga la fuerza jurídica que pueda tener en el ordenamiento jurídico colombiano, el planteamiento que se ha sostenido a lo largo del presente capítulo: que la IJ es un derecho humano de titularidad de los justiciables. Máxime, cuando la misma ha sido tratada tradicionalmente en nuestro país, como principio general del derecho procesal colombiano, que deviene del principio de separación de poderes consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política de 1991 y que desde su vertiente interna, se relaciona con la imparcialidad; y desde su vertiente externa, con la autonomía del poder judicial; y cuando los jueces y magistrados de las Altas Cortes, han sido reiterativos en defenderla como principio del Estado Social de Derecho colombiano,

que les pertenece²⁵⁹, aun cuando, como se dijo, paradójicamente, la independencia de los jueces, lejos de ser de los jueces, pertenece a los justiciables.

Por ello, y con el ánimo de analizar la fuerza jurídica y la viabilidad práctica de los estándares internacionales citados en torno a la IJ, vale la pena analizar los parámetros fijados por la Constitución y su máximo intérprete: la Corte Constitucional, haciendo particular énfasis en las decisiones internacionales, por la relevancia que para el tema implican, las sentencias de la Corte IDH en los últimos tiempos.

2.3.1 Parámetros Constitucionales y Jurisprudenciales

La Constitución Política de 1991, dejó atrás la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia [intérprete de la Constitución Nacional de 1886], desde la cual, el concepto de bloque de constitucionalidad no tenía ningún asidero como parámetro de constitucionalidad²⁶⁰, argumentando, no sólo que dicho bloque de constitucionalidad existe, sino desarrollando una profunda dogmática sobre el tema. Es así, como a partir de los artículos 53, 93, 94, 214 del texto constitucional, entre otros, se “confiere una fuerza jurídica interna clara a los instrumentos internacionales de derechos humanos”.²⁶¹

Aunque el Bloque de Constitucionalidad plantea un problema complejo para el intérprete²⁶², contribuye a dinamizar las constituciones, haciéndolas vivientes.²⁶³ Es por esta razón, que la Corte Constitucional introduce desde 1995 y de forma expresa el concepto Bloque de Constitucionalidad²⁶⁴, desarrollando posteriormente, su división en

²⁵⁹ “Presidente [E] de la Corte Suprema de Justicia defiende la independencia de los jueces”. El Tiempo, Junio 2 de 2010, disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7736088>

²⁶⁰ “La Corte Suprema se negó siempre a considerar que la violación de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia pudiera ser una causa de inexecutable, con lo cual rechazó toda posibilidad de incorporar esos tratados en el bloque de constitucionalidad”. Uprimny Yepes, Rodrigo. Op. Cit., p. 43.

²⁶¹ *Ibidem.*, p.44.

²⁶² *Ibidem.*, p.37.

²⁶³ *Ibidem.*, p.36.

²⁶⁴ Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-225 de 1995, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.

sentido estricto y en sentido lato²⁶⁵; al explicar que la fuerza de tal concepto, nace del artículo 93 de la Carta Política, que se ubica en el mismo escalón de jerarquía que el artículo 4 del mismo texto; en este sentido, la Constitución como *norma normarum* y algunos tratados sobre derechos humanos, debidamente ratificados en el ordenamiento jurídico colombiano, tienen la misma fuerza vinculante y en caso de que se presente incompatibilidad entre una y otro, debe preferirse aquella interpretación que privilegie en el caso concreto una aplicación del principio *pro homine*.²⁶⁶

En esta línea, integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto²⁶⁷: los tratados sobre límites; los que versen sobre derecho internacional humanitario; los que reconocen derechos intangibles que no puedan ser suspendidos ni aún en estados de excepción y aquellos convenios de la OIT, que regulen derechos humanos relacionados con el trabajo.²⁶⁸ A su vez, en sentido lato²⁶⁹, pueden incluirse: el preámbulo de la Constitución Política; su articulado; y algunas leyes estatutarias y orgánicas, que operan como parámetros de constitucionalidad de las leyes, y a las que se les otorga un rango supra legal, que le permite ubicarse por encima de las leyes ordinarias.²⁷⁰

Desde esta perspectiva, resulta claramente deducible, que la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por Colombia y aprobada mediante ley interna²⁷¹, hace parte de nuestro Bloque de Constitucionalidad en sentido estricto y que, la II, no sólo debe ser

²⁶⁵ “Es por ello que la jurisprudencia ha señalado que es posible distinguir dos sentidos del concepto de bloque de constitucionalidad. El primero: *stricto sensu*, conformado por aquellos principios y normas que han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato expreso de la Carta, por lo que entonces tienen rango constitucional, como los tratados de derecho humanitario (C.P. arts. 93 y 103). De otro lado, la noción *lato sensu* del bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas disposiciones que “tienen un rango normativo superior a las leyes ordinarias”, aunque a veces no tengan rango constitucional, como las leyes estatutarias y orgánicas, pero que sirven como referente necesario para la creación legal y para el control constitucional”. Corte Constitucional Colombiana, sentencia C-307 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

²⁶⁶ “De otra parte es necesario tener en cuenta además que de acuerdo con el artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre habrá de preferirse la interpretación que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en ellos. Cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos a que aluden los tratados de derechos humanos conocida también como *principio pro homine*, que tanto la jurisprudencia de la Comisión Interamericana, como de la Corte Constitucional ha aplicado en repetidas ocasiones”. Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-148 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

²⁶⁷ Corte Constitucional Colombiana, Sentencias: C-504 de 2007, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández; C-225 de 1995, M.P.: Alejandro Martínez Caballero; y, C-148 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

²⁶⁸ *Ibidem.*, p.83.

²⁶⁹ Corte Constitucional Colombiana, Sentencias: C-148 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-277 de 2007, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto; y, C-228 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.

²⁷⁰ *Ibidem.*, p.83.

²⁷¹ Congreso de la República de Colombia, ley 16 de 1972.

aplicada en virtud de su consagración en el artículo 8.1 de la Convención, sino también por ser considerada, al hacer parte del debido proceso, una norma de derecho internacional intangible, al no poder ser suspendida ni aun en estados de excepción, tal y como se ha venido explicando.

Aunque con menos fuerza, algunos de los estándares normativos citados al comienzo del capítulo pueden llegar a servir de criterio de interpretación del Bloque de Constitucionalidad en sentido *estricto* o *lato*, y aun cuando muchos de ellos hacen parte del llamado derecho suave, o “*soft law*”²⁷², no pueden dejarse de lado, por sus importantes implicaciones interpretativas:

“En suma, las resoluciones adoptadas por Organizaciones Internacionales, sea decisiones o recomendaciones, se incorporan automáticamente al ordenamiento jurídico colombiano, sin que por ello sea posible afirmar que hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, no se podría, por ejemplo, demandar la inconstitucionalidad de una norma legal por violar el contenido de una resolución. Sin embargo, tales actos jurídicos unilaterales configuran criterios relevantes de interpretación de aquellas disposiciones internacionales que sí hacen parte del bloque de constitucionalidad. En otras palabras, no se pueden confundir la forma de incorporación o recepción de la norma internacional con la jerarquía que ocupan en el sistema de fuentes interno, ni tampoco con la función interpretativa que, en un determinado momento, pueden llegar a cumplir”²⁷³

2.3.2. Bloque de Constitucionalidad y decisiones internacionales

Un espacio especial guardan las decisiones de organismos internacionales que en casos concretos fijan la interpretación que debe dársele a los tratados de derechos humanos. Ya que sin dicha interpretación, hoy en día la IJ seguiría entendiéndose exclusivamente como pilar del Estado de Derecho y no también como derecho humano.

²⁷² Rodrigo Uprimny, pone de presente la fuerza que pueden llegar a cobrar dichos documentos, cuando resalta que el tema de la víctimas en el escenario internacional, se encontraba casi de manera exclusiva en estos documentos, que hoy hacen parte de los principales tratados internacionales y que fijan las pautas interpretativas que deben seguirse a la hora de aplicarlos en los ordenamientos internos. Uprimny Yepes, Op.Cit. p.101.

²⁷³ Ramelli Arteaga, Alejandro. *Jurisprudencia Penal Internacional Aplicable en Colombia*, (Bogotá D.C.: GTZ Profis y Universidad de los Andes – en imprenta-, 2011), p.53.

En definitiva, la jurisprudencia y conceptos emitidos por los organismos jurisdiccionales²⁷⁴ como la Corte IDH, la CADH y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, tienen “cierta fuerza vinculante en el ordenamiento jurídico colombiano”²⁷⁵, y su valor en casos concretos específicamente relacionados con las decisiones de la Corte IDH y las medidas cautelares tomadas por la CIDH, han sido reivindicadas en el ordenamiento interno a través de mecanismos de protección de derechos fundamentales como la acción de tutela.²⁷⁶ En los demás casos, la Corte Constitucional colombiana, le ha dado a dichas decisiones un valor interpretativo²⁷⁷ desde el cual pueden ser dotados de contenido los conceptos abiertos que encierran los tratados de derechos humanos:

“La Corte coincide con el interviniente en que en esta materia es particularmente relevante la doctrina elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial autorizado para interpretar autorizadamente la Convención Interamericana. En efecto, como lo ha señalado en varias oportunidades esta Corte Constitucional, en la medida en que la Carta señala en el artículo 93 que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse “de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia” es indudable que la jurisprudencia de las instancias internacionales, encargada de interpretar esos tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales”.²⁷⁸

Tal ha sido su importancia que la Corte Constitucional, ha utilizado sus parámetros interpretativos para decidir casos concretos en más de 170 oportunidades²⁷⁹, y en materia de debido proceso como garantía intangible, hizo uso de las diferentes observaciones generales aquí citadas, que prohíben su limitación en estados de excepción.²⁸⁰ De igual forma, y citando la jurisprudencia de la Corte IDH en los casos *Castillo Petruzzi* y *Cantoral*

²⁷⁴ Retomando a O'Donnell, los elementos que comparten los organismos jurisdiccionales son: “a) su competencia está definida por un tratado y/o un estatuto aprobado por una organización internacional; b) son permanentes, autónomos y dotados de garantías de independencia, y c) sus decisiones se basan en el derecho internacional y son decisiones fundadas”. *Ibidem.*, p.26.

²⁷⁵ *Ibidem.*, p.26.

²⁷⁶ Corte Constitucional Colombiana, sentencias: T-786 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-558 de 2003, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández

²⁷⁷ Al respecto consultar entre otras las sentencias de la Corte Constitucional Colombia: C-406 de 1996; C-251 de 1997; T-568 de 1999; C-010 de 2000; T-1319 de 2001; C-671 de 2002; T-558 de 2003; T-786 de 2003 y T-827 de 2004.

²⁷⁸ Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-010 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

²⁷⁹ Triviño Córdoba, Jaime. *Aplicación de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Derecho Constitucional Colombiano*. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20072/pr/pr12.pdf>

²⁸⁰ *Ibidem.*, p. 6.

Benavides, nuestro tribunal Constitucional ha resaltado la importancia de la independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales en las diferentes causas que ventilan.²⁸¹

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que la Convención Americana de Derechos Humanos hace parte de nuestro Bloque de Constitucionalidad en sentido estricto; que el debido proceso, cuyas garantías integran la independencia de los jueces, constituye también una garantía intangible que no puede ser suspendida en estados de excepción; y que el artículo 8.1 de la Convención (Derecho a un juez independiente) debe ser interpretado siguiendo los parámetros que al respecto ha fijado la Corte IDH, que fueron expuestos a lo largo del presente capítulo, desde su evolución, contenido, titularidad y alcance; la fuerza jurídica de la discusión propuesta en el ordenamiento jurídico colombiano, es de total importancia, a punto tal, que si un Estado parte en la Convención como Colombia, no brinda a sus justiciables garantías de respeto y protección a su derecho humano a la IJ, en causas concretas, puede ser sujeto de responsabilidad internacional agravada en el escenario internacional, siendo sancionado y compelido a reparar, tal y como ocurrió con los Estados de Perú en 2001 y Venezuela, durante 2008 y 2009.

Por ello y con el ánimo de analizar, si el Estado colombiano puede ser sujeto de responsabilidad internacional -en sede Corte IDH- por los hechos que sucedieron en su territorio durante el periodo 2006-2009 y que a juicio de la opinión pública, de los jueces y de algunos organismos internacionales, constituyeron graves injerencias en la labor de administrar justicia por parte de otros poderes del Estado, se intentará ahondar a lo largo del capítulo final en los hechos descritos, haciendo uso de los elementos conceptuales y jurisprudenciales que sobre IJ, se han entregado hasta el momento.

²⁸¹ Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-251 de 2002, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández.

CAPÍTULO III

INTROMISIONES INDEBIDAS EN EL PODER JUDICIAL COLOMBIANO DURANTE EL PERIODO 2006-2009 DESDE LOS AVANCES DEL SIDH

"El Gobierno Nacional es consciente de la necesaria colaboración armónica de los poderes públicos, pero lo es más de que para que haya una verdadera justicia es imprescindible que sus representantes obren siempre con apego a la verdad y la Ley. Si el Presidente de la Corte Suprema miente, ¿qué se puede esperar de su tarea de administrar justicia?"²⁸²

Esperamos haber entregado al lector hasta el momento, importantes elementos sobre IJ, en su mayoría conceptuales, ligados a entenderla desde una triple visión: como principio político ligado al origen e historia del Estado de Derecho; como fenómeno que sólo puede analizarse en la práctica y desde su funcionamiento al interior de las sociedades; y como derecho humano, desde la evolución que ha tenido tal concepción en el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente, desde los avances del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Constituye una aspiración del presente trabajo investigativo, el que la IJ se entienda como una figura surgida en brazos del Estado de Derecho, que es exigible hoy como derecho humano por los individuos pertenecientes a los Estados parte en el Sistema Interamericano y cuyo funcionamiento y vulneración, pueden sólo analizarse en la práctica en momentos determinados, al interior de sociedades específicas y partiendo de indicadores, teniendo en

²⁸² Presidencia de la República de Colombia. Secretaría de Prensa. Nota de Noviembre 25 de 2009.

cuenta que –como hemos sostenido- es un fenómeno que no puede medirse en forma directa. Una manera de hacerlo teniendo de presente los referentes conceptuales entregados –sin excluir otras que pueden resultar igual de valiosas-, puede ser partir de los parámetros establecidos por la Corte IDH y que fueron descritos en el capítulo anterior, para establecer cuándo puede vulnerarse el derecho humano a la IJ en el Sistema Interamericano, intentando superar los problemas que ha tenido la Corte IDH para medir la vulneración de éste derecho²⁸³ desde los modelos de medición propuestos por Linares y Burgos, explicados en el primer capítulo de este texto cuando se estudió la figura desde una perspectiva sociojurídica.

Tal propuesta, puede aplicarse a diversas sociedades y en distintos momentos, para medir la vulneración por acción u omisión que pudo haber sufrido el derecho humano a la IJ desde la óptica del SIDH. De esta manera lo que se pretende, es contribuir a la construcción de un posible litigio interamericano por hechos relacionados con la transgresión a la IJ y que hayan tenido lugar en un Estado parte, con o sin la aquiescencia de las autoridades que lo representan.

Obedeciendo este fin, y teniendo en cuenta los acontecimientos más polémicos en América Latina durante los últimos tiempos en relación con la afectación negativa a la IJ, pueden tomarse de ejemplo dos casos de trascendencia internacional: Venezuela y Colombia. El primero de estos países fue declarado internacionalmente responsable ante el Sistema Interamericano por transgredir este derecho, razón por la cual no parece útil reexaminar los acontecimientos que ocasionaron su sanción, ya que tal evaluación fue realizada por la Corte IDH, expuesta en el segundo capítulo de la presente investigación y puede servir mejor de ejemplo a su aplicación en casos similares; el segundo, que fue objeto de diversas críticas durante los años 2006-2009, muchas provenientes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en cabeza de la Comisión Interamericana, puede ser de utilidad a la

²⁸³ Recuérdese que en el Capítulo anterior, se explicó como la Corte titubea a la hora de establecer una vulneración al derecho humano a la IJ, señalando como necesario, establecer pruebas fehacientes de su transgresión e intuyendo, que sobre su ausencia en una sociedad determinada sólo pueden existir “indicios”.

empresa emprendida con este texto. Éste ente investigador, le exigió a Colombia el respeto que la independencia de los jueces demanda en las sociedades modernas so pena de verse compelida a reparar en el contexto internacional; razón que motiva a examinar si la advertencia del Sistema, obedeció a que en nuestro país en el periodo descrito, se materializó una vulneración a la IJ entendida como derecho humano a partir de las intromisiones indebidas que sufrió el poder judicial por tal época.

Con el ánimo de averiguarlo, respondiendo a la pregunta que motivó la elaboración de estas páginas: ¿Constituyen las intromisiones realizadas al poder judicial en Colombia durante el periodo 2006-2009 un ataque a la independencia judicial considerada como derecho humano de eventual competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?, iniciaremos por fijar en un primer momento, (i) algunos parámetros de lectura que constituirán el marco para analizar la vulneración del derecho desde las sub reglas establecidas por la jurisprudencia de la Corte IDH, para luego (ii), internarnos en las posibles vulneraciones que pudieron generarse en nuestro país durante los años: 2006 (el año que da inicio a todo); 2007 (empiezan los enfrentamientos entre Suprema y supremo); 2008 (el año de la “manipulación de testigos” y el “coletazo agónico del terrorismo”) y 2009 (¿el fin de los enfrentamientos?); (iii) finalmente y con los hechos descritos, intentaremos establecer si se presentaron o no intromisiones indebidas al poder judicial y a su función de administrar justicia en el Estado colombiano durante el periodo delimitado, que puedan considerarse violación al derecho humano a la IJ, y de corroborarse, cuáles serían las consecuencias que podría sufrir un Estado como Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

3.1. PARÁMETROS DE MEDICIÓN DE LA VULNERACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA IJ

3.1.1 Elementos de Análisis

Se propone en lo sucesivo analizar los hechos que tuvieron lugar en el escenario colombiano durante el periodo 2006-2009, con el ánimo de determinar, si su ocurrencia generó o no una violación al derecho humano a la IJ siguiendo la óptica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Así, el caso colombiano suele resultar complejo, máxime cuando se nos cataloga como uno de los países que cuenta con uno de los mejores marcos constitucionales para garantizar la IJ²⁸⁴, sin embargo, la realidad a veces no coincide con lo descrito formalmente y nos muestra escenarios disímiles. El tema del poder judicial en Colombia a lo largo de su historia ha manejado estas características, por un lado independiente, por el otro, atacado por diversos factores que van desde la corrupción, hasta las desapariciones y secuestros como falta de garantías a los administradores de justicia.²⁸⁵ Autores como **Uprimny**²⁸⁶, parten del análisis del sistema judicial en diferentes décadas, resaltando la de los años ochenta, desarrollada entre la paradoja: independencia orgánica (desde que se impuso la cooptación en nuestra legislación en tiempos de la Junta Militar que gobernó nuestros destinos) y dependencia política y financiera²⁸⁷. Otros autores, ponen el tema de la vulneración a la IJ en la coyuntura del narcotráfico durante el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano²⁸⁸; y muchos coinciden en señalar como una vulneración clara a la

²⁸⁴ Cf. Burgos Silva, Germán, Op. Cit.

²⁸⁵ Al respecto consultar, cifras estadísticas del Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (FASOL). Disponible en: <http://www.corpofasol.org/estadisticas.html>

²⁸⁶ Frente al tema, ver también: Rodríguez Garavito César. M. García, R. Uprimny. Justicia y Reforma a la Justicia en Colombia. Revista de Derecho Público, 2005; Rodríguez Garavito César. Más allá de la oferta y la demanda: análisis sociojurídico de la justicia colombiana a comienzos de siglo. Justicia y Desarrollo. Bogotá: v.4, n.18, p.29 - 84, 2001.

²⁸⁷ Cf. Uprimny, Rodrigo, Op. Cit., p., 67.

²⁸⁸ Cf. FRANCO, Andrés. Independencia Judicial y Política en Colombia. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Ponencia presentada en 1997 en el encuentro de la Latin American Studies Association. En: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lasa97/franco.pdf> Consultado octubre de 2009.

IJ, algunos acontecimientos en el desarrollo del mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez en nuestro país²⁸⁹.

Específicamente, durante el periodo 2006-2009 Colombia empezó a vivir bajo el segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez. En apariencia, nuestro país, de poca tradición en materia de reelección presidencial, siguió bajo la normalidad el curso de su historia, sin embargo, una serie de sucesos que se han venido agudizando a lo largo del tiempo, nos llevan a intuir que existieron durante este periodo, intromisiones o injerencias, por parte del poder ejecutivo al poder judicial. ¿Pero cómo puede explicarse esto en un marco constitucional garantista como el que tenemos en materia de IJ en Colombia?

El ordenamiento jurídico colombiano contempla un marco constitucional de garantías a la IJ, reservando como apartado del poder judicial el *Título VIII de nuestra Carta Política*, y señalando en su artículo 228 que “la Administración de Justicia es función pública [y] sus decisiones son independientes”, de igual forma el artículo 230 contempla que: “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”.

A nivel legal, se expidió durante el año de 1996 la *‘Ley Estatutaria de Administración de Justicia’* o ley 270 de 1996, que desarrolla el tema de la IJ específicamente en su artículo 5:

ARTÍCULO 5o. La Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia.

Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias

Obedeciendo su mandato, la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de administración de justicia, determinó el total respeto que debe dársele a la independencia de la justicia:

²⁸⁹Cf. Revelo Rebolledo, Javier, *La independencia judicial en tiempos de Uribe*, Pap. Polít. Bogotá (Colombia), Vol. 13, No. 1, 53-94, enero-junio 2008.

“Como es sabido, el propósito fundamental de la función judicial dentro de un Estado de derecho, es el de impartir justicia a través de diferentes medios, como son la resolución de los conflictos que se susciten entre particulares, o entre éstos y el Estado, el castigo a las infracciones a la ley penal y la defensa del principio de legalidad. **Para ello, la administración de justicia debe descansar siempre sobre dos principios básicos que, a su vez, se tornan esenciales: la independencia y la imparcialidad de los jueces.**

La independencia, como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones o, como lo indica la norma bajo estudio, a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales. En este punto resulta de importancia anotar que el hecho de que alguna otra rama del poder público participe en la designación de algunos funcionarios judiciales -como es el caso del Senado y del presidente de la República en la elección de los magistrados de la Corte Constitucional- o que colabore en el buen funcionamiento de la administración de justicia -mediante el concurso económico, logístico o material- no significa, ni puede significar, que se le otorgue facultad para someter la voluntad y la libre autonomía del juez para adoptar sus decisiones. En igual sentido, debe decirse que la independencia se predica también, como lo reconoce la disposición que se estudia, respecto de los superiores jerárquicos dentro de la rama judicial. **La autonomía del juez es, entonces, absoluta. Por ello la Carta Política dispone en el artículo 228 que las decisiones de la administración de justicia 'son independientes', principio que se reitera en el artículo 230 superior cuando se establece que 'Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley', donde el término 'ley', al entenderse en su sentido general, comprende en primer lugar a la Constitución Política.**

Por su parte, la imparcialidad se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial. El logro de estos cometidos requiere que tanto los jueces como los demás profesionales del derecho se comprometan en los ideales y el valor de la justicia, para lo cual no basta el simple conocimiento de la ley y del procedimiento, sino que es indispensable el demostrar en todas las actuaciones judiciales los valores de la rectitud, la honestidad y la moralidad.

La Corte encuentra, pues, que el artículo 5o del proyecto de ley, al garantizar la plena independencia y autonomía del juez respecto de las otras ramas del poder público y de sus superiores jerárquicos, se ajusta a los parámetros precedentes, razón por la cual habrá de declarar su exequibilidad.

No obstante, debe esta Corporación advertir que la prohibición de imponer 'criterios' contenida en el inciso segundo de la norma bajo examen, debe entenderse sin perjuicio del carácter vinculante que pueda tener en determinados casos la doctrina de la Corte Constitucional, en los términos que más adelante habrá de precisarse. Para estos efectos, resulta pertinente transcribir los argumentos más importantes contenidos en la Sentencia No. C-083-95.

*'Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo. (art. 241 C.P.)'*²⁹⁰ (Resaltado fuera de Texto)

²⁹⁰ Corte Constitucional Colombiana, sentencia C-037 de 1996, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

En idéntico sentido, la misma Corporación delimitó el alcance del principio de independencia judicial y definió al juez como sujeto único:

“El principio de independencia judicial, que se traduce, desde su perspectiva axiológica, en el de imparcialidad, significa que el operador jurídico, está en el deber de garantizar a la comunidad, que sus decisiones son objetivas, apoyadas en el principio de un tratamiento igual para todas las personas y sometidas exclusivamente al imperio de la ley.

Como resultado de lo expuesto, se concluye que la conducta del juez, cuando administra justicia, no puede jamás estar sometida a subordinación alguna, **al punto que dentro de esta óptica es posible reconocerlo como un sujeto único, sin superior del cual deba recibir órdenes, ni instrucciones ni ser objeto de presiones, amenazas o interferencias indebidas.** Además, como corolario del principio en referencia, los demás órganos del Estado tienen el deber jurídico de prestarles la necesaria colaboración para que se cumplan las decisiones judiciales”.²⁹¹ (*Resaltado fuera de Texto*)

Tal marco de respeto a la independencia, sin duda ha llevado a que nuestro país sea catalogado entre los primeros de América Latina en contar con un nivel de protección a la IJ relativamente óptimo, teniendo en cuenta como indicadores si: “a) *la naturaleza y las competencias de la Corte Superior están en la Constitución y qué nivel de dificultad existe para cambiarlas; b) el procedimiento de designación; c) el periodo legal en el cargo de los altos magistrados y la existencia de la posibilidad de renovación; d) el establecimiento de quien determina los salarios para los magistrados y cuál es su monto; e) el nivel de accesibilidad de las Cortes; f) la forma como se reparten los casos en cada Corte; g) el nivel de autonomía; h) la existencia de competencias constitucionales para controlar a los otros poderes; i) la transparencia en la decisión de las Cortes*”.²⁹²

Así, y en apariencia, el marco constitucional y legal en materia de independencia judicial en Colombia, se ajusta a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo relacionado con un *adecuado proceso de nombramiento* (en razón de los

²⁹¹ Corte Constitucional Colombiana, sentencia C-1643 de 2000, Magistrado Ponente: Jairo Charry Rivas.

²⁹² (Feld y Voigt 2002) citado en: Independencia judicial en América Latina: ¿de quién? ¿para qué? ¿cómo? Burgos Silva, Germán (Editor). Series Textos de Aquí y Ahora. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. ILSA, 2003. Pág.9.

méritos y calidades personales, en igualdad de condiciones, a través de mecanismos objetivos y razonables de selección con especificidad de funciones); *garantía de inamovilidad en el cargo* (permanencia en el cargo, ascenso adecuado, no despido injustificado o libre remoción de jueces y/o funcionarios judiciales); y *garantías contra presiones externas* (de cualquier sector y por cualquier motivo que puedan llegar a generar restricciones, influencias, alicientes, amenazas o intromisiones indebidas, directas o indirectas).

De esta manera, el análisis que se propone no se detendrá a estudiar a la IIJ desde su consagración normativa en el ordenamiento jurídico colombiano, sino por el contrario partirá de la base de que el marco normativo que la contempla la garantiza en la mayor medida de lo posible y se centrará en examinarla en la práctica, desde su funcionamiento y respeto por parte de los otros poderes del Estado, buscando determinar si durante el periodo 2006-2009 ampliamente denunciado por críticos y académicos como se ha dicho hasta el momento, el poder judicial en Colombia estuvo influenciado por factores diferentes a los hechos, las fuentes de derecho y las reglas de decisión (siguiendo la lógica de Linares señalada en el primer capítulo de la presente investigación).

Para lograrlo usaremos una de las fuentes de información que fue señalada en el primer capítulo y que ha sido avalada para estos temas por la Corte IDH como medio de prueba: la prensa, desde un barrido realizado entre los medios de comunicación de mayor trascendencia en nuestro país. De esta manera, en un primer momento se le ofrecerá al lector un panorama de los hechos durante el periodo descrito, luego se le señalarán las influencias o vínculos que a juicio de esta autora y desde los referentes conceptuales entregados, responden a intromisiones indebidas en la administración de justicia colombiana, teniendo en cuenta que escapan al marco normativo colombiano y que contrarían las reglas fijadas por la Corte IDH, en los términos señalados en el Capítulo II de la presente investigación.

3.2 INTROMISIONES INDEBIDAS EN EL PODER JUDICIAL EN COLOMBIA DURANTE EL PERIODO 2006-2009

3.2.1. 2006: el año que da inicio a todo

Durante agosto de 2006 nuestro país le abrió pasó al segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, con una votación sin precedentes en la historia electoral de Colombia: 7'397.835 votos.²⁹³ Así, y con un sin número de seguidores y detractores, la reelección del presidente Uribe se abrió paso en el escenario colombiano llenando de expectativas a un país, que a juicio de algunos, constituye una verdadera “democracia delegativa”.²⁹⁴

Muchas fueron las promesas que rodearon el segundo mandato del ex presidente Uribe, sin embargo, dentro de ellas no se encontraba la justicia, menos cuando su polémico ex Ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, había desatado el escándalo en su mandato anterior amenazando con modificar las competencias de las Altas Cortes y limitar el alcance de la acción de Tutela, por lo que resultaba conveniente que cualquier modificación legal que sufriera la justicia fuera fruto de un consenso entre las Ramas del poder público.²⁹⁵ Sin embargo, y durante la segunda mitad del 2006, el entonces Presidente de la República faltó -en palabras de la Corte Suprema de Justicia- a su compromiso de no intervenir en el fenómeno conocido como “choque de trenes”²⁹⁶, mientras los medios de

²⁹³ “El más difícil momento atraviesa el gobierno de Álvaro Uribe Vélez”. El Tiempo, 18 de Noviembre de 2006.

²⁹⁴ “En este capítulo defenderé la hipótesis de que la democracia actual colombiana se acerca al tipo de régimen político caracterizado por Guillermo O'Donnell (1994) como democracia delegativa. Quien gana las elecciones en este tipo de régimen es visto como una especie de salvador, único depositario de la voluntad popular, razón por la cual obtiene un mandato tan amplio que lo pone, casi siempre, por encima de las instituciones y los partidos políticos”. García Villegas, Mauricio. *Caracterización del Régimen Político Colombiano (1956-2008)*. En: AAVV, Mayorías sin democracia: desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia, 2002-2009, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad: De Justicia. (Bogotá: 2009), p.20.

²⁹⁵ “Así fue visita de Uribe a la Corte”. El Tiempo, 18 de Junio de 2006.

²⁹⁶ Se le da el nombre de “choque de trenes” al enfrentamiento producido en nuestro país entre las Altas Cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado) con ocasión de la llamada “tutela contra sentencias”. La Constitución Política de Colombia, contempla en su artículo 86 la Acción de Tutela para la protección de los derechos fundamentales, de igual forma prevé la posibilidad de acudir a ella cuando una decisión judicial vulnere un derecho de rango fundamental. Así, desde el año 2004 se presentó en nuestro país un gran malestar, cuando la Corte Constitucional en sede “revisión”, empezó a dejar sin efectos las sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, avocando su función de máxima guardiana de la Constitución. A juicio de las otras corporaciones, la Corte no podía creerse un órgano “todopoderoso” y “tumbar” las sentencias emitidas por jueces especializados. Fue de esta manera, que se dio inicio a un choque entre trenes que ha dado origen incluso a pronunciamientos de instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el entendimiento de que el enfrentamiento entre los

comunicación señalaban: “la pelea entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional –que lleva más de cuatro años– parece haber llegado a su más alto punto de tensión. Y ahora tiene un nuevo actor: el Gobierno”.²⁹⁷

Según el ex magistrado Yesid Ramírez, el Gobierno se preparaba para presentar un proyecto de acto legislativo que se inclinaría a favor de una de las Cortes: la Constitucional, que buscaba convertir en una Corte de bolsillo y que se encontraba totalmente desbordada y politizada.²⁹⁸ A la acusación, el presidente Uribe contestó con un duro reclamo manifestándole al magistrado Ramírez, que no aceptaba que desde la cima de un tribunal tan respetable se estuviera deslegitimando la democracia.²⁹⁹ En los días que siguieron, las Cortes de la mano de la Fiscalía General de la Nación, presentaron su propio proyecto de reforma a la justicia que se consideró contradictorio en la mayoría de sus puntos al del Gobierno³⁰⁰ y que se convertiría en el primero de los reiterativos enfrentamientos que tendrían en lo sucesivo la Corte Suprema de Justicia y el Ex Presidente de la República.

Durante el mes de noviembre de 2006, los ánimos se calmaron un poco, cuando el Gobierno acogiendo la propuesta de diversos sectores políticos, aplazó la reforma en busca de un gran acuerdo nacional entre las Cortes.³⁰¹ De igual forma y en la conmemoración de los 120 años de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Uribe pronunció un discurso rindiendo homenaje a la “institucionalidad colombiana, a la justicia, en cabeza de la Honorable Corte Suprema de Justicia que ha adquirido la mayor credibilidad nacional” y frente a la cual “el Presidente de la República tiene que cumplir la misión de Jefe de Estado y proponer iniciativas que, sin afectar la independencia de las ramas del poder, puedan

administradores de justicia no puede dejar en la incertidumbre al justiciable. (Al respecto ver: Caso, Sergio Emilio Antonio Antolinez C. Colombia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2008).

²⁹⁷ “Uribe faltó a la palabra: C. Suprema”. El Tiempo, 25 de septiembre de 2006.

²⁹⁸ “Presidente de Corte Suprema acusa a Álvaro Uribe de ponerse a favor de la Corte Constitucional”. El Tiempo, 24 de septiembre de 2006.

²⁹⁹ “Duro reclamo hizo Uribe a Presidente de la Corte Suprema por comentarios sobre reforma a la justicia”. El Tiempo, 25 de septiembre de 2006.

³⁰⁰ “Proyectos con puntos contradictorios para reforma a la justicia presentan Gobierno y Cortes”. El Tiempo, 27 de septiembre de 2006.

³⁰¹ “Para el próximo año quedó aplazado en el Congreso proyecto de reforma de la justicia”. El Tiempo, 1 de noviembre de 2006.

superar esas querellas”.³⁰² En el mismo discurso el ex mandatario se refirió al inicio de un fenómeno por aquel entonces inimaginable en su magnitud, tras la captura de tres congresistas de su bancada por presuntos nexos con paramilitares:

“Es muy importante que estimulemos la verdad. Lo que está apareciendo ahora es la verdad judicial que se ocultó durante tantos años, porque la seguridad no estaba al servicio de la justicia, porque el crimen crecía y la justicia era impotente [...] ;Y que se de también la verdad política! Llamo a todos los congresistas, para que, por propia iniciativa, acudan a la Corte Suprema, a los fiscales delegados ante la Corte Suprema, a contar la verdad que todavía no se sepa”.³⁰³

El final del 2006 estuvo seguido del reforzamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para contar con el personal profesional y técnico suficiente, para investigar a más de 150 dignatarios en posibles relaciones con el paramilitarismo. La decisión de empoderar a la Suprema, tomada por el ex presidente Uribe y las Cortes después de largas reuniones, fue catalogada como “histórica”, y le daría a la Corte Suprema la posibilidad de investigar los hechos que marcarían el curso de los años venideros.³⁰⁴

3.2.2. 2007: Empiezan los enfrentamientos entre Suprema y “supremo”

Durante el 2007 nuestro país conoció la evidencia de un acuerdo macabro celebrado entre paramilitares y seis representantes a la cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes, conocido como “Pacto de Ralito”, suscrito en total por 32 firmantes.³⁰⁵ Documento clasificado como “confidencial y secreto” por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en el que se consignaba el cumplimiento de una tarea, según ellos, “fijada por la Constitución Política” consistente en “refundar nuestra patria”, en palabras de los principales medios de comunicación un contrato celebrado entre los padres de la patria

³⁰² “Texto de la intervención del Presidente Álvaro Uribe en aniversario de la Corte Suprema”. ”. El Tiempo, 18 de noviembre de 2006.

³⁰³ *Ibidem*.

³⁰⁴ “Corte se empodera para investigar a 150 dignatarios del Estado”. El Tiempo, 20 de diciembre de 2006.

³⁰⁵ “Este es el Pacto secreto de Ralito”. El Tiempo, 19 de Enero de 2007. Ver texto completo del Pacto de Ralito en: http://www.semana.com/documents/Doc-1367_2007119.pdf consultado en marzo de 2010.

y uno de los grupos ilegales a quien se le atribuye un gran número de masacres de colombianos por las que aun se investiga a nuestro Estado en escenarios internacionales, con el objetivo de defender sus tesis y posicionarlos políticamente en diferentes cargos laborales del orden nacional o territorial.

El principal argumento esgrimido por la clase política señalada, fue el desconocimiento del contenido del documento firmado y las amenazas que fueron usadas para obligarlos a suscribirlo, en oposición a los señalamientos de los testigos que afirmaron el conocimiento del texto por parte de los asistentes al encuentro al habérselo leído a todos antes de que lo firmaran y la voluntad de firmarlo en atención al apoyo que recibirían de las AUC para sus campañas políticas.³⁰⁶

Con ocasión al adelantamiento de los procesos por parapolítica al interior de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados empezaron a denunciar amenazas de muerte contra ellos y sus familias, que los compelián a detener sus investigaciones *so pena* de recibir desastrosas consecuencias.³⁰⁷ No obstante el proceso continuó, y el Alto Tribunal profirió en el mes de febrero de 2007 una providencia de 76 páginas con el ánimo de ordenar medida de aseguramiento de detención contra los congresistas Álvaro Araújo, Dieb Maloof, Mauricio Pimiento, Alfonso Campo Escobar, Luis Eduardo Vives y Jorge Luis Caballero; estableciendo con detalle cómo “la organización paramilitar de ‘Jorge 40’ trazó un milimétrico plan para apoderarse primero del poder local en el Cesar; luego del regional, sumando el departamento del Magdalena; hasta llegar al nacional, teniendo su propia ‘bancada’ en el Congreso”.³⁰⁸ El escándalo salpicó incluso a la Canciller de la república María Consuelo Araújo, que siendo hermana de uno de los congresistas detenidos (Álvaro Araújo), se vio obligada a renunciar a su cargo, siendo reemplazada por Fernando Araujo

³⁰⁶ “Ya van 14 congresistas llamados por la Corte”. El Tiempo, 31 de Enero de 2007.

³⁰⁷ “Amenazas de muerte ha recibido Yesid Ramírez”. El Tiempo, 16 de Febrero de 2007.

³⁰⁸ “Congresistas, fichas del plan de ‘40’ para tomar el poder: Corte”. El Tiempo, 18 de Febrero de 2007.

ex ministro de Desarrollo del gobierno Pastrana y ex secuestrado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) durante el año 2000.³⁰⁹

El país entero estaba conmocionado, los coautores de un presunto “concierto para delinquir agravado” habían participado en la elaboración de importantes leyes y en su mayoría pertenecían a la bancada del gobierno: la de Justicia y Paz, Prórroga de la Ley de Orden Público, la reforma de la ley 100 sobre el Sistema de Seguridad Social y la ley Forestal, respaldándolas con su voto.³¹⁰ El Gobierno viéndose de una u otra manera comprometido, expresó a través de uno de sus representantes, el Ministro del Interior Carlos Holguín durante una emisión de “La W” radio, que el país no debía investigar con exclusividad las relaciones con el paramilitarismo y que instaba a investigar también a los políticos que tenían de igual forma nexos con las FARC.³¹¹

De la misma manera, sectores de Gobierno empezaron a proponer sanciones alternativas para los ahora llamados “parapolíticos”, con el objetivo de que en el marco de la Ley de Justicia y Paz confesaran la verdad de sus nexos con el paramilitarismo haciéndose acreedores a penas menores e incluso a ex carcelación.³¹² La propuesta no fue recibida de buena manera por la Suprema de Justicia, teniendo en cuenta –en voz de uno de sus Magistrados- que “la propuesta de excarcelación podría crear una imagen negativa de la justicia en los ciudadanos, quienes esperan castigos justos a los delincuentes”³¹³, más sin embargo afirmó que es el Ejecutivo el que debe proponer las leyes, a los jueces solo les corresponde “aplicarlas”.

³⁰⁹ “Presidente Uribe ofreció la cancillería a Fernando Araújo desde el domingo en la noche”. El Tiempo, 19 de Febrero de 2007.

³¹⁰ “Así votaron las leyes más polémicas congresistas detenidos”. El Tiempo, 24 de Febrero de 2007.

³¹¹ “Investigar nexos entre políticos colombianos y FARC, pide ministro del Interior Carlos Holguín”. El Tiempo, 26 de Febrero de 2007.

³¹² “Se pueden buscar sanciones alternativas en la ‘parapolítica’, dice vicepresidente Francisco Santos”. El Tiempo, 31 de marzo de 2007.

³¹³ “Anónimos enrarecen elección de magistrados”. El Tiempo, 24 de mayo de 2007.

A su vez los congresistas investigados, iniciando por el senador Álvaro Araújo, empezaron a renunciar al fuero especial que ostentaban para ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, entregándoles sus causas a la justicia ordinaria en cabeza de la Fiscalía General³¹⁴, dando lugar a fuertes críticas por parte de la opinión pública.³¹⁵ Aun sin estudiar esta posibilidad, la Corte Suprema continuó recibiendo numerosas denuncias sobre vínculos de congresistas con paramilitares y clamando mayor protección y condiciones de seguridad a sus magistrados auxiliares, encargados de recaudar pruebas viajando por todo el país en el caso de la parapolítica³¹⁶, puesto que las amenazas y las llamadas anónimas intimidatorias continuaban presentándose.³¹⁷

Otra polémica surgiría cuando el presidente Uribe manifestó el deseo del gobierno de dar estatus político a los paramilitares desmovilizados: “voy a invitar a mis compatriotas (...) para que ayuden al Gobierno en el propósito de obtener una legislación que le dé el mismo tratamiento a guerrilla que a paramilitares”³¹⁸, propuesta que fue descartada por la Suprema de Justicia mediante providencia que negó la viabilidad jurídica de tratar como delincuentes políticos a los paramilitares imputándoles un delito como la sedición en el que un grupo se levanta contra el Estado, en contraposición al concierto para delinquir, que tiene como objetivo el beneficio personal.³¹⁹ Tal respuesta de la Suprema, generó inconformidad en el mandatario, que manifestó que no comprendía como tal estatus de delincuente político sí se entregaba a la guerrilla: “yo no entendería que sobre un cadáver mutilado se pueda decir que el autor de ese crimen es un guerrillero con ideales y sobre otro cadáver mutilado se pueda decir que es un delincuente paramilitar”.³²⁰ La Corte a su vez, respondió señalando que su decisión no buscaba dejar sin piso jurídico el proceso de desmovilización, ni constituía un obstáculo para el proceso de paz -como lo había afirmado el primer

³¹⁴ “Renuncia a su fuero del senador Álvaro Araújo pone a prueba a la Fiscalía y abre debate jurídico”. El Tiempo, 31 de marzo de 2007. Entre otras: “con la renuncia al fuero de congresistas de Álvaro Araújo, la parapolítica ha encontrado el camino hacia la impunidad. Su objetivo es sacar a la Corte Suprema para quedar en manos de la Fiscalía, insinuando de paso que esta vía sería más permeable a sus propósitos”. “Me quedo en la Red”. El Tiempo, 2 de Abril de 2007.

³¹⁵ “Alerta a la Justicia”. El Tiempo, 2 de abril de 2007.

³¹⁶ “Mayor seguridad para magistrados que apoyan investigaciones de ‘parapolítica’, pide Corte Suprema. El Tiempo, 22 de mayo de 2007.

³¹⁷ “Anónimos enrarecen elección de magistrados”. El Tiempo, 24 de mayo de 2007.

³¹⁸ “Para dar estatus político a ‘paras’, presidente Álvaro Uribe buscará apoyo del pueblo”. El Tiempo, 26 de Julio de 2007.

³¹⁹ Al respecto consultar: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 26945, 11 de Julio de 2007.

³²⁰ “Uribe anuncia segundo intento para darles beneficios políticos a ‘paras’”. El Tiempo, 26 de Julio de 2007.

mandatario-, realizando abiertamente el primero de los muchos reclamos que formularía en lo sucesivo: “la Corte no es obstáculo para el proceso de paz. Lo que sí reclama es autonomía. No podemos aceptar ninguna injerencia”.³²¹

Ante el llamado a respetar la autonomía del Alto Tribunal, el presidente Uribe se pronunció una vez más afirmando que la independencia judicial de la que estaban premunidas las Altas Cortes era tan solo “relativa”, y que la indulgencia demostrada con los grupos guerrilleros era evidencia de que la Corte Suprema tenía un “sesgo ideológico”.³²² Con la afirmación del mandatario vendría un sinfín de pronunciamientos entre Ejecutivo y Judicial; por un lado la Corte se mostró altamente indignada: “rechazamos la censura grave y peligrosa formulada por el señor Presidente de la República”³²³, teniendo que defender su fallo mientras le explicaba a los colombianos el alcance de su decisión y el por qué debía respetarse³²⁴, siendo apoyado por el poder judicial en general y la Fiscalía General de la Nación³²⁵; por otro, el Ejecutivo expresó su deseo de reunirse con la Corte para discutir la providencia, mientras el Alto Organismo expresaba que se reuniría con el mandatario para dialogar pero que su fallo no podría entrar en discusión.³²⁶

La Corte expresando su sentir, emitió uno de sus más dicientes comunicados sobre el tema, en donde afirmó de manera contundente el sentimiento que la embargaba frente a las injerencias del Ejecutivo en su labor de administrar justicia:

“1. La Corte Suprema de Justicia, máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria y, como se ha reconocido a lo largo de su centenaria tradición, bastión moral del país, está

³²¹ *Ibidem*.

³²² “Se calienta pulso por sedición”. El Tiempo, 28 de Julio de 2007. Ver también declaraciones Caracol Radio, 27 de Julio de 2007, disponible en: http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/julio/27/20272007.htm, consultado el 30 de marzo de 2011.

³²³ *Ibidem*.

³²⁴ “La Corte nunca ha juzgado un guerrillero por sedición: su conducta queda subsumida dentro del delito de rebelión (...) ¿Pero si se les diera trato político qué pasaría? Apareja unas consecuencias procesales significativas. Le voy a dar cuatro: hay derecho a asilo político, está latente la posibilidad de indulto y amnistía, está prohibida la extradición y finalmente ellos no tendrían inhabilidad para desempeñar cargos públicos”. “Quedaría sin piso extradición de ex ‘paras, dice presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema”. El Tiempo, 30 de Julio de 2007.

³²⁵ “Altas Corte y Fiscalía rechazan pronunciamientos del presidente Uribe sobre sedición”. El Tiempo, 1 de agosto de 2007.

³²⁶ “Proceso con autodefensas no debe llevar a la impunidad, advirtió la Corte Suprema al Presidente”. El Tiempo, 3 de agosto de 2007.

comprometida de manera sincera y profunda con la paz, la reconciliación y la concordia, como único camino para lograr la armonía y la convivencia pacífica, así como el progreso de todos los colombianos. Esta Corporación reconoce la existencia de un conflicto interno y ve con buenos ojos el proceso de paz que se adelanta con los grupos al margen de la ley, bajo el entendido de que el mismo debe conducir a la sociedad hacia la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, sin que, desde luego, en ningún caso dicho proceso pueda conllevar a una impunidad absoluta. 2. *La Corte Suprema de Justicia reafirma que, por expreso y perentorio mandato de la Carta Política, la independencia y autonomía de que gozan todos los Jueces de la República, sea cual fuere su jerarquía, tiene como único límite las normas consagradas en la Constitución y la ley. El principio universal de la independencia judicial, como de todos debe ser conocido y admitido, antes que una prerrogativa o facultad de los jueces, constituye una garantía fundamental de los ciudadanos, que hoy debe ser pregonada y defendida con más vigor que nunca frente a cualquier intento encaminado a cercenarlo o limitarlo.* 3. *La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia respalda en forma incondicional y categórica las decisiones que, en el marco de sus precisas competencias, ha adoptado la Sala de Casación Penal, con la absoluta seguridad que las mismas son producto inequívoco de la interpretación y aplicación de las normas constitucionales y legales vigentes, al igual que de los tratados internacionales ratificados por nuestro país.* La Corte Suprema de Justicia, sin pasar por alto el derecho de los ciudadanos a disentir de las resoluciones judiciales, rechaza enérgicamente las recientes declaraciones del Gobierno Nacional acerca de la forma como esta Corporación cumple con su misión constitucional, pues tales manifestaciones constituyen una injerencia indebida e inaceptable en la actividad judicial, toda vez que con ellas no se pretende más que usurpar la facultad interpretativa de que gozan los Jueces de la República e imponerles veladamente un determinado criterio para el pronunciamiento de sus decisiones. 4. *Esta actitud desconoce que los Jueces de la República están sometidos únicamente al ordenamiento jurídico y quebranta la independencia de la función judicial, con lo que no sólo propicia una infundada desconfianza sobre esta Corporación, sino que busca deslegitimar, sin apoyo alguno, la actividad que la misma desarrolla con plena imparcialidad y objetividad, a la vez que la expone a serios peligros y amenazas. Por tanto, la Corte rechaza enfáticamente los injustos calificativos empleados en su contra, pues, ni por asomo, puede siquiera insinuarse que exista un presunto sesgo ideológico en sus fallos, por cuanto éstos sólo han estado apoyados en el orden legal, como tampoco se le puede tildar de ser un obstáculo para el proceso de paz, ya que no puede olvidarse que la labor de la Rama Judicial del Poder Público consiste esencialmente en interpretar y aplicar las normas vigentes, sin que cuente con la potestad de elaborarlas o modificarlas, ni se le pueda atribuir la responsabilidad por los vacíos, flaquezas o deficiencias que las mismas puedan contener.* 5. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia determinó abstenerse de participar y comentar el proyecto de ley por medio del cual el Gobierno Nacional manifiesta su propósito de reformar el alcance del delito de sedición, a que se refiere el artículo 468 del Código Penal vigente, pues conforme a las pertinentes normas constitucionales y legales, tal aspecto resulta completamente ajeno al ámbito propio de las funciones de esta Corporación. La Sala Plena hace especial precisión en el sentido de que así como exige respeto por parte de todos los órganos del poder público frente a las decisiones que adopta en ejercicio de sus atribuciones y reprocha la intromisión indebida que ellas hagan, con mayor razón está llamada a sustraerse de intervenir en asuntos que son exclusivos de otros órganos estatales, ya que, por imperio de las mismas normas de la Carta Política, la colaboración armónica que se predica de todas las ramas del poder no permite que la Corte se inmiscuya en las tareas que competen a organismos diferentes. En todo caso, la Corte Suprema de Justicia confía en que con dicho proyecto se salvaguarden los derechos fundamentales de las personas, se tengan en cuenta los postulados que orientan la verdad, la justicia y la reparación integral, y se apliquen los principios de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, como quiera que sólo de esta manera se darán pasos tendientes a proteger los más caros derechos de las víctimas, por los cuales la sociedad y la comunidad internacional abogan con vehemente insistencia. 6. *La Sala Plena estima que si el señor Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, formalmente expresa su*

propósito de reunirse con la Corte para plantearle sus inquietudes sobre este tema, siguiendo los procedimientos acostumbrados para estos casos, la Sala Plena de la Corporación lo recibirá como corresponde al Jefe de Estado, sin que ello implique, en ningún caso, que la providencia de 11 de julio pasado cuestionada por el Gobierno, como ninguna otra, pueda ser materia de discusión o controversia, máxime si se tiene en cuenta que las decisiones judiciales admiten los recursos o medios de impugnación que al efecto la ley tiene claramente establecidos. CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE Presidente.³²⁷
(Resaltado fuera de texto)

En idéntico sentido continuaron las declaraciones de la Alta Corporación ante diferentes medios de comunicación: “es grave que se hable de una relatividad en las decisiones, cuando estas garantizan el acceso a la justicia”, “la actitud del gobierno no sólo propicia desconfianza sobre la Corte, sino que busca deslegitimar su actividad”³²⁸ y en este ambiente, las investigaciones por ‘parapolítica’ continuaban y se hacían cada vez de mayores proporciones³²⁹ alcanzando a importantes dirigentes, entre ellos incluso el primo del primer mandatario, Mario Uribe, quien también fue llamado a indagatoria convirtiéndose en el congresista número 37 vinculado al escándalo de la parapolítica³³⁰ y quien posteriormente renunciaría también a su fuero de congresista para no ser juzgado por la Suprema de Justicia y acceder a una segunda instancia.³³¹ La percepción de seguridad de los magistrados de la Alta Corporación no era la más alta, sobre todo si se tenían en cuenta las amenazas constantes que recibían³³² y el temor que manifestaban en torno a las intromisiones de otros órganos.³³³

³²⁷ Corte Suprema de Justicia, Comunicado Agosto 3 de 2007. Disponible en: <http://colombiareport.ss.uci.edu/webdocs/DeclaracionCorteSuprema.pdf>, consultado el 30 de marzo de 2011.

³²⁸ “Fiscal General ofrece mediar entre Presidente y Corte Suprema de Justicia en debate por tratamiento a ‘paras’”. El Tiempo, 4 de agosto de 2007.

³²⁹ “Parapolítica: van 37 congresistas”. El Tiempo, 27 de septiembre de 2007.

³³⁰ “A indagatoria llaman a Mario Uribe, Alfredo Cuello y Álvaro Morón por parapolítica”. El Tiempo, 26 de septiembre de 2007.

³³¹ “Renunció a su curul el senador Mario Uribe para no ser investigado por la Corte Suprema”. El Tiempo, 4 de Octubre de 2007.

³³² “Una amenaza de bomba en el colegio en el que estudia la hija de una magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema reactivó las alarmas sobre la seguridad de los jueces”. “Corte Suprema pide más seguridad para los magistrados que investigan a ‘parapolíticos’”. El Tiempo, 3 de octubre de 2007.

³³³ “Pero más allá de esas presiones y amenazas, lo que sí nos preocupa es una intromisión de otros órganos que traten de atajar o cerrar a rajatabla las investigaciones. Me refiero sobre todo a las tutelas que, como ya ha pasado, buscan frenar las actuaciones de la máxima instancia en lo penal, que es la Corte. Nos preocupa que pueda ocurrir algo semejante a lo que pasó en el proceso ‘8000’ con los tutelazos. Eso no tendría ninguna justificación de cara a la opinión pública nacional e internacional” “Sobre ‘parapolítica’, más que a las amenazas, la Corte Suprema teme intromisiones de otros órganos”. El Tiempo, 6 de Octubre de 2007.

Como si la tensión entre la Corte y el Presidente no fuera suficiente hasta ese momento, un nuevo evento los enfrentaría marcando el final del 2007: la llamada “Carta de Tasmania”. Durante el mes de septiembre los magistrados auxiliares de la Corte Suprema: Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo viajaron a la ciudad de Medellín, atendiendo el requerimiento de funcionarios del CTI quienes a través de información suministrada por el abogado defensor del paramilitar Jose Orlando Moncada, alias “Tasmania”, aseguraban que el detenido podría tener información valiosa sobre ‘parapolítica’. Teniendo en cuenta que en la visita tal información no se consideró relevante, los magistrados se retiraron, más sin embargo una carta del paramilitar Tasmania llegó días después a la Presidencia de la República incriminando al magistrado Velásquez de haberle solicitado a Tasmania que mintiera señalando que el Presidente de la República había ordenado el asesinato de otro paramilitar conocido como Alcides de Jesús Durango, alias “René”, a cambio de beneficios judiciales.³³⁴

La reacción del Presidente Uribe no se hizo esperar y de manera enfática manifestó ante los medios que sólo podían existir tres hipótesis: “el presidente es un asesino, el testigo es un mentiroso o los funcionarios que adelantan las investigación están montando una maniobra contra el presidente”.³³⁵ Frente a la reacción del mandatario sobre las acusaciones contra el magistrado auxiliar de las investigaciones por ‘parapolítica’, los magistrados de la corporación contemplaron incluso la renuncia masiva³³⁶, decidiendo finalmente emitir un nuevo comunicado a través del cual expresaron:

“1. Invitar a la sociedad para prestar colaboración y apoyo a la labor que en estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales realiza la Corte Suprema de Justicia y exhortar a las autoridades a respetar la autonomía e independencia de los jueces de la República. 2. Rechazar enfáticamente las declaraciones que sugieren la existencia de un complot por parte de esta corporación por ser totalmente ajenas a la realidad. 3. Resaltar la misión que viene realizando la Sala de Casación de esta corporación siempre comprometida a sus funciones. 4. ***Desaprobar cualquier injerencia sobre el normal desarrollo de las investigaciones en curso que desconozca abiertamente el mandato constitucional de la independencia de la justicia.*** 5. ***Expresar su enorme preocupación debido a que los***

³³⁴ “Corte Suprema y Presidente chocan por acusaciones del mandatario contra magistrado auxiliar”. El Tiempo, 8 de octubre de 2007. Ver texto completo de la Carta de Tasmania en: <http://www.semana.com/on-line/carta-tasmania-dirigida-presidente-uribe/106784-3.aspx>, consultado el 30 de marzo de 2011.

³³⁵ *Ibidem*.

³³⁶ “Algunos magistrados de la Corte Suprema contemplaron renuncia masiva por choque con el Presidente”. El Tiempo, 9 de octubre de 2007.

recientes hechos pueden generar en la ciudadanía un errado entendimiento de la función que cumple la Corte Suprema de Justicia acerca de la honestidad y credibilidad de sus funcionarios. 6. Resaltar que cada una de sus decisiones son el producto de ponderada e imparcial elaboración del cuerpo colegiado y no de un funcionario o magistrado en particular. (...) 8. Respaldar de manera unánime e incondicional la actuación de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de su sala de casación penal, quienes en sus declaraciones y conceptos han actuado fielmente como voceros de la corporación y en ningún caso de título personal”.³³⁷ (Resaltado fuera de texto)

La sospecha generada sobre al magistrado Velásquez, hasta el momento de total honorabilidad, considerado investigador estrella en los casos de ‘parapolítica’ y uno de los investigadores que durante la década de los 90 se dedicó a investigar en Antioquia el paramilitarismo aun cuando nueve de sus compañeros fueron asesinados³³⁸, fue revelada por el primer mandatario a distintos medios de comunicación, mientras expresaba que había entregado declaraciones para evitar que el caso se filtrara a los medios de una manera equivocada y causara más daño: “¿Se imagina si la noticia hubiera sido al revés: paramilitar en la cárcel acusa al Presidente de que lo contactó para matar a otro paramilitar? ¿Se imagina el daño que habría causado a las instituciones?”.³³⁹

Para hacer más compleja la situación el país conoció un estudio de riesgo según el cual debía disminuirse la seguridad del magistrado Velásquez teniendo en cuenta que “enfrenta[ba] los riesgos ordinarios implícitos en la vida social, que deben tolerar las personas por su pertenencia a una determinada sociedad”, mientras se le recordaban medidas de autoprotección que debía tener presentes tales como “tener a la mano un directorio telefónico con los números de emergencia, Policía, DAS, bomberos, etc.”, la reacción de la Corte Suprema no se hizo esperar dirigiendo una fuerte comunicación al coronel John Harold Gómez, Subdirector encargado de Protección, sosteniendo: “deja al servidor (...) a merced de los grupos que investiga, que gratificados estarán al conocer tan malhadada determinación”³⁴⁰ y señaló que de no restablecerse la seguridad del magistrado

³³⁷ *Ibídem.*

³³⁸ *Ibídem.*

³³⁹ “24 horas de tensión entre Uribe y Corte”. El Tiempo, 10 de Octubre de 2007.

³⁴⁰ “Lío entre Policía y la Corte Suprema por escolta de magistrado clave en casos de parapolítica”. El Tiempo, 21 de Noviembre de 2007.

llevarían el caso a la ONU o a la OEA, ya que a su juicio el informe no era serio y reflejaba “el menosprecio hacia la labor del magistrado”³⁴¹. Frente a la noticia el General Naranjo de la Policía Nacional expresó su sorpresa, señalando que es deber estatal dar mayor seguridad a los magistrados y jueces de la República, no entendiendo como se hizo público un informe que debía ser evaluado en otras instancias.³⁴²

El fin del 2007 tuvo un enfriamiento de las relaciones entre Corte Suprema y Ejecutivo, determinado por la visita a nuestro país para sesionar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que motivó un encuentro entre los enfrentados³⁴³ y el reconocimiento de seguridad al magistrado Velásquez por parte de la Policía Nacional.³⁴⁴ Sin embargo, los enfrentamientos continuarían durante el año siguiente, porque la investigación sobre parapolítica cada vez tomaba más fuerza e incluso arrojaba sus frutos, el 19 de diciembre la Corte profirió su primera condena a un congresista acusado por parapolítica (Erik Morris), condenándolo a 6 años de cárcel y a 2.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes como multa.³⁴⁵

3.2.3. 2008: El año de “la manipulación de testigos” y el “coletazo agónico del terrorismo”

El año 2008 traería enfrentamientos incluso desde el mes de enero, esta vez llevados al plano judicial. Tras una entrevista otorgada por el magistrado Valencia Copete al semanario El Espectador, en la que afirmó haber recibido una llamada del entonces Presidente de la República preguntando sobre el caso de “parapolítica” por el que había sido llamado a indagatoria su primo Mario Uribe, el Primer Mandatario reaccionó exigiéndole al

³⁴¹ *Ibídem.*

³⁴² *Ibídem.*

³⁴³ “Uribe y la Corte estuvieron diplomáticos”. El Tiempo, 18 de octubre de 2007.

³⁴⁴ “Director de la Policía garantiza que al magistrado Iván Velásquez no se le retirará la protección”, El Tiempo, 15 de diciembre de 2007.

³⁴⁵ “La Corte condenó a primer congresista por parapolítica”. El Tiempo, 2 de diciembre de 2007.

Magistrado que rectificara ante el país sus declaraciones.³⁴⁶ Ante la negativa del magistrado, quien continuaba sosteniendo que decía la verdad³⁴⁷, el Presidente interpuso denuncia penal por injuria y calumnia afirmando que Mario Uribe, no había sido tema de conversación de ninguna llamada con Valencia, y que el objetivo del magistrado no era otro que “desestabilizar al Estado y afianzar su vanidad”.³⁴⁸

Al tiempo que algunos sectores sociales consideraban lo sucedido una persecución contra la Corte Suprema de Justicia y manifestaban su apoyo³⁴⁹, la ONG *Human Righth Watch* emitió informe sobre la situación colombiana, elogiando la importante labor de la Corte Suprema al juzgar a los implicados en el escándalo de la parapolítica y acusando al Presidente Uribe de tomar medidas que habían “socavado” los esfuerzos logrados.³⁵⁰ El ambiente que se generó, que fue tema en los principales medios de comunicación y que se agravó con la noticia de las interceptaciones a las comunicaciones de los magistrados de la Corte³⁵¹, motivó a estos últimos a solicitar a los organismos internacionales veeduría sobre las decisiones judiciales que se tomaran en relación con los polémicos procesos que adelantaban³⁵², máxime cuando las investigaciones habían implicado a más de 61 congresistas -en su mayoría de la bancada de gobierno-, entre los que figuraba incluso la presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez. Frente al progreso de las investigaciones el Presidente tomó la palabra una vez más pidiendo a la Corte Suprema “objetividad total” en sus investigaciones, a la vez que el Ministro del Interior afirmaba a los medios: “¿Se quiere más sevicia contra el Congreso? ¡Tampoco!”.³⁵³ Los comentarios

³⁴⁶ “Presidente Álvaro Uribe pide rectificación a Presidente de la Corte Suprema”. El Tiempo, 16 de enero de 2008.

³⁴⁷ “Ex magistrado César Julio Valencia Copete desmiente a Uribe”. *Semana*, 25 de octubre de 2008. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/ex-magistrado-cesar-julio-valencia-copete-desmiente-uribe/146406-3.aspx>

³⁴⁸ “Radican denuncia de Álvaro Uribe contra el presidente de Corte Suprema, César Julio Valencia”. El Tiempo, 24 de enero de 2008.

³⁴⁹ “Es nocivo para las instituciones el camino tomado por Uribe en incidente con presidente de Corte”. El Tiempo, 2 de febrero de 2008.

³⁵⁰ Human Righth Watch, Informe de Colombia, enero 2008. Disponible en: <http://www.hrw.org/legacy/spanish/docs/2008/01/31/colomb17910.htm>

³⁵¹ “‘Chuzada’ a Presidente y a magistrado de la Corte se habría producido en teléfonos de Casa de Nariño”. El Tiempo, 18 de febrero de 2008.

³⁵² “Corte Suprema pedirá a OEA que sea veedora de decisiones judiciales relacionadas con ‘parapolítica’”. El Tiempo, 19 de febrero de 2008.

³⁵³ “Por primera vez, Uribe admitió inestabilidad institucional a la que puede llevar la parapolítica”. El Tiempo, 19 de abril de 2008.

generaron malestar en la Corte quien a su vez contestó que sus fallos eran “absolutamente independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley”.³⁵⁴

Sin embargo, la situación lejos de mejorar empeoraba, pronto, el país conoció de un nuevo escándalo esta vez protagonizado por dos Representantes a la Cámara a quienes se empezaría a investigar por haber favorecido con su voto de manera decisiva la reelección presidencial, aceptando dádivas del gobierno a cambio del mismo. A tal acontecimiento, puesto en evidencia por una Representante a la Cámara inconforme por el incumplimiento del gobierno frente a los compromisos “acordados” llamada Yidis Medina, se le dio el nombre mediático de “Yidispolítica”.³⁵⁵ La reacción del gobierno no se hizo esperar, la Casa de Nariño emitió un comunicado en el que afirmaba enfáticamente: “el Gobierno persuade; no presiona ni compra conciencias”.³⁵⁶

Mientras la imagen del Congreso de la República bajaba cada vez más en las encuestas³⁵⁷ entre congresistas a los que les quedó al descubierto su relación con el paramilitarismo y otros, que develaban sus acuerdos con el gobierno a cambio de puestos de trabajo en entidades del orden nacional o departamental e incluso consulados o embajadas, la imagen de magistrados como Iván Velásquez se recuperaba ante las retractaciones públicas de los paramilitares que lo habían acusado de manipular testigos para perjudicar al Presidente de la República.³⁵⁸

³⁵⁴ “Corte Suprema responde al Presidente Uribe que investigaciones por parapolítica se ajustan a la ley”. El Tiempo, 18 de abril de 2008.

³⁵⁵ Ver entre otras: “Votar la reelección me mató”. Semana, 28 de marzo de 2008. Disponible en: <http://elespectador.com/node/8040/> consultado marzo 2011. Corte investigará a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño por favorecer reelección presidencial”. El Tiempo, 12 de abril de 2008; “Fiscalía inició indagación preliminar sobre denuncias de Yidis Medina reveladas en Noticias Uno”. El Tiempo, 20 de abril de 2008. “O el que paga por pecar”. Semana, 19 de abril de 2008. Disponible en: <http://www.semana.com/opinion/paga-pecar/111099-3.aspx> consultado marzo 2011.

³⁵⁶ “El Gobierno persuade; no presiona ni compra conciencias: Uribe”. Casa de Nariño, 19 de abril de 2008. Disponible en: <http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/abril/19/12192008.html> consultado en marzo de 2011.

³⁵⁷ “En 21 puntos cayó la imagen favorable del Congreso según encuesta bimestral de Gallup”. El Tiempo, 1 de mayo de 2008.

³⁵⁸ “Tasmania dispuesto a retractarse públicamente de acusación que formuló contra magistrado”. El Tiempo, 18 de Junio de 2008.

Al tiempo que en las calles se especulaba sobre los hechos que conocía el país, el escándalo de la Yidispolítica arrojó una sentencia condenatoria de 47 meses de prisión en contra de la ex representante Yidis Medina, en la que la Corte Suprema de Justicia afirmó que habían quedado en evidencia las razones que motivaron a la representante a dar su voto en forma decisiva a la aprobación del Acto Legislativo: “las razones de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, indican que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara y manifiesta desviación de poder”, en este sentido “el delito no [podía] generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal” al primer mandatario reelegido, razón por la cual conminó a la Corte Constitucional a revisar la legalidad del referendo reeleccionista que había llevado al poder a Álvaro Uribe Vélez.³⁵⁹ El primer mandatario reaccionó a la decisión de la Corte emitiendo un comunicado:

"Las decisiones anunciadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia me obligan a expresar al país lo siguiente: 1. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se basa en la autoincriminación por el delito de cohecho de una persona de claros antecedentes delictivos, para presionar indebidamente, mediante abuso de poder y usurpación de competencias, a otros órganos de administración de justicia, a fin de acusar a funcionarios honestos como parte del supuesto cohecho. También con el propósito de desvirtuar la transparencia democrática en la aprobación del Acto Legislativo de reelección presidencial, al acusar esta decisión de desviación de poder. 2. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha desestimado elementos probatorios que le han sido presentados, conocidos por la opinión pública, para demostrar que el delito de cohecho no se dio y que la persona autoincriminada cometió otros delitos, como la periódica extorsión a funcionarios públicos, tal cual lo concluiría cualquier observador objetivo. 3. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha llegado al extremo de presionar al Presidente de la República, a través de carta carente de rigor jurídico, en extraña protesta por la reciente decisión gubernamental que hizo efectiva la extradición de varias personas. Esa carta fue ampliamente difundida por los medios de comunicación. 4. ***La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aplica justicia selectiva. Proceder que atemoriza a su juez constitucional, que es el Congreso de la República.*** 5. He ejercido la Presidencia de la República con amor a Colombia, con el único propósito de servir bien al interés general. He querido luchar por un país seguro, próspero y equitativo. ***La trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no parece tener solución judicial.*** 6. En consecuencia, el camino correcto debe ser la regla democrática. ***Convocaré al Congreso de la República para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de la elección presidencial de 2006, con idénticas o mayores restricciones para el Presidente, que aquellas que en su momento impuso la Ley de Garantías***".³⁶⁰ (Resaltado fuera de texto)

³⁵⁹ Ver entre otras: Se agudiza enfrentamiento entre el presidente Uribe y la Corte Suprema. Radio Santa Fe, junio de 2008. Disponible en: <http://www.radiosantafe.com/2008/07/02/se-agudiza-enfrentamiento-entre-el-presidente-uribe-y-la-corte-suprema/>. Consultado el 27 de julio de 2008.

³⁶⁰ “Referendo para que el pueblo ordene repetir elecciones del 2006 anunció el Presidente”. El Tiempo, 26 de junio de 2008.

Así, y mientras el gobierno anunciaba un referendo para que en sus palabras “el pueblo orde[nara] repetir las elecciones del 2006” y no quedara en duda su legitimidad, cuestionada por los magistrados de la Suprema quienes habían caído en la “trampa del terrorismo agónico”, en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se recibían varias denuncias contra los magistrados que habían votado la decisión. Por un lado, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, denunció presuntos nexos entre algunos magistrados de la Suprema y el narcotraficante Giorgio Sale; por otro, el Ministro de Protección Social de la época, Diego Palacios, radicó una petición de investigación por falsas imputaciones hechas en la providencia de la Yidispolítica.³⁶¹

Sin embargo, la petición de la Corte Suprema de Justicia a la Corte Constitucional no tuvo acogida, porque el máximo tribunal de lo Constitucional determinó que en el fallo de la reelección presidencial ya existía “cosa juzgada” y que no tenía competencia para pronunciarse sobre una sentencia ejecutoriada³⁶², al tiempo, el respaldo popular a la Corte Suprema se hacía más fuerte³⁶³, mientras la Corporación continuaba defendiéndose como de costumbre mediante comunicados:

“La Corte Suprema En sesión extraordinaria en sala plena del día de hoy, acordó. 1. Respaldo la decisión emitida por la sala de casación penal que, de acuerdo con su texto es el resultado de un estudio serio, objetivo y ponderado de las pruebas allegadas al proceso. Por tanto, su contenido es eminentemente jurídico, carece de motivaciones diferentes a los estrictamente constitucionales y legales. No pretende causar conflicto con otras autoridades, ni afectar la institucionalidad. 2. ***Exhortar al gobierno nacional a respetar y acatar las decisiones de la corte suprema de justicia, así como las de cualquier juez de la república, dado que ellos obedecen al ejercicio autónomo e independiente de la función jurisdiccional y en consecuencia cualquier incidencia indebida resquebraja y desquicia el estado social y democrático en derecho.*** 3. ***Rechazar enérgicamente las calificaciones, agravios e infundadas imputaciones contenidas en la alocución presidencial del 26 de junio, dado que en ningún modo se ha presionado al presidente de la República, ni al Congreso de la República. Tampoco la Corte Suprema ha aplicado criterios de justicia selectiva. Ninguno de sus miembros cohonesto con el terrorismo.*** 4. Resaltar que la Corte Suprema de Justicia no ha protestado por la decisión del Presidente de la República de extraditar a los 14 jefes paramilitares. Simplemente esta corporación recibió del Jefe de Estado información necesaria para determinar su competencia respecto de la ley de Justicia y Paz. La sala de casación penal desde el año 2001 ha emitido 902 conceptos favorables en materia de extradición. 5. ***Señalar que la remisión de copias de***

³⁶¹ Ver entre otras: “Presentan dos denuncias contra magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema”. El Tiempo, 27 de Junio de 2008. “Gobierno contraataca a Corte con denuncia a sus Magistrados”. El Tiempo, 27 de Junio de 2008.

³⁶² “Corte Constitucional no revisará fallo que dio vía libre a la reelección del Presidente Uribe”. El Tiempo, 2 de Julio de 2008.

³⁶³ “CUT llama a marcha de respaldo a la Corte Suprema de Justicia, el 3 de Julio”. El Tiempo, 30 de junio de 2008.

la sentencia condenatoria contra la ex congresista Yidis Medina a la Corte Constitucional y a la Procuraduría, para los fines que estimaran pertinentes no fue un acto caprichoso, abusivo o desestabilizar del orden jurídico. Tuvo como fundamento la Constitución Política, instrumentos internacionales y, concretamente, el artículo 21 de la ley 600 del 2000, que impone a los jueces de la república. Una vez verificada la existencia del delito y la responsabilidad de su autor, restablecer los derechos conculcados por la acción delictiva. 6. Respetar, se insiste, la potestad que tienen los ciudadanos para poner en conocimiento de las autoridades competentes las conductas de los magistrados que, a su juicio, deban ser investigados. Estos, a su vez, estarán prestos a dar explicaciones que requiera su juez natural. 7. *Por último, la Corte Suprema de Justicia acogiendo el clamor general, en aras de la preservación de las instituciones democráticas de la concordia y del bien de la nación, no entrará a fomentar polémicas estériles que impidan la realización de los fines del Estado*”.³⁶⁴ (Resaltado fuera de texto)

Una aparente calma le siguió a los días que vinieron, en apariencia motivada por uno de los encuentros entre el Presidente Uribe y el presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, con intervención de la Iglesia católica y uno de sus representantes el Cardenal Pedro Rubiano³⁶⁵, después del cual se llegó incluso a afirmar que las relaciones institucionales entre poderes públicos se encontraban restablecidas³⁶⁶, más sin embargo, un anuncio del gobierno sobre un nuevo intento de reforma a la justicia, vendría a trastocar nuevamente las relaciones recientemente “restablecidas”.³⁶⁷

Las Altas Corporaciones afirmaron que la reforma era más que inoportuna, llevándolas a señalar: “la lectura general ciudadana y en el contexto internacional es que (la propuesta de reforma) es una reacción contra la Rama Judicial por los importantes procesos que ha implementado la justicia en Colombia, especialmente por la parapolítica”.³⁶⁸ El malestar generado radicaba principalmente en que aun con procesos en curso sobre parapolítica, la reforma pretendía quitarle a la Corte Suprema la facultad de juzgar congresistas como única instancia, revivía la polémica figura de la cooptación –superada con la Constitución Política de 1991–, y ponía en manos del Presidente de la República, la elaboración de una terna exclusiva para elegir Procurador General de la Nación (hoy en día participan de la elección

³⁶⁴ “Acatar las decisiones judiciales le pidió la Corte Suprema de Justicia al Gobierno”. El Tiempo, 1 de julio de 2008.

³⁶⁵ “Álvaro Uribe y el presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, tuvieron primer acercamiento”. El Tiempo, 7 de Julio de 2008.

³⁶⁶ Ver entre otras: “Gobierno y Corte Suprema restablecieron relaciones institucionales”. El Tiempo, 10 de Julio de 2008. “Relación con el Gobierno está restablecida: Corte”. El Tiempo, 15 de Julio de 2008.

³⁶⁷ Ver entre otras: “Este es el polémico borrador de la gran reforma a la justicia”. El Tiempo, 6 de Julio de 2008. “Cortes siguen encontrando puntos de discordia con el Gobierno sobre reforma a la Justicia”. El Tiempo, 23 de Julio de 2008.

³⁶⁸ “Reforma a la justicia es inoportuna”. El Tiempo, 27 de Julio de 2008.

Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia).³⁶⁹ Ante la propuesta de reforma, la Corte Constitucional manifestó no dar por recibido el texto presentado, teniendo en cuenta que la reforma propuesta no respondía a un estudio que evidenciara la “necesidad, la pertinencia y consecuencias” de una iniciativa como la que se pretendía.³⁷⁰

Aun con la tensión en un alto punto con ocasión de la reforma a la justicia, nuevos acontecimientos agudizarían las relaciones entre Ejecutivo y Judicial. Ésta vez por la manifestación que una de las vinculadas a la investigación de la parapolítica le hizo al Presidente de la República -Nancy Patricia Gutiérrez (ex presidenta del Congreso)-, sobre la supuesta manipulación del proceso en su contra por parte de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, y que el primer mandatario le transmitió al país con las siguientes palabras: “algún senador me ha expresado que ha sentido, que le han querido pedir plata de sectores de la justicia. Yo le he dicho: ‘¿Por qué no lo denuncias?’ Y me ha dicho que ha sido de una manera tan sutil, que le parece difícil denunciar y que a demás teme hacerlo”.³⁷¹ Ante las acusaciones que parecían tener nombre propio, el magistrado Iván Velásquez manifestó a la opinión pública: “Ratifico, y todos pueden tomar confianza, que jamás he hecho promesas para seducir a un testigo; ni tampoco le he hecho promesas para salir del país. Solo le informo que existe un programa de protección a testigos”³⁷², la declaración se vio cobijada por el respaldo total de los magistrados de la Corte Suprema.

Este último enfrentamiento daría paso a uno más grande, cuando el Presidente de la República defendió la reforma judicial que se proponía desde el Gobierno, expresando su “necesidad” a fin de acabar con “cierta especie de roscograma que existe en la rama judicial”³⁷³. La reacción de la Rama Judicial no se hizo esperar, de inmediato, los magistrados entregaron declaraciones a los medios afirmando que la manifestación del Presidente era parte de una “campana de desprestigio” y que no se podían hacer

³⁶⁹ “Reforma quita dientes a las Cortes”. El Tiempo, 30 de Julio de 2008.

³⁷⁰ “Corte da por no recibido texto de reforma a la justicia”. El Tiempo, 31 de Julio de 2008.

³⁷¹ “Uribe denunció que “sectores de la justicia” han pedido dinero a congresistas procesados”. El Tiempo, 11 de Agosto de 2008.

³⁷² “Respaldo de la Corte Suprema a magistrado Iván Velásquez”. El Tiempo, 12 de Agosto de 2008.

³⁷³ “Uribe plantea acabar el “roscograma” en la justicia y organismos de control”. El Espectador, 13 de agosto de 2008.

afirmaciones sin sustento y sin denuncias, porque lo único que se lograba con eso era desprestigiar a la justicia.³⁷⁴ De su parte, la Corte Suprema de Justicia a través de uno de sus magistrados Jorge Arrubla, señaló: “la Corte considera que existe “presión” en su labor por parte de “autoridades públicas” en alusión a las reiteradas manifestaciones del presidente Álvaro Uribe y de varios ministros de cuestionar las decisiones de ese tribunal”, consideradas como una verdadera campaña de desprestigio en su contra y que no eran más que una estrategia del Gobierno: “Si yo no puedo defenderme, entonces desprestigio al juez y por ahí encuentro una forma de armar un nido de víboras y pescar en río revuelto”. Haciendo latente la posibilidad de acudir a escenarios internacionales de continuar la situación: “todos sabemos que en la ONU (Organización de Naciones Unidas) hay organismos para garantizar la independencia de los poderes judiciales en todo el universo”, y dando una explicación desde la perspectiva de los jueces al enfrentamiento presentado: “lo que está pasando en el país es que yo creo que nunca en la historia de la República había un proceso que tuviera tanta repercusión política (...) lo que si hay que esperar, sobre todo de las demás autoridades públicas, es que tengan un apoyo decidido y que confíen en su Corte Suprema (...) la Corte no se va a dejar amilanar ante ningún tipo de presión (...) la Corte Suprema de Justicia es garantía de todos los ciudadanos, garantía de un proceso justo y digno, de un debido proceso”.³⁷⁵

De la misma manera y por primera vez desde la génesis de los enfrentamientos, la Corte Suprema le pidió al Procurador General que investigara a los funcionarios estatales que hubiesen atacado a la Suprema o a sus magistrados, expresando su deseo de poner en conocimiento de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) o la Corte Interamericana lo que estaba sucediendo en el país en contra del poder judicial, acotando: “lo más grave de todo es que esas maquinaciones son difundidas por personas que por su investidura están llamadas, como ninguna otra, a cooperar con los jueces, a respaldar sus determinaciones”,³⁷⁶ y que al parecer estaban empezando a lograr su objetivo:

³⁷⁴ Ver entre otras: “En la rama judicial no hay ‘roscografía’ sino meritocracia”. El Tiempo, 18 de Agosto de 2008. “Que miren cuántas embajadas le pertenecen al Ejecutivo y al Legislativo: magistrado Enrique Gil”. El Tiempo, 17 de Agosto de 2008. “Quieren debilitar la justicia y acabar con autonomía de los jueces”. El Tiempo, 17 de Agosto de 2008.

³⁷⁵ “Denunciaría Corte Suprema a la autoridad pública ante tribunales internacionales”. El Tiempo, 15 de Agosto de 2008.

³⁷⁶ “Corte pide investigar a quienes la atacan”. El Tiempo, 15 de Agosto de 2008.

“este pronunciamiento se da días después de que se conoció que uno de los nueve magistrados de la Sala votó en contra del aval que dio la corporación a la extradición del ex jefe para “HH”, lo que rompió la unanimidad con la que votaba la Sala desde que comenzó la ‘parapolítica’”³⁷⁷

Al finalizar agosto, la visita de dos enviados de un reconocido paramilitar: alias “Don Berna” al Palacio de Nariño, entre ellos uno conocido como alias “Job” desató un nuevo escándalo. A juicio del Gobierno, los paramilitares fueron recibidos por que tenían información valiosa sobre “manipulación de testigos” por parte de la Corte Suprema y que involucraba nuevamente a Iván Velásquez, cuestionado por el Presidente de la República por “emborracharse con los testigos (...) en referencia a una visita de ese funcionario a Yopal, donde departió con una potencial informante en un sitio público”. Las declaraciones fueron desmentidas por el presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, quien calificó el hecho como “un montaje de un sector del Gobierno que está aliado con los jefes paramilitares”.³⁷⁸ A su vez el Ejecutivo contestó: “toda persona que quiera dar una información seria sobre manipulación de testigos aquí la recibimos, Colombia tiene que recuperar el imperio estatal de la justicia (...) no tenemos interés de enlodar a los magistrados, sino interés en que la política contra el crimen sea una política imparcial y sin manipulación de testigos”³⁷⁹, mientras tanto algunas marchas de respaldo a la Suprema tuvieron lugar con ocasión del enfrentamiento, esta vez en La Alpujarra, Medellín.³⁸⁰

La pelea de medios continuó, de un lado el presidente de la Corte Suprema (Francisco Ricaurte) manifestaba su preocupación: “nos preocupa el ánimo permanente del Gobierno de tratar de desacreditar a los magistrados, de deslegitimar sus decisiones y de poner en entredicho las investigaciones que viene adelantando la Corte (...) esto lo hace mediante ataques verbales, injuriosos y difamaciones, con lo cual está conduciendo a la

³⁷⁷ *Ibídem.*

³⁷⁸ “Vuelve tensión Uribe-Corte por visita de ‘Job’ a la Casa de Nariño”. El Tiempo, 26 de Agosto de 2008.

³⁷⁹ *Ibídem.*

³⁸⁰ “Dos altas cortes también piden bajarle el tono al enfrentamiento entre rama judicial y el Gobierno”. El Tiempo, 29 de Agosto de 2008.

desinstitucionalización de la justicia. Y cuando esto ocurre, indudablemente se agrieta la democracia (...) es que tildar a la Corte Suprema de Justicia de golpista, decir que sus decisiones están impregnadas de un sesgo ideológico, afirmar que sus determinaciones son el coletazo agónico del terrorismo y que la Corte ejerce una especie de ‘pesca milagrosa’ son acusaciones encaminadas sólo a deslegitimar las decisiones de la Corte y a debilitarla”³⁸¹; de otro, el Presidente de la República contestaba: “le recuerdo al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a sus animadores políticos que detrás de su discurso hay consuetas de la política. Su discurso tiene inspiración política”.³⁸²

Las declaraciones de uno y otro Poder público, encabezaban los titulares de la prensa y llamaron la atención de organismos internacionales que visitaron por la época al país. Así, el entonces relator para la independencia, Leandro O. Despouy, en su visita recomendó “medura y racionalidad”: “los conflictos se agrandan en los micrófonos, por eso debe buscarse un diálogo que dé frutos (...) me siento preocupado por los testimonios que he recibido y sobre todo por el momento que atraviesa Colombia”³⁸³, sus declaraciones fueron fuertemente rebatidas por el Primer Mandatario, quien sobre el tema expresó: “quiero que el delegado de Naciones Unidas, antes de dar declaraciones que creen suspicacias sobre el país, estudie bien los temas. Primero hay que estudiar y después darles la cara a los medios de comunicación. Que estudie bien la reforma a la justicia. (...) ¿Acaso respetar la independencia de la justicia es negar la discrepancia?”,³⁸⁴ de igual forma arremetió contra la Corte por ventilar el caso ante organismos internacionales: “me preocupa que la Corte lance ante Naciones Unidas unos cargos infundados contra el Gobierno y no permita que el Gobierno asista allí a examinar esos cargos”.³⁸⁵ Sin embargo, la preocupación internacional crecía, y una nueva manifestación ésta vez del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, le dio a entender al Gobierno que la justicia internacional estaba al tanto de lo que estaba sucediendo: “si los magistrados no tienen la capacidad de investigar, sino

³⁸¹ “Cuando está en riesgo la Justicia, está en riesgo la democracia, dice presidente de Corte Suprema”. El Tiempo, 30 de Agosto de 2008.

³⁸² “Álvaro Uribe siguió con pullas a la Corte”. El Tiempo, 5 de Septiembre de 2008.

³⁸³ “ONU evalúa si hay mérito para pronunciarse sobre crisis entre presidente Uribe y Corte Suprema”. El Tiempo, 5 de Septiembre de 2008.

³⁸⁴ “Uribe pide a delegado de la ONU, Leandro Despouy, informarse antes de dar declaraciones a medios”. El Tiempo, 6 de Septiembre de 2008.

³⁸⁵ “Nuevas críticas lanzó el Presidente Álvaro Uribe contra la Corte Suprema de Justicia”. El Tiempo, 6 de Septiembre de 2008.

lo pueden hacer yo podría considerar una intervención”.³⁸⁶ Mas sin embargo, y aun con las advertencias los señalamientos continuaban y el Presidente se mantenía emitiendo comunicados en los que le pedía a la justicia dejar de ser “golpistas” y de actuar lanzando carnadas como si fueran “pescas milagrosas”:

“El presidente Álvaro Uribe Vélez reiteró que todos los miembros del Estado de Derecho, especialmente la justicia, deben dar ejemplo contribuyendo con las investigaciones, en lugar de obstruirlas por solidaridad de cuerpo, ya que esto podría entenderse como una actuación golpista.

“La justicia tiene que dar ejemplo. Cuando la justicia se desvía en la aplicación de la norma y aplica por política, empieza a ser una justicia golpista contra el Estado de Derecho, y así como el Presidente no puede violar la norma, el Congreso tampoco, las Fuerzas Armadas no pueden ser golpistas.

Cuidado, la justicia tampoco puede ser golpista y lo sería en la medida que llegara a violar el Estado de Derecho y a salir a través de procedimientos ilícitos, indecentes, con resultados contrarios a la realidad”, indicó el Jefe de Estado en el programa periodístico La Noche, del Canal RCN.

La justicia no puede ser una pesca milagrosa **“La justicia no se puede ejercer como se práctica una pesca milagrosa, tirando una carnada a ver quién cae”**, fue la segunda reflexión del mandatario al referirse a los hechos registrados con la Corte Suprema de Justicia, luego de las denuncias hechas por dos ex paramilitares, según las cuales fueron abordados por la justicia para culpar al Presidente de la República por hechos delictivos, a cambio de beneficios.

“La justicia tiene que ser imparcial, profesional y estar en la balanza de la equidad. Colombia ha vivido las pescas milagrosas, salen unos delincuentes a tirar una carnada a ver quién cae, la justicia tiene que ser todo lo contrario”.³⁸⁷ (Resaltado fuera de texto)

De igual forma y ante lo tensionante de la situación, la CIDH otorgó medidas cautelares³⁸⁸ a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a su especial estado de vulnerabilidad frente a las investigaciones que realizaban:

³⁸⁶ Ver entre otras: “Otro llamado de atención internacional por choque entre Gobierno y Corte”. El Tiempo, 6 de Septiembre de 2008. “Ya son dos los organismos internacionales que ponen los ojos en pelea entre Corte Suprema y Gobierno”. El Tiempo, 5 de Septiembre de 2008.

³⁸⁷ Casa de Nariño, comunicado Presidencial de 12 de Octubre de 2008. Disponible en: <http://oacp.presidencia.gov.co/snerss/detalleNota.aspx?id=12297>

³⁸⁸ Las medidas cautelares se encuentran contempladas en el artículo 25 del reglamento de la CIDH, con el fin de proteger en casos de emergencia a personas que pudieran sufrir daños irremediables.

**Peticiones y Casos individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Medidas Cautelares. Cuadro No. 5.**

MC 269/07 Iván Velásquez Gómez
15. El 22 de diciembre de 2008 la CIDH dictó medidas cautelares a favor del Magistrado Auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez, quien se desempeña como coordinador de una “Comisión de Apoyo Investigativo” para esclarecer los posibles vínculos de miembros del Congreso Nacional de Colombia con organizaciones paramilitares. La solicitud de medidas cautelares indica <i>inter alia</i> que el Magistrado Velásquez sería blanco de señalamientos por parte de agentes del Estado, que se encontraría amenazado por causa de su actuación en los procesos de la llamada “parapolítica”, y que las medidas de protección previamente establecidas a su favor no resultarían adecuadas. El 22 de febrero de 2008 la CIDH inició un trámite de solicitud de información al Estado sobre el nivel de riesgo y el esquema de seguridad del Magistrado Iván Velásquez. Tras considerar la información provista por ambas partes sobre el contexto en el cual el Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez Gómez debe desempeñar sus funciones, la Comisión decidió adoptar medidas cautelares y solicitó al Estado garantizar la vida y la integridad física de Iván Velásquez Gómez, concertar las medidas a adoptarse con el beneficiario y los peticionarios e informar sobre las acciones destinadas a remover los factores de riesgo que justifican la vigencia de las medidas cautelares. La Comisión continúa dando seguimiento a la situación.
MC 93/08 María del Rosario González de Lemos
16. El 22 de diciembre de 2008 la CIDH dictó medidas cautelares a favor de la Magistrada Auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia María del Rosario González de Lemos quien ha participado activamente en el procesamiento de miembros del Congreso Nacional de Colombia acusados de mantener vínculos con organizaciones paramilitares. La solicitud de medidas cautelares indica <i>inter alia</i> que la Magistrada González de Lemos sería blanco de amenazas por causa de su actuación en los procesos de la llamada “parapolítica” y que las medidas de protección previamente establecidas a su favor no resultarían adecuadas. El 19 de mayo de 2008 la CIDH inició un trámite de solicitud de información al Estado sobre el nivel de riesgo y el esquema de seguridad de la Magistrada María del Rosario González de Lemos. Tras considerar la información provista por ambas partes sobre el contexto en el cual la Magistrada María del Rosario González de Lemos debe desempeñar sus funciones, la Comisión decidió adoptar medidas cautelares y solicitó al Estado garantizar su vida e integridad física; concertar las medidas a adoptarse con la beneficiaria y los peticionarios; e informar sobre las acciones destinadas a remover los factores de riesgo que justifican la vigencia de las medidas cautelares. La Comisión continúa dando seguimiento a la situación.

*Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2008.*³⁸⁹

El final del 2008, estuvo cargado de advertencias internacionales, medidas cautelares ofrecimientos de mediación y el desistimiento del gobierno del polémico proyecto de reforma a la justicia. Finalmente el Ex Relator para la Independencia ofreció su apoyo, manifestando a su vez una advertencia en caso de que los conflictos no cesaran: “creo que si fuera útil algún tipo de facilitación por parte de la relatoría trataría de llevarla adelante,

³⁸⁹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Peticiones y Casos individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/cap3.C.1.sp.htm>. Consultado abril de 2010.

ya lo he ofrecido (...) confío que esta situación de tensión va a resolverse de una manera favorable, no quisiera pensar que mañana tuviera que intervenir como relator especial en otra calidad”³⁹⁰, al tiempo que la ONG *Human Rights Watch*, emitía informe sobre la situación en Colombia titulado: “¿Rompiendo el control? Obstáculos a la justicia en las investigaciones de la mafia paramilitar en Colombia”, señalando “el Gobierno objeta y traba iniciativas de reforma del Congreso dirigidas a poner fin a la influencia paramilitar en esa institución”.³⁹¹ Ante las fuertes críticas, el Gobierno retiró el proyecto de reforma a la justicia: “la modificación fue adoptada ante el inminente riesgo de que se hundiera por las críticas que había recibido de las Cortes, la oposición y hasta la propia bancada de Gobierno”³⁹², eso sí, anunciando que sería reformulado y presentado nuevamente en la próxima legislatura.

3.2.4. 2009: ¿el fin de los enfrentamientos?

El 2009 empezaría nuevamente con un enfriamiento de las relaciones entre Ejecutivo y Judicial³⁹³, prontamente superado por un nuevo escándalo motivado por la revelación –cada vez más específica– de interceptaciones ilegales a las comunicaciones privadas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia e incluso a sus familiares y personas más allegadas, catalogado como un “humillante espionaje”.³⁹⁴ Aun cuando el Presidente de la República anunció que se tomarían todas las medidas para evitar que hechos como esos volvieran a presentarse, los magistrados de la Suprema señalaron: “nuestras preocupaciones con motivo de las ‘chuzadas’ ilegales apuntan a establecer quién emitió las órdenes para hacer estas ‘chuzadas’ ilegales y a quiénes se les informó de esos resultados. (...) la decisión de que el DAS no haga más interceptaciones, anunciada por el Presidente, sólo

³⁹⁰ “Como mediador entre Uribe y las Cortes se ofreció relator para la independencia judicial”. El Tiempo, 8 de Septiembre de 2008.

³⁹¹ “Uribe obstaculiza la justicia, denuncia Human Rights Watch en su último informe sobre Colombia”. El Tiempo, 16 de Octubre de 2008.

³⁹² “Gobierno desistió de proyecto de reforma a la justicia para presentar otro con modificaciones”. El Tiempo, 23 de Septiembre de 2008.

³⁹³ “No hay choque de trenes con el Ejecutivo, dice nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”. El Tiempo, 16 de Enero de 2009.

³⁹⁴ “Complot en su contra con ‘chuzadas’ denuncia la Corte Suprema. El Tiempo, 25 de febrero de 2009.

puede evitar que se repitan hechos como estos”.³⁹⁵ La situación, fue descrita por la Fiscalía General de la Nación como “el más vulgar de los irrespetos a la majestad de la justicia y la más injustificable violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos”³⁹⁶, ya que “desde las dependencias del DAS se investigaba cada detalle de la vida privada de los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; así como la de por lo menos otros ocho magistrados de la Sala Civil y Laboral de ese alto tribunal”³⁹⁷

Frente a la situación que le dio la vuelta al mundo en titulares de prensa, el Presidente no tuvo otro camino que reunirse con los presidentes de las Altas Cortes y el Fiscal General de la Nación, para asegurarles que tal situación no volvería a tener lugar³⁹⁸, sin embargo y mientras se conocían alarmantes resultados de las investigaciones que involucraban a funcionarios de Gobierno, los Altos Tribunales continuaron solicitando al Gobierno explicaciones sobre su participación en las interceptaciones ilegales³⁹⁹, mientras exigían la intervención del relator de la ONU para la Independencia Judicial.⁴⁰⁰

Mediante un comunicado de la Casa de Nariño, el Gobierno expresó su inconformidad hacia algunos medios de comunicación que habían señalado la relación Gobierno-chuzadas, desmintiéndola y asegurando que se encontraba al margen de la misma.⁴⁰¹ Al enfrentamiento le sucedería un ofrecimiento de mediación por parte del Procurador General de la Nación, que fue aceptado por el Presidente Uribe: “El Gobierno, y yo como Presidente, la recibimos (la carta) con el mayor respeto y entendemos el ánimo del

³⁹⁵ “Medida no es contundente para hallar responsables de ‘chuzadas’: presidente de la Corte Suprema”. El Tiempo, 26 de febrero de 2009.

³⁹⁶ “Seguimientos del DAS a magistrados son un claro ataque a la seguridad del Estado: Mario Iguarán”. El Tiempo, 25 de Abril de 2009.

³⁹⁷ “Como ‘hedor’ llamó el Fiscal situación en el DAS por informe sobre ‘chuzadas’”. El Tiempo, 20 de abril de 2009.

³⁹⁸ “Gobierno se compromete a no permitir seguimientos ilegales contra magistrados en el futuro”. El Tiempo, 11 de Mayo de 2009.

³⁹⁹ Ver entre otras: “Nuevas explicaciones sobre el caso de las ‘chuzadas’ pidieron al Gobierno dos altos tribunales”. El Tiempo, 14 de mayo de 2009. “Nuevo divorcio entre Ejecutivo y cortes por escándalo de las Chuzadas”. El Tiempo, 14 de mayo de 2009.

⁴⁰⁰ “Alto Tribunal exige presencia de Relator de ONU para la Independencia Judicial. Corte Suprema y Consejo de Estado vuelven a pedirle a Uribe que hable”. El Tiempo, 15 de mayo de 2009.

⁴⁰¹ “Gobierno dice que no dio instrucciones a ex miembros del DAS para grabar a magistrados y periodistas”. El Tiempo, 18 de mayo de 2009.

Procurador General de contribuir a que las Ramas del Poder trabajen por los fines superiores del pueblo y el Estado”.⁴⁰²

Durante el curso de este año tampoco faltaron las amenazas a jueces y magistrados⁴⁰³, y dada su gravedad, el Presidente Uribe se comprometió a darles más seguridad a los magistrados y sus familias⁴⁰⁴, teniendo en cuenta los alarmantes estudios de seguridad.⁴⁰⁵ No obstante, un último acontecimiento enfrentaría a Corte y Presidente, desbordando incluso los años que son objeto del presente estudio: la elección de Fiscal General de la Nación. Dicha elección, que se encuentra a cargo de la Corte Suprema de Justicia por mandato constitucional, de terna enviada por el Presidente de la República, se convirtió en motivo de enfrentamiento entre Poder Judicial y Ejecutivo, cuando la Suprema se negó a escoger Fiscal General por considerar “inviabile” la terna presentada por el Gobierno. El malestar generado en el Ejecutivo no fue poco, y llevó al Ministro del Interior y de Justicia, Valencia Cossio, a emitir un comunicado en el que le solicitaba a la Corte cumplir con sus funciones so pena de “quebrantar el orden institucional”⁴⁰⁶, al tiempo que el Presidente Uribe manifestaba ante los medios de comunicación: “El Presidente de la República no puede poner menos requisitos de los que exige la Constitución, pero tampoco al Presidente de la República se le pueden exigir para sus decisiones más requisitos de los que exige la Constitución (...) no es admisible que jueces de la República vayan a las direcciones de los periódicos a pedir que descabecen periodistas porque esos periodistas son críticos de

⁴⁰² Ver entre otras: “Con el mayor respeto recibió Uribe carta del Procurador pidiendo parar choque con la Corte Suprema”. El Tiempo, 22 de Junio de 2009. “Uribe acoge carta del Procurador sobre cese a discordia entre poderes”. El Tiempo, 23 de Junio de 2009.

⁴⁰³ “Magistrados de la Corte Suprema de Justicia denuncian amenazas en su contra”. El Tiempo, 20 de Agosto de 2009. “Investigan posible plan de atentados contra senadores y magistrados”. El Tiempo, 20 de Agosto de 2009. “Magistrados piden a la Policía más seguridad y que los tenga al tanto de investigaciones”. El Tiempo, 21 de agosto de 2009.

⁴⁰⁴ “A darle más seguridad a magistrados y sus familias se comprometió presidente Uribe con Corte Suprema”. El Tiempo, 24 de Agosto de 2009.

⁴⁰⁵ “Amenazas de violentos ponen a prueba la Justicia”. El Tiempo, 17 de Septiembre de 2009.

⁴⁰⁶ Ver entre otras: “Corte Suprema está obligada a elegir fiscal de la terna presentada por el Presidente: Gobierno”. El Tiempo, 18 de Septiembre de 2009. “Elección de Fiscal agudiza enfrentamiento entre Corte y Gobierno y deja en vilo a la justicia”. El Tiempo, 19 de Septiembre de 2009.

decisiones de jueces de la República”⁴⁰⁷, mientras la Corte Suprema defendía ante los medios sus decisiones.⁴⁰⁸

El Presidente continuó sus manifestaciones aseverando ante importantes emisoras radiales que no actuaba ni con “vanidad ni con terquedad”, y que le preocupaba la declaración del entonces presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, a El Espectador, según la cual ni él ni el vicepresidente de la Suprema le aseguraron al primer mandatario elegir Fiscal General si cambiaba uno de los nombres de la terna⁴⁰⁹, ya que tal afirmación se había dado en las reuniones con la Corte Suprema, y que de ninguna manera el Presidente cambiaría la terna para elegir Fiscal General. De tal magnitud fue la entrevista radial, que el Presidente emitió un comunicado oficial para aclarar las declaraciones, señalando de “muy grave” el que el presidente de la Suprema de Justicia estuviera “diciendo mentiras”⁴¹⁰ y expresando que contaba con “testigos para demostrarlo”⁴¹¹:

"El Gobierno Nacional es consciente de la necesaria colaboración armónica de los poderes públicos, pero lo es más de que para que haya una verdadera justicia es imprescindible que sus representantes obren siempre con apego a la verdad y la Ley. Si el Presidente de la Corte Suprema miente, ¿qué se puede esperar de su tarea de administrar justicia?"⁴¹²

De igual forma y como de costumbre, en el escenario de los Consejos Comunales, el Presidente continuaba refiriéndose a la renuencia de la Suprema para elegir Fiscal:

“Lo que no puede entender el Gobierno es que se siga diciendo que la terna es inviable. Nosotros hemos examinado la terna desde el punto de vista de la competencia jurídica, desde el punto de vista de la legitimidad del Gobierno y desde el punto de vista de la idoneidad de los ternados (...) Yo no

⁴⁰⁷ “Uribe criticó a la Corte Suprema por seguir considerando inviable terna para Fiscal”. El Tiempo, 31 de Octubre de 2009.

⁴⁰⁸ “Poder Ejecutivo amenaza independencia de Corte Suprema, denuncia Alto Tribunal”. El Tiempo, 6 de noviembre de 2009.

⁴⁰⁹ “Uribe no modificará la terna para escoger Fiscal y reiteró que es deber de la Corte votar”. El Tiempo, 22 de Noviembre de 2009.

⁴¹⁰ “Nuevo choque de Uribe con la Corte”. El Tiempo, 24 de Noviembre de 2009.

⁴¹¹ “Gobierno asegura que tiene testigos para demostrar que presidente de la Corte Suprema miente”. El Tiempo, 25 de Noviembre de 2009.

⁴¹² Presidencia de la República de Colombia. Secretaría de Prensa. Nota de Noviembre 25 de 2009.

lo sigo manejando en encerronas entre cuatro paredes en Bogotá, de espaldas al pueblo, para que finalmente los cálculos le presenten al país la protección ficticia de la Constitución a través de sepulcros blanqueados. Mejor que la hipocresía histórica de introducirle politiquería al valor de la Justicia, es traer el debate de cara al pueblo colombiano”.⁴¹³

Ante lo tensionante de la situación y de las declaraciones emitidas, el Procurador ofreció nuevamente mediar⁴¹⁴, mientras la tan esperada visita de la Relatoría de la ONU para la Independencia Judicial hizo su aparición en nuestro país, esta vez, con su nueva Relatora, la brasilera Carina Knaul de Albuquerque e Silva quien visitó a Colombia con el objetivo de analizar la situación de independencia y emitir un informe, en el que le realizó un importante llamado al Estado Colombiano por las declaraciones realizadas por sus dirigentes en contra de la “noble” labor de la justicia, las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de los magistrados y la falta de acuerdo para elegir Fiscal, situación que promovía la interinidad en la justicia.⁴¹⁵ Así, los puntos clave del informe de la Relatora y que fueron expresados por ella al dejar el país, son:

- En Colombia existe un ambiente de inseguridad y temor entre los operadores jurídicos, razón por la cual deben tomarse medidas urgentes para proteger a “quienes han puesto su vida al servicio de la justicia”.
- En nuestro país existen otros factores que favorecen la impunidad: falta de recursos suficientes de la Rama Judicial, atraso en la consideración y tramitación de casos, ausencia de adecuadas investigaciones previas, lo que ha llevado al país a que todavía se investiguen masacres de los 80’s e incluso la toma del Palacio de Justicia.

⁴¹³ Casa de Nariño, comunicado Presidencial de 31 de Octubre de 2009. Disponible en: <http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/octubre/31/04312009.html>

⁴¹⁴ Ver entre otras: “El Procurador inicia gestión para frenar choque de trenes entre la Corte y Uribe”. El Tiempo, 25 de Noviembre de 2009. “Álvaro Uribe debe dialogar con la Corte: Ex magistrados”. El Tiempo, 26 de Noviembre de 2009. “Uribe acepta mediación de Ordoñez”. El Tiempo, 26 de Noviembre de 2009.

⁴¹⁵ Ver entre otras: “Relatora de la ONU para Independencia Judicial analizará el roce por terna para Fiscal”. El Tiempo, 6 de Diciembre de 2009. “Relatora de la ONU para la Independencia Judicial expresó preocupación por interinidad en Fiscalía”. El Tiempo, 10 de Diciembre de 2009.

- Se debe superar la situación de interinidad y provisionalidad de la Fiscalía General de la Nación.
- “La alta investidura de quienes ejercen nobles funciones al servicio de la justicia exige consideración, respeto y cortesía por parte de las autoridades de los demás Poderes de la República y de los particulares. Observo con preocupación algunas declaraciones formuladas recientemente ante medios de comunicación por representantes de otros Poderes del Estado e invoco a que se respete el hecho que estas personas han dedicado su vida al servicio de la justicia”.⁴¹⁶

Finalmente, la Relatora señaló: “el trabajo efectuado por la Corte Suprema de Justicia en la conducción de los procesos de la llamada "parapolítica" es una contribución efectiva al combate contra la impunidad. La imparcialidad y firmeza demostradas han sido plenamente reconocidas por la sociedad colombiana” y reiteró de manera oficial: “Los integrantes de los otros poderes del Estado deben cumplir los fallos judiciales y abstenerse de toda invocación al no acatamiento de una sentencia así como de toda declaración conducente al descrédito o descalificación de magistrados, jueces y abogados”⁴¹⁷

⁴¹⁶ Declaración la Relatora de las Naciones Unidas para la Independencia de la Justicia, Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Disponible en:

http://www.nacionesunidas.org.co/img_upload/29e3d3aa1b87e476b58e75187297599e/Declaracion_Relatora.pdf

⁴¹⁷ Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva - Adición - Misión a Colombia. 16 de abril de 2010. Disponible en: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/129/59/PDF/G1012959.pdf?OpenElement>

3.3 INTROMISIONES INDEBIDAS EN LA FUNCIÓN DE ADMINISTRAR JUSTICIA PRESENTES EN EL CASO COLOMBIANO DESDE LOS AVANCES DEL SISTEMA INTERAMERICANO

3.3.1. Intromisiones indebidas presentes en el caso colombiano

De seguro el lector que ha seguido estas páginas, tiene ya una intuición de las posibles intromisiones presentes en la labor de administrar justicia en Colombia durante los años objeto de estudio, pero es compromiso de ésta autora revelar, lo que a su juicio y desde los parámetros señalados al iniciar el capítulo, constituyen una intromisión a la justicia que pueda traducirse en la vulneración al derecho humano a la independencia judicial. Para llevar a cabo tal labor, se analizaron en total 6.966 noticias de los diarios El Tiempo y El Espectador; las revistas Semana y la Silla Vacía; y principalmente los comunicados de la Casa de Nariño y de la Corte Suprema de Justicia, así como varias de sus decisiones en temas relacionados con el objeto de estudio.

Un primer análisis nos permite determinar que los enfrentamientos presentados tienen necesariamente dos actores: el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, cabeza de la Jurisdicción Ordinaria, y que los mismos tienen inicio con un proyecto de reforma a la justicia que buscaba mediar entre el enfrentamiento originado por la tutela contra sentencias entre Corte Suprema y Corte Constitucional, y en definitiva por un fenómeno que arrojó más de 80 investigaciones contra congresistas en su mayoría de la bancada de Gobierno, conocido como “parapolítica”. El número de noticias encontrado constituye un indicador de los enfrentamientos presentados entre Ejecutivo y Judicial y nos permite establecer que, el año que registran mayor número de noticias que se refieren a momentos de tensión entre la Corte Suprema y el Ejecutivo, es sin duda el 2008, en el que se encontraron alrededor de 2.846 noticias relacionadas con los enfrentamientos; seguido por el 2007 con un total de 1.420 noticias y por el 2009 con 1.880. El año con menor número de noticias, pero que tal y

como lo menciona la investigación, da origen a todo, es el 2006 con 820, específicamente en los meses de septiembre, noviembre y diciembre.

Los enfrentamientos presentes en el caso colombiano durante el periodo estudiado (2006-2009), que a juicio de esta autora constituyen verdaderas intromisiones del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, obedecen en su mayoría a la siguiente tipología:

Tipología de Intromisiones del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Cuadro No. 6.

Tipología de intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial presentes en el caso colombiano durante el periodo 2006-2009.	<i>Lenguaje virulento</i> por parte del Presidente de la República, Ministros y altos funcionarios, dirigido a deslegitimar las decisiones de la C.S.J. y a cuestionar la independencia y honorabilidad de los magistrados.
	<i>Denuncias penales</i> en contra de magistrados de la C.S.J. por parte del Presidente de la República, Ministros y altos funcionarios.
	<i>Solicitud de reuniones para discutir providencias</i> , por parte del Presidente de la República.
	<i>Uso de reforma a la justicia como elemento intimidatorio.</i> Propuesta de la reforma cada vez que se agudizaban los enfrentamientos, anunciándola incluso como método para depurar la justicia o para acabar con su “roscograma”.

Fuente: Elaboración propia

Es así como, de las noticias analizadas pueden desprenderse estas intromisiones recurrentes que escapan al marco normativo colombiano y contrarían la jurisprudencia de la Corte IDH, tal y como pretende demostrarse. Para lograr tal objetivo, se propone un análisis de cada uno de los años de enfrentamiento entre Corte Suprema de Justicia y Gobierno Uribe

(2006-2009), graficándolos y haciendo uso de colores para identificar las intromisiones desde la tipología propuesta; los hechos que se presentaron y que no necesariamente representan ataques del Ejecutivo, pero que dan cuenta de un ambiente generalizado de falta de independencia; la actitud de defensa que tuvo que asumir la Suprema para defender su independencia; los momentos de calma; y los hechos que se consideran positivos para la IJ.

Los siguientes son los colores que se proponen como elementos de análisis de los hechos que tuvieron lugar en el escenario colombiano durante el periodo descrito:

Análisis por colores del periodo 2006-2009. Cuadro No.7.

Elementos de Análisis de los hechos que tuvieron lugar en Colombia durante el periodo 2006 - 2009.	Color	Representa	Descripción
		Intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial	Lenguaje virulento; denuncias penales; solicitud de reuniones para discutir providencias y uso de la reforma a la justicia como elemento intimidatorio.
		Acontecimiento que nos da indicio de un ambiente generalizado de falta de independencia, pero que no representa necesariamente intromisión por parte de otros poderes del Estado o sectores.	Intervención de organismo o actor internacional pronunciándose sobre el conflicto; percepción de IJ por parte de los integrantes de la Rama Judicial; denuncias temerarias de paramilitares con retractaciones posteriores; amenazas a la vida y seguridad personal de magistrados.
		Actitud defensiva de la Corte Suprema frente a las intromisiones.	C.S.J. se defiende mediante comunicados; C.S.J. pide intervención de terceros en el contexto nacional, C.S.J. pide intervención de terceros en el contexto internacional.
		Momentos de relativa calma entre los actores enfrentados	Gobierno retira proyecto de reforma a la justicia; silencio prolongado por parte de los actores enfrentados.
		Acción positiva encaminada a fortalecer la IJ o a respetarla.	Discursos respetuosos de la IJ; Refuerzo de seguridad; diálogo constructivo entre actores.
		Acontecimiento registrado como normal y necesario para entender el curso de los acontecimientos durante el año	Descripción de hechos que permiten entender intromisiones.

Fuente: Elaboración propia

3.3.1.1. Análisis de intromisiones año 2006

Análisis por colores del año 2006. Cuadro No. 8.

Mes	Día	Acontecimiento registrado en los medios
Septiembre	24	Presidente interviene en "choque de trenes" con proyecto de reforma a la justicia.
	25	Presidente responde a reclamo de Corte Suprema de Justicia.
	27	Cortes y Fiscalía presentan su propio proyecto de reforma a la justicia.
Noviembre	1	Gobierno aplaza reforma a la justicia.
	18	Presidente pronuncia en conmemoración de los 120 años de la C.S.J. discurso de respeto a la independencia de los jueces y se pronuncia por primera vez sobre el reciente escándalo de enjuiciamiento a políticos relacionados con el paramilitarismo.
Diciembre	20	Presidente refuerza a Sala Penal de la C.S.J. con personal técnico y profesional necesario para investigaciones.

Fuente: Elaboración propia

Así y durante el 2006, sólo encontramos en color rosado la respuesta del Presidente de la República al reclamo realizado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que los enfrentamientos, tal y como la ha señalado la Relatoría de la ONU para la Independencia judicial, se agrandan en los micrófonos y lesionan la independencia de los jueces. Mas sin embargo, no lo entendemos como una intromisión, sino más bien como una respuesta del Ejecutivo a un duro reclamo del Judicial, que no debió darse ante la opinión pública y que da muestras de falta de respeto a la IJ. Recordemos también, que la libertad de expresión de los jefes de Estado encuentra límites en la independencia de la judicatura y que su uso desbordado, por parte de personajes que ostentan cargos de elección popular, puede generar desconfianza y deslegitimación de la justicia. De la misma manera, se resaltan en la gráfica dos acontecimientos que se consideran positivos para la IJ: un discurso respetuoso de la misma por parte del primer mandatario, y el refuerzo de la Sala Penal en materia de personal, para enfrentar las investigaciones venideras. Aun cuando se reconozca tal hecho, debe hacerse una salvedad, que podría llevar a variar el color de clasificación, ya que como lo sostuvo la Relatora de la ONU en materia de IJ, en su informe

sobre Colombia, es necesario apuntar a mayor presupuesto y a evitar la interinidad y la provisionalidad, en este sentido la justicia no debe estar supeditada a la voluntad de los mandatarios de turno para contar con los medios humanos y financieros necesarios para adelantar las investigaciones.

3.3.1.2. Análisis de intromisiones año 2007

Análisis por colores del año 2007. Cuadro No. 9.

Mes	Día	Acontecimiento registrado en los medios
Enero	19	Colombia conoce texto completo del Pacto de Ralito y estalla escándalo que recibe el nombre mediático de parapolítica"
	26	Magistrados que adelantan investigaciones empiezan a denunciar amenazas de muerte.
Febrero	18	C.S.J. dicta providencia ordenando por primera vez medidas de aseguramiento contra congresistas vinculados por parapolítica.
	19	Renuncia Canciller María Consuelo Araujo por escándalo de su hermano involucrado en parapolítica.
	26	<i>Ministro del Interior Carlos Holguín le pide a la Corte no investigar con "exclusividad" a los parapolíticos sino también a los FARCpolíticos.</i>
	31	Vicepresidente Santos propone sanciones "alternativas para parapolíticos (penas menores incluso excarcelación).
Marzo	31	Parapolíticos Empiezan a renunciar a su fuero para ser investigados por la Fiscalía General de la Nación y no por la C.S.J.
Mayo	22	C.S.J. pide mayor seguridad para magistrados que investigan parapolítica por incremento de amenazas.
	26	Presidente de la República pide estatus político a paramilitares.
Julio	11	C.S.J. descarta mediante providencia dar estatus político a paramilitares.
	25	<i>Presidente de la República afirma que decisión deja sin piso proceso de desmovilización y constituía un obstáculo al proceso de paz.</i>
	26	<i>Corte reclama respeto a su independencia judicial.</i>
	27	<i>Presidente contesta señalando que "la independencia judicial de la que están premunidos los tribunales es relativa" y que la C.S.J. tiene un sesgo ideológico.</i>
	28.	<i>C.S.J.: "Rechazamos la censura grave y peligrosa formulada por el Presidente de la República"</i>
	30	<i>C.S.J. explica ante los medios el alcance de su fallo.</i>
	2	Presidente de la República pide reunirse con C.S.J. para discutir su fallo.
Agosto	3	<i>C.S.J. emite comunicado señalando que la intervención del Ejecutivo produce desconfianza sobre la corporación y deslegitima la actividad que desarrolla, manifiesta que se reunirá de ser el caso con el Presidente pero que su fallo no puede entrar en discusión.</i>
Septiembre	26	Llaman a indagatoria a Mario Uribe, primo del Presidente de la República.
Octubre	6	Continúan las amenazas a magistrados de la C.S.J.

	8	<i>Presidente de la República, denuncia a la opinión pública la "Carta a Tasmania". "Sólo pueden existir tres hipótesis: el Presidente es un asesino, el testigo es un mentiroso, o los funcionarios que adelantan la investigación están montando una maniobra contra el Presidente"</i>
	9	<i>Magistrados contemplan renuncia masiva y emiten comunicado expresando su preocupación por el impacto que pueda darse en la ciudadanía con las intromisiones.</i>
Noviembre	20	<i>Se retira seguridad a magistrado Velásquez, investigador de parapolítica.</i>
	21	<i>C.S.J. se pronuncia para que se restablezca seguridad a magistrado y manifiesta que de no hacerlo acudirá a organismos internacionales.</i>
Diciembre	15	<i>General Naranjo se disculpa por error y restablece seguridad a magistrado.</i>
	19	<i>C.S.J. condena por parapolítica a primer congresista: Erik Morris.</i>

Fuente: Elaboración propia

De su parte, el 2007 inicia con el conocimiento del texto completo del “Pacto de Ralito” y termina con la primera condena a un Congresista por Concierto para Delinquir Agravado, o parapolítica. En rojo se resaltan las declaraciones del Ejecutivo motivadas por los procesos penales adelantados en contra de congresistas pertenecientes partidos políticos de la coalición de Gobierno, entre las que se resaltan graves declaraciones principalmente del Presidente de la República mediante las cuales señalaba a la opinión pública que los magistrados de la Suprema no estaban siendo objetivos y que tenían un sesgo ideológico; en verde, las declaraciones que la Suprema tuvo que hacer –en su mayoría mediante comunicados- para defenderse de los ataques e incluso explicar los alcances de sus decisiones, exhortando al Gobierno nacional a respetarlas; en rosado la percepción de seguridad de los magistrados que adelantaban las investigaciones por parapolítica, quienes día a día se sentían más intimidados por las amenazas que recibían en su contra y de sus familias, resaltándose en rojo un hecho relacionado, la filtración a la opinión pública de un informe de la Policía Nacional en el que se anunciaba retirar la seguridad al magistrado Velásquez, y que fue entendido como una amenaza por parte del Ejecutivo a la justicia con ocasión de la posición asumida por la Corte Suprema, el hecho puso al país en la mira de organismos internacionales como la Relatoría de la ONU y la Corte Penal Internacional; en color amarillo, un nuevo momento de distensión en las relaciones.

3.3.1.3. Análisis de intromisiones año 2008

Análisis por colores del año 2008. Cuadro No. 10.

Mes	Día	Acontecimiento registrado en los medios
	14	Magistrado Valencia Copete declara a El Espectador, haber recibido llamada del Presidente de la República preguntando por el caso de su primo Mario Uribe.
	16	<i>Presidente exige a magistrado Copete, retarctarse y decir la "verdad".</i>
	24	<i>Presidente interpone denuncia penal contra Copete afirmando que Mario Uribe, no había sido tema de conversación de ninguna llamada con Valencia, y que el objetivo del magistrado no era otro que “desestabilizar al Estado y afianzar su vanidad”</i>
	26	Informe HRW elogiando la importante labor de la Corte Suprema al juzgar a los implicados en el escándalo de la parapolítica y acusando al Presidente Uribe de tomar medidas que habían “socavado” los esfuerzos logrados.
Enero	18	<i>Empiezan a conocerse interceptaciones liegales a comunicaciones de Magistrados.</i>
Febrero	19	<i>C.S.J. pide a OEA ser veedora en decisiones judiciales relacionadas con parapolítica, ya que se estaban investigando a más de 61 congresistas.</i>
	19	<i>Ministro del Interior, Carlos Holguín, se pronunciaba a los medios: “¿Se quiere más sevicia contra el Congreso? ¡Tampoco! Presidente de la República pide "total objetividad en investigaciones".</i>
	20	Estalla un nuevo escándalo: la "Yidispolítica"
	2	C.S.J. emite sentencia condenatoria contra Yidis Medina, señalando que “las razones de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, indican que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara y manifiesta desviación de poder”, en este sentido "el delito no [podía] generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal" al primer mandatario reelegido, razón por la cual conminó a la Corte Constitucional a revisar la legalidad del referendo reeleccionista que había llevado al poder a Álvaro Uribe Vélez.
	18	<i>Se retracta Tasmania de acusaciones contra magistrado de la C.S.J.</i>
	26	<i>Presiedente pide que “el pueblo ordene repetir las elecciones del 2006” y no quede en duda su legitimidad, cuestionada por los magistrados de la Suprema quienes habían caído en la “trampa del terrorismo agónico”,</i>
	27	<i>Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes recibe varias denuncias contra los magistrados que habían votado la decisión por parte de altos funcionarios del Gobierno.</i>
	1	<i>C.S.J. emite comunicado exhortando al Gobierno Nacional a acatar sus decisiones.</i>
	2	Corte Constitucional rechaza petición de C.S.J. por cosa juzgada.
	7	Intervención de la iglesia para reunir a Presidente de la República y a Presidente de la Suprema de Justicia.
	23	<i>Gobierno presenta nuevo proyecto de reforma a la justicia.</i>
	27	C.S.J. expresa ante la opinión pública: “la lectura general ciudadana y en el contexto internacional es que (la propuesta de reforma) es una reacción contra la Rama Judicial por los importantes procesos que ha implementado la justicia en Colombia, especialmente por la parapolítica”
	31	Corte Constitucional da por no recibida la propuesta de reforma a la justicia.
Julio	11	<i>Presidente denuncia que funcionarios de la C.S.J. han pedido dinero a congresistas investigados.</i>
Agosto	12	<i>Magistrado Velásquez se defiende: “Ratifico, y todos pueden tomar confianza, que jamás he hecho promesas para seducir a un testigo; ni tampoco le he hecho promesas para salir del país. Solo le informo que existe un programa de protección a testigos”</i>
	13	<i>Presidente de la República defiende reforma a la justicia a fin de acabar con "roscograma en la justicia".</i>

	15	<i>C.S.J. pide a Procurador General investigar a quienes la persiguen manifestando su deseo de acudir a la CPI o a la Corte IDH.</i>
	18	<i>Magistrados se defienden ante los medios de comunicación, señalando que las declaraciones del Presidente hacían parte de una campaña de desprestigio y que se había roto la unanimidad en los votos que había caracterizado a las decisiones de parapolítica.</i>
	26	<i>Presidente recibe en Casa de Nariño a paramilitar alias "Job" por tener supuesta información de manipulación de testigos en C.S.J.</i>
	30	<i>C.S.J. expresa preocupación: “nos preocupa el ánimo permanente del Gobierno de tratar de desacreditar a los magistrados, de deslegitimar sus decisiones y de poner en entredicho las investigaciones que viene adelantando la Corte (...) esto lo hace mediante ataques verbales, injuriosos y difamaciones, con lo cual está conduciendo a la desinstitucionalización de la justicia. Y cuando esto ocurre, indudablemente se agrieta la democracia (...) es que tildar a la Corte Suprema de Justicia de golpista, decir que sus decisiones están impregnadas de un sesgo ideológico, afirmar que sus determinaciones son el coletazo agónico del terrorismo y que la Corte ejerce una especie de ‘pesca milagrosa’ son acusaciones encaminadas sólo a deslegitimar las decisiones de la Corte y a debilitarla”</i>
	5	<i>Presidente continuaba señalando ante medios: “le recuerdo al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a sus animadores políticos que detrás de su discurso hay consuetas de la política. Su discurso tiene inspiración política”.</i>
	5	<i>El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, le dio a entender al Gobierno que la justicia internacional estaba al tanto de lo que estaba sucediendo: “si los magistrados no tienen la capacidad de investigar, sino lo pueden hacer yo podría considerar una intervención”</i>
	6	<i>El entonces relator para la independencia, Leandro O. Despouy, en su visita recomendó “mesura y racionalidad”: “los conflictos se agrandan en los micrófonos, por eso debe buscarse un diálogo que dé frutos (...) me siento preocupado por los testimonios que he recibido y sobre todo por el momento que atraviesa Colombia”</i>
	7	<i>Presidente de la República pide a Leandro O. Despouy, informarse antes de dar declaraciones a medios, preguntando: ¿a caso respetar la independencia es negar la discrepancia?</i>
Septiembre	23	<i>Gobierno retira ante las críticas, proyecto de reforma a la justicia.</i>
Octubre	12	<i>Presidente tilda a Justicia de "golpista" y de practicar "pescas milagrosas".</i>
Diciembre	22	<i>CIDH otorga medidas cautelares a los magistrados Iván Velásquez y María del Rosario González.</i>

Fuente: Elaboración propia

El 2008 empieza con la declaración del magistrado Valencia Copeta señalando al Presidente de haberle realizado una llamada telefónica, preguntando por la situación jurídica su primo hermano Mario Uribe y la indignación del presidente frente a lo que él consideró una calumnia. Al hecho lo siguieron denuncias penales en contra del magistrado, y la revelación por parte de los medios de comunicación del escándalo de las “chuzadas” en el marco de la “Operación Paseo” dirigida por el Departamento Administrativo de Seguridad, a través de la cual se interceptaron de manera ilegal las comunicaciones de la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, líderes de oposición, periodistas, entre otros; también las declaraciones intemperantes del Presidente señalando a la Corte de

“golpista” y de hacer “pescas milagrosas”, de funcionar a través de “roscograma” y manipular testigos, cayendo en “la trampa del terrorismo agónico”, así como el intento de reforma a la justicia en un ambiente que daba a pensar que su impulso, constituía un ataque contra la Rama Judicial. Hechos todos clasificados con color rojo, por considerarse intromisiones indebidas a la labor de administración de justicia, de conformidad con la tipología citada.

En idéntico sentido el color rosado identifica hechos que evidencian afectación a la II, como la supuesta llamada del Presidente de la República a Valencia Copete, el informe de *Human Righth Watch* que le pide al Presidente dejar de “socavar” los esfuerzos logrados por la Suprema de Justicia, las advertencias del entonces Relator para la independencia y el Fiscal de la Corte Penal Internacional, como reacción ante lo sucedido y el otorgamiento por parte de la CIDH de medidas cautelares a dos magistrados investigadores de los procesos penales por parapolítica. En verde la reacciones de la Suprema pidiendo ayuda de organismos internacionales, y exigiendo a los nacionales, como la Procuraduría General, adelantar investigaciones en contra de quienes estaban interfiriendo en su labor de administrar justicia. En amarillo los pocos escenarios en los que parecieron aplacarse los enfrentamientos, siempre con la mediación de un tercero. En general y como se dijo, el 2008 es el año de mayor tensión entre Ejecutivo y Judicial con ocasión de los enfrentamientos constantes de sus actores.

3.3.1.4. Análisis de intromisiones año 2009

Análisis por colores del año 2009. Cuadro No.11.

Mes	Día	Acontecimiento registrado en los medios
Febrero	25	Presidente anuncia que tomará medidas para que no vuelvan a presentarse interceptaciones a las comunicaciones de los magistrados.
Abril	20	Fiscalía revela detalles de la investigación por "chuzadas" a magistrados señalándolas como "el más vulgar de los irrespetos a la majestad de la justicia y la más injustificable violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos".
Mayo	11	Presidente se reúne con magistrados para asegurarles que tal situación no volvería a tener lugar.
	14	<i>Cortes piden a Gobierno aclarar su participación en chuzadas.</i>
	18	Presidente niega cualquier tipo de participación en chuzadas.
Junio	22	Procurador General de la Nación ofrece mediar entre Uribe y Cortes.
Agosto	20	<i>Magistrados continuaron recibiendo amenazas por investigaciones.</i>
	24	Presidente se compromete a dar más seguridad a magistrados.
Septiembre	16	Conflicto con Suprema de Justicia por terna para elegir Fiscal General de la Nación
	17	<i>Ministro del Interior Valencia Cossio, emitió comunicado instando a la Corte a elegir fiscal para no "quebrantar el orden institucional"</i>
	31	<i>Presidente acusa a Justicia de actuar como sepúlcros blanqueados.</i>
Noviembre	6	<i>Presidente acusa a magistrados de "descabezar" a periodistas por ser críticos de las decisiones de los jueces.</i>
	22	<i>Presidente afirma que Suprema le aseguró elegir Fiscal si cambiaba la terna, y que no la cambiaría.</i>
	24	<i>Presidente emite comunicado señalando de "muy grave" que el presidente de la Suprema dijera "mentiras".</i>
	25	Procurador General de la Nación ofrece mediar nuevamente entre Uribe y Cortes.
Diciembre	7	Visita de la Relatoría de la ONU para la Independencia Judicial, con su nueva Relatora, la brasilera Carina Knaul de Albuquerque e Silva quien visitó a Colombia con el objetivo de analizar la situación de independencia y emitir un informe, en el que le realizó un importante llamado al Estado Colombiano por las declaraciones realizadas por sus dirigentes en contra de la "noble" labor de la justicia, las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de los magistrados y la falta de acuerdo para elegir Fiscal, situación que promovía la interinidad en la justicia.

Fuente: Elaboración propia

Con el otorgamiento de medidas cautelares al finalizar el 2008, una repentina calma caracterizó el inicio del 2009, acompañada de una actitud del primer mandatario dirigida a expresarle a la Corte Suprema su apoyo para evitar futuras interceptaciones ilegales a sus

comunicaciones, marcada en la gráfica con color amarillo, sin embargo los enfrentamientos empezarían otra vez, cuando se empezaron a conocer noticias sobre la posible participación del gobierno en el escándalo de las chuzadas. La actitud de la Corte Suprema de pedirle al Presidente respuestas sobre su participación, se marca en color verde por considerarse respuesta a lo que se tomó por parte del cuerpo judicial como un hecho que atentaba contra su independencia y derecho a la intimidad. El ambiente generado y que se considera nocivo para la IJ, se marca con el color rosado, teniendo en cuenta que sin ser una afectación directa, la afectan de manera indirecta. Es de resaltar que en su mayoría el 2009 se encuentra resaltado con color rosado, ya que el ambiente generado con las “chuzadas”, el conflicto en la terna para elegir Fiscal General de la Nación, la petición constante de ayuda internacional y la visita de la Relatora para la Independencia Judicial pronunciándose en su visita sobre los acontecimientos, se consideran nocivos para la independencia de los jueces. Nuevamente en rojo, se resaltan los ataques verbales del primer mandatario, contra los magistrados y la Corte Suprema en general acusándola de “descabezar” periodistas, de actuar como “sepulcros blanqueados” y principalmente a su presidente de “mentiroso”.

La anterior es una breve explicación de los fenómenos ocurridos entendidos como intromisiones, pero en las líneas finales de éste capítulo se explicará con precisión qué intromisiones se encuentran presentes en el caso colombiano desde los avances del Sistema Interamericano, buscando responder la pregunta que inicialmente fue planteada.

3.3.2. Desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La jurisprudencia interamericana ha establecido tres componentes principales del derecho a la IJ: *adecuado proceso de nombramiento, inamovilidad en el cargo y garantías contra presiones externas*. De los dos primeros dan cuenta los estudios que a la fecha se han hecho en Colombia y por lo general en América Latina, en síntesis el ordenamiento jurídico colombiano se ajusta a los parámetros fijados por la normatividad internacional y la jurisprudencia interamericana. En nuestro país, los jueces se someten a adecuados procesos

de nombramiento y gozan de inamovilidad en sus cargos en el marco de la Constitución Política y la ley, aun cuando se nos hagan importantes observaciones internacionales sobre la materia.⁴¹⁸, pero como se dijo nunca fue objetivo del presente trabajo investigativo abordar un estudio de la normatividad colombiana para asumir una posición frente a sus instituciones sino por el contrario analizarla en la práctica desde un grupo de acontecimientos de amplio conocimiento por parte de los colombianos durante el 2006 y 2009.

Desde ésta finalidad, y a partir del análisis de los acontecimientos estudiados durante el periodo 2006-2009 en el que son recurrentes como tipología de enfrentamientos: el lenguaje virulento, las denuncias penales, la solicitud de reuniones para discutir providencias y el uso de la reforma a la justicia como elemento intimidatorio, se ve comprometido el tercer componente del derecho: *garantías contra presiones externas*. Para sustentar tal afirmación, veamos algunos elementos comunes encontrados en los años estudiados a partir del barrido de prensa realizado que pueden servirnos de indicadores y que a continuación se resaltan:

- El conjunto de acontecimientos que se estudiaron, inician durante el 2006 con una pequeña discusión entre Ejecutivo y Corte Suprema de Justicia con ocasión de un texto de reforma a la justicia, sin embargo, el verdadero origen de los enfrentamientos recurrentes entre los mismos actores, parece estar motivado realmente por la apertura de los procesos por “parapolítica” al interior de la Corte Suprema de Justicia, que en su mayoría se adelantaron contra congresistas de la coalición de Gobierno e incluso, un primo hermano del primer mandatario.
- Las reacciones del Presidente de la República y de algunos de sus ministros frente al fenómeno, entregadas a la opinión pública a lo largo de los años

⁴¹⁸ La Relatora de la ONU para la independencia nos pide volcar los ojos a las tasas de provisionalidad e interinidad en la justicia. Al respecto ver: Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva - Adición - Misión a Colombia. *Op.Cit.*

objeto de estudio, se consideran excedidas y sumamente nocivas para la independencia de los jueces. Teniendo en cuenta la alta popularidad del mandatario y el cargo público que ostentaba, cualquier declaración en contra de las decisiones constituía un llamado a desacatarlas y en definitiva, menoscaban la legitimidad y confianza de la ciudadanía en una de las instituciones de la Rama Judicial, estas declaraciones reciben el nombre desde la jurisprudencia interamericana de *“lenguaje virulento”*. De esta manera y durante cuatro años, los colombianos escucharon en las declaraciones “virulentas” del mandatario que habían elegido en dos oportunidades y de su gabinete ministerial a través de emisoras radiales, semanarios, diarios, páginas web y revistas, que sus jueces no eran objetivos, que estaban sesgados ideológicamente, que sus decisiones al parecer favorecían a la guerrilla, que lejos de buscar justicia no eran más que el reflejo del “terrorismo agónico” que funcionaba como “roscograma”, haciendo “pescas milagrosas”, y que sus representantes “golpistas”, que a demás manipulaban testigos, mentían, lo que ponía en seria duda la credibilidad de sus decisiones.

- Durante los años estudiados se presentaron dos denuncias penales por parte del primer mandatario a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Iván Velásquez y César Julio Valencia Copete, quienes a demás, fueron receptores de la mayoría de ataques verbales del Presidente de la República, hecho que se considera lesivo de la independencia interna de éstos magistrados cuyas credibilidades se vieron seriamente comprometidas por las denuncias interpuestas. Una de ellas, la de Iván Velásquez fue archivada ante la retractación del paramilitar Tasmania sobre los hechos que lo involucraban y ocupó en la prensa tan sólo un pequeño espacio, en comparación con el sin número de titulares que cubrieron la denuncia penal del Presidente de la República contra uno de los investigadores de la parapolítica. A la fecha muchos saben que Velásquez fue denunciado penalmente por el Presidente, pocos, que Tasmania se retractó y que la

causa penal fue archivada, lo que constituye un pequeño ejemplo de la afectación que sufrieron el buen nombre y la honorabilidad del magistrado.

- El hecho de que el Presidente de la República recibiera en Palacio a un paramilitar (*alias Job*), con el objetivo de escuchar sus declaraciones sobre la supuesta manipulación de testigos que se daba en la Corte Suprema de Justicia, evidencia también un atentado indirecto contra la independencia de la justicia. Las declaraciones del paramilitar, que después se consideraron infundadas, tuvieron un gran despliegue mediático en el que se le informó al colombiano cómo la Presidencia recibía cada vez más indicios de que la Corte manipulaba testigos. Cabe resaltar que tal visita era innecesaria, porque en Colombia la Presidencia de la República no es la autoridad competente para recibir denuncias, en caso de estar en presencia de una, el Presidente debió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, ente competente para investigar, y no señalar que en la Presidencia se recibían denuncias de cualquier colombiano. El hecho fue recibido de manera negativa por la Suprema de Justicia, que lo percibió como un intento más de fabricación de pruebas en su contra y como una estrategia deslegitimadora de su función de administrar justicia.
- El ambiente de inseguridad generado en los magistrados con las investigaciones por parapolítica, fue la constante durante las investigaciones. La mayoría de magistrados, como lo registra la prensa, denunciaron llamadas y anónimos altamente intimidatorios que se consideran lesivos de la IJ. En su mayoría las amenazas eran personales, otras se dirigieron también contra los familiares de los magistrados, tanto así que en una ocasión todo un colegio fue desalojado de su jornada de clases por una llamada que anunció una bomba en el salón de clases de la hija de una de las magistradas investigadoras de la parapolítica. De igual forma se resalta el informe de seguridad del magistrado Velásquez revelado a los medios en el que se recomendaba quitarle la seguridad por no correr riesgos, y que causó conmoción entre la justicia por considerarse un ataque

del Ejecutivo con ocasión de los enfrentamientos entre Presidente y magistrado, que cesó con la petición de ayuda internacional y que llevó a la Policía General de la Nación a excusarse por su error y a restablecer la seguridad.

- Las reformas a la justicia durante el periodo descrito, lejos de obedecer a un debate nacional en el que confluyeran las opiniones de diferentes sectores y actores, aparece en el escenario colombiano como comodín. De esta manera, muchos de los magistrados denunciaron ante la opinión pública que sentían a los intentos de reforma a la justicia como un ataque en su contra, incluso para dejar en entredicho sus decisiones, como sucedió con el estatus político de los paramilitares; o para variar las competencias de la Corte Suprema de Justicia dando doble instancia a los enjuiciados por parapolítica. Aun cuando la polémica reforma a la justicia no obtuvo los resultados esperados por falta de respaldo, la misma fue utilizada como una carta que usaba el gobierno para cualquier jugada, es decir un comodín, que salía en el juego o en el escenario nacional, cada que se producía un enfrentamiento entre Ejecutivo y Judicial. En este sentido, una reforma a la justicia que no tenga en cuenta como actores a los integrantes del Poder Judicial, puede considerarse ampliamente nociva de la independencia de los jueces, si la misma es entendida como una intromisión por parte de los otros poderes del Estado con el fin de lograr sus objetivos y deslegitimar a las instituciones.
- De igual forma y como de grave afectación a la independencia de los jueces, puede catalogarse el hecho de que se descubrieran las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si soy juez ¿Cómo fallo con total independencia al descubrir que estoy siendo víctima de seguimientos y que existe una posibilidad de que provengan del Gobierno? En este sentido, los magistrados de la Suprema manifestaron su temor, pues al parecer las decisiones que habían tomado los habían vuelto enemigos del Ejecutivo.

- Durante el periodo descrito sobresalen las actitudes defensivas de la Corte Suprema, principalmente mediante comunicados, en las que le pedía al Ejecutivo respetar la independencia de los jueces y acatar sus decisiones. El llamado constante a la Procuraduría General de la Nación para que se investigaran a quienes no estaban respetando la independencia de los jueces y a los organismos internacionales para que se pronunciaran sobre lo que estaba sucediendo en Colombia, e incluso para que ordenaran al Estado colombiano la protección reforzada de magistrados que se encontraban en grave riesgo por las investigaciones que adelantaban, lo que motivó el otorgamiento de medidas cautelares de protección para dos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hechos todos que darían entender a un observador externo que en Colombia durante el periodo descrito, se gestó un ambiente generalizado de falta de independencia judicial, en el que los jueces tuvieron que salir a la opinión pública a defender sus providencias, a explicar sus actuaciones, a afirmar de manera enfática que no se reunirían con el primer mandatario para discutir sus decisiones judiciales, y en el que, necesariamente intervinieron –aunque de manera indirecta– los organismos internacionales, pidiéndole al Gobierno colombiano “cuidado” con sus declaraciones y respeto por la labor de administrar justicia.
- Vale la pena de igual forma resaltar, que no se encuentra tan si quiera una amonestación de una entidad del orden nacional al Presidente de la República o a sus ministros, por las declaraciones realizadas en lenguaje virulento. Así, salvo intentos de mediación por parte de la Procuraduría General no existe un llamado institucional para respetar la independencia, más allá del que tuvo que realizar en nombre propio la Corte Suprema de Justicia, y la justicia en general, desde los comunicados de apoyo emitidos por la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura.

Los anteriores puntos nos dan una visión de los elementos presentes durante los años estudiados y que nos permiten aproximarnos a las vulneraciones que podría detectar el Sistema Interamericano en un escenario como el colombiano durante el periodo estudiado, pudiendo sostener que los mismos infringen el tercer componente del derecho: *garantías contra presiones externas*, que implica proteger a los jueces y al poder judicial de posibles restricciones, influencias, alicientes, amenazas o intromisiones indebidas, directas o indirectas, de cualquier sector, por cualquier motivo.

Desde esta directriz del Sistema Interamericano, puede decirse que el Estado colombiano no garantizó el tercer componente del derecho, protegiendo a los jueces de las influencias externas que pudieran presentarse con ocasión de las importantes investigaciones que adelantaban. Aun cuando mantuvo la seguridad de los magistrados, existieron ataques no provenientes de actores ilegales, sino por el contrario de autoridades del orden nacional como el Presidente de la República y de sus ministros, dirigidos a poner en duda las decisiones judiciales, deslegitimándolas y menoscabando la confianza popular en la “justicia”, a través de un lenguaje virulento que como se ha dicho, erosiona las instituciones y en definitiva, a la independencia de los jueces entendida como principio pilar del Estado de derecho y como derecho humano de titularidad de los justiciables.

En este sentido, el derecho humano a la IJ implica dos obligaciones, una para el juez, en la que se le exige ser independiente juzgando únicamente movido por el derecho, y que se corroboró en el caso colombiano al no existir decisiones judiciales o disciplinarias que sostengan lo contrario, y al evidenciar en los jueces su deber de parecer independientes; y una segunda, del Estado desde su deber de respetar y garantizar el derecho a ser juzgado por un juez independiente. De esta manera frente al ***deber de respeto***, las autoridades colombianas tenían una obligación negativa que les exigía abstenerse de realizar injerencias indebidas en el poder judicial o en sus integrantes, deber omitido, por cuanto los principales ataques verbales y llamados desacreditadores de la justicia vienen del Gobierno y se dirigen al poder judicial en general, a la Corte Suprema de Justicia como institución y a sus

magistrados de forma individual como sus representantes, y se traducen en una vulneración de la independencia institucional y personal que debe caracterizar a los administradores de justicia.

De igual forma frente al *deber de garantía y prevención*, que ubica en cabeza de los Estados la obligación de prevenir dichas injerencias, investigar y sancionar a quienes las cometan, al igual que adoptar un apropiado marco normativo que asegure garantías contra presiones externas que puedan sufrir los jueces y el poder judicial en general, el Estado colombiano incumplió sus deberes por cuanto, no se conocen investigaciones dirigidas a determinar lo sucedido en Colombia durante el periodo descrito, ni llamados de atención por parte de las autoridades a los responsables de las injerencias, en pocas palabras el tema bajo estudio pasó a un segundo plano cuando, no tuvo lugar el tercer mandato del Presidente Uribe Vélez en Colombia y un nuevo Presidente asumió el poder, aun cuando las consecuencias de los acontecimientos descritos continúen conociéndose a través de investigaciones que se encuentran en curso sobre hechos específicos que constituyen tan sólo una parte de la problemática expuesta, como las revelaciones de las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de los magistrados por parte del Departamento Administrativo de Seguridad que dejan ya como implicados a la ex directora de éste Departamento Administrativo María del Pilar Hurtado (asilada en Panamá) y al entonces secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas (con medida de aseguramiento detención preventiva).

Desde lo estudiado y parafraseando a *Peretti*, los jueces en Colombia tienen la independencia que los políticos estén dispuestos a concederles⁴¹⁹, ya que aun cuando en nuestro ordenamiento se establezca desde la normas, que los jueces son independientes, los mismos no cuentan con mecanismos más allá de los ordinarios –disponibles para cualquier ciudadano- para defenderse de intromisiones provenientes de otras ramas del poder público.

⁴¹⁹ Peretti, Terri. Una Evaluación normativa del conocimiento científico social sobre la independencia judicial. En: En: Burgos Silva, Germán (Editor), “Independencia judicial en América Latina: de quién? para qué? cómo?”, Bogotá D. C.: Ediciones Ántropos Ltda, ILSA, Series Textos de Aquí y Ahora, 2003) pp.83 y Ss.

En este contexto, si un juez es víctima de intromisiones indebidas como las que se presentaron en el escenario colombiano principalmente por parte de otros poderes del Estado, esto es, aquellas que escapan al ordenamiento jurídico y que no se encuentran contempladas en los hechos, las reglas de decisión o las fuentes de derecho, como pueden serlo por ejemplo las expresiones que deslegitiman al poder judicial o a los aplicadores de justicia individualmente considerados, se encuentra desprotegido frente a las mismas. Esta falta de protección se traduce necesariamente en la vulneración al deber de garantía y prevención, desde la adopción de un marco normativo que asegure a los jueces garantías contra presiones externas, al no existir dicho marco, la justicia en Colombia queda supeditada a la voluntad de los gobernantes de turno, a la importancia que los otros poderes del Estado le den a la independencia de la justicia, sin que existan mecanismos para defender a los jueces de las intromisiones que puedan venir de las otras ramas del poder público.

En otras palabras, un juez en Colombia que se vea amenazado por un actor armado ilegal puede acudir a la Fiscalía General de la Nación en busca de seguridad, y aunque en ocasiones ésta falle, por lo menos se contempla esta posibilidad; a su vez, un juez que vea que su decisión quiera ser influenciada por un extremo procesal o por un tercero, puede acudir de igual forma a la justicia denunciando un delito, teniendo en cuenta que en nuestro país la eficaz y recta administración de justicia, constituye un bien jurídicamente tutelado por la justicia penal. Sin embargo, cuando los jueces presencian intromisiones de otras ramas del poder público, el escenario se torna incierto, al parecer el único camino posible estriba en emitir comunicados exhortando a respetar esta garantía.

Cuando un alto funcionario del Estado menoscaba la independencia de los jueces como sucedió en el escenario colombiano a partir del uso desmedido de palabras inapropiadas que desacreditan la justicia, no existen acciones judiciales ni administrativas que puedan adelantarse; respetar la independencia de los jueces es al parecer una opción en nuestro ordenamiento jurídico y no un mandato que responde al derecho humano de los justiciables

a recibir justicia de tribunales independientes. Colombia debe prestar total atención al respecto, pues en el periodo estudiado la única intervención presente fue la del Procurador General de la Nación, no para hacer un llamado a los funcionarios que se habían excedido en sus declaraciones, sino para intentar mediar, como si se tratara de dos sujetos con funciones similares y discrepancias sobre algún punto, cuando en realidad se trataba de dos ramas del poder público con funciones ampliamente delimitadas en la Constitución, y en la que una estaba ejerciendo influencia sobre otra.

Es de esta manera que a juicio de ésta autora y respondiendo a la pregunta guía de la presente investigación: ¿hasta qué punto puede ser el Estado colombiano responsable ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la vulneración a la independencia judicial entendida como derecho humano, con ocasión de las intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial durante el periodo 2006-2009? , que debe responderse, que aun cuando se arrojan suficientes elementos para determinar que existieron intromisiones indebidas en el caso colombiano y que nuestro ordenamiento jurídico carece de las suficientes *garantías contra presiones externas* para protección del Poder Judicial, lo que compromete el derecho humano a la IJ, el mismo no puede considerarse vulnerado.

Para explicar lo anterior y con el ánimo de no generar contradicciones, debemos volver a los elementos entregados durante el segundo capítulo, señalando como primera medida que como se dijo, la principal dificultad que le asiste en materia de IJ al litigante interamericano, es probatoria. Ya que la Corte exige para sancionar a un Estado parte en la Convención Americana por vulnerar la independencia de los jueces, que no sólo se sostenga que se vulneró la IJ sino que se demuestre en el terreno probatorio cómo se afectó realmente, esto es cómo se ejerció una influencia definitiva por parte de una de las ramas del poder público en la labor de administrar justicia.

Tal elemento no se evidencia en el caso colombiano, en el que los jueces resistieron a las intromisiones indebidas, aun desacreditados, aun con sus decisiones puestas en duda, sin ceder a la presión. En caso de que la Suprema de Justicia hubiera recibido al Presidente de la República para discutir sus decisiones, y las hubiera variado al punto de cesar las investigaciones que adelantaba, el Sistema Interamericano habilitaría sus puertas, para hacer exigible el derecho humano a la independencia judicial, poniendo en cabeza de los jueces el deber que les asiste de ser y parecer independientes.

Este derecho se haría exigible, aun cuando no estemos inmersos en los procesos judiciales que fallan los jueces en discusión, bajo el cargo de que ningún Estado a la luz de la Convención Americana puede ejecutar o tolerar en su territorio una práctica de violaciones a los derechos humanos, como sucedió en el caso *Apitz Barbera Vs. Venezuela*, aun cuando como se planteó, el que prospere un cargo de tal envergadura dependerá del material probatorio que la Comisión lleve a la Corte. En caso de que prospere, la consecuencia necesaria sería la responsabilidad agravada del Estado al que se endilga la violación, con una previa ventaja procesal, la posibilidad de acudir directamente al Sistema Interamericano para agotar los recursos internos, teniendo en cuenta que los mismos sin independencia de los jueces resultan tan sólo ilusorios.

Sobre este aspecto vale la pena realizarle también una sugerencia al Sistema Interamericano: volver sus ojos a los diferentes estudios sobre IJ, principalmente a los que la entienden como “proceso fáctico” del que dependen no sólo arreglos institucionales, sino también dinámicas propias de los actores y que debe analizarse en la práctica desde sus dimensiones, teniendo en cuenta a la hora de comprobar su vulneración que la misma es un fenómeno que no puede medirse de forma directa (como se explicó en el primer capítulo de la presente investigación). Éste llamado cobra relevancia, si se entiende que la Corte IDH ha abierto su campo de protección a los Estados que no garantizan la independencia de los jueces en los términos que aquí se han expuesto, ya que de no acatarlo incurriría con sus fallos en un error que haría imposible la sustentación del cargo ante el escenario

interamericano. ¿Cómo demuestro que mi juez no fue independiente? Necesariamente y aunque la Corte lo rechace en esta instancia de la jurisprudencia, tendré que hacerlo a través de indicadores, a los que específicamente podrían ayudar muchos los modelos de medición propuestos a lo largo del primer capítulo. Sobre la comprobación de la falta de independencia no existen como pretende exigirlo en su jurisprudencia la Corte IDH “hechos fehacientes” e inequívocos.

Desde esta perspectiva el caso colombiano queda sin sustento, ya que aun cuando pudiera fortalecerse a nivel probatorio con testimonios, dictámenes periciales, cifras estadísticas, entre otros, se requiere necesariamente que la rama Ejecutiva haya influenciado de manera decisiva en la judicial. Al respecto sólo un hecho resultó alarmante, cuando la Sala Penal dejó de fallar con unanimidad y tuvo por primera vez en la historia de los casos de parapolítica un salvamento de voto, sin embargo y más allá de eso, las decisiones de la Suprema se mantuvieron sin ceder ante la presión ejercida por el Ejecutivo.

De esta manera, y aun cuando Colombia no cumple con el contenido del derecho humano a la IJ y haber presenciado su vulneración, la misma no puede ser objeto de fallo por parte del Sistema Interamericano, porque en palabras de la jurisprudencia de la Corte IDH estuvimos en presencia de un “atentado que comprometió la independencia judicial” y que no contó con éxito, sin embargo insisto en llamarlo vulneración, porque como expresé, nuestro país debe tomarse en serio la independencia judicial por la importancia que la misma reviste y que ha intentado plantearse a lo largo de estas páginas.

En primer lugar, su marco normativo debe ampliarse al punto de contemplar garantías contra las presiones externas que puedan sufrir sus administradores de justicia; en segundo lugar, nuestro país en cumplimiento de su deber de *garantía y prevención* debe asegurarse de investigar y sancionar a quienes atenten contra la independencia de la justicia, sin importar la calidad del actor que promueva las intromisiones, haciéndole saber a la justicia

que en Colombia los jueces se rodean de las garantías suficientes como para fallar *sin temor o esperanza*.

Los hechos descritos y que tuvieron lugar en el territorio colombiano, tal vez no sean objeto de examen internacional, pero en definitiva deben dar lugar a una pregunta reflexiva a manera de autoevaluación: ¿estamos garantizando en nuestro país la independencia judicial en la mayor medida de lo posible? Quizá la respuesta alejándonos del estudio de nuestro marco normativo, parece poco satisfactoria, los jueces en Colombia siguen siendo víctimas del conflicto armado interno y en general de los actores ilegales; existe aún una alta tasa de interinidad y provisionalidad en la justicia; en ocasiones los jueces dependen (como dirían los autores de El Federalista) del brazo poderoso del Ejecutivo para cumplir con sus deberes constitucionales o legales, como sucede cuando el Ejecutivo da apoyo a la justicia a través de un acto emblemático para que pueda adelantar sus investigaciones o descongestionar a la justicia; y lo que resulta preocupante, los jueces al parecer están faltando a su deber de independencia, a punto tal que un 70% de los colombianos los veía en el 2007 como deshonestos⁴²⁰, punto que repercute en todo el Estado de Derecho, ya que como lo sostiene Dromi: “los jueces y quizá lo más importante, el valor de la justicia, están desacreditados, descalificados, menoscabados. Si un pueblo no cree en su justicia, todo el estado se desmoraliza y por lo tanto pierde autoridad, confiabilidad y justo título de mando”.⁴²¹

Si insistimos en creer que nuestros jueces son deshonestos, que cohonestan con el terrorismo y que en definitiva sus decisiones no son objetivas, se abre la puerta a la autocomposición por cualquier medio ilegítimo, a la impunidad, a la violencia, ya que justicia sin jueces independientes no es verdadera justicia. Corresponde entonces a nosotros como titulares del derecho exigir el respeto a la independencia de los jueces por parte del Estado y el deber de ser y parecer independientes a nuestros jueces, aún cuando no estemos

⁴²⁰ Corporación Excelencia en la Justicia. Estudio de percepción de la Justicia, Proyecto Necesidades Jurídicas Insatisfechas CEJ (2007). Disponible en: <http://www.cej.org.co/corrupcion/922-percepcion-de-la-honestidad-de-la-justicia-en-colombia> Consultado enero de 2011.

⁴²¹ Dromi, Roberto. Los jueces: ¿es la justicia un tercio del poder? Ediciones Ciudad Argentina. (Buenos Aires. 1992).

inmersos como sujetos procesales en las causas que fallan. De esta manera defenderemos también la justicia.

Pero alguien podría estarse preguntando todavía: ¿para qué defender la IJ cuando no siempre el juez al tenerla garantizada falla conforme a derecho, es decir, cuando es imposible eliminar del todo sus subjetividades? ¿Por qué proteger las decisiones judiciales de las influencias de los otros poderes del Estado o sectores sociales? ¿En qué radicaría la diferencia si la independencia del poder judicial y de los jueces estuviera garantizada en la mayor medida de lo posible?

La respuesta solo puede entenderse cuando se asume el rol del sujeto receptor de la decisión judicial, es decir, cuando tu y yo estamos separados por una diferencia que sólo puede resolver el mundo del derecho y que hemos entregado a un tercero para que la resuelva, esperando de él que tome la decisión más justa. No porque a él le parezca, no porque la crea más conveniente, sino porque así lo dictaminan las normas que hacen parte de ese contrato social que suscribimos al hacer parte de nuestras sociedades. Imaginemos entonces que esa decisión sea de tal trascendencia que implique nuestra libertad personal o incluso nuestra vida, si de la decisión de un tercero dependiera nuestro bien máspreciado saldríamos como ciudadanos a defender la independencia de los jueces, exigiéndole al fallador dar muestras de independencia, sin si quiera pensar por un minuto en la posibilidad de que un elemento extraño por más mínimo, pudiera influenciar en la decisión de ese tercero. En caso de evidenciar una influencia, por pequeña que fuera, la sospecha se ceñiría sobre la decisión tomada invitándonos a pensar que quizá no fue justa.

A manera de metáfora, tal vez un mito pueda ayudar a comprender la importancia de la independencia de los jueces. La mitología egipcia cuenta, que cuando alguien de esta tierra moría, su espíritu cruzaba las puertas del inframundo llegando a la Corte de Osiris en donde sería juzgado por sus actos, en atención al principio de “justicia universal” según el

cual, seremos tratados de la misma forma en que tratamos a los demás. La juzgadora no podía ser otra que *Maat*, la Diosa egipcia de la Justicia, encargada de tomar el corazón del difunto y ponerlo en una balanza del lado izquierdo del platillo, mientras del lado derecho se sentaba en perfecta alineación, sosteniendo su cetro y haciendo gala de la pluma de avestruz que adornaba su cabeza y que la representa. Si la balanza se equilibraba, el sujeto se encontraba en armonía con la justicia y sería exculpado, más sin embargo, si se inclinaba aunque fuera “ligeramente”, la justicia cobraría la deuda que tenía con ella, y lo lanzaría para ser devorado sin reparo por un monstruo terrorífico conocido como “la devoradora de poniente”.

Desde las míticas creencias egipcias, ninguno de nosotros podía escapar al juicio del inframundo en la Corte de Osiris, y es en ese momento en que muchos de nosotros podríamos pensar que si del equilibrio de esa balanza depende que no seamos devorados por “la devoradora de poniente”, bien vale la pena luchar para que tal equilibrio se mantenga, y para que sea cual sea la causa que se pese en la balanza, el contrapeso que le haga la justicia sea el que debe tener en consonancia con el Universo. Ni un gramo más, ni un gramo menos, ni la pluma de *Maat* puede faltar en la balanza, pero tampoco puede existir otra, porque si esto ocurre, se inclina, y aun cuando sea ligeramente, se deja de aplicar justicia, generando como consecuencia a quien recibe directamente la decisión, el castigo de la Corte de Osiris.

Las páginas que se le presentaron al lector constituyen un llamado a mantener el equilibrio de la balanza en nuestro país, a pensar en la independencia de la justicia como un asunto de justiciables, no sólo de jueces, como un derecho humano, en definitiva, como una garantía de todos y para todos, con la plena convicción de que su defensa al interior de nuestras sociedades constituye a su vez la defensa de la democracia y de los pilares del Estado de Derecho, teniendo en cuenta que desde su particular desarrollo y ante su falta de protección, el derecho internacional ha abierto una pequeña puerta para hacer exigible la responsabilidad de quien se atreva a transgredirla.

Conclusiones

Cuando se inició la elaboración de este texto buscando saber ¿hasta qué punto puede ser el Estado colombiano responsable ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la violación a la independencia judicial entendida como derecho humano, con ocasión de las intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial durante el periodo 2006-2009?, sólo algo se intuía, Colombia había transgredido el contenido del derecho desde su deber de respetar la IJ, así como de garantizarla y prevenir sus vulneraciones, desde los desarrollos de la jurisprudencia de la Corte IDH, sin embargo, era temprano para determinar si podría ser susceptible de responsabilidad internacional por tal hecho. Luego del camino recorrido y aunque la respuesta pueda desilusionar a quien esperaba responsabilidad internacional del Estado Colombiano por las intromisiones indebidas presentadas, para el objetivo de la investigación el resultado es más que satisfactorio.

El camino realizado permitió presentar un tema que se da por sentado como pieza del constitucionalismo histórico, esta vez desde tres visiones distintas, una de las cuales constituye una propuesta nueva ligada a los desarrollos de la justicia internacional y específicamente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos; propuesta en la que se ahondó y que nos permitió explorar el derecho humano a la IJ desde su evolución, contenido, titularidad y alcance; e incluso extenderse a su aplicación a un caso como el colombiano durante el periodo 2006-2009, ejercicio que puede ser de total utilidad para aplicación en casos futuros, incluso en otros contextos en los que las vulneraciones sean protagonizadas por otros Estados parte en la Convención Americana. Una pequeña contribución al derecho internacional en construcción desde la academia.

La investigación reflejó como propuesta entender a la IJ como derecho humano desde la visión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y específicamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene como origen histórico el surgimiento

como principio del Estado de Derecho y cuya efectividad necesariamente se corrobora en la práctica a través del desarrollo que pueda tener en sociedades específicas y en momentos determinados. De esta manera se explicó cómo podía ser entendida la IJ desde diversas aproximaciones analíticas, intentando conceptualizar sobre la misma, destacando tres: **normativa**, en la que se analizan aspectos históricos y políticos inherentes a su definición, que surgen en el contexto del Estado de Derecho y que dan cuenta de su visión tradicional de análisis; una segunda **sociojurídica**, desde la que se estudia el concepto desde su desarrollo en la práctica y al interior de las sociedades, como proceso que puede ser analizado desde su funcionamiento, dimensiones y supuestos clásicos de existencia y **vulneración** a partir de indicadores. Finalmente una tercera, entendida como **derecho**, que defiende su comprensión como atributo del ser humano, exigible ante tribunales internacionales.

Desde las tres perspectivas, la IJ busca garantizar esa necesaria libertad y respeto que deben tener los operadores jurídicos para tomar decisiones única y exclusivamente motivados por el derecho, sin injerencias o presiones indebidas de cualquier persona, sector o grupo de poder. De esta manera, se convierte en un deber para el juez que le exige decidir conforme al ordenamiento jurídico vigente y que pone límites a la sociedad y a los sujetos que la integran, buscando que dicha independencia sea respetada. ¿El por qué? La respuesta a este interrogante se encuentra cuando descubrimos que en un Estado en el que exista separación de poderes, todos podemos ser receptores de decisiones judiciales, razón por la cual resulta necesario establecer garantías que nos permitan obtener juicios justos.

Teniendo en cuenta su importancia al interior de los Estados como elemento constitutivo de una democracia respetuosa del principio de separación de poderes, la comunidad internacional le ha dado un gran desarrollo. Muestra de ello, son los distintos instrumentos internacionales sobre la materia, específicamente, los desarrollados en el marco del Sistema Interamericano como: la **“Declaración Americana de los Derechos y Deberes del**

Hombre” en su artículo 25; la “*La Convención Americana de Derechos Humanos*” en su artículo 8.1; la *Carta Democrática Interamericana* en su artículo 3; entre otros numerosos estándares internacionales que hacen alusión de manera directa o indirecta a la independencia de la justicia. De la misma manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado un valioso precedente jurisprudencial sobre la materia, señalando a la IJ en un primer momento como una garantía fundamental, y en uno segundo (que se desarrolla actualmente) como derecho humano de carácter fundamental, que hace parte del derecho de acceso a la justicia y del debido proceso. En este sentido, son de vital importancia los fallos *Tribunal Constitucional Vs. Perú (2001)*; *Apitz Barbera Corte Primera de lo Contencioso (2008)* y *Reverón Trujillo* contra el Estado de Venezuela (2009), en donde la Corte IDH reconoce la existencia del derecho humano a la independencia de los jueces.

El contenido del derecho a la IJ, está determinado por unas garantías específicas e implica que los justiciables cuenten con jueces *nombrados de manera adecuada* (por criterios objetivos y razonables, que den cuenta de la especificidad de las funciones a realizar y que examinen del funcionario, su “integridad, idoneidad y formación o calificaciones jurídicas apropiadas” de conformidad con los Principios Básicos de la Organización de Naciones Unidas Relativos a la Independencia de los Jueces; el “mérito personal del juez”, según las Recomendaciones del Consejo de Europa; y basado en la igualdad de oportunidades, sin “privilegios o ventajas irrazonables”, como también lo ha estipulado el Comité de Derechos Humanos). *Inamovibles* (con vocación de permanencia en el cargo, un proceso de ascenso adecuado y prohibición de despido injustificado o libre remoción. Quiere decir esto que si el Estado incumple una de estas garantías, afecta la inamovilidad y, por tanto, no está cumpliendo con la obligación de garantizar la independencia judicial). Y rodeados de *garantías contra presiones externas* que no pueden ser referenciadas de manera taxativa, sino por el contrario identificadas en casos concretos (restricciones, influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas directas o indirectas; provenientes de cualquier sector y originadas por cualquier motivo, siendo deber del Estado garantizar la no injerencia de las mismas en la labor de administrar justicia, encomendada a sus jueces).

El derecho humano a la IJ, contempla obligaciones tanto para los jueces como para el Estado. Así los jueces deben ser y parecer independientes, deber que cumplen cuando juzgan únicamente motivados por el derecho; de su parte el Estado, debe cumplir con tres deberes: respeto, prevención y garantía, el primero -de carácter negativo- lo cumple cuando se abstiene de realizar injerencias o de interferir en el poder judicial o en sus miembros de manera específica respetando su labor, el segundo y tercero, cuando previene las injerencias indebidas en la labor de administrar justicia e investiga y sanciona a quienes las cometen, a la vez que adopta un apropiado marco normativo que asegure un adecuado proceso de nombramiento, inamovilidad de los jueces y garantías contra presiones externas.

A nivel probatorio, la Corte IDH ha señalado que pueden servir como medios de prueba para demostrar la vulneración al derecho humano a la IJ: los documentos de prensa cuando reflejen hechos públicos y notorios, declaraciones públicas de funcionarios estatales u otros agentes, o cuando den cuenta de aspectos que guarden relación con los hechos investigados; de igual forma los documentos, informes periciales, testimonios y en general cualquier medio de prueba legalmente practicado y sometido a contradicción, siempre y cuando se dirijan a señalar cómo efectivamente se comprometió en un Estado determinado la IJ, cargando el litigante interamericano con la obligación de probar cómo un acontecimiento afecto de forma real a la independencia de la justicia en un Estado parte en la Convención Americana. La necesidad de la comprobación de la vulneración de la IJ exigida por el SIDH a través de hechos “fehacientes” desconoce una característica propia de la IJ: imposibilidad de su medición en forma directa. En este sentido el Sistema Interamericano debería alimentar futuras decisiones con modelos de medición, algunos expuestos en la presente investigación, teniendo en cuenta que sobre la prueba de la vulneración a la IJ no pueden existir más que indicadores.

Si en un Estado parte en la Convención Americana un juez toma su decisión motivado por presiones y no por el derecho, generando con su actuar un daño a un ciudadano o grupo de ciudadanos, se habilita la protección ofrecida por el Sistema Interamericano de Derechos,

con una ventaja procesal: la posibilidad de obviar el requisito de agotamiento de recursos internos, teniendo en cuenta que, la ausencia de garantías ligadas al debido proceso en un ordenamiento interno desde la óptica del Sistema Interamericano, hace que los recursos de los que se disponga sean tan solo ilusorios, y de nada valdría agotarlos antes de acudir a la Corte IDH. En caso de que el peligro de vulneración sea latente pero aun no se produzca daño, se puede acudir mediante solicitud de protección de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La IJ, al hacer parte del derecho de acceso a la justicia y el debido proceso adquiere las características de norma imperativa de *ius cogens* inderogable aun en estados de excepción y cuya vulneración en el escenario internacional, da lugar a responsabilidad agravada del Estado perpetrador de la violación, sin que pueda oponer como excepción su no adhesión a la Convención. Lo anterior, intenta reforzar la protección que el Sistema Interamericano le ha dado a los derechos de acceso a la justicia, debido proceso e independencia judicial por su importancia y trascendencia, aun cuando somos conscientes de que el amparo derivado de la normatividad *ius cogens* es un tema en construcción al interior de la Corte IDH que muy seguramente verá su desarrollo en futuras decisiones.

Es necesario resaltar que desde la visión del SIDH el derecho humano a la IJ no es un derecho común, ya que, por un lado puede considerarse norma de *ius cogens* al hacer parte esencial del derecho de acceso a la justicia y al debido proceso; pero por otro, es también una garantía que posibilita la existencia del Estado de Derecho y el desarrollo de los derechos contemplados en la Convención Interamericana o en los diversos instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y, uno de los faros -junto a la separación de poderes- que debe iluminar todas las lecturas de la Carta Interamericana, razones que hacen deseable, una protección reforzada para la independencia de los jueces, con miras a proteger al justiciable y a la justicia misma en nuestras sociedades.

Los elementos extraídos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos pueden ponerse a prueba en escenarios en donde han existido denuncias de vulneración a la IJ. Tal ejercicio se desarrolló a partir de los acontecimientos que tuvieron lugar en el escenario colombiano durante el periodo 2006-2009 y en el que un barrido de prensa –medio de prueba aceptado por la Corte IDH- indica posibles vulneraciones a la IJ entendida como derecho humano, específicamente desde la obligación de los Estados parte en la Convención de rodear a sus jueces de *garantías contra presiones externas*, y que implica proteger a los jueces y al poder judicial de posibles restricciones, influencias, alicientes, amenazas o intromisiones indebidas, directas o indirectas, de cualquier sector, por cualquier motivo.

En el contexto colombiano y particularmente en el periodo descrito, el Estado colombiano dirigió a través de autoridades del orden nacional como el Presidente de la República y de sus ministros, ataques dirigidos a poner en duda las decisiones judiciales, deslegitimándolas y menoscabando la confianza popular en la “justicia”, a través de un lenguaje virulento que como se dijo, erosiona las instituciones y en definitiva, a la independencia de los jueces entendida como principio pilar del Estado de derecho y como derecho humano de titularidad de los justiciables, sin embargo, por los mismos elementos extraídos del SIDH la respuesta a la pregunta: ¿hasta qué punto puede ser el Estado colombiano responsable ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la violación a la independencia judicial entendida como derecho humano, con ocasión de las intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial durante el periodo 2006-2009? Obtuvo como respuesta, que Colombia comprometió la IJ al haber afectado el contenido del derecho y faltado a sus obligaciones Convencionales durante el periodo descrito, sin que pueda decirse que vulneró el derecho, por una condición que impone el sistema: la comprobación de su vulneración. De esta manera no sólo debe demostrarse que se comprometió la IJ sino también cómo se afectó realmente, probando que los jueces en Colombia durante el periodo descrito tomaron decisiones que atendieron a las influencias del Poder Ejecutivo, tal elemento no se presenta en el caso examinado, en el que la labor de los jueces fue incluso resaltada por resistir a las presiones indebidas del Poder Ejecutivo, gozó en su mayoría de

respaldo popular y al que se le brindó protección internacional a partir del otorgamiento a algunos de sus jueces de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana.

Aun cuando nuestro Estado garantice desde su marco normativo la IJ estableciendo adecuados procesos de nombramiento e inamovilidad en el cargo de los funcionarios que integran el poder judicial – como lo exige el Sistema Interamericano-, carece de garantías contra presiones externas más allá de las ordinarias de las que dispone cualquier ciudadano para proteger a los jueces y al poder judicial en su conjunto. Tales garantías resultan más que necesarias en contextos como el colombiano caracterizado por un fuerte presidencialismo, y en el que hasta el más mínimo comentario por parte de un dirigente o autoridad pública puede reforzar la imagen negativa que se tiene de la justicia, en detrimento de la justicia misma.

Es claro que la dificultad de medición de la IJ hace complejo el tema, siendo casi imposible medir el impacto de las declaraciones del Presidente de la República y sus ministros en los colombianos ¿cuántos de nosotros creímos que los jueces que fallaban nuestras causas cohonestaban con el terrorismo, se aliaban con el narcotráfico, manipulaban testigos? ¿Cuántos creímos que nuestros jueces querían atentar contra el presidente “más popular” en nuestra historia obrando como “sepulcros blanqueados”? ¿Cuántos pensamos a raíz de más de 7.000 noticias que la justicia en nuestro país debería llamarse injusticia y que poco futuro tenían las causas que cursaban ante los despachos judiciales? Ese es el riesgo que corre la justicia misma y que nos afecta necesariamente como justiciables. Desde esa perspectiva la responsabilidad del Estado colombiano por los hechos estudiados es enorme, aun cuando no pueda sustentarse a nivel probatorio, y las líneas entregadas deberían obrar como un llamado de atención a los líderes estatales y a sus funcionarios, para moderar sus declaraciones sin necesidad de “agrandarlas en los micrófonos”. Si las autoridades públicas no incentivan el respeto a los jueces, corre riesgo el propio Estado de Derecho al quitarle uno de sus pilares: la independencia de la justicia. Desde esta perspectiva y aun cuando el

caso colombiano no motivaría un pronunciamiento de la Corte IDH por los hechos ocurridos durante el 2006-2009, los mismos nos invitan a la reflexión, ya que de volver a presentarse generando como consecuencia decisiones judiciales dependientes de otros poderes, sectores u organismos, se abriría la puerta del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para invocar la protección del derecho humano a la IJ.

Bibliografía

a. General

BLANCO VALDÉS, Roberto, *El valor de la Constitución – separación de poderes, supremacía de la ley y control de constitucionalidad en los orígenes del Estado liberal*, Editorial Alianza, Madrid, 1998.

DWORKIN, Ronald (1997), *Los derechos en serio*, Barcelona, Ariel Derecho.

HAMILTON, MADISON y JAY, *El Federalista*, Editorial Fondo de Cultura Económica, 1943.

KENNEDY, Duncan, *Libertad y restricción en la decisión judicial, el debate con la teoría crítica del derecho (CLS)/Duncan Kennedy*, traductores: Diego Eduardo López Medina y Juan Manuel Pombo, Ediciones Uniandes, Bogotá, 1999.

MONTESQUIEU, Barón de [Charles de Secondat], *Del espíritu de las leyes*, Ed. Tecnos.

SCHMITT, Carl, *Teoría de la Constitución*, Editorial Alianza Universidad Textos, Madrid, 2001.

TOCQUEVILLE, Alexis, *La Democracia en América*, Editorial Fondo de Cultura Económica, decimotercera reimpresión, 2005.

b. Específica

ACOSTA ALVARADO, PAOLA ANDREA. *Tribunal de Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: ¿Escenarios idóneos para la garantía del derecho de Acceso a la Justicia Internacional?* (Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia. Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta. Temas de Derecho Público No. 78, 2008)

AAVV, *Mayorías sin democracia: desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia*, 2002-2009, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad: DE JUSTICIA, Bogotá, 2009.

AA. VV. *La justicia colombiana en zonas de conflicto armado*, GARCÍA, Mauricio, director, Siglo del Hombre Editores, De Justicia, Bogotá, 2008.

AA.VV. *Pautas para promover la independencia y la imparcialidad judicial*, Office of Democracy and Governance, USAID, Marzo 2002, disponible en:

<http://www.dplf.org/uploads/1192111053.pdf>

AMUCHÁSTEGI, Jesús (2002), *Interferencia del poder ejecutivo en el poder judicial*, documento presentado en el seminario internacional: Reforma Judicial y estrategias anticorrupción, Casa de las Américas, Madrid, agosto de 2002.

ANDRADE, Santiago. *Los Atentados contra la Independencia Judicial*. Disponible en: http://enj.org/portal/biblioteca/funcional_y_apoyo/carrera_judicial/24.pdf

AYARRAGARAY, Carlos A, *El mito de la justicia en la historia; estudio doctrinario, histórico, legal, antropológico, sociológico y religioso*, editorial Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1975.

BECARÍA, CESARE. *De los delitos y las penas*. (México: Ed. Porrúa), 2002.

BETANCOURTH ROJAS, Danilo, *El derecho a la independencia judicial*, Revista Semana, Octubre 1 de 2009, disponible en: http://dejusticia.org/interna.php?id_tipo_publicacion=1&id_publicacion=665

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, et al, *Estado, Derecho y Luchas Sociales*, ILSA, Bogotá, 1991.

BOBBIO, NORBERTO. *Liberalismo y Democracia*. (México D.F.: FCE, Trad. José F. Fernández Santillán, 1989.

_____, et al, *“Los Tribunales en las Sociedades Contemporáneas”* en: Pensamiento Jurídico No. 4, Facultad de Derecho, Universidad Nacional, Bogotá, 1995.

BURGOS SILVA, GERMÁN. *Independencia Judicial Conceptualización y Medición*. (Bogotá D.C.: Editorial ILSA, 2007

BURGOS SILVA, José Germán. **Justicia bajo presión. Constricciones institucionales y atentados contra la independencia judicial en Colombia. 2005-2008**. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), 2009.

_____. *Reformas Judiciales ¿Hacia un Mejor Servicio de Justicia?* Perfiles Naciones de Gobernabilidad. Buenos Aires: P 54 - 62, 2004.

_____. *Sistema judicial y crecimiento económico: ¿dónde están los vínculos?*, Perspectiva. Bogotá: 2003.

_____. *Independencia judicial en Bolivia*. Magazine Dhial. Barcelona: 2003.

_____. *Marco constitucional y legal, y desempeño institucional del Estado de derecho para el desarrollo*, en Diagnóstico Institucional de la República de Paraguay, Asunción, PNUD-IIG.

_____. *La justicia colombiana en la hora del ajuste*, en: El Otro Derecho, No. 11, 1992.

BURITICÁ CAICEDO, Paula, *Choque de trenes entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia – la ruptura entre la construcción teórica del principio de la división de poderes y el comportamiento real de los representantes del Estado*, artículo académico para optar el título de Abogada, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, 2009.

CARRILLO FLOREZ, Fernando, *La Independencia Judicial y su relación con los otros órganos*, Revista de Derecho, Universidad del Norte, 9:1-12, 1998.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (SALA ADMINISTRATIVA). *Ley estatutaria de la administración de justicia. Elementos para el análisis*, Santafé de Bogotá: 1995.

CORWIN, Edward S, PELTASON, J.N., *La Constitución: una interpretación de la Constitución de los Estados Unidos de América: el federalismo, la separación de poderes y la doctrina de la revisión judicial*, Traducción de la cuarta edición inglesa: Miguel Pi de La Serna, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1949.

DAVIS, William. *Colombia: Proyecto de modernización de justicia. Breve análisis de la situación actual y estrategias recomendadas para el desarrollo del proyecto*, Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 1995.

DAY, Sandra. *La Importancia de la Independencia Judicial*. 15 al 17 de Septiembre de 2003. Disponible en: www.enj.org

DESPOUY, LEANDRO. *Independencia de la Justicia: Estándares Internacionales*. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, Federación Argentina de Colegio de Abogados, 2da Edición, 2010

DROMI, José Roberto. *Los jueces: ¿es la justicia un tercio del poder?*, Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1992.

DUE PROCESS OF LAW FOUNDATION (DPLF), *Independencia Judicial en Venezuela: la administración de justicia en la República Bolivariana de Venezuela a partir de la observación de un juicio*. 2008. Disponible en: <http://www.dplf.org/uploads/1227640933.pdf>

_____, **Misión de Observación del Juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori**. 2008. Disponible en: <http://www.dplf.org/uploads/1216326672.pdf>

FERRAJOLI, Luigi, *¿Existe una democracia representativa?* En: Luigi Ferrajoli- Danilo Zolo, *Democracia autoritaria y capitalismo maduro*, Barcelona, Viejo Topo.

FRANCO, Andrés. *Independencia Judicial y Política en Colombia*. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Ponencia presentada en 1997 en el encuentro de la Latin American Studies Association. En: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lasa97/franco.pdf>

GIRALDO, Jaime, OROZCO, Iván, UPRIMNY, Rodrigo, *Justicia y sistema político*, FESCOL y IEPRI editores, colección Debate Político, Bogotá, 1997.

GONZÁLEZ GRANDA, Piedad, *Independencia del juez y control de su actividad*, Editorial: Tirant lo Blanch, Valencia, 1993.

HERNÁNDEZ BECERRA, AUGUSTO. *Las Ideas Políticas en la Historia*. (Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia. Departamento de Publicaciones, 2001

HERNÁNDEZ MARTÍN, Valeriano. *Independencia del Juez y Desorganización Judicial*. Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia. Monografías Civitas S.A. Madrid. 1991.

HUMAN RIGHTS WATCH (AMERICAS). *State of War: Political Violence and Counter-Insurgency in Colombia*, Washington DC: Human Rights Watch, 1993.

IGARTUA SALAVERRIA, Juan, *Los jueces en una sociedad democrática*, Editorial: Instituto Vasco de Administración Pública, 1987.

INECIP (2002), *Informe sobre el monitoreo a la afectación de la independencia judicial en la República de Honduras*. Disponible en: www.inecip.org/cdoc/honduras2002.pdf

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS. ILSA. *Independencia judicial en América Latina: de quién? para qué? cómo?* Burgos Silva, Germán (Editor). Series Textos de Aquí y Ahora. Ediciones Ántropos Ltda. 2003.

KARLAN, Pamela, *Two Concepts of Judicial Independence*, disponible en: <http://usc.edu/dept/law/symposia/judicial/pdf/karlan.pdf>, 1998.

LINARES, Sebastián, *La independencia Judicial: conceptualización y medición*, en *Política y Gobierno* No. 11, 2003, en: INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS. ILSA. *Independencia judicial en América Latina: de quién? para qué? cómo?* Burgos Silva, Germán (Editor). Series Textos de Aquí y Ahora. Ediciones Ántropos Ltda. 2003.

LOPERA MESA, GLORIA PATRICIA. *La aplicación del derecho en los sistemas jurídicos constitucionalizados*. (Medellín: Universidad EAFIT, Área de Teorías del derecho. Escuela de Derecho. 2004)

LÓPEZ MEDINA, DIEGO EDUARDO. *El Derecho de los Jueces*. (Bogotá: Ediciones Uniandes, Legis) 2001.

MARTÍNEZ ALARCÓN, María Luz. *La Independencia Judicial*. Cuadernos y Debates 159. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 2004.

MARTÍNEZ NEIRA, Néstor Humberto, *Justicia para la gente*. Una visión alternativa, Santafé de Bogotá: Ministerio de Justicia y del Derecho, 1995.

_____, *Aproximación a la modernización de justicia en América Latina: Lecciones y perspectivas*, ponencia para el Seminario Internacional Justicia y Desarrollo: Agenda para el siglo XXI, Santafé de Bogotá: 1994.

MENDOZA CÁNEPA, Raúl, *Independencia judicial: el juez ¿un modelo para armar?*, Comisión Andina de Juristas, serie: Difusión de la Carta Democrática, Lima, 2005.

MONTERO AROCA, Juan, *Sobre la imparcialidad del juez y la incompatibilidad de funciones procesales*, Editorial: Tirant lo Blanch, Valencia, 1998.

O'DONELL, DANIEL. *Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano*. Bogotá D.C.: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2007.

PÉREZ LUÑO, ANTONIO - ENRIQUE. *La Universalidad de los Derechos Humanos y el Estado Constitucional*. (Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia. Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho No. 23, 2002

POPKIN, Margaret (2001), *Informe comparativo sobre la independencia judicial en América Latina*, documento preparado en el marco de la construcción de la “Guía para la independencia judicial” de US-AID.

QUISPE REMÓN, FLORALBA. *El debido proceso en el derecho internacional y en el sistema interamericano*. Valencia: Tirant lo Blanch, Universidad Carlos III de Madrid, 2010.

REQUEJO PAGÉS, Juan Luis, *Jurisdicción e Independencia Judicial*. Colección: Estudios Constitucionales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1989.

– REBOLLEDO, Javier, *La independencia judicial en tiempos de Uribe*, Pap. Polít. Bogotá (Colombia), Vol. 13, No. 1, 53-94, enero-junio 2008.

RODRÍGUEZ GARAVITO CÉSAR. M. GARCÍA, R. UPRIMNY. Justicia y *Reforma a la Justicia en Colombia*. Revista de Derecho Público, 2005.

RODRÍGUEZ GARAVITO CÉSAR. M. GARCÍA, R. UPRIMNY. *Más allá de la oferta y la demanda: análisis sociojurídico de la justicia colombiana a comienzos de siglo*. Justicia y Desarrollo. Bogotá: v.4, n.18, p.29 - 84, 2001.

SANTOFIMIO, JAIME ORLANDO. *Tratado de Derecho Administrativo*. Tomo I. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia. 1996.

SERRA CRISTOBAL, Rosario, *La libertad ideológica del juez*, Editorial: Tirant lo Blanch y Universitat de València, 2004.

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL (2000), *Un sistema judicial independiente*, disponible en: <http://www.transparency.org/tilac/biblioteca/consultas/>

UPRIMNY YEPES, Rodrigo, *Independencia judicial, intemperancia verbal y Corte Interamericana*, Diario El Espectador, septiembre 2 de 2008, disponible en: http://dejusticia.org/interna.php?id_tipo_publicacion=1&id_publicacion=441

_____, RODRIGUEZ, César, GARCÍA, Mauricio, *¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia*, editorial Norma, Bogotá D.C., 2006.

VALDEZ SÁNCHEZ, Germán G, *Independencia judicial y seguridad jurídica: ejes de la convivencia*, 2003.

WIDNER, Jennifer, *La Independencia Judicial en el África Regida por Common Law*, en: *Pautas para promover la independencia y la imparcialidad judicial*, Office of Democracy and Governance, USAID, Marzo 2002, disponible en: <http://www.dplf.org/uploads/1192111053.pdf>

ZAPATA GARCÍA, MARÍA FRANCISCA. *Inamovilidad: ¿Garantía o Derecho?* Disponible <http://www.cej.org.py/files/INAMOVILIDAD%20garantia%20o%20derecho%20JORNADA%20DERECHO%20JUDICIAL%20PARAGUAY-Dra%20Zapata.pdf>

c. Productos jurídicos

i. Internacionales:

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.

Convención Americana de Derechos Humanos, 1969.

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2009.

Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 32. (Organización de Naciones Unidas, adoptada en Ginebra en el 90º periodo de sesiones del 9 al 27 de julio, 2006).

Principios Básicos De Naciones Unidas Relativos A La Independencia De La Judicatura, 1985.

Estatuto Universal Del Juez, 1999.

Estatuto Del Juez Iberoamericano, 2001.

Código Modelo Iberoamericano De Ética Judicial, 2006.

Jurisprudencia Corte Interamericana De Derechos Humanos.

Corte IDH, Caso Aloeboetoe y otros Vs. Suriname. 1993.

Corte IDH, Caso Suarez Rosero vs. Ecuador. 1997.

Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú.1997.

Corte IDH, Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. 1997.

Corte IDH, Caso Blake vs. Guatemala. 1998.

Corte IDH, Caso Paniagua Morales vs. Guatemala. 1998.

Corte IDH, Caso Benavides Cevallos vs. Ecuador.1998.

Corte IDH, Caso Castillo Petrucci vs. Perú. 1999.

Corte IDH, Caso Cesti Hurtado vs. Perú. 1999.

Corte IDH, Caso Villagrán Morales vs. Guatemala. 1999.

Corte IDH, Caso El Caracazo vs. Venezuela. 1999.

Corte IDH, Caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. 1999

Corte IDH, Caso Durand y Ugarte vs. Perú. 2000.

Corte IDH, Caso Cantoral Benavides vs. Perú. 2000.

Corte IDH, Caso Bámaca Velasquez vs. Guatemala. 2000.

Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. 2001.

Corte IDH, Caso Mayagna Sumo Awas Tigni Vs. Nicaragua. 2001.

Corte IDH, Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. 2001.

Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. 2001.

Corte IDH, Caso Barrios Altos vs. Perú. 2001.

Corte IDH, Caso Las Palmeras vs. Colombia. 2001.

Corte IDH, Caso Baena vs. Panama. 2001.

Corte IDH, Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. 2001.

Corte IDH, Caso Hilaire Vs. Trinidad y Tobago. 2002.

Corte IDH, Caso Cantos vs. Argentina. 2002.

Corte IDH, Caso Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. 2002.

Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. 2003.

Corte IDH, Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. 2003.

Corte IDH, Caso Bulacio vs. Argentina. 2003.

Corte IDH, Caso Juan Sánchez vs. Honduras. 2003.

Corte IDH, Caso Gómez Paquiyauri vs. Perú. 2004.

Corte IDH, Caso De la Cruz Flórez vs. Perú. 2004.

Corte IDH, Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. 2004.

Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. 2004.

Corte IDH, Caso Molina Theissen vs. Guatemala. 2004.

Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. 2004.

Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador. 2004.

Corte IDH, Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. 2004.

Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. 2004.

Corte IDH, Caso Inst. Reeducción del Menor vs. Paraguay. 2004.

Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa rica. 2004.

Corte IDH, Caso Instituto de Reeducción del Menor Vs. Paraguay. 2004.

Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. 2004.

Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile. 2005.

Corte IDH, Caso Masacre Mapiripán vs. Colombia. 2005.

Corte IDH, Caso Huilca Tecse vs. Perú. 2005.

Corte IDH, Caso Gómez Palomino vs. Perú. 2005.

Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú. 2005.

Corte IDH, Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. 2005.

Corte IDH, Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. 2005.

Corte IDH, Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia. 2005.

Corte IDH, Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia. 2005.

Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. 2005.

Corte IDH, Caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela. 2005.

Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile. 2005.

Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua. 2005.

Corte IDH, Caso Comunidad Moiwana vs. Suriname. 2005.

Corte IDH, Caso Hilare Constantine y otro vs. Trinidad y Tobago. 2005.

Corte IDH, Caso Baldeón García vs. Peru. 2006.

Corte IDH, Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú. 2006.

Corte IDH, Caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. 2006.

Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Peru. 2006.

Corte IDH, Caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. 2006.

Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya vs. Paraguay. 2006.

Corte IDH, Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. 2006.

Corte IDH, Caso Vargas Areco vs. Paraguay. 2006.

Corte IDH, Caso Montero Aranguren vs. Venezuela. 2006.

Corte IDH, Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile. 2006.

Corte IDH, Caso Almonacid Arellanos y otros vs. Chile. 2006.

Corte IDH, Caso López Álvarez vs. Honduras. 2006.

Corte IDH, Caso Servellón García y otros vs. Honduras. 2006.

Corte IDH, Caso Ximenes López vs. Brasil. 2006.

Corte IDH, Caso Goiburú y Otros Vs. Paraguay. 2006.

Corte IDH, Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. 2007.

Corte IDH, Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. 2007.

Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador. 2007.
Corte IDH, Caso Albán Cornejo y Otros vs. Ecuador. 2007.
Corte IDH, Caso Masacre de la Rochela vs. Colombia. 2007.
Corte IDH, Caso Escué Zapata vs. Colombia. 2007.
Corte IDH, Caso Bueno Alves vs. Argentina. 2007.
Corte IDH, Caso García Prieto y otros vs. El Salvador. 2007.
Corte IDH, Caso Apitz Barbera y Otros vs. Venezuela. 2008.
Corte IDH, Caso Rimel vs. Argentina. 2008.
Corte IDH, Caso Eliodoro Portugal vs. Panama. 2008.
Corte IDH, Caso Yvon Neptune vs. Haiti. 2008.
Corte IDH, Caso Tristán Donoso Vs .Panamá. 2009.
Corte IDH, Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. 2009.

Jurisprudencia Tribunal Europeo De Derechos Humanos

TEDH. Campbell and Fell c. Gran Bretaña
TEDH. Deweer c. Belgium y Engel and others c. Holanda.
TEDH. Keenan v. the United Kingdom 2001.
TEDH. Morris Vs. Reino Unido. 2002.
TEDH. Pabla Ky Vs, Finlandia. 2004.

ii. Nacionales:

Constitución Política de Colombia, 1991.

Ley Estatutaria De La Administración De Justicia En Colombia, 270 de 1996.

Jurisprudencia Corte Constitucional

Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-037 de 1996 MP: Vladimiro Naranjo Mesa.

Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-1643 de 2000 MP: Jairo Charry Rivas.

Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-225 de 1995, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.

Corte Constitucional Colombiana, sentencia. C-406 de 1996.

Corte Constitucional Colombiana, sentencia. C-251 de 1997.

Corte Constitucional Colombiana, sentencia. T-568 de 1999.

Corte Constitucional Colombiana, sentencia. C-010 de 2000.

Corte Constitucional Colombiana, sentencia. T-1319 de 2001.

Corte Constitucional Colombiana, sentencia. C-671 de 2002.

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia. T-786 de 2003, M.P: Marco Gerardo Monroy Cabra.

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia. T-558 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

Corte Constitucional Colombiana, sentencia. T-827 de 2004.

Corte Constitucional Colombiana, Sentencia. C- 504 de 2007, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.

Corte Constitucional Colombiana, sentencia C- 307 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C- 148 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

Corte Constitucional Colombiana, Sentencia. C- 228 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.

Corte Constitucional Colombiana, sentencia C-037 de 1996, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

Jurisprudencia Corte Suprema De Justicia

Corte Suprema De Justicia Colombiana, Sala Penal, 26 de junio de 2008.

Corte Suprema De Justicia Colombiana, Sala Penal, Auto No. 31.653.

Corte Suprema De Justicia Colombiana, Sala de Casación Penal. Proceso No. 26945, 11 de Julio de 2007.

Prensa

Periódico El Tiempo

El Tiempo, 18 de Junio de 2006. "Así fue visita de Uribe a la Corte".

El Tiempo, 24 de septiembre de 2006. "Presidente de Corte Suprema acusa a Álvaro Uribe de ponerse a favor de la Corte Constitucional".

El Tiempo, 25 de septiembre de 2006. "Uribe faltó a la palabra: C. Suprema".

El Tiempo, 25 de septiembre de 2006. "Duro reclamo hizo Uribe a Presidente de la Corte Suprema por comentarios sobre reforma a la justicia".

El Tiempo, 27 de septiembre de 2006. "Proyectos con puntos contradictorios para reforma a la justicia presentan Gobierno y Cortes".

El Tiempo, 1 de noviembre de 2006. "Para el próximo año quedó aplazado en el Congreso proyecto de reforma de la justicia".

El Tiempo, 18 de noviembre de 2006. "Texto de la intervención del Presidente Álvaro Uribe en aniversario de la Corte Suprema".

El Tiempo, 18 de Noviembre de 2006. "El más difícil momento atraviesa el gobierno de Álvaro Uribe Vélez".

El Tiempo, 20 de diciembre de 2006. "Corte se empodera para investigar a 150 dignatarios del Estado".

El Tiempo, 31 de Enero de 2007. "Ya van 14 congresistas llamados por la Corte".

El Tiempo, 16 de Febrero de 2007. "Amenazas de muerte ha recibido Yesid Ramírez".

El Tiempo, 18 de Febrero de 2007. "Congresistas, fichas del plan de '40' para tomar el poder: Corte".

El Tiempo, 19 de Febrero de 2007. "Presidente Uribe ofreció la cancillería a Fernando Araújo desde el domingo en la noche".

El Tiempo, 24 de Febrero de 2007. "Así votaron las leyes más polémicas congresistas detenidos".

El Tiempo, 26 de Febrero de 2007. “Investigar nexos entre políticos colombianos y FARC, pide ministro del Interior Carlos Holguín”.

El Tiempo, 31 de marzo de 2007. “Se pueden buscar sanciones alternativas en la ´parapolítica, dice vicepresidente Francisco Santos”.

El Tiempo, 31 de marzo de 2007. “Renuncia a su fuero del senador Álvaro Araújo pone a prueba a la Fiscalía y abre debate jurídico”.

El Tiempo, 24 de mayo de 2007. “Anónimos enrarecen elección de magistrados”.

El Tiempo, 2 de Abril de 2007.

El Tiempo, 2 de abril de 2007. “Alerta a la Justicia”.

El Tiempo, 22 de mayo de 2007. “Mayor seguridad para magistrados que apoyan investigaciones de ´parapolítica´, pide Corte Suprema.

El Tiempo, 24 de mayo de 2007. “Anónimos enrarecen elección de magistrados”.

El Tiempo, 26 de Julio de 2007. “Para dar estatus político a ´paras´, presidente Álvaro Uribe buscará apoyo del pueblo”.

El Tiempo, 26 de Julio de 2007. “Uribe anuncia segundo intento para darles beneficios políticos a ´paras”.

El Tiempo, 30 de Julio de 2007 “Quedaría sin piso extradición de ex ´paras, dice presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema”.

El Tiempo, 1 de agosto de 2007. “Altas Corte y Fiscalía rechazan pronunciamientos del presidente Uribe sobre sedición”.

El Tiempo, 3 de agosto de 2007. “Proceso con autodefensas no debe llevar a la impunidad, advirtió la Corte Suprema al Presidente”.

El Tiempo, 4 de agosto de 2007. “Fiscal General ofrece mediar entre Presidente y Corte Suprema de Justicia en debate por tratamiento a ´paras”.

El Tiempo, 26 de septiembre de 2007. “A indagatoria llaman a Mario Uribe, Alfredo Cuello y Álvaro Morón por parapolítica”

El Tiempo, 27 de septiembre de 2007. “Parapolítica: van 37 congresistas”.

El Tiempo, 3 de octubre de 2007. “Corte Suprema pide más seguridad para los magistrados que investigan a ´parapolíticos”.

El Tiempo, 4 de Octubre de 2007. “Renunció a su curul el senador Mario Uribe para no ser investigado por la Corte Suprema”.

El Tiempo, 6 de Octubre de 2007. “Sobre ‘parapolítica’, más que a las amenazas, la Corte Suprema teme intromisiones de otros órganos”.

El Tiempo, 8 de octubre de 2007. “Corte Suprema y Presidente chocan por acusaciones del mandatario contra magistrado auxiliar”.

El Tiempo, 9 de octubre de 2007. “Algunos magistrados de la Corte Suprema contemplaron renuncia masiva por choque con el Presidente”.

El Tiempo, 10 de Octubre de 2007. “24 horas de tensión entre Uribe y Corte”.

El Tiempo, 18 de octubre de 2007. “Uribe y la Corte estuvieron diplomáticos”.

El Tiempo, 21 de Noviembre de 2007. “Lío entre Policía y la Corte Suprema por escolta de magistrado clave en casos de parapolítica”.

El Tiempo, 2 de diciembre de 2007. “La Corte condenó a primer congresista por parapolítica”.

El Tiempo, 15 de diciembre de 2007. “Director de la Policía garantiza que al magistrado Iván Velásquez no se le retirará la protección”

El Tiempo, 16 de enero de 2008. “Presidente Álvaro Uribe pide rectificación a Presidente de la Corte Suprema”.

El Tiempo, 24 de enero de 2008. “Radican denuncia de Álvaro Uribe contra el presidente de Corte Suprema, César Julio Valencia”.

El Tiempo, 2 de febrero de 2008. “Es nocivo para las instituciones el camino tomado por Uribe en incidente con presidente de Corte”.

El Tiempo, 18 de febrero de 2008. “‘Chuzada’ a Presidente y a magistrado de la Corte se habría producido en teléfonos de Casa de Nariño”.

El Tiempo, 19 de febrero de 2008. “Corte Suprema pedirá a OEA que sea veedora de decisiones judiciales relacionadas con ‘parapolítica’”.

El Tiempo, 12 de abril de 2008. “Corte investigará a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño por favorecer reelección presidencial”.

El Tiempo, 18 de abril de 2008. “Corte Suprema responde al Presidente Uribe que investigaciones por parapolítica se ajustan a la ley”.

El Tiempo, 19 de abril de 2008. “Por primera vez, Uribe admitió inestabilidad institucional a la que puede llevar la parapolítica”.

El Tiempo, 20 de abril de 2008. “Fiscalía inició indagación preliminar sobre denuncias de Yidis Medina reveladas en Noticias Uno”.

El Tiempo, 1 de mayo de 2008. “En 21 puntos cayó la imagen favorable del Congreso según encuesta bimestral de Gallup”.

El Tiempo, 18 de Junio de 2008. “Tasmania dispuesto a retractarse públicamente de acusación que formuló contra magistrado”.

El Tiempo, 26 de junio de 2008. “Referendo para que el pueblo ordene repetir elecciones del 2006 anunció el Presidente”.

El Tiempo, 27 de Junio de 2008. “Presentan dos denuncias contra magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema”.

El Tiempo, 27 de Junio de 2008. “Gobierno contraataca a Corte con denuncia a sus Magistrados”.

El Tiempo, 30 de junio de 2008. “CUT llama a marcha de respaldo a la Corte Suprema de Justicia, el 3 de Julio”.

El Tiempo, 1 de julio de 2008. “Acatar las decisiones judiciales le pidió la Corte Suprema de Justicia al Gobierno”.

El Tiempo, 2 de Julio de 2008. “Corte Constitucional no revisará fallo que dio vía libre a la reelección del Presidente Uribe”.

El Tiempo, 6 de Julio de 2008. “Este es el polémico borrador de la gran reforma a la justicia”.

El Tiempo, 7 de Julio de 2008. “Álvaro Uribe y el presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, tuvieron primer acercamiento”.

El Tiempo, 10 de Julio de 2008. “Gobierno y Corte Suprema restablecieron relaciones institucionales”.

El Tiempo, 15 de Julio de 2008. “Relación con el Gobierno está restablecida: Corte”.

El Tiempo, 23 de Julio de 2008. “Cortes siguen encontrando puntos de discordia con el Gobierno sobre reforma a la Justicia”.

El Tiempo, 27 de Julio de 2008. “Reforma a la justicia es inoportuna”.

El Tiempo, 30 de Julio de 2008. “Reforma quita dientes a las Cortes”.

El Tiempo, 31 de Julio de 2008. “Corte da por no recibido texto de reforma a la justicia”.

El Tiempo, 11 de Agosto de 2008. “Uribe denunció que “sectores de la justicia” han pedido dinero a congresistas procesados”.

El Tiempo, 12 de Agosto de 2008. “Respaldo de la Corte Suprema a magistrado Iván Velásquez”.

El Tiempo, 15 de Agosto de 2008. “Denunciaría Corte Suprema a la autoridad pública ante tribunales internacionales”.

El Tiempo, 15 de Agosto de 2008. “Corte pide investigar a quienes la atacan”.

El Tiempo, 17 de Agosto de 2008. “Que miren cuántas embajadas le pertenecen al Ejecutivo y al Legislativo: magistrado Enrique Gil”.

El Tiempo, 17 de Agosto de 2008. “Quieren debilitar la justicia y acabar con autonomía de los jueces”.

El Tiempo, 18 de Agosto de 2008. “En la rama judicial no hay ‘roscogracia’ sino meritocracia”.

El Tiempo, 26 de Agosto de 2008. “Vuelve tensión Uribe-Corte por visita de ‘Job’ a la Casa de Nariño”.

El Tiempo, 29 de Agosto de 2008. “Dos altas cortes también piden bajarle el tono al enfrentamiento entre rama judicial y el Gobierno”.

El Tiempo, 30 de Agosto de 2008. “Cuando está en riesgo la Justicia, está en riesgo la democracia, dice presidente de Corte Suprema”.

El Tiempo, 5 de Septiembre de 2008. “Álvaro Uribe siguió con pullas a la Corte”.

El Tiempo, 5 de Septiembre de 2008. “ONU evalúa si hay mérito para pronunciarse sobre crisis entre presidente Uribe y Corte Suprema”.

El Tiempo, 5 de Septiembre de 2008. “Ya son dos los organismos internacionales que ponen los ojos en pelea entre Corte Suprema y Gobierno”.

El Tiempo, 6 de Septiembre de 2008. “Uribe pide a delegado de la ONU, Leandro Despouy, informarse antes de dar declaraciones a medios”.

El Tiempo, 6 de Septiembre de 2008. “Nuevas críticas lanzó el Presidente Álvaro Uribe contra la Corte Suprema de Justicia”.

El Tiempo, 6 de Septiembre de 2008. “Otro llamado de atención internacional por choque entre Gobierno y Corte”.

El Tiempo, 8 de Septiembre de 2008. “Como mediador entre Uribe y las Cortes se ofreció relator para la independencia judicial”.

El Tiempo, 23 de Septiembre de 2008. “Gobierno desistió de proyecto de reforma a la justicia para presentar otro con modificaciones”.

El Tiempo, 16 de Octubre de 2008. “Uribe obstaculiza la justicia, denuncia Human Rights Watch en su último informe sobre Colombia”.

El Tiempo, 16 de Enero de 2009. “No hay choque de trenes con el Ejecutivo, dice nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

El Tiempo, 25 de febrero de 2009. “Complot en su contra con ‘chuzadas’ denuncia la Corte Suprema.

El Tiempo, 26 de febrero de 2009. “Medida no es contundente para hallar responsables de ‘chuzadas’: presidente de la Corte Suprema”.

El Tiempo, 20 de abril de 2009. “Como ‘hedor’ llamó el Fiscal situación en el DAS por informe sobre ‘chuzadas’”.

El Tiempo, 25 de Abril de 2009. “Seguimientos del DAS a magistrados son un claro ataque a la seguridad del Estado: Mario Iguarán”.

El Tiempo, 11 de Mayo de 2009. “Gobierno se compromete a no permitir seguimientos ilegales contra magistrados en el futuro”.

El Tiempo, 14 de mayo de 2009. “Nuevas explicaciones sobre el caso de las ‘chuzadas’ pidieron al Gobierno dos altos tribunales”.

El Tiempo, 14 de mayo de 2009. “Nuevo divorcio entre Ejecutivo y cortes por escándalo de las Chuzadas”.

El Tiempo, 15 de mayo de 2009. “Alto Tribunal exige presencia de Relator de ONU para la Independencia Judicial. Corte Suprema y Consejo de Estado vuelven a pedirle a Uribe que hable”.

El Tiempo, 18 de mayo de 2009. “Gobierno dice que no dio instrucciones a ex miembros del DAS para grabar a magistrados y periodistas”.

El Tiempo, 22 de Junio de 2009. “Con el mayor respeto recibió Uribe carta del Procurador pidiendo parar choque con la Corte Suprema”.

El Tiempo, 23 de Junio de 2009. “Uribe acoge carta del Procurador sobre cese a discordia entre poderes”.

El Tiempo, 20 de Agosto de 2009. “Magistrados de la Corte Suprema de Justicia denuncian amenazas en su contra”.

El Tiempo, 20 de Agosto de 2009. “Investigan posible plan de atentados contra senadores y magistrados”.

El Tiempo, 21 de agosto de 2009. “Magistrados piden a la Policía más seguridad y que los tenga al tanto de investigaciones”.

El Tiempo, 24 de Agosto de 2009. “A darle más seguridad a magistrados y sus familias se comprometió presidente Uribe con Corte Suprema”.

El Tiempo, 17 de Septiembre de 2009. “Amenazas de violentos ponen a prueba la Justicia”.

El Tiempo, 18 de Septiembre de 2009. “Corte Suprema está obligada a elegir fiscal de la terna presentada por el Presidente: Gobierno”.

El Tiempo, 19 de Septiembre de 2009. “Elección de Fiscal agudiza enfrentamiento entre Corte y Gobierno y deja en vilo a la justicia”.

El Tiempo, 31 de Octubre de 2009. “Uribe criticó a la Corte Suprema por seguir considerando inviable terna para Fiscal”. |

El Tiempo, 6 de noviembre de 2009. “Poder Ejecutivo amenaza independencia de Corte Suprema, denuncia Alto Tribunal”.

El Tiempo, 22 de Noviembre de 2009. “Uribe no modificará la terna para escoger Fiscal y reiteró que es deber de la Corte votar”.

El Tiempo, 24 de Noviembre de 2009. “Nuevo choque de Uribe con la Corte”.

El Tiempo, 25 de Noviembre de 2009. “Gobierno asegura que tiene testigos para demostrar que presidente de la Corte Suprema miente”.

El Tiempo, 25 de Noviembre de 2009. “El Procurador inicia gestión para frenar choque de trenes entre la Corte y Uribe”.

El Tiempo, 26 de Noviembre de 2009. “Álvaro Uribe debe dialogar con la Corte: Ex magistrados”.

El Tiempo, 26 de Noviembre de 2009. “Uribe acepta mediación de Ordoñez”.

El Tiempo, 6 de Diciembre de 2009. “Relatora de la ONU para Independencia Judicial analizará el roce por terna para Fiscal”.

El Tiempo, 10 de Diciembre de 2009. “Relatora de la ONU para la Independencia Judicial expresó preocupación por interinidad en Fiscalía”.

Periódico El Espectador

El Espectador, semana 28 de marzo de 2008. “Votar la reelección me mató”. Disponible en: <http://elespectador.com/node/8040/> consultado marzo 2011

El Espectador, 13 de agosto de 2008. “Uribe plantea acabar el “roscograma” en la justicia y organismos de control”.

Revista Semana

Revista Semana 19 de abril de 2008. “O el que paga por pecar”. <http://www.semana.com/opinion/paga-pecar/111099-3.aspx> consultado marzo 2011

Revista Semana, 25 de octubre de 2008. “Ex magistrado César Julio Valencia Copete desmiente a Uribe”. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/ex-magistrado-cesar-julio-valencia-copete-desmiente-uribe/146406-3.aspx>

Notas De Prensa Presidencia de La Republica de Colombia

Presidencia de la República de Colombia. Secretaría de Prensa. Nota de Noviembre 25 de 2009.

Presidencia de la República de Colombia. Secretaría de Prensa. Nota de Noviembre 25 de 2009.

Casa de Nariño, comunicado Presidencial de 31 de Octubre de 2009. Disponible en: <http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/octubre/31/04312009.html>

Comunicados Corte Suprema De Justicia De Colombia

Corte Suprema de Justicia, Comunicado Agosto 3 de 2007. Disponible en: <http://colombiareport.ss.uci.edu/webdocs/DeclaracionCorteSuprema.pdf>, consultado el 30 de marzo de 2011.

Radio

Radio Santa Fe. Junio de 2008. Se agudiza enfrentamiento entre el presidente Uribe y la Corte Suprema. Disponible en: <http://www.radiosantafe.com/2008/07/02/se-agudiza-enfrentamiento-entre-el-presidente-uribe-y-la-corte-suprema/>.